

Una década en movimiento

Luchas populares en América Latina
en el amanecer del siglo XXI

Massimo **Modonesi**
Julián **Rebón**
[compiladores]

Gustavo Antón | Jorge Cresto | Rodrigo Salgado | Fernando
Pairicán Padilla | Rolando Álvarez Vallejos | Franklin Ramírez
Gallegos | Carlos Moreira | Patricia Chávez León | Dunia Mokrani
Chávez | Pilar Uriona Crespo | Andréia Galvão | Armando Boito |
Paula Marcelino | Marco Antonio Ponce | Quintín Riquelme | Lucio
Oliver | Fernando Munguía Galeana | Mariana López de la Vega |
Simona Yagenova | Rodrigo J. Véliz | Sindy Mora Solano | Robinson
Salazar Pérez | Rudis Yímar Flores Hernández

 prometeo
libros

 CLACSO

 UBA **SOCIALES**
publicaciones


Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras

UNA DÉCADA EN MOVIMIENTO

LUCHAS POPULARES EN AMÉRICA LATINA
EN EL AMANECER DEL SIGLO XXI

Rebon, Julián

Una década en movimiento: luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI / Julián Rebon y Massimo Modonesi. - 1a ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; Prometeo Libros, 2011.
320 p. ; 16x26 cm.

ISBN 978-987-1543-73-1

1. Política. 2. Movimientos Sociales. I. Modonesi, Massimo. I Título.
CDD 306

Fecha de catalogación: 07/04/2011

Otros descriptores asignados por la Biblioteca virtual de CLACSO:

Luchas populares / Movimientos sociales / Indígenas / Acción colectiva / Sectores populares / Trabajadores / Lucha política / Conflictos sociales / Cambio social y político / América Latina

COLECCIÓN PERSPECTIVAS

UNA DÉCADA EN MOVIMIENTO
LUCHAS POPULARES EN AMÉRICA LATINA
EN EL AMANECER DEL SIGLO XXI

MASSIMO MODONESI Y JULIÁN REBÓN
[COMPILADORES]

GUSTAVO ANTÓN
JORGE CRESTO
RODRIGO SALGADO
FERNANDO PAIRICÁN PADILLA
ROLANDO ÁLVAREZ VALLEJOS
FRANKLIN RAMÍREZ GALLEGOS
CARLOS MOREIRA
PATRICIA CHÁVEZ LEÓN
DUNIA MOKRANI CHÁVEZ
PILAR URIONA CRESPO
ANDRÉIA GALVÃO
ARMANDO BOITO

PAULA MARCELINO
MARCO ANTONIO PONCE
QUINTÍN RIQUELME
LUCIO OLIVER
FERNANDO MUNGUÍA GALEANA
MARIANA LÓPEZ DE LA VEGA
SIMONA YAGENOVA
RODRIGO J. VÉLIZ
SINDY MORA SOLANO
ROBINSON SALAZAR PÉREZ
RUDIS YILMAR FLORES HERNÁNDEZ



CLACSO

UBA SOCIALES
publicaciones

prometeo
libros



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras

Colección Perspectivas

Comité Editorial

Sergio Caletti
Pablo Gentili
Emir Sader
Hugo Trincherero

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



CLACSO

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Secretario Ejecutivo Emir Sader
Secretario Ejecutivo Adjunto Pablo Gentili

Área de Producción Editorial y Contenidos Web de CLACSO

Responsable editorial Lucas Sablich
Director de Arte Marcelo Giardino

Producción Fluxus Estudio

Impresión CaRol-Go S.A.

Primera edición

Una década en movimiento. Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI
(Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2011)

ISBN 978-987-1543-73-1

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Av. Callao 875 | Piso 4º G | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina
Tel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | <clacso@clacso.edu.ar> | <www.clacso.org>

Este libro está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<www.biblioteca.clacso.edu.ar>

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN MASSIMO MODONESI Y JULIÁN REBÓN	9
UNA DÉCADA EN DISPUTA. APUNTES SOBRE LAS LUCHAS SOCIALES EN LA ARGENTINA GUSTAVO ANTÓN, JORGE CRESTO, JULIÁN REBÓN Y RODRIGO SALGADO	19
LA NUEVA GUERRA DE ARAUCO: LA COORDINADORA ARAUCO-MALLECO Y LOS NUEVOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA MAPUCHE EN EL CHILE DE LA CONCERTACIÓN (1997-2009) FERNANDO PAIRICÁN PADILLA Y ROLANDO ÁLVAREZ VALLEJOS	45
FRAGMENTACIÓN, REFLUJO Y DESCONCIERTO. MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO POLÍTICO EN EL ECUADOR (2000-2010) FRANKLIN RAMÍREZ GALLEGOS	69
MOVIMIENTOS POPULARES Y LUCHAS SOCIALES EN URUGUAY CARLOS MOREIRA	107

UNA DÉCADA DE MOVIMIENTOS SOCIALES EN BOLIVIA PATRICIA CHÁVEZ LEÓN, DUNIA MOKRANI CHÁVEZ Y PILAR URIONA CRESPO	125
BRASIL: O MOVIMENTO SINDICAL E POPULAR NA DÉCADA DE DOIS MIL ANDRÉIA GALVÃO, ARMANDO BOITO Y PAULA MARCELINO	153
LUCHA HEGEMÓNICA, DEMOCRACIA Y AUTORITARISMO EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI MARCO ANTONIO PONCE	183
PARAGUAY: NUEVO ESCENARIO PARA VIEJOS CONFLICTOS QUINTÍN RIQUELME	203
MÉXICO 2000-2009: UNA DÉCADA DE RESISTENCIA POPULAR MASSIMO MODONESI, LUCIO OLIVER, FERNANDO MUNGUÍA GALEANA Y MARIANA LÓPEZ DE LA VEGA	225
GUATEMALA: UNA DÉCADA DE TRANSICIÓN SIMONA YAGENOVA Y RODRIGO J. VÉLIZ	255
LAS DISPUTAS POR LOS SENTIDOS DE LO POLÍTICO EN COSTA RICA: HACIA UN BALANCE DE LAS LUCHAS POPULARES DE LA PRESENTE DÉCADA SINDY MORA SOLANO	275
EL SALVADOR EN SU LUCHA POR RECONSTRUIR LA ORGANICIDAD POLÍTICA POPULAR (1999-2009) ROBINSON SALAZAR PÉREZ Y RUDIS YILMAR FLORES HERNÁNDEZ	297
SÍNTESIS CURRICULARES DE LOS COMPILADORES	317

INTRODUCCIÓN

MASSIMO MODONESI Y JULIÁN REBÓN

LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI en nuestra América Latina ha estado marcada por la emergencia y la trascendencia de las luchas sociales y los movimientos populares. Se trata, sin lugar a dudas, de una *década en movimiento* para los sectores populares. Por un lado, por la generalización de la protesta social, la emergencia y reactivación de movimientos sociales que expresan y nutren la crisis del neoliberalismo y amplían el horizonte democrático en la región. Por el otro, porque, a diferencia de la década anterior, la emergencia de gobiernos reformistas en varios países plantea para las organizaciones sociales nuevos desafíos y nuevos horizontes de acción. Las vinculaciones entre lo social y lo político, entre la autonomía y la integración al gobierno, entre la lucha institucional y extrainstitucional, son objetos de intensos debates que atraviesan al conjunto de las organizaciones populares y se prolongan en las ciencias sociales. Así mismo, asociado a estos cambios en las orientaciones políticas de algunos gobiernos, emergen procesos de movilización social con características regresivas, tintes derechistas y anhelos restauradores.

Este libro compila un conjunto de avances de investigación y ensayos que grafican la riqueza de esta *década en movimiento* en América Latina. Al ofrecer un recuento de distintas experiencias nacionales, nos proponemos compartir elementos para la reflexión y abrir algu-

nas líneas de interpretación que abonen a un balance de la década que reconozca la centralidad y la politicidad de la acción colectiva, lo cual implica, a contrapelo de las tendencias de los noventa, una toma de distancia con los paradigmas institucionalistas, despolitizantes y desmovilizantes que dominaban las ciencias sociales y el discurso político. Al mismo tiempo, a la luz de una mirada de conjunto sobre la década y considerando la diversidad de experiencias latinoamericanas, la irrupción política de las movilizaciones críticas del neoliberalismo no puede asumirse como un paradigma general y omnicomprendivo que pretenda substituir el anterior. Sin embargo, reconocer un saldo “agridulce” no impide destacar la novedad histórica, enfatizar las rupturas marcadas por las luchas sociales sin dejar de subrayar las continuidades de las recomposiciones institucionales, la apertura de horizontes de reformas y alternativas en medio de la persistencia de inercias conservadoras y de proyectos reaccionarios y restauradores. Esta constatación tiene profundas implicaciones historiográficas, sociológicas y políticas que deberán ser objeto de intensos debates que el libro que hoy presentamos procura promover.

Sin duda, todo cierre cronológico de una década invita a ejercicios de caracterización que intentan colocar una dimensión o un fenómeno en el centro del análisis, señalando su relevancia. Después de la denominada “década perdida” para el desarrollo y, podríamos agregar, para la democratización, los años noventa podrían ser conocidos como la década “neoliberal”. Precisamente, América Latina es la región del mundo en la cual las denominadas reformas neoliberales –en referencia a la ideología que las nutrió– tuvieron mayor profundidad. Durante esta década, avanzaron en toda la región, con distintos ritmos e intensidades, procesos de reestructuración capitalista que tuvieron como resultante un debilitamiento de la regulación estatal de la economía y la pérdida de poder social de los trabajadores y los sectores populares. La mayor apertura y desregulación comercial y financiera, la privatización de empresas públicas y la precarización de las relaciones laborales fueron algunas de las medidas a través de las cuales avanzó esta recomposición regresiva del ordenamiento social. Pero el avance de esta expansión capitalista no estuvo exento de confrontaciones. Los procesos expropiatorios y la renovada explotación y exclusión social resultantes encontraron resistencias desde el inicio del ciclo. Sin embargo, en líneas generales, dichas resistencias fueron derrotadas en condiciones de aislamiento y fragmentación.

A partir de mediados de los noventa, la resistencia empezó a desarrollarse con nuevo impulso en distintos territorios. Obviamente, si de historia hablamos, aunque sea del tiempo presente, la emergencia de un fenómeno remite a su visibilidad pero su génesis remite a unos orí-

genes, a una gestación relativamente subterránea. La rebelión se gesta en la resistencia. En la resistencia que fue, con distintos ritmos, articulándose encontramos los antecedentes de la construcción histórica de movimientos, identidades, sujetos que se volverán protagonistas de la década posterior.

Hacia el inicio de la primera década del presente siglo ya era evidente la crisis de la hegemonía neoliberal. La intensidad del avance del modelo neoliberal en la región comenzó a dar lugar a una cada vez más intensa crisis de su legitimidad. La lucha en las calles comenzaba a tener una mayor expresión e impacto político e institucional. De a poco emergían nuevos gobiernos que se vinculaban –de modo muy heterogéneo– con las luchas de los sectores populares. El neoliberalismo se mantenía, ya sin ropajes consensuales, en la mayoría de los países, pero la tendencia hacia una disputa socio-política asediaba el modelo.

Nuevas experiencias se desarrollaron en distintos países retomando ahora, desde el gobierno, elementos de la lucha democrática planteada previamente por los movimientos sociales y procesos de reordenamiento económico que marcaban una discontinuidad frente a las políticas de los noventa y, en muchos, casos procuraban su reversión. En Venezuela, Bolivia y Ecuador procesos instituyentes incorporaron al gobierno a sectores sociales excluidos, redefiniendo el carácter social y cultural de la ciudadanía misma y alimentando la “demodiversidad” en la región al promover nuevas formas de participación popular. No serán meramente gobiernos críticos del neoliberalismo. Expresarán formas de enfrentar y resolver injusticias y exclusiones de larga data, en algunos casos planteando la superación de estructuras persistentes desde el tiempo colonial. En el campo económico y social promovieron un mayor peso del Estado, la heterogeneización de la matriz socioproductiva con formas no capitalistas, promoviendo procesos de redistribución de la riqueza y de la propiedad. Vinculado a estas experiencias se desarrollará el desafío de reinstalar la lucha anticapitalista en el siglo XXI. En otros países, como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay los nuevos gobiernos plantearán puntos de ruptura con la agenda política y económica dominante en la década anterior. No obstante, a diferencia del primer conjunto no se plantearán proyectos de refundación estatal ni necesariamente la reversión del neoliberalismo, y mucho menos, la superación del carácter capitalista de la formación social. Pero más allá de estas diferencias, los articulará la crítica a la agenda de la década previa y la búsqueda de una nueva integración regional con creciente autonomía de los Estados Unidos de América.

Gobiernos conducidos por obreros, campesinos, indígenas, ex guerrilleros, sacerdotes de la teología de la liberación simbolizan la

novedad de la apertura política de la época. No obstante, esta emergencia de nuevas personificaciones sociales en la función de gobierno no puede ser leída lineal y equivalentemente como el cambio del carácter social de los territorios en cuestión. Por el contrario, estamos ante procesos contradictorios, en que lo nuevo reorganiza lo preexistente y al mismo tiempo es reorganizado por estos últimos elementos dando lugar como resultantes a heterogéneos equilibrios adaptativos. Así, por una parte, estos procesos expresan la apertura y acomodamiento de diversos espacios institucionales a la emergencia de fuerzas y sectores previamente excluidos. Por la otra, la persistencia y capacidad sistémica del ordenamiento social para procesar y asimilar contradicciones configurando umbrales –límites al proceso de cambio– de difícil superación.

Este cambio de época suscitará, en varios territorios, novedosos procesos. Sectores de las clases dominantes, ante la pérdida de poder institucional, encontrarán en la acción directa en las calles, en muchos casos apelando a formatos tradicionales de los sectores populares, el modo de defender sus intereses. El paro petrolero en Venezuela, las movilizaciones autonomistas en Bolivia, el conflicto del “campo” en Argentina, son algunos ejemplos en este sentido.

No obstante, los gobiernos reformistas –como se desprende de los trabajos de este libro– no estarán tampoco exentos de contradicciones y disensos con la movilización de los sectores populares. Aun en los casos en que se plantean profundos procesos de transformación social y política estas tensiones estarán presentes. La denominada “revolución ciudadana” encabezada por Rafael Correa en Ecuador no está exenta de tensiones con el movimiento indígena. Aun en medio de la popularidad y los triunfos políticos y electorales de Evo Morales, existen cuestionamientos desde abajo del llamado “gobierno de los movimientos sociales”. A pesar de la formación de un instrumento político centralizado –el Partido Socialista Unido de Venezuela– el chavismo confirma que un liderazgo indiscutible no es garantía de la ausencia de disenso que visibiliza un pluralismo irreductible al interior del proceso transformador venezolano.

En otros territorios de nuestra región no se desarrolló una ruptura a nivel del gobierno con la década anterior. Más aún, algunos de ellos, México y Colombia, por ejemplo, se destacan por el desarrollo de estrategias regresivas ante la avanzada de las luchas sociales de carácter popular. En México, aun en medio de intensos procesos de movilización y de protesta, la década asistió al ascenso al poder de una derecha francamente reaccionaria, cuyo impulso al neoliberalismo abandonó los ropajes hegemónicos para imponerse por medio de la coerción y la manipulación mediática. En Colombia, este mismo

carácter regresivo fue acentuándose en la medida en que la década *uribista* instrumentó una agresiva estrategia de militarización y criminalización del conflicto, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, reprimiendo toda forma de protesta.

Inclusive en Centroamérica se sintieron los vientos de cambio surgidos de la crisis del neoliberalismo. Aún sin desbordes de masas, desde las urnas surgieron varios gobiernos que, con mayor o menor coherencia, promueven reformas sociales. En el caso de Honduras, una coyuntura particular, que llevó a radicalizar las posturas del presidente Zelaya, fue truncada por un golpe de estado cívico-militar. Esta ruptura institucional y su posterior legitimación, pese a la resistencia inicial de la mayoría de los países de la región, nos alertan sobre la posibilidad de reversión rupturista de los procesos de cambio social e institucional en la región y la persistencia de las clases dominantes en la instrumentalización de una herramienta –el golpe de estado– a la cual han apelado recurrentemente en la historia de América Latina.

Los artículos que presentamos en este libro¹ narran la historia y las vicisitudes de las luchas sociales protagonizadas a lo largo de la década por los sectores populares en estos distintos escenarios. Son resultantes, en su mayoría, de avances de investigación que toman como insumo base las cronologías de seguimiento del Conflicto Social elaboradas por el programa Observatorio Social de América Latina (OSAL) de CLACSO. En su mayoría se trata de trabajos elaborados por integrantes de los comités nacionales de seguimiento del conflicto del OSAL. Cabe aclarar que el presente libro no tiene un punto de partida teórico-metodológico común. Con el correr de las páginas, el lector podrá reconocer la pluralidad de orientaciones teóricas existentes en la investigación en ciencias sociales del conflicto social y la acción colectiva, así como sus respectivas implicancias políticas en los posicionamientos resultantes frente a los objetos de conocimiento.

En el artículo “Una década en disputa”, Gustavo Antón, Jorge Cresto, Julián Rebón y Rodrigo Salgado exploran la evolución de las luchas sociales en su vinculación con las transformaciones políticas, económicas y sociales ocurridas en la Argentina. El trabajo expresa los devenires de la protesta social y los procesos de autonomización, proponiendo una periodización en función del carácter de clase y social de las luchas. La autonomización y la protesta en las calles que expresaron y significaron la crisis de la reestructuración capitalista neoliberal de los noventa, las transformaciones y dilemas acaecidos en las luchas y movimientos sociales en paralelo a la consolidación

1 Agradecemos a Emma Tenorio y Carlos Bauer el apoyo en la corrección y edición de los textos aquí presentados.

de una nueva fuerza social en el gobierno y la emergencia de procesos de movilización de carácter regresivo son problematizados desde una perspectiva que invita a pensar en los dilemas a enfrentar por los sectores populares para profundizar la lucha democrática.

En “La Nueva Guerra de Arauco”, Fernando Pairicán Padilla y Rolando Álvarez Vallejos analizan la cara oculta del “modelo chileno” a través del prisma del conflicto mapuche. En este trabajo, la repolitización mapuche es propuesta como la resultante de las expectativas incumplidas por años de gobierno de la concertación. La emergencia y desarrollo de la acción directa del pueblo mapuche modificará la relación con el Estado basada históricamente en el *peticionismo* y la negociación. Este cambio dará lugar a una serie de transformaciones en la acción del Estado, entre ellas se destacan la criminalización de los destacamentos más combativos, la generalización del asistencialismo y fallidos intentos de lograr un acuerdo que contemplara el reconocimiento político e institucional.

En “Fragmentación, reflujo y desconcierto, movimientos sociales y cambio político en el Ecuador”, Franklin Ramírez Gallegos nos propone revisar la importante dinámica de la acción colectiva y sus impactos políticos en el país andino. El sinuoso desenvolvimiento del movimiento social indígena, su estrategia dual de movilización disruptiva y participación política institucional, conduce a este movimiento al gobierno para luego perder peso en el marco de una aguda crisis de representación del sistema político. El desborde ciudadano, que expresó en las calles el malestar social con un régimen político, será el preámbulo para la emergencia y consolidación de un nuevo liderazgo de vocación transformacional. El liderazgo del presidente Rafael Correa retoma el mismo registro discursivo abierto por el movimiento indígena y sus aliados durante los noventa, sin embargo, no integra a gran parte de dichas dinámicas en el centro del emergente bloque de articulaciones políticas que hoy en día impulsan el proceso de cambio en el Ecuador. Entre las coincidencias programáticas con dicho bloque y la relativa subsidiaridad política en la conducción del tránsito post-neoliberal, las organizaciones populares han resentido un profundo desconcierto y desacomodo en sus alineamientos, programas y formas de acción política.

El trabajo de Carlos Moreira, “Movimientos populares y luchas sociales en Uruguay”, nos convoca a revisar la actualidad de estos movimientos, su situación actual y sus perspectivas de futuro en una sociedad que históricamente se ha caracterizado por priorizar la lucha política institucionalizada a través de los partidos políticos. El trabajo se concentra en realizar una caracterización de los principales temas y sujetos en conflicto durante el gobierno del Frente Amplio,

planteando un proceso que revitaliza a los movimientos sociales al mismo tiempo que los margina de los escenarios de elaboración de las políticas públicas.

“Una década de movimientos sociales en Bolivia” se titula el trabajo de Patricia Chávez León, Dunia Mokrani Chávez y Pilar Uriona Crespo, quienes nos proponen revisar críticamente tanto la tesis según la cual el gobierno de Evo Morales sería la forma más acabada de cristalización de la acción colectiva desplegada desde diversos escenarios de lucha desde el año 2000, como aquella que, en el sentido contrario, postula que dicho gobierno sería un usurpador del proceso de luchas abierto por los movimientos. Proponen entender al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) como un elemento más de un amplio proceso que no termina en el ejercicio gubernamental, sino que pretende abrir diferentes cauces de expresión de las luchas que se proponen transformar y desmontar lo diversos núcleos de desigualdad, desde diferentes horizontes políticos.

En “Brasil: o movimento sindical e popular na década de 2000”, Andréia Galvão, Armando Boito y Paula Marcelino analizan el movimiento sindical y los movimientos populares en un contexto político marcado por los gobiernos de Lula da Silva, un ex dirigente sindical. Según su análisis, las luchas sociales –obreras, campesinas, de pobres urbanos y de capas medias– están caracterizadas por un nivel reivindicativo, sin lograr constituir un movimiento político de masas contra el capitalismo neoliberal en el más extenso y poblado país de América Latina.

Marco Antonio Ponce en el artículo “Lucha hegemónica, democracia y autoritarismo en el Socialismo del Siglo XXI” analiza la lucha por la hegemonía durante el gobierno chavista. El autor explica el proceso de concentración del poder con rasgos autoritarios en una estructura gubernamental basada en el liderazgo de Hugo Chávez y afianzada en la promoción del poder comunal y la organización de las bases sociales. Por otro lado, se describen los movimientos más representativos durante este periodo, haciendo énfasis en el apoyo que el ejecutivo de Venezuela ha dado a la organización ciudadana. Destaca el caso de los Consejos Comunales, que han logrado aplicar programas en beneficio de la sociedad, sin embargo este “empoderamiento de la colectividad” –como lo llama el autor– no tuvo el alcance esperado, elemento que motivó la manifestación de diversas organizaciones, cuyas demandas principalmente giran en torno a la solicitud de derechos laborales y servicios básicos y provocan la reacción represiva del gobierno, abriendo una línea de tensión social que atraviesa la actualidad venezolana.

“Nuevo escenario para viejos conflictos” es el título del trabajo elaborado por Quintín Riquelme acerca de la evolución de las luchas

sociales en el Paraguay durante la década. Según postula su autor, los movimientos sociales obtuvieron triunfos importantes y también reveses que explican las contradicciones del proceso social y político del país. El movimiento social logró avances cualitativos importantes al pasar de demandas puntuales a demandas más generales y a la constitución de frentes sociales y políticos, lo que le ha permitido incursionar en la esfera política y pelear por espacios en la estructura de poder. Sin embargo, la falta de unificación política en el campo de la lucha electoral y la ausencia de propuestas de desarrollo alternativos al vigente, y en lo social la persistencia de la fragmentación, son debilidades que conspiran contra la posibilidad de aprovechar el proceso abierto a partir de la elección de Fernando Lugo en abril de 2008.

En “México 2000-2009: una década de resistencia popular”, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Fernando Munguía Galeana y Mariana López de la Vega realizan un balance de los alcances y la fragmentación de la resistencia popular en la primera década de la alternancia política en México. Aun mostrando un saldo netamente favorable al conservadurismo oligárquico, la década no deja de mostrar tensiones y claros momentos de quiebre en que la movilización aparece como contrapeso al espacio político institucional. El análisis que nos ofrecen de las más relevantes manifestaciones del conflicto social –el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que inaugura la lucha antineoliberal en México; Atenco y la lucha por la defensa de la tierra, la nunca resuelta crisis del agro; el *obradorismo* y el conflicto oaxaqueño cristalizado en la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca– despierta inevitablemente la inquietud de si en México la continuidad neoliberal no ha sido producto de la falta de resistencia, sino de la división que la ha caracterizado.

El artículo intitulado “Guatemala: una década de transición”, de Simona Yagenova y Rodrigo J. Véliz, da cuenta del periodo denominado *tiempo de paz* (1996-2003). La necesidad de un nuevo pacto social para fortalecer los espacios políticos –después de 36 años de guerra civil– motivó que la participación de los movimientos sociales se diera en el marco de la ciudadanía y la democratización. Aún en medio de una creciente acumulación de experiencias colectivas, el impacto del modelo económico neoliberal (que fortaleció y benefició a las élites nacionales), así como la tendencia a la criminalización de la protesta, han limitado el impacto y el alcance de las demandas de los movimientos sociales guatemaltecos.

El análisis de Sindy Mora Lozano, “Las disputas por los sentidos de lo político en Costa Rica: hacia un balance de las luchas populares de la presente década”, toma como punto de partida la firma del tratado Figueres-Calderón (1995) –tratado multipartidista respecto al

ajuste estructural– que, aunado al movimiento magisterial, afectó de manera tácita las elecciones de 1998, provocando que los patrones de identificación partidaria y electoral se modificaran. Según la autora, la organización de diferentes iniciativas de protesta antineoliberal a lo largo de los años abrió una disyuntiva novedosa en la sociedad civil costarricense: junto a la tradicional perspectiva *institucionalizadora* que sostiene la necesidad de cristalizar una influencia de los actores sociales pasando por la mediación de los partidos, aparece otra visión que insiste en el valor de la protesta y la autonomía de las luchas y los movimientos sociales.

Por último, Robinson Salazar Pérez y Rudis Yilmar Flores Hernández analizan las vicisitudes que ha debido atravesar el campo de lo popular para reconstituirse en el escenario posbélico en “El Salvador en su lucha por reconstruir la organicidad política popular: 1999-2009”. Reconstruyen la historia de las luchas populares desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Alfredo Cristiani y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en 1992 –con el tremendo desafío de recomposición y reorientación organizacional que esto supuso para los movimientos sociales– hasta la victoria electoral de Mauricio Funes, abanderado del FMLN, en las elecciones presidenciales de marzo del 2009. Según los autores, el impacto que supusieron los Acuerdos de Paz en la correlación de fuerzas dentro del campo político se refleja en el tiempo transcurrido antes de que se recompusieran movimientos capaces de impulsar luchas sociales. El cambio de siglo marca el resurgimiento de la conflictividad, y Salazar y Flores destacan la pluralidad reivindicativa que mostraron los movimientos así como la aparición de nuevos campos de movilización, entre los que sobresalen los de corte ambientalista.

En general, aun en medio de las diferencias señaladas, el saldo de las experiencias de movilización y lucha social –comparado con la década anterior– aparece netamente favorable a las expresiones de antagonismo y autonomía, aun cuando no desaparecieron las inercias subalternizantes. El asentamiento de gobiernos progresistas muestra, al mismo tiempo, el alcance y el límite de la oleada de movilizaciones. Por una parte, da cuenta del desplazamiento relativo de estrategias económicas dominantes en la década previa y la apertura de procesos de democratización política y social. En esta dirección, se producen transformaciones progresivas del ordenamiento social cuya génesis no es ajena a las acumulaciones construidas en años de lucha y movilización social. Por la otra, cristaliza temporalmente un equilibrio político entre fuerzas progresistas en el gobierno y oposiciones de derecha, en el cual en muchos casos reduce los márgenes de la acción política autónoma de los sectores populares.

En este sentido, la década de los movimientos se abre a escenarios en los cuales no sólo se manifiestan proyectos restauradores o de continuidad neoliberal sino que, aun en los países en los cuales las experiencias de movilización marcaron la formación antagonista y autónoma de la subjetividad popular, se hace presente también el fantasma de la subalternidad, de la recomposición de relaciones heterónomas de nuevo tipo que obstaculizan la acción autónoma de las clases populares. No obstante, esto no debe llevarnos a planteos que fetichicen ciertos instrumentos organizativos o ciertos ámbitos de la lucha. El problema central es el carácter de la fuerza social y la adecuación de sus formas organizativas a las tareas que debe enfrentar en los distintos ámbitos. En este sentido, algunas experiencias de la región nos alertan que autonomía no debe ser confundida con autismo y que es necesario combinar la construcción autónoma con la lucha por el poder, paso necesario en la elaboración de una estrategia contrahegemónica. Dicho en otras palabras, nos estimulan a vincular de modo creativo la lucha social con la lucha política. Por momentos, el debate latinoamericano tiende a arrojarnos, como antinomias teóricas, el movimiento y el partido, la autonomía y la hegemonía, cuando en la diversidad de los procesos concretos podemos observar cómo su articulación ha dado lugar a las experiencias más exitosas y su desarticulación ha permitido la continuidad de gobiernos neoliberales o, inclusive en el caso de gobiernos progresistas, el recurso a un reformismo institucional ajeno al protagonismo y la participación popular.

Por último, aun en este escenario latinoamericano multifacético, la acumulación de experiencias de lucha, de vivencia del conflicto, deja una huella en la memoria corta, en imaginarios sociales que resignifican a la política. Este acervo forma parte del patrimonio cultural que dejan estos diez años de movilizaciones y que constituye una reserva, verdadera caja de herramientas, de cara a futuros desafíos. Una década de luchas en el arranque del siglo marca una discontinuidad significativa frente a la derrota que selló el fin del siglo pasado. Aun en el claroscuro, brilla la luz de la fuerza de la acción colectiva de los oprimidos, se vuelve a abrir el horizonte de la emancipación como motor de lucha social y como posibilidad histórica de otro mundo posible.

Massimo Modonesi

Julián Rebón

México-Buenos Aires, mayo de 2010

GUSTAVO ANTÓN*
JORGE CRESTO**
JULIÁN REBÓN***
RODRIGO SALGADO****

UNA DÉCADA EN DISPUTA. APUNTES SOBRE LAS LUCHAS SOCIALES EN LA ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

La sociedad argentina experimentó en los últimos años una serie de transformaciones de gran importancia. Ingresó a la década del 2000 en medio de una grave crisis política y económica, cuyo momento más álgido se registró hacia finales de 2001 y comienzos de 2002, cuando los índices de desocupación, pobreza e indigencia se incrementaron significativamente en medio de una fenomenal depresión económica y se sucedieron cinco presidentes en menos de dos semanas. Sin embargo, luego de atravesar el momento más agudo de esta profunda crisis, el país experimentó un proceso de recomposición institucional, política y económica hasta comienzos de 2008. Hacia finales de la década, la sociedad ingresó en una nueva crisis política –de menor importancia en comparación con la experimentada a

* Sociólogo, becario doctoral CONICET-IIGG, doctorando en Ciencias Sociales, UBA.

** Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y becario posdoctoral CONICET-IIGG.

*** Doctor en Ciencias Sociales (UBA), investigador del CONICET y director del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

**** Magíster en Investigación en Ciencias Sociales (UBA) y Becario doctoral CONICET-IIGG.

comienzos de la década– y en un proceso de desaceleración del crecimiento económico.

En paralelo –y en relación con estas mutaciones– la movilización social vivió una serie de transformaciones. La protesta social generalizada y el heterogéneo proceso de autonomización que caracterizaron a la lucha social durante los momentos más intensos de la crisis evolucionarán, a partir de la recomposición institucional, hacia una conflictividad de carácter menos intensa, más institucionalizada y con un renovado protagonismo del movimiento de los trabajadores organizados. Finalmente, hacia fines de la década, se intensificarán la protesta y la autonomización en un contexto de emergencia de protestas con características regresivas y politización del conflicto.

El presente trabajo explora descriptivamente la evolución de las luchas sociales de la década en su vinculación con las transformaciones políticas, económicas y sociales ocurridas en la Argentina. En esta dirección, primero se expone una periodización de la evolución de la lucha social. Posteriormente, se analiza la evolución de los procesos de movilización y protesta de los actores más dinámicos del período entre los sectores populares: los trabajadores asalariados ocupados y los trabajadores desocupados. Por otra parte, también se analizan procesos considerados emblemáticos de la conflictividad de las distintas etapas: las recuperaciones de empresas, los movimientos socio-ambientales y los procesos de movilización con carácter social regresivo. Finalmente, se plantea una serie de interrogantes sobre el carácter social que expresa la evolución de las luchas y de la totalidad social a ellas vinculada, planteando tensiones y desafíos que se presentan en la perspectiva de la construcción de una estrategia emancipatoria.

Las fuentes de datos utilizadas en el presente trabajo incluyen una revisión de las cronologías del conflicto social elaboradas por el Observatorio Social de América Latina (OSAL) de CLACSO sobre la base de la prensa escrita, el análisis de datos estadísticos sobre hechos de rebelión que elabora el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) basados en dichas cronologías –los cuales nos fueron generosamente facilitados por este programa–, la incorporación de diferentes avances investigativos que los autores hemos desarrollado en el marco del Programa de Investigaciones sobre Cambio Social (PICASO), con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, así como el análisis de avances investigativos de otros autores pertinentes a la temática.

PERIODIZACIÓN

La década no encuentra una continuidad en cuanto a la evolución de la protesta y disconformidad social. A grandes rasgos, pueden distin-

guirse al menos tres períodos que guardan estrecha relación con la evolución política y social del país.

Como se observa en el Cuadro 1, el primer período puede situarse hasta 2002 inclusive¹. Está enmarcado por el agotamiento del modelo resultante de la reestructuración capitalista regresiva de los 90 –denominado “neoliberal” por la doctrina que lo nutrió– y el desarrollo de una inusitada crisis que se generalizó en todo el orden social. La agudización de la crisis promoverá la renuncia del gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001), de la Alianza (un frente conformado por la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario), en un contexto de saqueos y protestas generalizadas, que incluyó en la ciudad de Buenos Aires una de las movilizaciones de carácter semi-espontáneo más masivas en la historia del país. Este período está caracterizado por el malestar y la protesta social generalizada y creciente y la emergencia de nuevos movimientos sociales –movimientos de empresas recuperadas por sus trabajadores, asambleas barriales, movimientos de ahorristas bancarios– y el desarrollo de otros movimientos surgidos previamente como los movimientos de trabajadores desocupados o piqueteros. Se desarrolla un proceso de autonomización de diferentes personificaciones sociales que no están dispuestas a delegar la defensa de sus intereses en las heteronomías políticas y sociales y en los canales institucionales. El desarrollo inusitado de la acción directa –las configuraciones de acciones no mediadas por los canales institucionales dominantes para el procesamiento de los conflictos– es un claro indicador de este proceso. Es un período caracterizado también por el enfrentamiento a procesos expropiatorios y sus resultantes en distintas dimensiones. La creciente politización del país se va a expresar en demandas de cambios económicos y políticos, estos últimos representados emblemáticamente en la consigna “que se vayan todos”, popularizada hacia fines de 2001. A pesar de los distintos procesos de unificación de la heterogénea protesta y autonomización emergente, en el momento de mayor intensidad de la conflictividad, la movilización tenderá a expresar diversas fracturas y contradicciones no pudiendo constituirse desde los sectores populares una direccionalidad estratégica que la articule.

El segundo período podría delimitarse entre 2003 y 2007. Está contextualizado por el desarrollo y la consolidación del proceso de recuperación económica y de recomposición política iniciado a me-

1 Los límites de los períodos se han delimitado en años por restricciones en las fuentes con las cuales contamos. Si bien podría hacerse sub-periodizaciones en cada etapa, no las consideramos pertinentes para los fines descriptivos de las principales tendencias que posee este trabajo.

diados de 2002. La descomposición del anterior modelo de acumulación abre espacio a una situación de disputa en la cual la expansión productiva desplaza al anterior peso de la valorización financiera y, dentro de ella, la industria y el agro ganan peso frente al sector de servicios. En el campo político, se consolida una nueva alianza social en el gobierno del Estado nacional que produce rupturas políticas y económico-sociales significativas con los gobiernos de la década anterior². Con el correr de los años, se producirá un cambio en la morfología de las luchas populares. Ante el nuevo contexto, algunos actores del período anterior tenderán a desaparecer –las asambleas barriales por ejemplo– y otros a desmovilizarse crecientemente, como por ejemplo los piqueteros. Reemergerá con nuevo protagonismo el movimiento obrero y sindical. La lucha se desplazará de enfrentar procesos expropiatorios a la confrontación de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. En paralelo a estas tendencias y desplazamientos se produce una marcada institucionalización de las acciones de lucha. No obstante, la acción directa seguirá siendo significativa, sobre todo para actores no institucionalizados³. También emergen nuevos

2 Nos referimos a los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y, posteriormente, al de Cristina Fernández –quién asume en 2007– pertenecientes al Frente para la Victoria –fuerza de centroizquierda con eje en el Partido Justicialista–. El cambio de la política de gobierno planteará un conjunto de confrontaciones progresivas. Dichas confrontaciones, ejercidas con particular intensidad en los momentos de mayor debilidad política de la fuerza en el gobierno, recrearán el espacio de la política configurando nuevos márgenes de autonomía frente a los sectores más concentrados de la clase dominante y de los centros de poder internacional, promoviendo con relación a la década previa una mayor integración parcial de intereses de las clases subalternas a la política de gobierno. De este modo, se desarrolla una renovación parcial de ciertas instituciones –Corte Suprema de Justicia de la Nación y Fuerzas Armadas, por ejemplo–, un avance sobre algunos asuntos pendientes de la agenda democrática –promoción de los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar y ley de servicios audiovisuales– y una política internacional que fortaleció la autonomización regional. También se desarrolla una política económica más heterodoxa, que incluyó una mayor intervención del Estado sobre la economía, junto a una política laboral y social que, en articulación con la política económica, promovieron una recuperación del salario, el descenso de pobreza y la desocupación y la ampliación de la cobertura de los sistemas de protección social y previsional. La agenda reformista tuvo distintos avances y retrocesos a lo largo de ambos gobiernos y no estuvo exenta de medidas contradictorias o de estar prácticamente ausente en diversas áreas fundamentales. Por otra parte, no logró modificar significativamente los niveles de desigualdad social, ni el desmantelamiento del Estado desarrollado en las décadas previas. Menos aún logró transformar progresivamente los actores e instituciones políticas; en este campo pese a la existencia de distintos momentos de apertura, existió un marcado continuismo.

3 Precisamente una de las improntas que deja culturalmente la etapa precedente es la difusión de formatos directos de confrontación en la caja de herramientas de lucha de diversas identidades sociales. Este cambio cultural será uno de los nutrientes de una significativa propensión a la acción directa que marca toda la década.

movimientos sociales, como los movimientos contra la inseguridad o los socio-ambientales, mientras que el movimiento por los derechos humanos renueva su dinámica de movilización⁴.

Por último, en 2008, se abre un nuevo período en la evolución de la conflictividad social. Estará caracterizado por una ralentización del crecimiento económico y el desarrollo de una crisis política de la alianza en el Gobierno. Nuevamente crecen las acciones de lucha y la propensión a la acción directa, pero la novedad será su conducción por sectores de la burguesía en sus diferentes personificaciones sociales. Emerge una renovada politización del conflicto que tiende a polarizarse a favor o en contra del Gobierno nacional. En particular, el denominado conflicto del campo expresará un intenso proceso de autonomización y movilización personificado centralmente por corporaciones con metas regresivas en lo político y lo económico. Aún en desarrollo, la duración y características de esta etapa dependerán de la evolución económica, la dinámica de las confrontaciones políticas y la capacidad del sistema político para procesar institucionalmente a éstas últimas.

Cuadro 1

Periodización de la década y principales características asociadas a la conflictividad social

Dimensiones	Períodos		
	2000-2002	2003-2007	2008-2009
Contexto social	Crisis del modelo de valorización financiera: recesión y depresión. Crisis política: renuncia de De la Rúa. Gobiernos provisorios. Inestabilidad e ilegitimidad. Crisis social.	Salida de la crisis: fuerte crecimiento económico y lenta recomposición política. Legitimidad de gobiernos electos validados en las urnas.	Crisis política y desaceleración del crecimiento económico. Unificaciones de la oposición política y social, divisiones en el oficialismo.
Caracterización general del conflicto	Politización. Protesta social generalizada. Autonomización des-corporativizada y diversificada en sus destinatarios. Contenido progresivo, con peso importante del carácter defensivo en la lucha corporativa.	Institucionalización y corporativización moderada del conflicto. Emergencia de nuevos movimientos. Contenido progresivo, con aumento del peso ofensivo en la lucha corporativa.	Politización y polarización. Autonomización corporativa y regresiva con el Gobierno nacional como destinatario.

4 Una porción sustantiva de la agenda histórica de los organismos de derechos humanos será convertida en política de gobierno. Esto producirá, por una parte, un apoyo de la mayoría de dichos organismos, por la otra, distintas respuestas de los sectores afectados por la nueva política, entre ellos la desaparición de Jorge Julio López, testigo de uno de los juicios realizados contra los acusados por el genocidio producido durante la última dictadura militar.

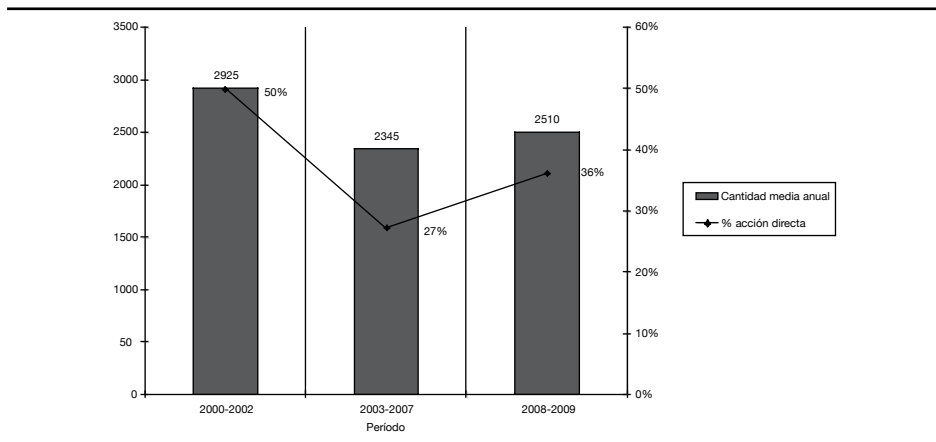
UNA DÉCADA EN MOVIMIENTO

Dimensiones	Períodos		
	2000-2002	2003-2007	2008-2009
Cantidad de acciones de lucha	Punto más alto de las acciones de lucha.	Descenso y estabilización a niveles más bajos.	Crecimiento con el punto más alto en 2008, pero sin alcanzar los niveles de 2000-2002.
Formas de lucha	Fuerte intensidad de las acciones directas, en 2001 predominan frente a las indirectas. Las formas de acción directa son lideradas por el corte, pero también alcanzan fuerte intensidad el ataque, la ocupación y los saqueos. La generalización de la protesta conduce a un pico absoluto de movilización.	Descenso de acciones directas y ascenso de las indirectas. La actividad huelguística alcanza sus picos absolutos y relativos. La movilización alcanza su pico relativo.	Aumento paulatino de la acción directa y descenso de la indirecta, aunque con predominancia de la segunda. El crecimiento de las acciones directas se da principalmente a partir del crecimiento de los cortes.
Personificación social	Tendencia al aumento del peso de los desocupados, llegando en 2002 a ser el actor más significativo. La tregua sindical disminuye el peso de los asalariados ocupados a partir de 2002. Es el momento de mayor articulación en acciones de lucha entre ocupados y desocupados.	Reemergencia del conflicto laboral a partir de 2004, aumento y consolidación del peso de los asalariados ocupados. Descenso paulatino y sostenido de la participación de los desocupados. A partir de 2004 adquieren peso los familiares y víctimas de la inseguridad y accidentes. Vinculado a los movimientos socio-ambientales, desde 2006 adquieren importancia los vecinos y pobladores.	Aumento del peso de los propietarios. Durante 2008 superan a los asalariados. Estabilización de la intensidad de la categoría "vecinos y población". Descenso del peso de los asalariados ocupados. Leve ascenso en la participación de los desocupados aunque con un peso muy poco significativo.
Demandas	En 2001, se da el punto más intenso de la lucha contra el modelo económico y un pico en la exigencia de la renuncia de funcionarios y en defensa de los ahorros. Los salarios adeudados, el empleo, los subsidios y las condiciones de vida son demandas significativas en todo el período.	Asalarización de la conflictividad: crecimiento del reclamo por aumento salarial y por mejoras en las condiciones de trabajo. Disminución marcada de las demandas políticas. Relevancia de demandas de justicia y referentes al medioambiente, estas últimas alcanzan su punto más alto en 2006 y 2007.	Vinculado al conflicto del campo se da un pico intenso de demandas referentes a los impuestos. Descenso de las demandas salariales. En 2009 hay un aumento de las demandas por empleo. Aumento de las demandas políticas.
Destinatarios	Politización: importante peso del Gobierno como destinatario pero no en tanto empleador. Peso significativo de las empresas como destinatario de demandas.	El crecimiento del conflicto laboral da mayor peso al Gobierno en tanto que empleador y un aumento significativo del peso de las empresas privadas.	Repolitización: fuerte aumento del peso del Gobierno nacional. Emergencia de destinatarios políticos. Hay una disminución del peso de las empresas como destinatarias de demandas en 2008 y un aumento en 2009.
Principales hechos de masas	Jornadas del 19 y 20 de diciembre (2001).	Marcha contra la inseguridad (2004), marchas de Gualeguaychú (2007), acto del Gobierno del 25 de mayo (2006) y marcha por la aparición con vida de Julio López (2006).	Principales concentraciones a favor y en contra del aumento de las retenciones durante el llamado conflicto del campo (2008).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de PIMS y en las cronologías del OSAL.

A continuación, presentamos la evolución de los procesos de movilización y protesta de los actores más dinámicos del período entre los sectores populares: los trabajadores asalariados ocupados y los trabajadores desocupados o piqueteros. Asimismo, presentamos una breve descripción de los procesos emblemáticos de la primera y segunda etapa de la conflictividad, los denominados procesos de recuperación de empresas y los movimientos socio-ambientales. Por último, exponemos el desarrollo de los procesos de movilización con carácter social regresivo, que como ya hemos señalado alcanzan su cúspide en la última etapa de conflictividad que hemos delimitado.

Gráfico 1
Cantidad media anual de acciones de lucha y porcentaje de acciones que asumen carácter directo por período



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PIMSA.

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS OCUPADOS

En el nuevo contexto social de recomposición política, recuperación económica y mejoramiento de los indicadores laborales –en particular un marcado descenso del desempleo–, surgido tras la crisis de 2001, los trabajadores de la Argentina recuperaron, desde 2004, el dinamismo demostrado históricamente. De esta manera, los trabajadores ocupados comenzaron nuevamente a desempeñar el rol de vanguardia en las luchas sociales, luego de varios años de fuerte protagonismo de los movimientos de trabajadores desocupados (años 2002 y 2003)⁵.

⁵ Cabe destacar que el carácter corporativo de las principales estructuras sindicales en la Argentina incapacitó a estas para organizar a los trabajadores expropiados de

El renovado dinamismo expresado por los trabajadores ocupados en este nuevo contexto puede constatarse a través de los valores que han registrado al menos dos indicadores: la conflictividad laboral y la negociación colectiva.

Los primeros años de la década estarán marcados por una intensificación de la conflictividad, un marcado carácter defensivo y la unificación del movimiento obrero en varias huelgas generales frente a las medidas de ajuste del gobierno de De la Rúa. Como se desprende del Gráfico 2, la lucha de los asalariados en los años 2002-2003 alcanza niveles históricos sumamente bajos. Este descenso es producto del contexto desfavorable del mercado de trabajo y de la tregua practicada por distintas fracciones sindicales a partir de los procesos de apertura de los gobiernos de Duhalde (2002-2003) y luego de Kirchner. En cambio, a partir de 2004, se experimentó un crecimiento de la conflictividad laboral, alcanzando su punto más alto hacia 2005 (MTSS, 2007; Etchemendy y Collier, 2007).

Esta mayor conflictividad laboral registrada a partir de la recomposición política y económica es expresión en parte de un creciente pase a la ofensiva de la fuerza de trabajo en su lucha corporativa. Si durante la década inmediatamente anterior y en los años 2001 y 2002, fueron mayoritarios, en la perspectiva obrera, los conflictos defensivos, enfrentando particularmente los intentos expropiatorios del capital (salarios adeudados, despidos, reducciones salariales, por ejemplo), en la etapa abierta posteriormente, lo dominante fueron los conflictos ofensivos. Esto ha sido así en gran medida debido a los reclamos por incrementos salariales, que han superado los niveles de inflación experimentados durante el período. En 2004, el 62,6% de los conflictos se dio por cuestiones salariales, mientras que en 2005, estos llegaron a ser el 76,3% (Etchemendy y Collier, 2007). Así también, se han registrado numerosos y prolongados conflictos por mejoras en las condiciones de trabajo y de contratación⁶. Este nuevo contexto estará también enmarcado por la inexistencia de huelgas generales que articulen al conjunto del movimiento obrero contra el Gobierno nacional.

De igual forma que en los 90, la conflictividad laboral ha estado dominada por la conflictividad registrada en el sector público de la

su inserción laboral. Así, los movimientos de trabajadores desocupados y de fábricas recuperadas crecerán por fuera de las estructuras sindicales dominantes y en muchas ocasiones sin relación alguna con centrales o corrientes sindicales.

6 La lucha contra la precarización laboral por parte los trabajadores y los cambios en la política laboral, en un contexto de crecimiento industrial, lograron –contrastando con las tendencias de la etapa previa– comenzar a disminuir el trabajo no registrado.

economía. Por ejemplo, en 2006, del total de conflictos registrados, el 59% se produjo en el sector público, mientras que el resto, el 41%, se dio en el ámbito privado (MTSS, 2007). En la conflictividad de este sector se ha destacado el dinamismo expresado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), enrolada en la alternativa Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), y, en menor medida, por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), ligada a la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT).

Los sindicatos han sido quienes han conducido mayoritariamente los conflictos laborales. Empero, una serie de conflictos que han concitado la atención de amplias capas de la población y la intervención del Estado nacional –como los diversos conflictos suscitados en los subterráneos de Buenos Aires– han estado conducidos por cuerpos de delegados, comisiones internas o seccionales opositoras a las condiciones nacionales de los sindicatos.

En el caso de los subterráneos, el cuerpo de delegados ha sido la instancia que ha conducido a la fuerza social de los trabajadores en los distintos conflictos, a pesar de la resistencia implementada por el sindicato que los representaba formalmente –la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En los últimos años, los trabajadores del subterráneo –conducidos por su cuerpo de delegados– han obtenido mejoras en sus salarios, la reducción de la jornada de trabajo y la reversión de la política de subcontratación, entre otras cuestiones, y se han transformado en un verdadero poder alternativo dentro de la empresa.

Al lograr revertir una porción significativa de los efectos negativos instalados en los subterráneos a partir de la privatización del servicio en los 90 –extensión de la jornada de trabajo y subcontratación, por ejemplo–, estos trabajadores se han transformado en una ejemplificación de la posibilidad de reversión de las consecuencias del neoliberalismo en el ámbito laboral.

Estas experiencias organizativas han despertado fuertes expectativas en determinadas identidades, quienes han visto en ellas espacios a partir de los cuales generar una renovación de las conducciones sindicales.

Desde el punto de vista cuantitativo, la incidencia de los conflictos conducidos por estas instancias ha sido marcadamente minoritaria. Así, para el año 2006, el 83% de los conflictos laborales registrados fue impulsado por un sindicato y el resto se reparte por igual entre el frente gremial y las otras organizaciones, que incluyen a los cuerpos de delegados y las comisiones internas (MTSS, 2007). No obstante, estos conflictos, junto a la permanencia de la CTA y el desarrollo de nuevas organizaciones, marcan una tendencia hacia una mayor pluralidad política y organizativa en la vida sindical.

Con respecto a las formas de lucha instrumentadas en el desarrollo de los conflictos, a diferencia de lo sucedido durante la década anterior, cuando se extendió el uso de las declaraciones de alertas y las movilizaciones en las calles, el paro ha vuelto a ocupar un lugar relevante en este período. Esta forma de lucha tuvo su pico en 2005, alcanzando niveles que duplican el promedio de la década de los 90. El paro, en varias ocasiones, ha sido implementado en combinación con cortes, bloqueos u ocupaciones de establecimientos.

Esta revitalización de los trabajadores –al menos cuantitativamente– puede también observarse por medio del aumento de las negociaciones colectivas desde 2003, pero especialmente a partir de 2005, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La negociación colectiva ha sido impulsada por el Estado nacional con el objetivo de institucionalizar los diferendos entre el capital y el trabajo, regulando las demandas salariales de los trabajadores. Las pautas salariales sugeridas por el Gobierno han sido generalmente acompañadas –no exentas de negociaciones– por el movimiento obrero, particularmente por la Confederación General del Trabajo (CGT), muy próxima a los gobiernos de Néstor Kirchner, primero, y de Cristina Fernández, después.

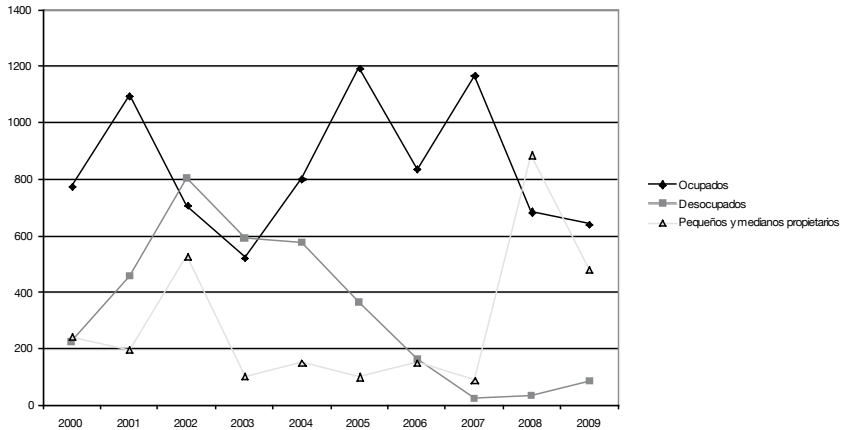
Sin embargo, este crecimiento de la negociación colectiva no ha anulado la conflictividad laboral. De hecho, muchas de las negociaciones colectivas homologadas por el Ministerio de Trabajo han sido precedidas o mediadas por conflictos.

Entre 2004 y 2008 se han firmado casi 4000 convenios colectivos, si se cuenta entre ellos a los acuerdos puntuales. Durante estos años, han crecido significativamente los acuerdos y convenios por actividad, que prácticamente habían desaparecido en la década de los 90. Sin embargo, siguen siendo dominantes los convenios y acuerdos por empresa. En promedio, entre 2004 y 2008, el 66% de las negociaciones colectivas homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación correspondió al ámbito de empresa, mientras que el 34%, al de actividad.

En las negociaciones colectivas también se puede observar la puja distributiva entre el capital y el trabajo en un contexto de recuperación económica, no exento de presión inflacionaria. En este sentido, cabe destacar que, entre 2004 y 2008, el 86% de las negociaciones colectivas homologadas contemplan cláusulas de incrementos salariales.

En suma, en un nuevo contexto económico y político –más favorable en comparación con la década anterior– los trabajadores ocupados de la Argentina han desarrollado una creciente movilización y recuperado el dinamismo demostrado en épocas previas.

Gráfico 2
Evolución de las acciones de lucha de las tres principales personificaciones sociales del período, Argentina 2000-2009



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PIMSA.

EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIONES DE LAS LUCHAS Y ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES DESOCUPADOS

Durante la década, en paralelo al cambio del contexto social y político, los movimientos y organizaciones de desocupados, conocidos popularmente como “piqueteros”, experimentarán transformaciones y cambios profundos, atravesando momentos de movilización, rearticulación de fuerzas y reacomodamiento ante el escenario planteado por los nuevos actores de la esfera política.

Al inicio de la década, las distintas organizaciones se encontraban fortalecidas. Larga y penosamente se habían constituido desde mediados de los 90, a partir de la movilización en las calles y en su cotidiano trabajo barrial, logrando personificar a sectores pauperizados de la clase trabajadora en procura de la mejora de sus condiciones de vida. Enfrentaban, de diversos modos, los efectos del proceso expropiatorio sobre la fuerza de trabajo resultantes de la reestructuración capitalista que signó dicha década. Su meta originaria fue el reclamo por “trabajo genuino” pero, ante la falta de respuestas del Estado, esta demanda comenzó a ser desplazada por los planes laborales y sociales que el Gobierno estaba más dispuesto a otorgar (Svampa y Pereyra, 2003). Inscriptas en una lógica de movilización y protesta propia, que encontraba en el corte de vías de tránsito su herramienta emblemática, nutrieron sus filas de la existencia creciente de trabajadores des-

ocupados sin posibilidad de verse representados sindicalmente y del debilitamiento de las redes de los partidos políticos tradicionales en los barrios populares. En este contexto, las organizaciones piqueteras se transformaron en un verdadero lugar de contención y diálogo, de intercambios y resistencia, de elaboración de proyectos comunitarios y de puesta en práctica de estrategias de acción contra el hambre, la desocupación y la exclusión.

La evolución de su accionar en las calles –a lo largo de la década que aborda el presente trabajo– varía en paralelo a los cambios en la situación política, económica y social.

En los primeros años, la dinámica de movilización de las organizaciones piqueteras crece constante y significativamente hasta alcanzar su punto máximo de convocatoria en 2002. Este momento de gran movilización y capacidad de articular con otros sectores sociales en pos de sus reivindicaciones particulares y de metas políticas más trascendentes es también el período en el cual comienzan a intensificarse las contradicciones al interior del movimiento. Hasta la crisis de 2001, aun en la marcada heterogeneidad política e ideológica que expresaban las organizaciones, existían tendencias convergentes en la dinámica de confrontación que hacían posible hablar del “movimiento piquetero”⁷. A partir de la crisis de finales de 2001 y de la renuncia del presidente De la Rúa se acentuarán las tendencias divergentes. Muy tempranamente se intensificaron los distanciamientos, emergiendo divergencias acerca del carácter de la crisis política y las estrategias a seguir. A medida que fue cambiando la situación económica y política, las contradicciones al interior del movimiento se acrecentaron.

Hacia 2003 el movimiento piquetero se encontraba fuertemente establecido en la lógica de movilización y conflicto, aunque su capacidad de convocatoria comenzaba a declinar. Su principal forma de lucha –el corte o piquete en las vías de tránsito– comenzaba a impacientarse y desarrollar malestar en sectores de capas medias urbanas que otrora prestaran un limitado apoyo y cierta tolerancia. Los piqueteros debieron soportar en aquellos días la más dura oposición mediática a sus prácticas de lucha. Sin embargo, aun sin alcanzar la intensidad de 2002, las acciones de lucha de estas organizaciones mantuvieron un fuerte nivel. Recién a partir de 2005 el cambio de etapa impactará

7 La fragmentación política y social de los sectores populares es una característica central de la Argentina reciente que se expresará de modo particularmente intenso en los movimientos y organizaciones desarrolladas en el campo de los trabajadores expropiados de su inserción salarial. Tanto entre los desocupados como entre los trabajadores de fábricas recuperadas cada destacamento político tenderá a la construcción de un movimiento propio retroalimentando inercialmente la fragmentación preexistente.

cuantitativamente en sus acciones de protesta, iniciándose un marcado y sostenido descenso hasta alcanzar prácticamente un estado de desmovilización en 2007.

La actitud del presidente Néstor Kirchner frente a la cuestión piquetera se tornó evidente desde el comienzo de su mandato. Nunca se mostró dispuesto a pagar el costo político de la represión. Si durante la década anterior las tácticas implementadas por los gobiernos hacia los movimientos fueron de deslegitimación y represión, desde los inicios del gobierno de Néstor Kirchner la perspectiva se transformó. El nuevo gobierno abrió el camino del diálogo y la negociación con las organizaciones. Su estrategia apuntaba a abrir canales de recursos a las organizaciones, en especial aquellas más afines, y apostar a que el problema de la desocupación se resolviera con crecimiento económico y creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se inicia una política por parte del Gobierno que tiende a limitar el uso de la represión ante acciones de protesta –poniendo especial atención a la legitimidad social del uso de la fuerza– y a “dejar actuar” al sistema judicial *a posteriori*.

La búsqueda del Gobierno nacional se centraba en poner en marcha rápidamente proyectos de trabajo con las organizaciones que tornaran sin sentido la lógica del corte de calles. Su política de puertas abiertas a los reclamos y de diversificación de la política social pronto profundizarían, aún más, las contradicciones al interior del movimiento. Desde la perspectiva de las organizaciones más críticas –en su mayoría vinculadas a partidos y organizaciones de izquierda– los primeros pasos dados por el presidente fueron catalogados de insuficientes. Las señales de ruptura con algunas de las políticas de los 90 que pronto se dieron desde el ejecutivo se comprendieron como insertas dentro de una lógica de doble discurso. Para estas organizaciones, Kirchner venía a continuar el trabajo de Menem y De la Rúa. Estos sectores buscaron y buscan en la actualidad continuar con la lógica de movilización y protesta que durante los 90 les arrojó resultados satisfactorios, colocándolos como representantes legítimos en la lucha social de un sector de los excluidos⁸.

Pero el ciclo económico de recuperación que ya se había iniciado hacia fines de 2002 –y que mostrará un crecimiento constante durante los años siguientes– incidirá en el movimiento piquetero de una forma original: socavando las bases de su reclutamiento, el ejército de des-

8 Cabe destacar que este éxito en la representación en la lucha social nunca logra validarse políticamente en elecciones, por el contrario, los intentos electorales que realizan algunas organizaciones –afines u opositoras al gobierno– fracasaron estrepitosamente.

ocupados. La capacidad de convocatoria de las organizaciones ya no conocería los niveles del pasado inmediato.

De esta forma, otras organizaciones tomaron conocimiento de la necesidad de definir una relación nueva con los actores políticos. Quienes se sumaron al diálogo y redefinieron pronto su postura frente al nuevo gobierno comenzaron a ser vistos como traidores por sus anteriores compañeros de lucha. Las contradicciones al interior del movimiento piquetero se irían profundizando a medida que el kirchnerismo buscaba fortalecerse y resolvía asincrónicamente muchas de las tensiones que lo atravesaban. Así, sectores del movimiento se integrarán al Gobierno de muy diversas formas como base de apoyo social y, no pocos, en puestos de gestión gubernamental. Un amplio espectro de organizaciones, en particular aquellas provenientes de tradiciones políticas vinculadas al nacionalismo popular, desarrollarán acciones en apoyo a políticas planteadas desde el Gobierno, trasladándolas a las calles y actuando como un factor de presión hacia empresas, medios de comunicación y políticos de la oposición⁹.

Muchas situaciones políticas durante la década podrían ejemplificar las distancias abiertas entre las organizaciones y las políticas que cada una llevó adelante. Pero quizás el denominado conflicto con el campo ejemplifique mejor que ninguna otra las contradicciones abiertas entre las organizaciones piqueteras. Mientras algunas se movilizaron en apoyo a la postura del Gobierno y se transformaron en su sostén en las calles, otras se encolumnaron con las entidades del campo estableciendo una alianza con los propietarios y las corporaciones rurales, bajo el argumento de defender los intereses de los pequeños productores rurales. Las demás organizaciones, sin mayor repercu-

9 Los resultados de la apertura del Gobierno hacia los movimientos fueron conceptualizados por distintos analistas como “institucionalización”, “cooptación” y “estatalización” del movimiento piquetero. Desde nuestra perspectiva, si bien la disminución de la recurrencia a la acción directa y la apertura de diversos canales a las instancias de gobierno podría ser conceptualizados como institucionalización, no debe olvidarse el carácter parcial de dicho proceso, dado que no se constituyó ningún diseño institucional específico que reconozca formalmente a las organizaciones otorgándoles derechos y obligaciones. Menos precisos, nos parecen los señalamientos de cooptación y estatalización. Difícil es hablar de cooptación –al menos de forma generalizada– cuando muchos de los grupos que se incorporan al gobierno guardan márgenes de autonomía importantes que los llevan en ocasiones a dimitir de los puestos de gobierno por diferencias con la política gubernamental. Por otra parte, esta mirada despectiva soslaya las afinidades electivas que existen entre las tradiciones políticas del Gobierno y la mayoría de dichas organizaciones, así como la existencia de coincidencias programáticas. Más desafortunada aun es la categorización de estatalización, dado que a algunos de los considerandos anteriores le suma el error de no distinguir entre gobierno y Estado, distinción central para entender el período.

sión, buscaron revertir la polarización de la confrontación apostando infructuosamente a abrir una tercera alternativa¹⁰.

Más recientemente, a fines de 2009, la estructura de oportunidad abierta por el conflicto entre el Gobierno y la oposición social y política, colaborará en una moderada revitalización de la movilización de distintos grupos piqueteros. Aprovechando la difusión proporcionada por grupos mediáticos enfrentados con el Gobierno –algunos de los cuales en su momento fueron artífices de la estigmatización de los piqueteros– retomarán la protesta en las calles en procura de conseguir ser incorporados en programas de trabajo del Gobierno nacional, denunciando su discriminación a expensas de la estructura territorial del partido en el gobierno del Estado.

En suma, el movimiento irá perdiendo paulatinamente el protagonismo que otrora supo tener en la conflictividad. La pérdida de capacidad de movilización se dará en paralelo a la apertura de nuevos canales institucionales. Esta nueva situación otorgará en muchos casos un peso creciente a los emprendimientos en los barrios en la dinámica de la organización a expensas o desligados de la lucha en la ruta, desdibujándose algunas de las características movimientistas de las organizaciones. Finalmente, la década muestra los rumbos divergentes que tomaron las organizaciones piqueteras en relación con el Gobierno y la interpretación de la situación política.

FÁBRICAS RECUPERADAS POR SUS TRABAJADORES

La recuperación de empresas es la conceptualización con la cual se ha denominado a un conjunto heterogéneo de procesos, en los cuales empresas en crisis son puestas a producir por sus trabajadores. Durante la década, miles de asalariados en todo el territorio de Argentina se han hecho cargo de empresas en crisis.

Inicialmente, la difusión de las recuperaciones expresó una de las respuestas esbozadas por los trabajadores ante la posibilidad de la pérdida del trabajo, en el contexto inédito de crisis económica, política y social que mostraron los años 2001 y 2002. Este contexto de crisis permitió la construcción de una estructura de oportunidades para la conformación de una serie de articulaciones y alianzas sociales que viabilizaron las recuperaciones. El trabajo como valor social, en un país con tasas inéditas de desempleo, otorgó legitimidad para que un conjunto de trabajadores lograra preservar, por su propia cuenta, su espacio en el mercado laboral (Rebón, 2007).

10 La consigna de esta tercera tendencia será: “ni con las patronales del campo ni con el Gobierno K”.

Al desobedecer al desempleo avanzando sobre la dirección de la producción, los trabajadores de estas empresas recuperadas produjeron cambios e innovaciones en los espacios físicos y sociales que entraron en su posesión. Este avance tuvo en lo inmediato una implicancia sustantiva: conformó un proceso de igualación y democratización creciente frente a la empresa fallida. Diversos indicadores y datos observables daban cuenta de estas transformaciones: la igualación en las formas de apropiación y retiro de la cuenta de utilidades, los criterios y las formas democráticas en las tomas de decisiones, la función de la dirección personificada por el colectivo laboral y las fuertes articulaciones no-mercantiles con el entorno social de la empresa.

Pese a muchos pronósticos pesimistas, aun transformado el contexto de su emergencia, el proceso ha podido desarrollarse sostenidamente, tanto en su forma ampliada –la extensión a nuevas unidades productivas– como en su forma simple –la capacidad de sostenimiento productivo de las empresas recuperadas sin alterar su forma social inicial. Actualmente, estimamos en todo el país la existencia de alrededor de 270 empresas recuperadas. Esta capacidad reproductiva posee dos elementos sustantivos. En primer lugar, el cierre empresarial como inherente a la expansión de la formación social de carácter capitalista y sus efectos en términos de desempleo. En segundo lugar, la difusión de la recuperación como alternativa viable, realizable, para enfrentar dichos efectos, es decir, la incorporación de dicha alternativa a la “caja de herramientas” de los trabajadores (Rebón, 2007; Rebón y Salgado, 2009). Así, en tanto la desaparición de empresas es un elemento estructural del capitalismo, una vez que esta alternativa se instala socialmente –aun cuando se revirtiera parte de los factores que conformaron su génesis– su difusión puede continuar mientras permanezcan niveles significativos de desempleo y las condiciones políticas no se vuelvan abiertamente hostiles a la experiencia (Rebón y Salgado, 2009).

Sin embargo, más allá de la capacidad de ampliación de las recuperaciones y de la capacidad del sostenimiento productivo evidenciado por estas experiencias, muchas de las innovaciones sociales no han podido consolidarse. Con el desarrollo de la vida productiva de estas empresas, la lucha por poder competir en un mercado en condiciones de dominio capitalista limitan las capacidades innovadoras del proceso. Más allá de sus limitaciones y su magnitud, estas experiencias han implicado una mayor influencia directa de los trabajadores sobre la esfera de la “economía” y, por lo tanto, grados crecientes de empoderamiento social sobre la propiedad privada, el uso y el control de recursos y actividades económicas (Rebón y Salgado, 2009). En este sentido, la personificación central del proceso de recuperación

de empresas expresa *fuerza de trabajo* que avanza en una embrionaria relación de posesión con los medios de producción. Representa, frente al punto de origen, un empoderamiento social al conformar una nueva relación con sus medios de producción, a partir de una nueva articulación, al interior y al exterior de la unidad productiva con otras personificaciones sociales.

LA LUCHA SOCIO-AMBIENTAL

La expansión capitalista en diferentes actividades extractivas e industriales con fuerte impacto ambiental fue resistida por la conformación de nuevos movimientos sociales. Las distintas resistencias al avance de la minería a cielo abierto y el masivo movimiento emergente en la ciudad de Gualaguaychú contra la instalación de papeleras en Fray Bentos (Uruguay) configuran sus ejemplificaciones emblemáticas.

Diferentes cambios institucionales acaecidos durante los 90 favorecieron la expansión de procesos de explotación minera a cielo abierto por parte de empresas transnacionales. El desarrollo de estos enclaves extractivos ha tenido un fuerte impulso durante la década en estudio contando con medidas favorables por parte del Gobierno nacional en alianza con los gobiernos locales. Dicha expansión implicó un verdadero proceso expropiatorio de los recursos naturales –por las condiciones leoninas a favor de las empresas– y provocó graves costos ambientales –contaminación, uso irracional de otros recursos naturales, desertificación– que alteraron otras actividades económicas como han sido las agropecuarias y turísticas.

El carácter depredatorio de estos enclaves ha sido enfrentado –en diferentes territorios– por diversas alianzas sociales que lograron éxitos parciales como la no apertura de minas –en la ciudad de Esquel en el año 2003–, leyes limitativas de la minería –en las provincias de Chubut en 2003, Río Negro en 2005, La Rioja, Tucumán, Mendoza y La Pampa en 2007, Córdoba y San Luis en 2008–, y la conformación de una red de territorios en resistencia –la Unión de Asambleas Ciudadanas– que se articularon asambleariamente y coordinaron acciones de diverso tipo.

La lucha defensiva de estos movimientos y organizaciones no ha logrado detener la expansión capitalista en este campo, aunque sí le ha puesto ciertos límites, obligando a las empresas y gobiernos a nuevas estrategias para resolver estos obstáculos.

Las resistencias contra la minería han tenido mayor éxito en aquellas provincias con mayor heterogeneidad social, económica y cultural. Por el contrario, en aquellas con matrices más jerárquicas, escasa diversificación económica y cultural y altos índices de pobreza –como las del Noroeste del país– la capacidad de resistir el poder de la

minería en conjunción con el poder político local ha sido más desfavorable. En estos últimos territorios, no se lograron leyes que limiten dichos desarrollos o, cuando se lograron, fueron luego revertidas como en el caso de La Rioja (Svampa y Antonelli, 2009).

Otro conflicto que instaló la dimensión socio-ambiental fue el protagonizado por la asamblea ciudadana ambiental de Gualaguaychú. Esta se constituyó hacia 2005, luego de una gran movilización contra la instalación de dos fábricas papeleras en la vecina localidad de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay.

El conflicto logró instalar socialmente a nivel nacional el problema de la contaminación que podían producir dichas plantas, con base en una intensa movilización y recurrencia a la acción directa –entre ellas el corte casi permanente del puente internacional que une Fray Bentos con Gualaguaychú. La demanda ambiental se cruzó con la cuestión nacional y local. Precisamente, el movimiento se desarrolló en el lado de la frontera que no iba a recibir los beneficios de las plantas –trabajo, dinamismo económico– y sí sus costos –contaminación.

El movimiento provocó que el Gobierno nacional se posicionara sobre el tema recurriendo a tribunales internacionales y que procurara revertir y/o modificar la instalación y funcionamiento de las plantas. Como resultado del proceso, se logró evitar la instalación de una de las mismas.

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL DE CARÁCTER REGRESIVO

Los procesos de movilización social de carácter regresivo han sido una de las novedades del período. El retroceso político institucional de sectores de las clases dominantes –en particular su desplazamiento parcial del Gobierno nacional a partir de 2003– condujo a la emergencia de procesos sociopolíticos basados en la movilización de masas en defensa de sus intereses. La pérdida de poder institucional fue contrarrestada en diferentes momentos con la activación y apelación a acciones que excedían los canales institucionales. En particular por su relevancia, masividad e impacto político deben ser destacados dos procesos que tienden a la reestructuración regresiva del poder social¹¹.

El primero lo encontramos en 2004, en pleno ascenso del gobierno de Néstor Kirchner, con el movimiento liderado por Juan Carlos Blumberg en pos de un endurecimiento de las normas penales como

11 Entendemos que un proceso tiene un carácter social regresivo cuando procura ampliar o conservar privilegios sociales de determinados grupos en detrimento de sectores menos aventajados (Rebón, 2009).

forma de lucha contra la “inseguridad ciudadana”¹². Padre de una víctima de un secuestro que culmina en asesinato, Blumberg, con la ayuda de diversos medios de comunicación y del poder político y económico, logra convertirse socialmente en la personificación del ciudadano-víctima de la delincuencia. Consigue movilizar a un importante conjunto de la población –en particular de los estratos sociales más acomodados– a través de marchas y petitorios. En los hechos, protagoniza la principal acción de masas durante el gobierno de Kirchner, su primera movilización en la ciudad de Buenos Aires es acompañada por alrededor de 150.000 personas. El movimiento logra promover la sanción de leyes que implicaron un significativo endurecimiento del sistema penal. Por un lado, se agravaron las penas de ciertos delitos penales y, por el otro, se dificultaron las condiciones para la obtención del beneficio de la libertad condicional. La mayoría de los proyectos de ley definitivamente sancionados fueron presentados con anterioridad al inicio de las movilizaciones. La génesis de estos proyectos forma parte de una agenda previa sobre la temática de la seguridad realizada por sectores mediáticos y políticos, que encuentra en el movimiento encabezado por Blumberg la fuerza social para su avance (Calzado y Van Den Dooren, 2009)¹³. Si bien el proceso tiene una dimensión política, nunca logra trascender la temática puntual de la “inseguridad”, ni logra antagonizar con un gobierno nacional en ascenso que se comporta de forma ambigua frente al mismo.

El segundo proceso es mucho más relevante tanto por su masividad como por sus implicancias políticas. Nos referimos al denominado “conflicto del campo”. Dicho conflicto logra politizar, movilizar y polarizar a la sociedad como ningún otro en la década¹⁴.

12 Durante la década, la temática vinculada a la denominada inseguridad urbana dio lugar a formas de lucha con disímiles caracteres sociales. Se desarrollaron diferentes acciones, desde las movilizaciones de vecinos reclamando justicia hasta los violentos ataques a casas de presuntos victimarios en barrios populares. En el campo de los trabajadores organizados, en especial del transporte, se realizaron huelgas, cortes y movilizaciones para protestar frente a robos, asesinatos y vejaciones de diverso tipo. Sin embargo, el proceso personificado por Blumberg es el único que logra producir impacto nacional durante un período significativo.

13 Unos años más tarde Blumberg dejó de ser un referente masivo luego de haber sido denunciado por usurpar el título de ingeniero y de fracasar estrepitosamente en su presentación como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

14 Precisamente el otro gran momento de politización y movilización de la población se da a fines de 2001 y principios de 2002 al compás del momento más intenso de la crisis. No obstante, a diferencia de este conflicto, no se produce una polarización y una embrionaria dualidad de poder. Al contrario, los procesos de autonomización y protesta que canalizan en aquel entonces el malestar social nunca logran coordinarse en una direccionalidad estratégica. Pese a la voluntad de muchos destacamentos, la

En marzo de 2008, meses después de haber asumido, la presidenta Cristina Fernández decide elevar la alícuota de retenciones a la exportación de diversos granos, en especial a la soja, y vincular su variación a la del precio internacional de los productos. La medida se da en un contexto de elevada rentabilidad de su venta al exterior. Más aún, dicha medida altera la rentabilidad futura pero sin disminuir la rentabilidad con respecto al año previo. Sin embargo, y para sorpresa del Gobierno, que toma la medida sin imaginar sus consecuencias políticas, las principales entidades corporativas de los propietarios y patrones del agro se unifican en reclamo de la derogación de la medida. La Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria deciden no comercializar granos ni carne estableciendo verdaderos controles de las rutas –“cortes”– para garantizar la efectivización de la medida¹⁵. Se inicia así un intenso conflicto en el cual los propietarios agrícolas, a semejanza de diversos movimientos sociales de los sectores populares, van a centrar su movilización en la acción directa –cortes y escraches, por ejemplo– y en la práctica asamblearia. El conflicto unificará a los distintos estratos de la propiedad rural tras un proyecto hegemonizado por sus sectores más concentrados¹⁶. Si bien se trata de población perteneciente a los deciles superiores del país en lo referente a la magnitud de los ingresos percibidos, existen entre los integrantes de esta fuerza significativas diferencias por las magnitudes de sus propiedades y función productiva, así como por sus historias sociales y políticas. Los pequeños productores primarán en la composición social movilizada a la vera de las rutas, aunque nunca logran hegemonizar el conflicto ni escindir su propio interés del de los sectores más concentrados. El Gobierno, pese a sus tardíos intentos, en ningún momento podrá quebrar la unidad alcanzada por esta alianza social.

autonomización no logra polarizar el ordenamiento social configurando la posibilidad de la dualidad de poder.

15 Estas entidades conforman una “Mesa de enlace” que se atribuirá la representación del “campo”. No obstante, otros actores de la vida rural aprovecharán la oportunidad para expresar públicamente sus contradicciones con los intereses allí representados. En particular, nos referimos a los campesinos y pueblos originarios vinculados a la producción familiar que durante toda la década resistieron la expansión capitalista en las áreas rurales y los procesos expropiatorios que la misma implicó.

16 Estratégicamente, estos sectores procuraban incrementar sus beneficios definiendo un patrón de acumulación que subordinase a los asalariados y a la industria a los propósitos de su expansión (Basualdo y Arceo, 2009).

El conflicto es promovido desde el primer día por los principales oligopolios mediáticos y va a lograr condensar el malestar social acumulado, principalmente, por las medidas reformistas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Todos aquellos sectores de las clases dominantes y sus personificaciones políticas y corporativas que sintieron afectados sus intereses –más políticos que económicos– aprovecharán la oportunidad para atacar y debilitar al Gobierno. Tendrán su base de apoyo en la cultura de la propiedad privada –contra la confiscación del Estado– y en la conciencia anti-peronista de las capas medias –sector histórico del anti-peronismo– y contarán con la complicidad de algunos destacamentos de izquierda que apostaban al debilitamiento del Gobierno como paso previo a un proceso de radicalización política. También se apoyarán en el prematuro desgaste de un gobierno que no lograba frenar una creciente inflación que minaba la recuperación salarial lograda en los años previos por los trabajadores y se exponía constantemente al ridículo público al falsear el índice de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), minando así la credibilidad de su palabra. El conflicto del “campo” se fue convirtiendo en una disputa por la direccionalidad política del país. La lucha contra las retenciones involucró y alineó al conjunto de la población, conformando una dualidad de poder que paralizó al país y desabasteció a los principales centros urbanos. El conflicto expresó el más intenso proceso de movilización posterior a 2001. Cada fuerza cortó transversalmente la pirámide social con diferentes composiciones. Mientras las movilizaciones del “campo” tuvieron una composición social en la cual tuvieron un fuerte peso, además de los sectores vinculados a los propietarios rurales, los estratos altos y medios altos de los centros urbanos, el Gobierno basó su movilización en los trabajadores organizados gremialmente y en los pobres urbanos, junto a grupos de intelectuales progresistas¹⁷. Pero la magnitud de la fuerza de masas fue diferente. Pese a la masividad de sus movilizaciones, la fuerza liderada por el Gobierno no logra contar con una adhesión espontánea de las masas, el entramado organizativo del Partido Jus-

17 Cada fuerza al cortar transversalmente la estructura social contará con apoyos en los sectores que menos peso relativo tiene. Por ejemplo, el conflicto produce una escisión en la Confederación General del Trabajo que apoyará al campo. También algunos movimientos piqueteros, buscando la “rebelión de los chacarareros” y “la reforma agraria”, se sumarán a la fuerza social regresiva. Por el contrario, el gobierno encontrará más dificultades en alinear a los sectores capitalistas beneficiados con su política económica, la rentabilidad extraordinaria obtenida durante el período precedente no será motivo suficiente para apoyar sin ambigüedades a un gobierno que viven como políticamente ajeno y que tiene más margen de autonomía de los lobby empresariales de los que estos están dispuestos a aceptar.

ticialista, sindicatos y movimientos sociales afines pierde en las calles y en las rutas frente a la fuerza del “campo”. La falta histórica de una propia política organizativa de masas y la carencia de coherencia política en su determinación reformista, le restan claridad y consistencia en los sectores populares. La derrota en las calles precede y se articula con la derrota institucional: la medida no logra contar con la adhesión del Congreso Nacional, votando el propio vicepresidente en su contra. Se inicia así un nuevo período de crisis política, con un gobierno debilitado por las fuerzas políticas y sociales regresivas. Un año después, el Gobierno ve disminuido marcadamente su caudal electoral en las elecciones legislativas, perdiendo la mayoría parlamentaria. No obstante, la pérdida de la “batalla del campo” no puede ser confundida con una derrota estratégica de la fuerza que ocupa el gobierno del Estado. Al contrario, el Gobierno lanzará con posterioridad varias de sus medidas más progresivas, entre ellas la estatización de la jubilación privada, una nueva ley de medios de comunicación de carácter anti-monopólico y la asignación universal por hijo.

LA DÉCADA EN DISPUTA

El período que hemos descrito en este trabajo plantea evoluciones novedosas en las luchas sociales de los sectores populares. Dichas evoluciones expresan, pero también configuran, las transformaciones sociales y políticas ocurridas en la Argentina reciente.

La década se inicia con la crisis del modelo de acumulación resultante de la reestructuración regresiva de la sociedad argentina. El agotamiento de dicho modelo se expresó en una profunda crisis social. La protesta y disconformidad social generalizada no fue ajena al establecimiento de límites políticos a dicho modelo. La caída del gobierno de De la Rúa, enmarcada en las jornadas de intensa movilización y autonomización de diciembre de 2001, es clara expresión de ello¹⁸. La crisis política, observada desde el espacio público de las calles, rutas y plazas representó un intenso proceso de movilización, politización y autonomización que expresó el malestar de heterogéneos sectores sociales. A pesar de diversos intentos, dicha movilización no logró ser articulada en una direccionalidad estratégica por sus propios protagonistas. La salida a la crisis capitalista asumió un carácter capitalista. La salida a la crisis política fue liderada por sectores de la “clase política”. Sin embargo, dichas afirmaciones no pueden dejarnos de señalar la emergencia de puntos de inflexión. Se constituye, y lentamente se

18 No obstante, esto no debe dejar de soslayar la participación decisiva que han tenido diferentes personificaciones políticas de las clases dominantes en la caída de dicho gobierno (Rebón, 2007)

consolida, una nueva alianza social en el gobierno del Estado que establece significativos puntos de ruptura en el campo económico, político y social con el período anterior. Esta alianza reconstituye el orden político y social prestando particular atención al clima de movilización y de malestar previo. En los hechos va a retomar selectivamente parte de su agenda y tener en cuenta en su accionar el horizonte de potencial “estallido” que obstaculizaba ciertas posibilidades de acción e impulsaba otras. Estos cambios, aun sin lograr revertir los niveles de desigualdad consolidados en el período previo, lograron mejorar las condiciones de vida y trabajo de amplios sectores sociales. Sin permitir hablar de la existencia de una Argentina “pos-neoliberal” plantearon algunas reversiones y transformaciones de los cambios regresivos de épocas previas. Sin que se “fueran todos”, también produjeron el desplazamiento de parte de las personificaciones políticas e institucionales más regresivas del período anterior. El carácter parcial de los cambios nos plantea diversos interrogantes. ¿Expresa el *gatopardismo* de un gobierno que obtura la posibilidad de una transformación más profunda? ¿Representa su falta de voluntad de transformación? ¿Es simplemente la resultante de su carencia de la suficiente fuerza social para llevarlos a cabo? ¿Es resultante de la dinámica de confrontación que en parte trasciende la voluntad previa de sus protagonistas? Si esto último es así, ¿en qué direccionalidad opera en cada momento? Futuras investigaciones del período podrán desentrañar con mayor rigor el peso relativo en la realidad de las tesis presentes en los interrogantes planteados.

Este nuevo contexto político y social, como hemos mostrado, produjo cambios significativos en las luchas sociales y en los movimientos y organizaciones que personificaban a las clases populares. Al desarrollo de las tensiones que hemos planteado en la direccionalidad del Gobierno, se producen realineamientos al interior del movimiento popular, algunos establecen alianzas y treguas de diferentes características con el mismo. En el otro extremo, otros continúan como si nada hubiera pasado. Así también, cambia el carácter de clase de las confrontaciones sociales analizadas. De las luchas por detener los procesos expropiatorios ejecutados en la perspectiva de diferentes identidades sociales dominantes en los primeros años, se pasa a una etapa en que asume nuevo impulso la lucha por la mejora en las condiciones de explotación en la perspectiva de la fuerza de trabajo. En paralelo a la recomposición política y a la asunción del Gobierno de parte de la agenda democrática, se produce un proceso de institucionalización y corporativización de la lucha social. No obstante, con nuevas características, la lucha social y sus emergentes organizativos siguen teniendo una rica e importante diversidad. Entre ellos podemos señalar

los movimientos contra la impunidad del pasado o del presente o la *sociogénesis* de movimientos que cuestionan –con diferente intensidad– el impacto ambiental del carácter productivista de la renovada expansión capitalista.

Por último, un fenómeno novedoso es el desarrollo de procesos de movilización social regresivos. La autonomización parcial del Gobierno con respecto a sectores de la clase dominante configura una situación original. Sectores sociales que sienten haber perdido poder institucional apelan a la vía extra institucional y a dinámicas características de movimientos sociales procurando la acumulación de fuerzas para la realización de sus intereses corporativos y políticos. La emergencia y consolidación de estos sectores, la posibilidad del desplazamiento de la fuerza en el gobierno y la posible reversión de algunos de los cambios progresivos alcanzados actualizan la pregunta sobre la relación entre los movimientos sociales y el Gobierno, entre lo social y lo político, entre la autonomía y la disputa de la direccionalidad política, entre la lucha democrática y la anticapitalista. Tensionada entre la necesidad de preservar la autonomía necesaria para la defensa de sus intereses de clase y la necesidad de intervenir en las confrontaciones políticas centrales del período –dado que no les son ajenas en sus resultantes–, se debate para los sectores populares la posibilidad de construir una estrategia que viabilice la profundización de la lucha democrática, paso necesario para cualquier estrategia de transformación radical del orden social. Debates y tensiones por cierto no ajenos, con sus particularidades e intensidades, a otros territorios de nuestra América Latina.

BIBLIOGRAFÍA

- Aronskind, Ricardo 2008 “Interés general o renta particular” en *Página 12* (Buenos Aires) Suplemento del vigésimoprimer aniversario, 26 de mayo.
- Basualdo, Eduardo y Arceo, Nicolás 2009 “Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles” en Arceo, Enrique; Basualdo, Eduardo y Arceo, Nicolás *La crisis Mundial y el conflicto del agro* (Buenos Aires: CCC/Página 12/UnQui).
- Calzado, Mercedes y Van Den Dooren, Sebastián 2009 “¿Leyes Blumberg? Reclamos de seguridad y reformas penales” en *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires: IIGG/ Ediciones de la Universidad Nacional del Litoral) N° 27. En prensa.
- Cotarelo, María Celia 2005 *Aproximación al análisis de los sujetos emergentes en la crisis de 2001-2002 en Argentina* (Buenos Aires: PIMSA) serie “Documentos y comunicaciones”.

- Etchemendy, Sebastián y Collier, Ruth 2007 “Golpeados pero de pie: resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina. 2003-2007” en *Politics & Society* (Thousand Oaks: Sage Publications) Vol. 35, N° 3.
- Giarracca, Norma y Teubal, Miguel 2007 “La rebelión de 2001: protestas, rupturas y recomposiciones” en Giarracca, Norma (comp.) *Tiempos de rebelión: “Que se vayan todos”. Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002* (Buenos Aires: Antropofagia/ GEMSAL).
- Gómez, Marcelo 2009 “La acción colectiva sindical y la recomposición de la respuesta política estatal en la Argentina. 2003-2007” en Neffa, Julio; De la Garza, Enrique y Muñiz Terra, Leticia (comps.) *El Mundo del trabajo en América Latina. Permanencia, Diversidad y Cambios* (Buenos Aires: CLACSO/ CEIL-PIETTE) Vol. II.
- Maneiro, María 2009 “La doble vía de la experiencia en los movimientos de trabajadores desocupados” en Lenguita, Paula y Montes Cato, Juan (comps.) *Resistencias Laborales: Experiencias de re-politización del trabajo en Argentina* (Buenos Aires: Aleph/Insumisos).
- Massetti, Astor 2009 *La década piquetera (1995-2005). Acción colectiva y protesta social de los movimientos territoriales urbanos* (Buenos Aires: Nueva Trilce).
- Pereyra, Sebastián; Pérez, Germán y Schuster, Federico 2008 *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001* (Buenos Aires: Ediciones al Margen).
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTSS) 2007 *Estadísticas de conflictos laborales*.
- Rebón, Julián 2007 *La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción* (Buenos Aires: Colectivo Ediciones/ Ediciones PICASO).
- Rebón, Julián 2009 “Acción directa y procesos emancipatorios” en *Proyecto. Conceptos Fundamentales de Nuestro Tiempo* (México: IIS-UNAM) inédito.
- Rebón, Julián y Salgado, Rodrigo 2009 “Empresas recuperadas y procesos emancipatorios” en Lenguita, Paula y Montes Cato, Juan (comps.) *Resistencias Laborales: Experiencias de re-politización del trabajo en Argentina* (Buenos Aires: Aleph/ Insumisos).
- Schuster, Federico et al. 2006 *Transformaciones de la protesta social en Argentina. 1989-2003* (Buenos Aires: IIGG-UBA).
- Svampa, Maristella 2005 *La sociedad excluyente* (Buenos Aires: Taurus).

- Svampa, Maristella 2008 “Argentina: Una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año IX, N° 24, octubre.
- Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta 2009 *Minería Transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteros* (Buenos Aires: Biblos).
- Teubal, Miguel 2008 “La culpa es de la soja” en *Página 12* (Buenos Aires) Suplemento del vigésimoprimer aniversario, 26 de mayo.

FERNANDO PAIRICÁN PADILLA*
ROLANDO ÁLVAREZ VALLEJOS**

LA NUEVA GUERRA DE ARAUCO

LA COORDINADORA ARAUCO-MALLECO Y LOS NUEVOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA MAPUCHE EN EL CHILE DE LA CONCERTACIÓN (1997-2009)

EL SISTEMA POLÍTICO CHILENO DE LOS ÚLTIMOS veinte años, conocido por su imagen moderada, consensual y democrática, no sólo significó la continuidad de una parte importante del legado de la dictadura neoliberal de Pinochet, sino también la exclusión social y política de importantes sectores del país. El triunfo de la derecha en la reciente elección presidencial es reflejo de una sociedad que, despolitización y aceptación pasiva del modelo económico mediante, se cansó de las promesas no cumplidas de la coalición de gobierno. En este artículo examinaremos un caso especialmente dramático de la falta de correlato entre lo prometido y lo obrado por los gobiernos de centroizquierda en Chile: el conflicto mapuche, principal minoría étnica del país. La falta de voluntad política para avanzar en solucionar sus miserables condiciones de vida, provocadas fundamentalmente por la usurpación de sus tierras, dio origen a una singular, novedosa y radical organización mapuche, la *Coordinadora Arauco-Malleco* (CAM), protagonista central de la lucha del pueblo mapuche por sus derechos durante la primera década del siglo XXI. Esta nueva organización representó una nueva forma de hacer política desde el mundo mapuche, transformando, des-

* Licenciado en Historia, Universidad de Santiago de Chile.

** Doctor en Historia, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

de su aparición a fines de los años noventa, el panorama político tanto para el pueblo mapuche como para el Estado chileno. Afirmamos que la *Coordinadora Arauco-Malleco* representó un salto cualitativo en la reconstrucción ideológica, política y miliciana de las organizaciones mapuches. Este salto cualitativo, a su vez, se apoyó en la percepción por parte de las comunidades indígenas respecto al agotamiento de una determinada forma de relación con el Estado y la sociedad chilenos, basada en el *peticionismo* y la negociación.

Planteamos que a partir del año 1997 comenzó una nueva forma de hacer política en el mundo mapuche. Ésta representó la continuación de la politización interna de un sector del pueblo mapuche, que se llevó a la práctica utilizando la violencia política como forma de lucha para conquistar las reivindicaciones de sus tierras ancestrales. De esta manera, desde fines de los años noventa y durante toda la primera década del siglo XXI, la sociedad chilena conoció una inédita forma de lucha de los mapuches: quema de camiones forestales, casas de latifundistas y cabañas de turismo; “toma” de tierras, quema de plantaciones forestales, enfrentamientos con fuerzas policiales, etc. El pueblo mapuche se ponía nuevamente de pie.

Por medio del examen de la trayectoria de la *Coordinadora Arauco-Malleco*, pretendemos mostrar la cara oculta del supuesto “modelo chileno”, que a pesar de sus publicistas nacionales e internacionales, está plagado de inconsistencias sociales, democráticas y éticas. El conflicto mapuche es tal vez uno de los mejores ejemplos de esto.

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y PROTESTA SOCIAL.

CHILE 1990-2010

Desde 1990, una vez terminada la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet e iniciada la llamada “transición democrática” chilena, liderada por la coalición de centro-izquierda llamada Concertación de Partidos por la Democracia, el proceso político chileno se desarrolló entre dos almas opuestas. Por un lado, quienes alabaron el llamado “modelo chileno” como caso ejemplar de paso de dictadura a democracia, de la mano de crecimiento económico y estabilidad política. Era la “democracia de los acuerdos” entre oposición y gobierno, como supuesto ejemplo de las virtudes cívicas del pueblo chileno. Aunque con matices, el propio gobierno y la oposición de derecha se identificaron con esta postura que, en la práctica, significó consensuar y naturalizar el modelo neoliberal y la sociedad de consumo en Chile. Por otra parte, otro sector se hizo crítico al “modelo”, enfatizando las altas dosis de continuidad con la dictadura militar: similar política económica (neoliberal), permanencia de la institucionalidad antidemocrática (simbolizada por la presencia del propio ex dictador como

Comandante en Jefe del ejército hasta 1998) y ausencia de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos. En este contexto, las organizaciones sociales tuvieron una reducida importancia política durante la primera década de la “transición”. Algunas movilizaciones de empleados públicos, trabajadores de la salud y profesores, agitaron las tranquilas aguas de la “*pax neoliberal*” pactada entre los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei y la derecha chilena. Sólo los estudiantes universitarios en 1997 lograron una mayor presencia, con base en masivas y prolongadas paralizaciones estudiantiles, pero cuyos efectos no tuvieron mayores proyecciones¹.

Con la detención de Pinochet en Londres en 1998 y el triunfo del socialista Ricardo Lagos Escobar el año 2000, se estimó que la “transición” chilena enmendaría camino, profundizando la democracia, la justicia social, junto con avances sustantivos en la lacerante herida de los derechos humanos, reabierto luego de la vergonzosa detención de Pinochet. Sin embargo, como ha sido señalado, la administración Lagos privilegió sus relaciones con el mundo empresarial y nuevamente dejó pendiente la agenda social (Fazio *et. al.*, 2005; Claude, 2006). Su sucesora, la médica socialista Michelle Bachelet, imprimió un carácter social a su administración, aunque sin desligarse por completo de las políticas económicas de corte liberal.

En este marco, los movimientos sociales jugaron un papel más protagónico que en la década pasada. El movimiento sindical logró recomponerse con base en que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización de trabajadores del país, definió una política independiente de los gobiernos de turno y se decidió por un sindicalismo “político-social”, declaradamente anti-neoliberal. De esta manera, durante el ciclo 2006-2008, los temas laborales fueron protagonistas de la agenda pública del país, en el contexto de masivas huelgas de los trabajadores sub-contratados del cobre, de las empresas forestales, de la fruta y de la salmonicultura, todos ligados al sector primario-exportador fomentado por el modelo neoliberal. En este ciclo, por primera vez se logró romper la legalidad laboral –creada por la dictadura–, anotándose los trabajadores del cobre y forestales sonados triunfos sobre sus empleadores (el propio Estado y un gran empresario chileno). Además, se realizaron algunas reformas a las leyes del trabajo que mejoraron en parte la abusiva relación entre el capital y el trabajo existente en el país².

1 Son escasas las investigaciones sobre estas materias. Al respecto, aún está vigente el trabajo de Drake y Jaksic (1998).

2 Ver Aravena y Núñez (2009).

Apenas iniciado el gobierno de Bachelet, en 2006, el movimiento estudiantil de la enseñanza media dio inicio a la más mediática de las protestas sociales de los últimos 20 años en Chile. Desconocidos jóvenes escolares desafiaron a la autoridad de gobierno solicitando inicialmente demandas netamente gremiales. Sin embargo, el movimiento –que duró casi dos meses– terminó por exigir la eliminación de la ley que regía el sistema educacional chileno, creada por la dictadura militar, que consagraba los principios neoliberales en el sistema de educación pública en Chile. A pesar del revuelo creado, el movimiento tuvo éxito básicamente en lograr sus demandas gremiales. La ley educacional de la dictadura fue modificada sólo en parte un año después, pero en términos muy lejanos a los solicitados en los días de las masivas movilizaciones liceanas en el centro de la capital del país. Con todo, la movilización de los estudiantes secundarios demostró que en Chile era posible que un movimiento social impusiera una agenda de discusión política y que, producto de la movilización social, el gobierno y el parlamento tuvieran que pronunciarse. En ese sentido, la llamada “revolución pingüino,” tal vez magnificada su importancia en su momento, sí dejó como principal legado una fisura en el consenso neoliberal de la clase política chilena. Producida en el mismo tiempo político que las movilizaciones obreras arriba reseñadas, ambas permiten afirmar que durante el segundo lustro de la década del 2000 se produjo una importante recomposición de las organizaciones sociales populares en Chile. Sin embargo, estuvieron lejos aún de lograr una protesta coordinada y de romper la “*pax* neoliberal”.

En este contexto, el mapuche fue el único movimiento que, con altos y bajos, logró un sostenido protagonismo social y político durante la primera década del siglo XXI. Conflicto que hunde sus raíces, al igual que en otros países latinoamericanos, en procesos estructurales de larga data, es posible afirmar que con el inicio del nuevo siglo las luchas del pueblo mapuche adquirieron un nuevo perfil y un impen-sando protagonismo. Parte importante de esto se relacionó con el nacimiento y desarrollo de la Coordinadora Arauco-Malleco, el nuevo dolor de cabeza del Estado, la clase política y el gran empresariado nacional y transnacional en Chile.

EL IMPULSO DE LA SUBJETIVIDAD, LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO SOCIOPOLÍTICO Y EL PRIMER ASCENSO DE LA COORDINADORA ARAUCO-MALLECO (1997-1999)³

Los orígenes de la CAM se relacionaron con una serie de factores políticos y estructurales presentes en la sociedad chilena como en el

3 Para un desarrollo extenso de este apartado, ver Pairicán (2009).

resto del mundo. Desde el punto de vista del desarrollo del modelo neoliberal implementado en Chile durante la dictadura del general Pinochet, una de sus actividades “estrella” fue la explotación de la celulosa. De esta manera, gran porcentaje de los futuros militantes de la CAM maduraron durante la misma generación que los pinos radiata y eucaliptus (20 a 25 años de maduración) sembrados por las empresas forestales durante la década de los ochenta. Es decir, los futuros integrantes de la CAM fueron jóvenes de comunidades que se fueron criando junto con esta actividad económica, sufriendo sus devastadoras consecuencias sobre las comunidades en que vivían. Por lo tanto, sus inquietudes políticas nacieron en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas que afectaban al mundo mapuche (despojo de tierra, sequías, contaminación de las aguas, etc.) en los años noventa. Además, fue una generación de mapuches en rebeldía con sus propios antepasados políticos cercanos, ante la cooptación de dirigentes que generó el nacimiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), dejando de lado las reivindicaciones de su pueblo para dedicarse a lo que ellos consideraban como la mera administración de este organismo gubernamental⁴.

Al mismo tiempo, se continuó con un proceso de politización interna de las organizaciones mapuches, que tuvo su primer esbozo con *Ad-Mapu* y fue profundizado con el *Consejo de Todas las Tierras*, además de un avance teórico como lo fue la integración de conceptos como “autonomía”, “autodeterminación”, “pueblo” y “Nación”⁵. Estos planteamientos fueron recogidos por la juventud

4 La CONADI fue la cristalización de la Ley 19.253 de 1993, basada en el acuerdo realizado entre el Gobierno de Patricio Aylwin y las organizaciones mapuches en el proceso de transición a la democracia. Dicha instancia sería el interlocutor entre los indígenas y las administraciones chilenas. Sin embargo, en los sucesivos gobiernos de la Concertación, dicho organismo fue quedando paulatinamente desplazado en su proyección original, perdiendo legitimidad ante las organizaciones Mapuche. Afectó su imagen ante las organizaciones indígenas especialmente su pobre desempeño en el conflicto generado en 1997 por la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco, en la VIII región del país, que inundó para siempre territorios mapuche. Sobre este contexto, ver Marimán (1993).

5 Desde 1985 el pueblo mapuche ha tenido un variado abanico de organizaciones. En dicho año nació desde Centros Culturales Mapuche, la organización Ad-Mapu, con integrantes de los Partidos Comunistas, Socialista, MIR y demócratacristianos, más militancia autónoma. Surgía ante la necesidad de resistir al intento de exterminio legal del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), amparado en la ley Decreto Ley 2.568, el que disolvía las comunidades indígenas y sus particularidades. En 1989, ante la coyuntura del plebiscito y los cuestionamientos de la salida pactada a la dictadura, Ad-Mapu tiene un quiebre en su interior, que dio origen al *Consejo de Todas las Tierras*, organización clave para comprender el conflicto mapuche. Se convirtió en la catalizadora de la conflictividad en la primera mitad de la década de los noventa,

indígena de mitad de los años ochenta y profundizados a partir de la década del noventa, agregando nuevos contenidos epistemológicos como “Entidad”, “Independencia” y “Liberación Nacional”; lo que se explica a su vez por la convergencia con mapuches provenientes de militancias desde las distintas vertientes de la izquierda chilena. Un papel importante también jugó el plano internacional. Las noticias sobre las reivindicaciones nacionalistas y territoriales en Chechenia, Bosnia, Kurdistán, Palestina, Euskadi; unidas al ascenso del movimiento indígena en México, Bolivia y Ecuador, fueron seguidas por las nuevas camadas de militantes mapuches. Finalmente, la coyuntura nacional fue decisiva. La protesta en 1992 ante la conmemoración del Quinto Centenario de la conquista española, la construcción de la represa hidroeléctrica *Ralco*, en fin, la decepción con gobiernos democráticos que hacían oídos sordos de la causa mapuche, terminaron por radicalizar a viejos y nuevos activistas mapuche.

De esta manera, la nueva generación mapuche reinterpreto su pasado, retomando lo que estimaron como legado de sus antiguos héroes, como Leftrarü, Callfolican, Pelantarü, Lientur, Mañin Wenü, Kilapan⁶. Se idealizó un pasado de libertad, esplendor económico y desarrollo comunitario, bañado en la cosmovisión de su pueblo. Fue así como se generaron las condiciones para legitimar nuevas formas de lucha contra lo que se consideraba la opresión del Estado chileno luego de la Ocupación de La Araucanía⁷, que los forzó a vivir en la pobreza, legitimó el despojo territorial y los calificó de indios y borrachos. Por ende, el resurgimiento del *Weichafe*, el guerrero mapuche que libró las batallas de la libertad en el pasado heroico, cristalizó en la nueva generación de militantes mapuche de la CAM. Con el renacer del *Weichafe*, la legitimidad de la violencia política histórica en la lucha contra la dominación de antaño se recuperó ahora para ser

siendo desplazada por el nacimiento de CAM a fines de 1998. Durante dicho año, nació la *Identidad Territorial Lafkenche*, en la comuna de Tirúa. Con el ascenso del Movimiento Político Mapuche, alcanzaron a tener notoriedad dos organizaciones más, *Asociación Ñancuqueo de Lumaco* y *Ayllarewe Truf-Truf*. Por último, durante el año 2009, sólo dos organizaciones mantienen notoriedad en el escenario político chileno: la CAM y la *Alianza Territorial*, un nuevo referente surgido luego de la muerte a manos de la policía del comunero Jaime Mendoza Collío.

6 Sobre estos personajes, ver Bengoa, (2000).

7 El Estado de Chile llama a este período como la “Pacificación de La Araucanía”. Dicho proceso comenzó en 1861 y su objetivo fue dominar los territorios independientes Mapuche. Hasta 1883, cuando los Mapuche fueron derrotados, se dieron distintos focos de resistencia. Para mayor comprensión ver Bengoa (2000); Pinto (2000); Foerster (2006).

aplicada bajo el nuevo contexto sociopolítico de fines del siglo XX y principios del XXI.

En 1996 surgió el primer esbozo de la futura *Coordinadora Arauco-Malleco*, al crearse la *Coordinadora Territorial Lafquenche* (CTL), que se dividió a mediados de 1998 por desacuerdos en su interior sobre la utilización o no de la violencia política como forma de lucha. De este desprendimiento emergería la *Identidad Territorial Lafquenche*, liderada por Adolfo Millabur (Weftun, 2001).

La idea original, según Héctor Llaitul, uno de los fundadores de la CAM, era la “de crear un referente con dos posturas, una que fuera netamente de las comunidades y otro que esperábamos que involucrara al movimiento mapuche que se estaba fortaleciendo, con el *Consejo de Todas las Tierras*, la *Coordinadora Mapuche Metropolitana*, entre otras. Entonces lo que nosotros queríamos era una coordinación Mapuche, lo mas amplia posible bajo la base de la resistencia y la lucha mapuche”. La primera postura explotó el 1° de diciembre de 1997 cuando, en la zona de Lumaco, tres camiones de la empresa *Forestal Arauco* fueron interceptados por comuneros que luego serían conocidos como integrantes de la CAM. Estos detuvieron los vehículos y premunidos de hachas “reventaron los neumáticos con golpes precisos”, en tanto otros irrumpieron en las cabinas de los chóferes “atacándolos con palos e instándolos a huir a punta de escopeta, después de golpearlos y dejarlos con contusiones serias en la cabeza y el cuerpo”. Una vez consumada la acción, los desconocidos arrojaron bencina sobre las tres máquinas, provocando un incendio “que consumió a dos de ellas en cosa de minutos” (El Diario Austral, 1997).

Dicha acción creó una nueva subjetividad en la militancia mapuche, modificando su forma de hacer política. Esta transformación generó una transición hacia un nuevo escenario político, puesto que las comunidades se radicalizaron en la idea de recuperar las tierras, simpatizando con las formas más radicales de lucha. Según “Antonio”, activista mapuche, la quema de los camiones de Lumaco fue un cambio en su vida, pues ese momento lo hizo adherir a la causa mapuche: “a los pocos días me encontré con un ‘peñi’ [amigo] y le pregunté ‘¿esta cuestión fueron los mapuche o no?’, ‘si poh’ se sabe que fueron los mapuches’ -me contestó- ‘ya poh’ le dije, ‘si son los mapuches entonces me voy a involucrar en eso’”⁸. Otro testimonio del impacto causado en la subjetividad de los futuros CAM es el de “Antülaf”: “cuando

8 Escuchando a “Antonio”, miembro de la Dirección Política de la *Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco*. 04 de abril de 2008. En algún rincón de Wallmapu (territorio mapuche). Algunos nombres han sido puestos con seudónimo, producto de estar en clandestinidad.

aparecieron las primeras acciones de la *Coordinadora* más o menos como en el 98, yo estaba en el aeropuerto trabajando me acuerdo, y ahí me gustó esa forma, porque [...] [pensaba] que era la única para que el *winka*⁹ entendiera [...] no había otra”¹⁰.

Para Héctor Llaitul, “la idea era que las comunidades despertaran pero lo hicieran sobre una realidad concreta, más allá de reivindicar tierras y aguas. Que se despertaran para hacer defensa territorial. Resolver una demanda puntual pero con una visión más amplia, que fuera lucha concreta frente al capitalismo”. Así, los pasos implementados fueron “desarrollar comunidades en conflicto; luego, articular esas comunidades y después crear un referente que las representara. El cuarto paso fue hacer una correlación de fuerzas que generara representación” (The Clinic, 2008). Este gatillador subjetivo impulsó la radicalización del panorama político del mundo mapuche. Bajo esta nueva forma de hacer política emergió a finales del año 1998 el referente político denominado *Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco*, luego de prolongadas y continuas recuperaciones territoriales.

De acuerdo al diagnóstico de la CAM, el sistema capitalista era el principal culpable del retroceso económico, cultural y político del pueblo mapuche. El capital, al instalarse en lo que antiguamente era el territorio histórico indígena, fue arrebatando poco a poco las tierras, las secó y contaminó. Cuestión similar ocurrió con las aguas, a causa principalmente de la instalación de empresas forestales durante la dictadura militar y, bajo la recuperada democracia, por el avance de las construcciones hidroeléctricas en las zonas de Alto Bío-Bío y Panguipulli, en el sur del país. Por este motivo, la CAM estimó que el pueblo mapuche estaba en un proceso de exterminio y que la única manera de resistir el exterminio, era otorgándole un carácter anticapitalista a la resistencia mapuche. Ello generaría una politización en los indígenas, que irían saliendo de la oscuridad social y política a la que fueron obligados a sumergirse, iniciando la reconstrucción del “ser mapuche” y del mundo que los constituía como tal.

La *Coordinadora* convirtió este análisis en un programa político. Para esta organización, el pueblo mapuche fue colonizado durante la “Ocupación de La Araucanía”, principalmente a causa de la expansión

9 La palabra *Winka* ha tenido distintos significados, el más aceptado es para referirse a alguien externo al Pueblo Mapuche, a un extranjero. En este caso se refiere a alguien de procedencia chilena.

10 Escuchando a “Antúlaf”, miembro de la *Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco*. 1° de junio de 2008. Este miembro se encuentra en la clandestinidad.

del capital hacia los territorios indígenas. Desde esa condición tendrían que edificar una primera etapa de acumulación de fuerza para comenzar un proceso de Liberación Nacional. Dicha acumulación de fuerza, se realizaría en tres facetas. Primero, en la resistencia al capital, es decir, las acciones de sabotaje a empresas forestales, turísticas, hidroeléctricas y a los latifundistas apostados en territorio mapuche. Segundo, en la reconstrucción sociocultural (*nguillatunes*, rogativas, medicina natural, etc.), unida con la reconstrucción del mismo “ser mapuche”, que se expresará en el *Weichafe* (guerrero). Finalmente, en los aspectos políticos, lograr generar un Movimiento Político Mapuche Autónomo y cimentar las primeras expresiones ideológicas del pueblo mapuche en pos de la Liberación Nacional.

La expresión más acabada de lo anterior, fue lo que denominaron el *Control Territorial*. Éste consistía en llegar a un predio, derribar las plantas forestales (eucaliptos y pino insigne para la construcción celulosa) o quemar casas, bodegas y cosechas de algún latifundista para luego sembrar papas, tomates, trigo, etc., actividad que denominaron *Siembra Productiva*. Lo anterior apuntaría fundamentalmente a realizar los primeros eslabones de la *Autonomía política*, que se complementaba con el derecho a la autodefensa del terreno en disputa. Este paso de la recuperación de tierra a la recuperación del territorio, era el avance cuantitativo y cualitativo que fortificaría la autodeterminación del pueblo mapuche e iniciaría la construcción de una segunda fase de una primera etapa por la Liberación Nacional Mapuche¹¹.

Con el nacimiento de la CAM, comenzó también a brotar un nuevo tipo de militante político, el “mapuchista”, englobado en lo que se ha denominado el mito del *Weichafe* (Salinas, 2005). Héctor Llaitul lo caracteriza como “un cuadro político” de ‘los nuevos tiempos’, el que en sí mismo es una suerte de “portador” de un “cambio, social, moral, político [...]”. Agrega, “un *Weichafe* es de una alta connotación y entrega”¹². Mientras, para “Marcelo”, el *Weichafe* antiguamente era “un luchador que se caracterizaba por tener las cualidades de valentía, se caracterizaba por esa consecuencia, humildad de hasta decir ‘yo doy mi vida para que el mapuche, mi gente mapuche, pueda vivir bien, vivir bien’. Entonces el *Weichafe* es el que está ahí en la lucha misma, el que va y se enfrenta al enemigo, sin importarle la condición que esté, está ahí, su valentía, su coraje, su lealtad a su mismo pensamiento. De nunca titubear en lo que va hacer, toma la decisión y lo

11 Para mayor profundización en el aspecto programático de esta organización, ver el artículo de la Coordinadora Arauco-Malleco (Coordinadora Arauco-Malleco, 2000).

12 Escuchando a Héctor Llaitul.

hace, pero cuando se toma la decisión de hacer algo, buscará la forma de cómo hacerlo, pero nunca va a decir 'no se cómo hacerlo' porque sería un cobarde. Eso es un *Weichafe*". Esto se ve complementado por una "mística" militante propia. Como señala Llaitul, "es la aparición, el retorno de los guerreros" (The Clinic, 2008).

Por lo tanto, esta nueva forma de hacer política, en su teoría y praxis se vio acompañada de esta mística, que señalaba la forma en que "debía ser" un mapuche. Este principio se fundamentaba en la convicción de querer transformar la desestructuración del mundo mapuche provocada por la imposición del capitalismo, tanto en lo referido a la destrucción física de sus territorios, como a la forma de vida de los hombres y mujeres "de la tierra". Como ha sido señalado, los miembros de la *Coordinadora* se hicieron prontamente conocidos por "sus planteamientos semejantes a los desaparecidos *Panteras Negras* de Estados Unidos: no consumir elementos contaminantes o intoxicantes (como drogas o alcohol), volver a la religión original y, en definitiva, abjurar del sistema político en que se hallaban insertos, un sistema dominador, xenófobo y que les arrebató sus tierras" (La Huella, 2002). Desde la CAM se impulsó una serie de elementos que bien se podrían denominar los "principios" de los militantes: hacer deporte, no consumir alcohol ni drogas, aumentar el trabajo y el estudio. Sumado a ello, una presencia física, pelo corto, andar con la ropa limpia y dentro de la realidad de cada comunero "andar bien vestido". Además una alimentación con calorías e ingredientes nutritivos para un buen desarrollo del cuerpo. Todo esto apuntado hacia el compromiso que el militante debía ir tomando hacia la organización y "su pueblo" en pos de la Liberación Nacional, es decir la reconstrucción del pueblo mapuche. Todo lo anterior puede ser sintetizado en el concepto de "disciplina". Una disciplina militante, de Nación, es decir, una disciplina de vida, por lo tanto del "deber ser" del integrante de la CAM.

Durante el año 1998 cuatro comunidades fueron preparando el camino para el primer ascenso de la CAM y del Movimiento Político Mapuche en 1999, lo que la derecha chilena llegó a denominar "nuestro pequeño Chiapas" (El Mercurio, 1999). Paulatinamente, fueron desapareciendo las "recuperaciones simbólicas" impulsadas por el *Consejo de Todas las Tierras*, para dar luz a las recuperaciones efectivas. Aunque durante dicho año no se realizaron hechos de violencia política de alta connotación, las recuperaciones de tierras fueron la tónica. Este cambio cualitativo no solo se puede observar en el cambio de los mismo mapuches que decidieron afrontar "cuerpo a cuerpo" a los guardias y policías, sino también en la utilización de *wexuwes*, *wiños* (chuecas) y también armas hechizas, lo cual marcó una nueva

forma de hacer política y también la disposición de enfrentamiento de parte de los mapuches.

Aunque la derecha alarmó sobre una supuesta “insurrección indígena”, lo cierto es que la construcción política de los mapuches no presentaba aún la fuerza suficiente para crear tamaña hazaña, a pesar que las “corridas de cerco” y las disputas por tierras se propagaron por las regiones del Bío-Bío (VIII), La Araucanía (IX) y Los Lagos (X). Lo que sí es cierto es que la reconfiguración del mapa político para este pueblo cambió en 1999, tanto por las crecientes manifestaciones de protesta indígena, como por el desarrollo teórico político y por la consolidación de las organizaciones que movieron los motores del Movimiento Político Mapuche. En la vereda opuesta, el Estado de Chile tuvo que dar respuesta a esta nueva dinámica más radicalizada en su accionar como en sus planteamientos. Esta respuesta siguió dos caminos, la social y, fundamentalmente, la represiva.

El principal logro de la CAM durante 1999 fue generar un nuevo sentido común ante el resto de organizaciones mapuches, a saber, que lo políticamente correcto era tomar parte del conflicto mapuche con formas radicales de lucha. Esto se tradujo en que el *Consejo de Todas las Tierras*, *Identidad Territorial Lafquenche* y la *Asociación Ñancuqueo* de Lumaco comenzaran sus propias campañas de movilización, lo que fortaleció el Movimiento Político Mapuche (MPM) en todo su sentido, extendiendo las movilizaciones en distintas zonas del territorio reclamado por estas. Por ende, el contexto creado por la CAM en 1997 con la quema de los camiones, su posterior transición en 1998 y la primera etapa de consolidación y ascenso que se dio inicio en 1999, fueron la base de la nueva forma mapuche de hacer política.

Pero este mismo ascenso atrajo el despliegue represivo en las zonas en conflicto. Desde el patrullaje por guardias privados, de miembros del Comité de Defensa de los Predios y de los mismos Carabineros de Chile, que prestaron seguridad al interior de los fundos forestales, gracias a la creación de campamentos móviles y fijos con policías en permanente rotación. Pero, como veremos, “la militarización del territorio mapuche” (Buendía, 2006), como lo denominó la CAM, fue la respuesta ante el ascenso y expansión de esta misma. Junto a la *Coordinadora*, el *Consejo e Identidad* también colaboraron al fortalecimiento del MPM. La alianza entre estas organizaciones fue frágil y muchas veces sus diferencias terminaron en abiertas discrepancias y descalificaciones de uno u otro bando. Sin embargo, lo concreto es que la *Coordinadora* radicalizó el panorama político de las organizaciones mapuche, haciéndolas girar “hacia la izquierda”, poniendo como centro de gravedad la conflictividad y la lucha radical antes que la negociación.

DE COMUNERO A WEICHAFE. EL SALTO CUALITATIVO DE LA CAM, SU SEGUNDO ASCENSO Y EL PASO A LA CLANDESTINIDAD (2000-2002)¹³

Para comienzos de la administración de Ricardo Lagos y del tercer período de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, la atmósfera de las relaciones entre el Estado y las organizaciones mapuches era negativa. Como alguien lo señaló, “la administración Frei (1994-2000) había dejado en claro que los derechos de los pueblos indígenas estaban supeditados al desarrollo productivo vinculado a la economía mundial” (Aylwin y Yañez, 2007: 19).

Sin embargo, gracias a su pragmatismo, Lagos logró atraer a un sector del MPM, haciendo descender durante el año 2000 la conflictividad mapuche y aislando a la CAM de las otras organizaciones. Como se ha dicho, el método empleado por la administración del presidente Lagos, puede ser resumido en la política de la “zanahoria y el garrote”. “Mientras la primera de estas políticas fue impulsada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el programa *Orígenes*, ambos dependientes del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN); la segunda, en cambio, estuvo a cargo del Ministerio del Interior” (Aylwin y Yañez, 2007: 25).

En el primer caso, Lagos prometió que efectuaría una ampliación y perfeccionamiento de la Ley 19.253, una reforma en la Constitución Política para dar cabida y reconocimiento en ella a los pueblos indígenas, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y la incorporación de 150.000 nuevas hectáreas de tierras al patrimonio indígena. Lo anterior se concretó a través de la conformación de un “Grupo de Trabajo” sobre los pueblos indígenas, invitando a distintos sectores del movimiento indígena y de la ciudadanía con la perspectiva de generar una nueva política en la materia. Cuatro meses después, esto se tradujo en el anuncio de la creación de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, una de las principales peticiones impulsadas desde una organización integrante del Movimiento Político Mapuche. Con ello, hábilmente, Ricardo Lagos cooptó a la *Identidad Territorial Lafquenché*, alejándola de las posturas más confrontacionales¹⁴.

La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato hacia los Pueblos Indígenas debía “informar acerca de la historia de la relación que ha

13 Un desarrollo extenso de este apartado, en Pairicán (2009a).

14 También participaron activamente en esta comisión Aucán Huilcamán por el Consejo de Todas las Tierras, y Alfonso Reimán por la Asociación Comunal Nancuqueo de Lumaco, las otras dos organizaciones que fueron los motores de las movilizaciones durante 1999. Con ello, la CAM quedó sola o aislada en su objetivo de crear un Movimiento Mapuche Autónomo.

existido entre los pueblos indígenas y el Estado, y sugerir propuestas y recomendaciones para una nueva política de Estado que permitiera avanzar hacia un Nuevo Trato entre el estado, los pueblos indígenas y la sociedad chilena toda” (Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato hacia los Pueblos Indígenas, 2001-2003). Tras casi tres años de trabajo, en donde no participaron todas las organizaciones mapuche debido a que muchas de ellas se restaron de participar producto de problemas de forma y fondo en el desarrollo de su trabajo (Seguel, 2007: 130), el día 28 de octubre de 2003 la Comisión de Verdad Histórica dio a conocer su informe final. En lo central, su contenido significó para el pueblo mapuche el reconocimiento de una historia de frustraciones y desarraigos. Sin embargo, no se pronunció sobre las complejidades del conflicto mapuche actual.

Entre las recomendaciones que propuso la Comisión al Gobierno de Chile, estuvieron que el Estado rectificase del trato dado históricamente a los indígenas y que éste se basara en “el respeto, la equidad, el mutuo reconocimiento, la justicia y la dignidad de todos sus miembros” (Informe de la Comisión, 2001-2003). Asimismo, recomendó modificar la Constitución Política del Estado, para que incluyese en uno de sus artículos “la existencia de los pueblos indígenas [...], reconozca que poseen culturas e identidades propias [...], respete la autonomía de sus miembros; y que en consonancia con dicha declaración, reconozca y garantice el ejercicio de un conjunto de derechos colectivos a favor de los pueblos indígenas [...]” (Informe de la Comisión, 2001-2003). Entre los derechos aconsejados se encontraban los políticos, incluyendo la elección de representantes en el Congreso y la creación de instituciones propias, además de derechos culturales y territoriales.

Casi un mes después de haberse dado a conocer el Informe de la Comisión, en ceremonia efectuada en el Palacio presidencial, Naciones Unidas, representado por su relator especial Rodolfo Stavenhagen, dio cuenta en un informe final de los múltiples problemas que afectaban los derechos del pueblo mapuche, constatando asimismo “la estrecha correlación entre pobreza e identidad indígena” (Stavenhagen, 2003: 19). Entre los aspectos identificados por el informe de Naciones Unidas se encontraba el problema de la propiedad y el de los grandes proyectos de desarrollo como lo son las hidroeléctricas y las construcciones camineras. Stavenhagen también llamó la atención sobre el tratamiento judicial dado a las acciones de presión de los mapuches para recuperar sus tierras, así como también de la violencia física y verbal ejercida por el contingente policial presente al interior de sus comunidades (Aylwin y Yañez, 2007: 36). Asimismo rechazó la aplicación de las leyes especiales, como la ley de seguridad Interior

del Estado (N° 12.927) y la ley por Conductas Terroristas (N° 18.314), “sobre las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas” (Stavenhagen, 2003: 69).

El gobierno de Ricardo Lagos retóricamente acogió las recomendaciones expuestas, tanto la de la Comisión como la de Naciones Unidas; sin embargo, en la práctica, como ya lo mencionamos, se hizo muy poco. Consecuente con su política de apertura económica, siguió respaldando proyectos de inversión en el territorio mapuche y no se reconoció en el Parlamento la calidad de “pueblo” para las comunidades indígenas. De este modo, este gobierno mantuvo una política dual y contradictoria hacia los pueblos indígenas hasta el final de su mandato (Aylwin y Yañez, 2007: 46). Aunque en lo que respecta a la política sectorial cabe destacar el fortalecimiento del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, así como la creación del programa *Orígenes*, que consistía fundamentalmente en la elaboración de planes territoriales de desarrollo con motivo de “fortalecer [así] la capacidad de gestión de las comunidades indígenas participantes, promoviendo prácticas que conduzcan a generar espacios socio-territoriales donde el desarrollo sea sustentable” (Gobierno de Chile, 2004: 24).

Pero a la vez que impulsó programas de desarrollo asistencial, el gobierno de Lagos aplicó drásticamente el rigor de la ley a los sectores que se negaron a ser cooptados o sencillamente no creyeron en las nuevas promesas, como fue el caso de la CAM. Durante su mandato, la guerra fue total contra esta organización, aplicando lo que la derecha política y económica pidió tantas veces al ex Presidente Frei: la Ley N° 18.314 de 1984, conocida como la Ley Antiterrorista. Al mismo tiempo, la “mortal triple alianza” (Buendía, 2006: 205-210) –la unión entre empresarios, gobierno y carabineros– se consolidó bajo la administración de Lagos, traduciéndose en lo que se denominó “la criminalización de la protesta indígena” (Mella, 1997: 18).

En la práctica, esto se tradujo en la “judicialización” de las actividades que planteaban demandas mapuches. Se crea una herramienta, “utilizada por el Estado y privados para hacer primar sus intereses por sobre los intereses ancestrales de los pueblos indígenas, haciendo caso omiso de las condicionantes históricas del conflicto y de las consecuencias sociales, culturales y políticas que acarrea” (Mella, 1997: 18). La consecuencia de este “Nuevo Trato” dado por Lagos a los mapuches, fue el inicio de la configuración de un nuevo contexto socio-político, que durante dos años agudizó el enfrentamiento entre las partes en conflicto y se terminó de polarizar con el asesinato del joven comunero Alex Lemun a fines del año 2002, que a su vez echó a andar el intento de desarticulación de la CAM.

Por su parte, la *Coordinadora Arauco-Malleco* continuó durante el año 2000 con su línea político-estratégica. A pesar de estar aislada de sus pares, se aferró a la convicción de tener la razón teórica del proceso que gestó durante 1997 y que parió a partir de 1999. Inevitablemente, dicha posición le atrajo las críticas tanto del MPM como la persecución del Gobierno a través del Ministerio del Interior; lo que a su vez tuvo respuestas concretas, con acciones de violencia política que se realizaron durante dicho año y que ascendieron a finales del mismo para multiplicarse durante el año 2001, lo que la derecha llegó a denominar la “Intifada Mapuche” (El Mercurio, 2001). En dicho transcurso de tiempo, el militante CAM se perfeccionó “al calor de la lucha”, se desarrolló milicianamente en las recuperaciones de los fundos *El Porvenir* y *El Carmen*¹⁵, permitiendo observar un avance cualitativo en la formación paramilitar de sus cuadros. En otras palabras, el comunero se fue convirtiendo en *Weichafe*, los que a su vez, fueron los gestores del segundo ascenso de la *Coordinadora Arauco-Malleco* durante el año 2001. Además de este perfeccionamiento, surgieron nuevas “comunidades en conflicto”, principalmente en la IX Región, las que reivindicaron predios contra latifundistas. Esto provocó que este sector social se endureciera nuevamente, volviendo a legitimar el derecho a la “autodefensa” para defender sus riquezas. Si durante 1999 emergió el *Comité de Defensa de los Predios* (CDP) durante éste año comenzó a gestarse un ala más radical de los latifundistas, dando a luz durante el 2002 al *Comando Hernán Trizano*¹⁶.

Por último, para fines del año 2001 aumentó la quema de bosques forestales de las empresas *Arauco* y *Mininco*. La consecuencia de este ascenso político de la CAM fue el inicio de la persecución abierta a dirigentes, miembros y simpatizantes de la organización. Como se ha señalado, el año 2002 fue el “inicio de la razzia” y el comienzo de la “era de la judicialización ‘emblemática’”. Con este contexto, es posible afirmar que el año 2002, instaló la realidad de la

15 Ambos fundos se encontraban forestados con plantas de pino y eucalipto de la empresa forestal Arauco, perteneciente a Anacleto Angelini, uno de los tres hombres más ricos e influyentes de Chile. El lugar geográfico, es la Novena Región, en el sector de Chol-Chol. La importancia de este nuevo proceso, es que provocó el ascenso de la conflictividad como un perfeccionamiento en su manera de actuar, como lo fue reflejando la prensa.

16 Hernán Trizano, es el nombre del creador de las guardias civiles durante la Ocupación de La Araucanía, quien protegió a los colonos mientras el ejército de Chile se envió al norte, para afrontar la Guerra del Pacífico en 1871 contra sus pares de Bolivia y Perú. Ante la inseguridad, Trizano actuó como el garante de la seguridad, provocando innumerables muertes en su ingreso a los campos mapuches. También es considerado por parte de Carabineros de Chile como uno de sus antecesores.

prisión, lo que forzó a la *Coordinadora* a pasar a las sombras de la clandestinidad.

Durante el año 2002, la CAM trabajó exigiendo la libertad de sus presos políticos. Marchas callejeras, tomas de espacios públicos y el traslado del conflicto mapuche a las ciudades fueron la tónica de ese año. Estas actividades se acompañaron con el intento de recuperaciones territoriales, dentro de las cuales cayó herido por un perdigón metálico Alex Lemun, quien falleció luego de agonizar durante cinco días. Las reacciones de protesta se expresaron en el aumento de la conflictividad y el dividido MPM se unificó de forma efímera para despedir al joven integrante de la CAM, el “primer mártir de este nuevo proceso” (“Lemun Renace”, 2006) como dijo el vocero José Llaquileo en su funeral. La *Coordinadora* elevó sus acciones de violencia política por cerca de dos semanas consecutivas.

En síntesis, el asesinato de Edmundo Alex Lemun Saavedra marcó el fin del ascenso político y social de la CAM. El Estado chileno analizó acertadamente que este hecho acrecentaría aún más la agudización política ante el nacimiento del primer mártir de esta organización. Por ello, apuró el proceso represivo que gestó desde principios del año 2001, conocido más tarde como “Operación Paciencia”. Simbólicamente, para la *Coordinadora* el hecho significó la confirmación de lo acertado de su línea política, que enfatizaba el carácter represivo del Estado chileno. Ahora, además de concretar sus planteamientos estratégicos, los miembros de la CAM tenían el deber de ser consecuentes con el objetivo por el cual perdió la vida su joven miembro, la consabida recuperación de tierras. Sumado a ello, Lemun representaba los elementos que caracterizaron a los militantes de la *Coordinadora*: joven, sin vicios, campesino, trabajador, militante comprometido y entregado al proceso de liberación de su pueblo. Por otro lado, este joven de 17 años murió combatiendo al Estado que les usurpó las tierras y, con *wexuwe* en mano, resistió el primer intento de desalojo. Por ende, su muerte implicó un ritual político que marcó un antes y un después en el conflicto mapuche.

Pero también el asesinato de Alex Lemun marcó la imposición del nuevo contexto sociopolítico de parte del Estado. Las fuerzas políticas que colisionaron durante el año 2000 y 2001, terminaron por explotar en esta coyuntura. La polarización política terminó por hacer girar “a la derecha” al gobierno de Ricardo Lagos, unificando sus postulados con los de la derecha y el empresariado para perseguir a la CAM. Esto se comenzó a realizar sólo una semana después de la muerte de Lemun, hasta el 13 de diciembre de 2002, cuando se inició el proceso por “Asociación Ilícita Terrorista” contra la *Coordinadora Arauco-Malleco*.

Así, la organización mapuche que creó una nueva forma de hacer política para su pueblo, fue forzada a pasar a la clandestinidad. Y los años posteriores transcurrieron en las sombras del trabajo político ilegal. Aunque sus dirigentes clandestinos le bajaron el perfil a la persecución política¹⁷, lo cierto es que así se cerró una etapa de la historia del conflicto mapuche, la que podemos denominar como la primera fase de una primera etapa por la Liberación Nacional Mapuche.

El 21 de agosto de 2004 se conoció públicamente la operación de inteligencia que intentó desarticular a la CAM. El mismo encargado de seguridad del Gobierno de Ricardo Lagos, el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, reconoció algo que ya es parte de la historia política reciente de Chile al señalar “que la desarticulada CAM, el grupo más violentista y al que se les atribuyen los peores atentados, fue el resultado de una exitosa y sistemática labor de inteligencia policial denominada ‘Operación Paciencia’” (El Mercurio, 2001; énfasis propio).

ENTRE LA PRISIÓN Y LAS SOMBRAS. LA RESISTENCIA DESDE LAS CÁRCELES Y LA GENERACIÓN DE UNA NUEVA MÍSTICA (2003-2009)

La clandestinidad volvió a “foguear” a la joven militancia de la *Coordinadora Arauco-Malleco*. “Chequeo”, compartimentación, leyendas, conceptos asociados al nuevo estatus legal de la organización, fueron la continuidad de la politización de la CAM y a su vez la consecuencia directa de la “Operación Paciencia”. Como dijo “Antonio”, “cuando ocurre el proceso de la ‘Operación Paciencia’, nosotros decimos: ‘bueno, nos sumergimos, seguimos haciendo un trabajo clandestino o semi-clandestino y vamos a seguir avanzando igual’”¹⁸. Óptica similar es la de “Marcelo”, quien señala que pasar a la clandestinidad fue un aprendizaje, el de “no subestimar al enemigo”, pero también el de llevarlos “hacer las cosas bien”¹⁹. Con esta nueva “mística”, el de vivir en las sombras por el territorio mapuche, la CAM mantuvo a flote su organización, pero al costo de carcomer parte de su trabajo de masas.

17 El dirigente interno de la CAM, José Llanquilef, señaló sobre esto que “no han demostrado ninguna capacidad mayor en términos represivos, es más que nada una razzia a los que se moviera o a los que tuvieran a la vista”. Enfatizó que el trabajo de inteligencia “no nos deja en mal pie, porque nuestra estructura como organización es muy difícil de golpearla pues las decisiones son más colectivas de lo que ellos piensan” (El Siglo, 2002).

18 Escuchando a “Antonio”. Citado.

19 Escuchando a “Marcelo”. Citado.

El gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) mantuvo tanto las indefiniciones que fueran características de la política de su antecesor, como las contradicciones entre el discurso y la práctica (Aylwin, 2006; Wiliem, 2007: 9). Por su parte, el reporte final de 2007 de *Human Rights Watch*, menciona que las intenciones de la Presidenta habían sido las de terminar con el uso de las leyes especiales y antiterrorista en contra de los grupos indígenas, pero que el Parlamento chileno había limitado sus decisiones. Esta era la respuesta a una huelga de hambre que iniciaran cuatro presos políticos mapuches condenados por delitos terroristas a 10 años de cárcel.

Uno de los avances más importantes durante el periodo de Bachelet fue la ratificación en marzo de 2008 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 27 de junio de 1989. Aunque con un retraso de 18 años, la aprobación de este convenio “fue posible debido a un acuerdo político entre el oficialismo y la derecha, en orden a limitar sus alcances y cerrar la puerta a otros instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU” (Cayuqueo, 2008), los cuales a la fecha serían más pertinentes. De acuerdo a visiones más optimistas, el convenio 169 de la OIT es el instrumento jurídico internacional más actualizado sobre el tema y constituye la norma mínima en cuanto a las propuestas declarativas a favor de los pueblos indígenas en el seno de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano (Cifuentes y Rolando, 2000: 5).

Siguiendo con las medidas tomadas durante el periodo de Bachelet, cabe mencionar el documento de trabajo dado a conocer el 1° de abril de 2008, que plasmó la política del gobierno en materia indígena para los próximos años. Los impulsos de esta iniciativa se articularían en torno a lo que se llamó “Re-conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad”, el cual, según palabras de la Presidenta, profundizaría y perfeccionaría la política indígena actual (Bachelet, Michelle, 2008). Los ejes centrales de esta nueva política se centrarían básicamente en torno a derechos políticos, desarrollo integral y multiculturalidad.

Las políticas públicas emanadas del Pacto Social fueron asumidas principalmente de forma asistencialista y orientada a obtener logros de corto plazo. Entre ellas se encuentran las becas indígenas, la entrega de tierras, el mejoramiento del programa de salud, un Fondo Solidario de Vivienda, la apertura de jardines infantiles con currículo intercultural y la creación de la unidad de la mujer en CONADI, entre otras. Ahora, en relación con el proyecto de ley que modificaba la ley orgánica y reconocía al Mapuche constitucionalmente como pueblo, este se asumió como compromiso, pero finalmente no fue cumpli-

do. En cuanto a las demandas de fondo de un grupo significativo de asociaciones Mapuche, relacionadas con el logro de su autonomía, ésta ni siquiera fue mencionada o asumida como arreglo a negociar o discutir.

Paralelamente, en las cárceles chilenas la resistencia de los presos políticos mapuche (PPM) fue generando una nueva subjetividad. En efecto, la lucha pública se desarrolló en la exigencia de la libertad de los PPM, los que a su vez decidieron comenzar huelgas de hambre con este objetivo. Durante los años 2003 y 2004 se efectuaron tres juicios emblemáticos dentro de la *Nueva Guerra de Arauco*. Uno fue el llamado “Caso de los Loncos”, el segundo “Poluco-Pidenco” y el tercero “Asociación Ilícita Terrorista”. Los dos primeros terminaron con sentencias condenatorias entre 5 a 10 años de presidio para los inculcados, invocando a la Ley Antiterrorista; mientras que el tercero fue absuelto por “falta de méritos”.

La resistencia desde las cárceles, más la clandestinidad política, generaron una profundización en la subjetividad: la ira por las detenciones, los allanamientos y la vida en clandestinidad, se convirtió en un nuevo capital de politización para la CAM. Durante la vida entre la prisión y las sombras, se produjeron nuevos encarcelamientos, siendo los más simbólicos los ocurridos desde fines del año 2006. A partir de esta fecha, comenzó a caer la “Dirección Histórica” de la *Coordinadora*: en septiembre fue el turno del vocero de la organización, José Llanquileo, y en febrero y marzo de 2007 de Héctor Llaitul y José Huenchunao, respectivamente.

Con este ciclo se inició una nueva fase. El reflujo político del periodo pos clandestinidad dio paso a un nuevo ascenso en la conflictividad. La irrupción partió con la huelga de hambre más extensa realizada por los mapuches. Durante 112 días Patricia Troncoso prolongó esta medida extrema. Dentro de ese contexto, el 3 de enero de 2008 cayó muerto en los predios del fundo *Santa Margarita* un nuevo integrante de la CAM, Matías Catrileo, mientras se realizaba una recuperación territorial. Al igual que con Lemun, el efímero MPM se unificó para despedir a su joven miembro y segundo mártir de este nuevo proceso. La muerte de Catrileo provocó una nueva ira dentro de la militancia, unificando las dos tendencias subjetivas que caminaron tanto en la resistencia desde las cárceles como en el “fogueo” de la clandestinidad. Desde ese momento, hubo un ascenso en las reivindicaciones mapuches que denotó una nueva forma de actuar. Ello se hizo explícito desde julio del 2008, cuando las reivindicaciones del predio en la zona de Choque en la VIII Región generaron el paso del *Weichafe* al *Órgano de Resistencia Territorial*, integrado por sus cuadros con mayor formación miliciana. Este fue un nuevo paso cualitativo de la CAM; que al parecer busca

recuperar la antigua división territorial mapuche (gente del mar, gente de la costa, gente de los llanos y gente de la cordillera). De esta manera, en el año del Bicentenario de la Independencia de Chile, plagado del chovinismo oficial, sigue presente la CAM, la más radical organización mapuche de la historia, que ha podido sobrevivir a los dos últimos años, en los que ha conocido una fuerte escalada represiva por parte de los organismos de seguridad del Estado chileno.

Los logros políticos de la *Coordinadora* durante la década del dos mil fueron numerosos. En primer lugar, basada en la herencia política de organizaciones anteriores a ella, como *Ad-Mapu* y el *Consejo de Todas las Tierras*, puso en el centro de gravedad de la cuestión mapuche el problema de la autodeterminación, revolucionando la política mapuche. Parafraseando un legendario texto de los años sesenta, la CAM realizó una “revolución en la revolución” al interior de la epistemología mapuche. Esta revolución silenciosa de toma de conciencia del pueblo mapuche tuvo su efecto perdurable en la recuperación del orgullo mapuche, en el paulatino restablecimiento de la dignidad de los hombres y mujeres mapuches. La expresión más acabada de este nuevo ciclo ha sido la irrupción de nombres indígenas en las nuevas generaciones, desapareciendo el forzado ocultamiento desde su nacimiento, como fue la tónica de las generaciones mapuches anteriores. En tercer lugar, otra consecuencia directa de lo que hemos denominado *la Nueva Guerra de Arauco*, ha sido el inicio de las recuperaciones efectivas de tierras, sea por fuerzas propias o por la injerencia del Estado, el que ha comprado zonas como forma de disminuir la tensión social y política generada por el conflicto. En cuarto lugar, tal vez el logro más notable se encuentra en los aspectos políticos, relacionado con el surgimiento de un nuevo militante, el militante “mapuchista”. Éste sobrepasa las reivindicaciones sólo territoriales, enmarcándolas dentro de un proyecto político estratégico que tiene como objetivo final la “Liberación Nacional Mapuche”. Para llegar a ésta, el militante debe adoptar los principios de un “deber ser” ético propio de su pueblo; además de recuperar aspectos culturales, como la lengua (el *mapudungum*) y la cosmovisión mapuches.

Entre los fracasos de la *Coordinadora* se encuentra uno que es clave: no ha podido generar un Movimiento Político Mapuche amplio, donde converjan todas las representaciones del pueblo mapuche, quedando muchas veces aislado de sus pares y ante el Estado como el único enemigo a desarticular. La represión política, unida a este aislamiento, ha impedido que la *Coordinadora* pueda constituirse en una organización de “masas”, como lo fue hasta la “Operación Paciencia”. Por el contrario, distintos desprendimientos tanto de comunidades como de algunos reconocidos líderes, han mermado su capa-

cidad asociativa. A pesar de esto, durante la encuesta del año 2006, la *Coordinadora Arauco-Malleco* se anotaba un apoyo de confianza del 18%, siendo reconocida por los mapuches con un 33% y siendo abiertamente reivindicada por un 22% de los encuestados (Centro de Estudios Públicos, 2006). Cifras importantes para una organización que sobrevive en el centro de la palestra, que inició una nueva forma de hacer política del pueblo mapuche y que ha sufrido los rigores de este ascenso político, social y cultural.

A manera de conclusión, podemos decir que durante los veinte años en que gobernó la *Concertación de Partidos por la Democracia*, intentó solucionar de manera muy limitada las demandas de las comunidades indígenas, en especial la de los mapuches. Se efectuaron intentos fallidos de lograr un acuerdo que contemplara el reconocimiento de derechos políticos e institucionales que le dieran una amplia representatividad a este pueblo. En la práctica, se terminó aplicando un sistema asistencialista, que comprendió aspectos de superación de la pobreza, aumento de la productividad y ampliación de la red de servicios básicos, que se mostraron insuficientes para subsanar la crónica pobreza del pueblo mapuche. Por ahora, mientras no se solucionen desde raíz los problemas que aquejan a éste, seguramente la conflictividad mapuche se seguirá extendiendo y agudizando. Este sea, tal vez, el gran desafío que tendrá que afrontar la derecha ahora desde el gobierno.

BIBLIOGRAFÍA

- “Antecedentes generales” 2001 en *Weftun* N° 1, Año 1. En <<http://www.nodo50.org/weftun/>>.
- Aranda Bustamante, Gilberto y Salinas, Sergio 2005 “Construcción identitaria en el conflicto Mapuche: ¿reencuentro con el mito del Weichafe?” en *Conflictos de identidades y política internacional* (Santiago: Editores RIL).
- Aravena, Antonio y Núñez, Daniel (eds.) 2009 *El renacer de la huelga obrera en Chile. El movimiento sindical en la primera década del siglo XXI* (Santiago: Ediciones ICAL).
- Aylwin, José y Yañez, Nancy (eds.) 2007 *El Gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”* (Santiago: LOM).
- Aylwin, José 2006 “La Política Indígena de Bachelet: continuidad peligrosa” en <http://www.chilepaismulticultural.cl/www/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=20>.
- Aylwin, José 2007 “La Política del “Nuevo Trato” antecedentes, alcances y limitaciones” en Aylwin, José y Yañez, Nancy (eds.) *El Gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”* (Santiago: LOM).
- Bachelet, Michelle 2008 “Mi gobierno quiere profundizar y perfeccionar la política, y creemos que, además, es momento de

- acelerar el paso. Y hoy es el momento de producir las inflexiones necesarias”, Discurso pronunciado en Santiago. En < www.gobiernodechile.cl/viewEheSocial.aspx?idarticulo=22941&idSeccionPadre>.
- Bengoa, José 2000 *Historia del Pueblo Mapuche. Siglos XIX-XX*. (Santiago: LOM).
- Buendía, Mauricio 2006 “La militarización del territorio mapuche” en *La lucha del Pueblo Mapuche. Selección de 10 años de artículos revista Punto Final* (Santiago: ILWEN Ediciones).
- Cayuqueo, Pedro 2008 “Una demanda histórica. Convenio 169: Entre luces y sombras” (Chile: Agencia Latinoamericana de Información).
- Cifuentes, Ordóñez y Rolando, José Emilio 2000 “Análisis interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT” en Cifuentes, Ordóñez y Rolando, José Emilio (coords.) *Análisis Interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT. IX Jornadas Lascasianas* (México DF: UNAM).
- Centro de Estudios Públicos 2006 “Los mapuches rurales y urbanos hoy. Datos de una encuesta” (Santiago: Centro de Estudios Públicos). En <www.cepchile.cl>.
- Claude, Marcel 2006 *El retorno del Fausto. Ricardo Lagos y la concentración del poder económico*. (Santiago: Ediciones Política y Utopía).
- Coordinadora Arauco-Malleco 2000 “Planteamiento Político-Estratégico de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco”.
- “Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato hacia los Pueblos Indígenas” 2001-2003. En <http://biblioteca.serindigena.org/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=136> acceso 28 de abril de 2010.
- Drake, Paul y Jaksic, Iván (eds.) 1998 *El modelo chileno* (Santiago: LOM).
- El Diario Austral* 1997 (Temuco) 3 de diciembre “¡Son Terroristas! Estrategia subversiva en Lumaco”.
- El Mercurio* 1999 (Santiago) 28 de febrero “Nuestro pequeño Chiapas. 1999: el año de la rebelión Mapuche”.
- El Mercurio* 2001 (Santiago) 4 de febrero “La Intifada Mapuche. Se agrava el levantamiento indígena”.
- El Mercurio* 2004 (Santiago) 22 de agosto “Gobierno avala condena a mapuches”.
- El Siglo* 2002 (Santiago) 13 de diciembre “Entrevista en la clandestinidad a dirigente de la CAM”.
- Fazio, Hugo *et. al.* 2005 *Gobierno de Lagos: balance crítico* (Santiago: LOM).

- Foerster, Roelf 2006 “¿Pactos de sumisión o actos de rebelión? Una aproximación histórica y antropológica a los mapuches de la costa de Arauco, Chile”. Tesis para optar al grado de Doctor en Antropología, Universidad de Chile.
- Gobierno de Chile 2004 “Política de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Derechos Indígenas, Desarrollo con Identidad y Diversidad Cultural” (Santiago: Gobierno de Chile) en <http://www.mideplan.cl/admin/docdescargas/centrodoc/centrodoc_168.pdf>.
- La Huella* 2002 “La Nueva guerra de los mapuches” N° 8.
- “Lemun Renace” 2006 Documental (s/d).
- Marimán, José 1993 “Movimiento Mapuche. Transición Democrática en Chile (1989-1993) ¿Nuevo ciclo reivindicativo mapuche?”. Tesis para optar al título de Profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad de la Frontera, Temuco-Chile.
- Mella, Eduardo 1997 *Los mapuche ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile*. (Santiago: LOM/Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas).
- Pairicán Padilla, Fernando 2009 “La Nueva Guerra de Arauco, la Coordinadora Arauco-Malleco en el Chile de la Concertación (1997-2002)” Tomo I. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Santiago de Chile.
- Pairicán Padilla, Fernando 2009a “La Nueva Guerra de Arauco, la Coordinadora Arauco-Malleco en el Chile de la Concertación (1997-2002)” Tomo II. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Santiago de Chile.
- Pinto, Jorge 2000 *De la inclusión a la exclusión. La formación del estado, la nación y el pueblo mapuche* (Santiago: Universidad de Santiago).
- Seguel, Alfredo 2007 “Crónicas de desencuentros: Gobierno de Ricardo Lagos versus Movimiento Social Mapuche” en Aylwin, José y Yañez, Nancy (eds.) *El Gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”* (Santiago: LOM).
- Stavenhagen, Rodolfo (Relator especial ONU) 2003 “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, Misión a Chile, ONU, Consejo Económico Social.
- The Clinic* 2008 (Santiago) Año 9, N° 253 “Llaitul. El mapuche más temido por las forestales”.
- Wiliem Assies, Willem 2007 “Prólogo” en *El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”: Las paradojas de la democracia chilena* (Santiago: Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas). En <http://www.observatorio.cl/contenidos/naveg/doc9/libro_lagos.pdf>.

FRANKLIN RAMÍREZ GALLEGOS*

**FRAGMENTACIÓN, REFLUJO Y
DESCONCIERTO. MOVIMIENTOS
SOCIALES Y CAMBIO POLÍTICO
EN EL ECUADOR (2000-2010)**

INTRODUCCIÓN

El sinuoso desenvolvimiento del campo de los movimientos sociales en el Ecuador del siglo XXI está marcado por dos momentos contradictorios. Por un lado, la incorporación del movimiento indígena ecuatoriano (MIE) en las arenas de la política instituida y su mismo acceso al poder político (2003) se producen en un momento en que la contundencia de la crisis de legitimidad del sistema de representación (2005) llega al punto de canibalizar a todos los actores que habían orbitado en su torno, incluso aquellos que, como el MIE, operaron, desde dentro y desde fuera del sistema, en procura de su transformación radical. La pérdida de la centralidad política que el movimiento indígena conquistara a lo largo de los años noventa y el reflujo de la movilización social aparecerían como correlatos de este momento.

Por otro lado, la estructura de oportunidades abiertas por la misma crisis del sistema político y la ilegitimidad de los partidos, permitió la emergencia y consolidación de un liderazgo de vocación transformacional –Rafael Correa es electo Presidente a fines del 2006– que, aún si ocupa prácticamente el mismo registro discursivo abierto por

* Profesor investigador de FLACSO-Ecuador.

el MIE y sus aliados durante los años noventa, no integra a gran parte de dichas dinámicas en el centro del emergente bloque de articulaciones políticas que hoy en día impulsan un proceso de cambio en el país. Entre las coincidencias programáticas con dicho bloque y la relativa subsidiaridad en la conducción del tránsito post-neoliberal –cuestiones visibles en el transcurso de la Asamblea Nacional Constituyente (2007-2008)– las organizaciones sociales han resentido un profundo desconcierto y desacomodo en sus alineamientos, programas y formas de acción colectiva.

Entre uno y otro momento se dibujó un breve interregno de una emergente movilización social (2005-2006) que, sin sólidas estructuras organizativas, tomó la plaza pública en nombre de un discurso que combinaba la utopía de refundar la “República sin partidos” con la más sosegada voluntad de recomponer los fundamentos éticos de la democracia. Menos ruidoso pero más heterogéneo y urbano que en décadas pasadas, este activo segmento de ciudadanos indignados solo creía encontrar en su seno las reservas morales necesarias para transformar la política instituida. Nunca fue suficiente. Las demandas de reforma política de la impaciente *multitud anti-partidaria* quedaron represadas en medio del bloqueo de los partidos para abrir cualquier escenario de cambio que no fuese plenamente controlado desde los propios centros del sistema político. Se ampliaron entonces las opciones para que, en lo inmediato, ganen eco las agendas de cambio político radical.

La emergencia de Correa y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (2007) quebraron el dominio de las fuerzas del *establishment*, profundizaron las perspectivas para la despartidización del orden político, y abrieron una fase post-neoliberal de organización del Estado y la economía. Al interior de estas coordenadas, las fuerzas progresistas y populares del país puján –muchas veces entre sí– por fijar los contenidos específicos de los órdenes alternos. La derecha y los sectores neoconservadores, muy disminuidos electoralmente, apenas si han alcanzado a reconducir dicho campo de debate.

La debilidad de las elites tradicionales se prolonga desde mediados de los noventa¹. Tras el aparente consenso “modernizador”, el reordenamiento neoliberal no consiguió desactivar, y más bien estimuló, entre las fracciones dominantes, fuertes disputas por la orientación de

1 El enjuiciamiento político (1996) del ex presidente y empresario conservador León Febres Cordero –uno de los políticos más influyentes del país a su ex ministro, co-ideario y para entonces vice-presidente de la República, Alberto Dahik, inició un período de intenso faccionalismo intra-elitario que impediría, por ejemplo, la privatización de las empresas telefónicas y eléctricas. Ver “Modernización: diez años de frustraciones y pocos resultados” en *HOY, Blanco y Negro* 1° de junio de 2002.

las privatizaciones y el control de segmentos estratégicos del mercado. Así, incluso si la derecha controlaba los espacios de representación política –dominó la arena legislativa entre 1990 y 2006– no conseguía consistentes niveles de acuerdo político, entre los estratos y capas a los que representaba, para instaurar formas estables y coherentes de gobierno con capacidad de irradiar y ser reconocidas por el resto de la sociedad. Dicha atrofia hegemónica (Zavaleta Mercado, 2008) exacerbó la turbulencia política, ralentizó el avance del neoliberalismo, y extendió las oportunidades para que diversas organizaciones sociales desafiaran reiteradamente el *statu quo*.

Y es que desde el primer levantamiento indígena de 1990 y, sobre todo, luego de tres revueltas cuyo desenlace fue un derrocamiento presidencial (1997, 2000, 2005), la batalla entre fuerzas consolidadas –los partidos políticos que dominaron la escena democrática desde el retorno en 1979– y actores emergentes –nuevas organizaciones y movimientos políticos y sociales– se colocó como uno de los *diferendos constitutivos* de la democracia ecuatoriana. No se trataba de simples episodios de ingobernabilidad o de la fragilidad institucional de la arquitectura democrática, como una cierta ciencia política conservadora lo ha interpretado, sino de la vigencia de un ciclo de desacato y asedio social a las figuras dominantes del ordenamiento político (Ramírez Gallegos, 2005). Dicho diferendo ha estado en la base de las líneas de cambio político a lo largo de la última década.

Para Andrade, en efecto, durante este período se produce una “democratización de la democracia” (Andrade, 2005: 61) en la medida en que nuevos movimientos y actores sociales ensayan una expansión de la esfera pública desde la cual pasan a disputar a los políticos el monopolio de las funciones de agregación de intereses y de representación mientras –habría que agregar– incrementan su dinamismo en las arenas extraparlamentarias. La movilización indígena y la creación en 1995 del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PK)² –brazo electoral del MIE– supusieron así el desplazamiento de los partidos tradicionales de las administraciones locales, en zonas de predominio étnico, y abrieron paso a novedosas formas participativas de gestión del poder local.

La tensión entre partidos y nuevos actores sociales colocó, progresivamente, a las propias reglas del juego democrático en el centro de la contienda política: en una década se realizaron, en efecto, dos

2 En 1994, por medio de una Consulta popular, se aprobó la posibilidad de que ciudadanos no pertenecientes a los partidos políticos (los “independientes”) puedan postularse como candidatos a cualquier elección popular. PK sería uno de los primeros y más exitosos movimientos en aprovechar tal apertura institucional.

Asambleas Constituyentes activamente promovidas por movimientos sociales, fuerzas de izquierdas, y el conjunto del campo popular. La sucesiva reconfiguración de la comunidad política evidenciaba los problemas de partidos y elites dominantes para retener el control global de las instituciones políticas. Aún así, una coalición derechista dominó la Convención de 1998. Se consagraron, entonces, constitucionalmente el modelo privatista y la agenda neoliberal. En medio de una débil representación de las izquierdas, los principales movimientos sociales reivindicaron como sus conquistas la extensión de los derechos sociales, el reconocimiento de los derechos colectivos y la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana.

De la mano de la popularidad del presidente Correa las izquierdas alcanzaron el pleno control de la Convención de 2007-2008. Aún en medio del declive de la movilización social, la nueva Carta Magna constitucionalizó la salida del neoliberalismo, amplió aún más el espectro de los derechos, consagró la plurinacionalidad del Estado, innovó en materia de derechos ambientales, extendió radicalmente los espacios de participación popular y, sobre todo, llevó más lejos que nunca las demandas por la des-partidización del orden político. Descontando la ratificación del presidencialismo –que la izquierda combatió diez años atrás–, el predominio de este conjunto de postulados expresaba que el conflicto social y la lucha política que antecedieron a la Convención consiguieron delinear un horizonte de comprensión común –que no una ideología similar– para vivir en, hablar de, y actuar sobre órdenes sociales caracterizados por específicos modos de dominación. Aún en este contexto, las disputas entre el ejecutivo, la Asamblea y los movimientos sociales no fueron menores. La Constituyente consiguió no obstante integrarlas en su seno generando una fluida dinámica de interlocución y reconocimiento político entre las fuerzas progresistas.

Es, precisamente, la lógica del reconocimiento la que habría entrado en crisis en la transición post-constituyente (2009). Por un lado, la sobrecarga del poder legislativo, obligado constitucionalmente a aprobar más de once leyes fundamentales en un año, desincentiva cualquier debate público robusto dentro y fuera de las arenas parlamentarias. Por otro, la sólida implantación del liderazgo presidencial, apuntalado en un carrusel de éxitos electorales, acelera las tendencias gubernativas a subestimar el lugar de la acción colectiva autónoma en el proceso democrático. Los espacios de interpelación política entre las organizaciones sociales y el bloque en el poder tienden, así, a jugar un rol periférico en el tránsito institucional ecuatoriano. Ello ha redundado, más allá de la política redistributiva del régimen, en escenarios de confrontación que fragmentan el campo progresista y abren

interrogantes sobre la consistencia del proceso de cambio que lidera Rafael Correa. La emergencia de nuevos terrenos de movilización –la conflictividad ambiental– anuncia, a su vez, el sentido de alguna de las contradicciones centrales de la ruta post-neoliberal.

El presente texto escarba, en suma, en las trayectorias de la acción colectiva democrática a lo largo de la última década a la luz de los factores del proceso político que, en el presente, han determinado un declive de su visibilidad e influencia en la disputa por el cambio y una cierta transformación de sus agendas de lucha.

TAN CERCA Y TAN LEJOS (2000-2005)

Para inicios del siglo XXI, el movimiento indígena –y, en particular, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)– se había colocado como el eje articulador del conjunto de organizaciones populares y fuerzas de izquierdas en el país. La tortuosa modernización neoliberal, encaminada en medio de un intenso faccionalismo entre los sectores dominantes, había ampliado la estructura de oportunidad para la consolidación del MIE y para la extensión de su programa político más allá de las reivindicaciones étnicas. Su activismo anti-neoliberal hizo de la agenda india una compleja amalgama de demandas identitarias, ciudadanas y clasistas. Ello facilitó cierta unidad de acción con viejas y nuevas organizaciones sociales y militantes de izquierdas.

Precisamente, luego de diversos intentos, la creación de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) en 1995 apareció como el acumulado de diversas formas de lucha que buscaban nuevas vías de coordinación política distantes de la “forma-partido”. Además de la CONAIE, la CMS estaba integrada por la Confederación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC), el sindicato público aglutinado en la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPEC), movimientos de pobladores urbanos, y organizaciones de mujeres y jóvenes. Se trataba del más ambicioso intento de articulación de la nueva corriente de organizaciones sociales. Su dinámica organizativa, más descentrada y compleja, difería de otras instancias de coordinación controladas por la vieja izquierda partidaria: el Frente Popular, que agrupa al profesorado público y a los gremios estudiantiles y universitarios, bajo la tutela del Movimiento Popular Democrático (MPD, línea pro-china); y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que articula a centrales sindicales y ha expresado históricamente a la izquierda socialista y comunista.

El protagonismo político de la CONAIE y de la CMS en la resistencia al ajuste neoliberal afirmó la opción de las organizaciones indígenas para crear su propia estructura de participación política. Las

demandas de plurinacionalidad, autodeterminación y territorialidad, tres ejes del Proyecto de la CONAIE (1994), exigían reformas que debían ser procesadas desde dentro del sistema político. El crecimiento y liderazgo del MIE hacían inviable que pudiera continuar delegándose en partidos afines la tarea de avanzar en tales reformas: para 1995 se creó el Pachakutik. No era entonces –como ha planteado C. Offe en su modelo sobre la institucionalización de los movimientos sociales (1992)– el agotamiento de la estrategia de confrontación lo que impulsó al MIE a transformar su naturaleza organizativa. Al contrario, la lucha extraparlamentaria había hecho del movimiento un actor político exitoso que empezaba a generar adhesiones y a representar intereses que iban más allá de su base original.

La consistencia del MIE y sus aliados se puso a prueba en la Asamblea Constituyente de 1998 convocada luego del derrocamiento presidencial de Abdalá Bucaram (febrero 1997). El cónclave enfrentó a dos agendas. Una alianza de derecha –liderada por el Partido Social Cristiano (PSC)– buscaba superar los escollos que contenía la Constitución de 1978 para dar viabilidad a la privatización de las áreas estratégicas, la consolidación de la agenda ortodoxa, y la profundización del presidencialismo. A esta perspectiva se opusieron, con una representación minoritaria, el movimiento indígena, la izquierda, y prácticamente todas las organizaciones sociales con una propuesta basada en la ampliación de derechos ciudadanos y en la defensa de la acción estatal. La Constitución de 1998 legitimó, finalmente, la agenda neoliberal³ y amplió el campo de los derechos⁴.

Para el MIE, los resultados fueron ambivalentes: si bien la Asamblea no declaró la plurinacionalidad del Estado, sí reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Su participación en la Asamblea reflejaba, en cualquier caso, algo más que la afirmación electoral de PK: el movimiento parecía definitivamente integrado al sistema político. Ello debía, a futuro, incentivar su rol como un actor político interesado en mantener el *statu quo* y en aprovechar las recientes innovaciones institucionales (Andrade, 2005). La “normalización” de la acción colectiva indígena estaría, sin embargo, lejos de llegar.

3 Se eliminó la noción de áreas estratégicas y de las formas de propiedad estatal y comunitaria y se dio paso a “una propiedad nominal sobre los recursos naturales no renovables cuya exploración y explotación racional podrán ser llevadas cabo por empresas públicas, mixtas o privadas” (Moreano, 1998).

4 Se ampliaron los derechos y garantías ciudadanas de mujeres, niños, jóvenes, ambientalistas, consumidores, *gay*, personas de la tercera edad y otros grupos sociales.

COALICIONES INDÍGENA-MILITARES

El nuevo gobierno demócrata-cristiano (1998-2000) de Jamil Mahuad se sostenía en el mayoritario apoyo legislativo de los dos más importantes partidos de la derecha ecuatoriana, el PSC y la Democracia Popular (DP), a la que pertenecía el presidente. Tales partidos controlaron la Asamblea Constituyente de 1998 y aspiraban a concluir el ciclo de reformas neoliberales y a devolver la estabilidad política al país. Sus expectativas fueron rápidamente frustradas.

El plan económico de Mahuad, avalado por el FMI, se centró en enfrentar la fragilidad sistémica del sector financiero y la debilidad fiscal. El Estado se embarcó así en una operación de “salvataje” a las instituciones bancarias que, para fines de 1999, le costaba al país el 24% de su PIB (Romero, 1999). La creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, cuyo fin era administrar los bancos quebrados por el uso indebido de los depósitos, sacó a la luz pública todo un engranaje de gestión bancaria ilegal y la sólida implantación de acuerdos oligárquico-mafiosos en la política económica del país. La desregulación financiera y la complicidad de las autoridades con las elites bancarias degeneraron en la extensión de la crisis a un número cada vez mayor de instituciones. En marzo de 1999, Mahuad decreta un feriado bancario y el congelamiento de los ahorros ciudadanos. Aún así, el Banco Central continuaba en su política de intensa emisión monetaria para proteger el sistema financiero. El gobierno asumió que la paralización de la inversión, el cierre de empresas y el crecimiento del desempleo⁵ podían ser manejados como males menores. Una vez más, como a lo largo del proceso de ajuste, se priorizaba la estabilización financiera por sobre la reactivación productiva. Era la peor crisis económica del país desde su proclamación republicana⁶ (Ramírez Gallegos, 2000).

El país entró en una nueva espiral de conflicto. La CONAIE –liderada por el dirigente amazónico Antonio Vargas– y sus aliados urbanos conseguirían que el gobierno reestablezca el impuesto a la renta –suspendido a inicios del mandato de Mahuad–, imponga un tributo especial a los vehículos de lujo, y reconsidere la suspensión de subsidios. Para el PSC se trataba de una excesiva concesión a la izquierda: rompió entonces con el gobierno. El faccionalismo intra-elitario proseguía. Las organizaciones indígenas invocaban, por su parte, la creación de un poder paralelo al del Congreso –los “Parlamentos de los Pueblos”–, la susti-

5 En 1999 se cerraron 2.500 empresas que incluían sectores dinámicos como el bananero, el camaronero y el pesquero. El desempleo abierto pasó así de 9,2% en marzo de 1998 a 17% en julio de 1999 (Romero, 1999).

6 La década cerraba con un promedio de la tasa de crecimiento anual *per capita* igual a 0% (SIISE 3.0).

tución del poder ejecutivo por un gobierno revolucionario y la designación popular de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia⁷. Amenazado “desde arriba” y “desde abajo”, la decisión de Mahuad de dolarizar la economía emergía más como una suerte de salvavidas político que como resultado de algún tipo de resolución técnica a la crisis: la dolarización rearticuló, en efecto, al empresariado, la banca y al conjunto de la derecha.

Mientras los Parlamentos de los Pueblos se instalaban en diversas provincias, ciertos dirigentes de la CONAIE –sin conocimiento pleno de PK y del resto de organizaciones indígenas– mantenían reuniones con mandos medios del ejército para plantear la disolución de los tres poderes del Estado. En tales conciliábulos incidieron dirigentes urbanos de la CMS muy afines a ideas “putchistas” sobre el cambio político. Los nexos entre el ejército, los movimientos sociales y partidos de izquierda no eran nuevos. Ciertas convergencias anti-privatizadoras⁸ y la presencia militar en programas de desarrollo rural los habían acercado. Coincidían, además, en la defensa de las políticas desarrollistas de los setentas, la condena al sistema de partidos, y el rechazo al empobrecimiento generalizado.

Los indígenas llegaron a la capital de la República (Quito), sede de los tres poderes del Estado, la noche del jueves 20 de enero y cercaron el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. La dimensión de la movilización era mucho más reducida que en anteriores ocasiones. Aún así, en la mañana del 21 de enero del 2000 cientos de indígenas ingresaron al Parlamento de la mano del ejército. El derrocamiento presidencial se consumó en horas de la noche. El coronel Lucio Gutiérrez, el presidente de la CONAIE Antonio Vargas, y el magistrado guayaquileño Carlos Solórzano, fueron los triunviros de la “Junta de Salvación Cívico Militar” que derrocó a Mahuad. La rebelión terminó en la madrugada del 22 de enero cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desconoció a la Junta y devolvió el poder al vicepresidente Gustavo Noboa en una secuencia de hechos cuyo trasfondo conspirativo aún no ha sido aclarado.

Para la izquierda tradicional, las fracciones “putchistas” de la CMS, y ciertos dirigentes indígenas, la insubordinación era la única forma de

7 Ver, “Levantamiento de los Pueblos crece” en *CONAIE, Boletín de Prensa*, 19 de enero 2000.

8 Entre 1992-1996 se desarrollaron acuerdos, en los comités directivos de ciertas empresas públicas, entre sindicatos, cuyos dirigentes formaban parte de la CMS, movimientos sociales, y militares en contra de los proyectos de privatización. En el Ecuador los militares han sido accionistas o propietarios de algunas de tales empresas (Ramírez Gallegos, 2002).

alcanzar el control estatal y el episodio de enero no era, en absoluto, un error estratégico. Otros sectores consideraban, al contrario, que haber ido “más allá” de las instituciones ponía en riesgo el prestigio del movimiento como fuerza democratizadora y restringía su campo de articulaciones. La acción conspirativa y poco consensuada de Vargas y sus aliados explicaba, de hecho, la débil movilización social (Barrera, 2004). Unos y otros, de todos modos, no hablaron nunca de “golpe de estado” y sí de rebelión popular. Los insubordinados habían conseguido así “reintroducir en el lenguaje político nacional la figura de la revolución como transformación radical del orden político” (Andrade, 2005: 97). Mientras que al interior del movimiento se incrementaban las fricciones, las encuestas revelaban que el 70% de la población estaba de acuerdo con el derrocamiento. En las elecciones locales de mayo del 2000 el apoyo electoral a PK creció. La viabilidad de la estrategia dual del MIE parecía confirmarse (Ramírez Gallegos, 2008).

DEL LEVANTAMIENTO INDÍGENA A LA EXPERIENCIA GUBERNATIVA

Gustavo Noboa ratificó la dolarización. La movida insurreccional apenas desacomodó por unas horas los nexos entre el poder político y el poder económico. En el contexto de la continuidad de la agenda ortodoxa, el nuevo gobierno elevó, en diciembre del 2000, los precios de los transportes públicos, de los combustibles y del gas de uso doméstico. No fue una decisión oportuna: la defensa del precio del gas era, a esas alturas, todo un símbolo de la resistencia indígena a las políticas de ajuste.

La preparación del nuevo levantamiento permitió bajar las tensiones internas. Para las acciones de enero-febrero 2001 la CONAIE alcanzó un acuerdo con todos los frentes y organizaciones indígenas y campesinas, mientras se distanciaba de los sectores urbanos concentrados en la CMS. Paradójicamente, el eje de la plataforma de lucha era marcadamente clasista y buscaba el respaldo, bajo el lema “nada sólo para los indios”, de los sectores de medianos y bajos recursos económicos, independientemente de su adscripción étnica⁹. La movilización había sido preparada –a diferencia de aquella de enero del 2000– junto con las comunidades, organizaciones locales y autoridades indígenas electas. Ello explicaba su capacidad para reactivar la red organizativa del MIE en todo el territorio (Chiriboga, 2001). La fuerte represión gubernamental incrementó el malestar indígena y ge-

9 Un destacado intelectual indígena planteó, sin embargo, que si bien comprendía las razones coyunturales de la agenda “no india”, había que tener cuidado con una inflexión programática que olvide el proyecto histórico de la plurinacionalidad (Saint-Upéry, 2001: 57).

neró una importante adhesión ciudadana con los movilizad^{os}. El peso de la opinión pública y el mismo incremento de la violencia forzaron al gobierno y al MIE a acordar una agenda que reducía el aumento del precio del gas y reabría la discusión sobre otras medidas económicas impopulares (Barrera, 2001).

De cara a las elecciones generales del 2002 el MIE había recuperado parte de su capital político. Las fricciones internas, sin embargo, no parecían cesar. En el seno de la CONAIE, las tendencias más “indigenistas” y “pragmáticas” ganaron en protagonismo. La plena implicación de dirigentes e intelectuales indígenas en la gestión de cuantiosos proyectos de desarrollo financiados por el Banco Mundial, a cuenta de la deuda externa del Estado, facilitó la consolidación de dichas tendencias¹⁰. El II Congreso de PK (09-2001), mientras tanto, expulsó a altos representantes de la CMS. La incidencia de la Coordinadora dentro del movimiento político disminuiría, en adelante, de modo considerable. Dirigentes históricos de las organizaciones indígenas y mestizos de izquierdas -ligados a los procesos de lucha por la legalización de asentamientos urbanos y la vivienda popular- quedaron al frente de PK. Sus diferencias con la nueva dirigencia de la CONAIE elevarían, en el futuro inmediato, el nivel de turbulencia a la hora de las decisiones electorales.

La postulación unilateral del ex presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, como candidato presidencial -bajo el apoyo de las organizaciones amazónicas y de la Federación de Indios Evangélicos (FEINE)- evidenciaba la fragilidad articuladora de la CONAIE y la dejaba en una difícil situación para las definiciones electorales. El planteamiento de Vargas y la creación de Amauta Jatari -brazo electoral de los evangélicos- parecían materializar la vieja aspiración amazónica de crear un partido exclusivamente indio. Una parte importante de los indígenas se distanciaba así de las corrientes más clasistas del movimiento.

Para evitar una mayor fragmentación, la CONAIE se abstuvo de postular un candidato indígena en las presidenciales de 2002. Dicha decisión llegó luego de que PK había resuelto sostener la candidatura de Auki Tituaña -alcalde indígena que ganó prestigio al promover la democracia participativa local. PK buscó entonces la formación de un polo electoral con fuerzas afines. Con un marco de alternativas limi-

10 Se trataba del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE). Para Bretón (2008) dicho proyecto contribuyó a acelerar la fragmentación entre indígenas y campesinos. PRODEPINE -icono de la política neoliberal de desarrollo para los pueblos indígenas- fue implementado con la participación de las elites locales y nacionales de las organizaciones étnicas. El Estado no disponía de ningún mecanismo de fiscalización sobre el proyecto.

tadas, luego de frustradas conversaciones con social-demócratas y socialistas, el movimiento llegó a un acuerdo con Lucio Gutiérrez (Partido Sociedad Patriótica, PSP), el coronel que lideró el derrocamiento de Mahuad. La coalición indígena-militar incluía al MPD y adquiriría así un perfil izquierdista. Gutiérrez había sido invitado al Foro Social Mundial de Porto Alegre y era comparado con el liderazgo de Hugo Chávez en Venezuela. Fidel Castro asistió a su posesión presidencial. Para PK se trataba, sin embargo, de una victoria inesperada: el comité ejecutivo de aquel entonces ha reconocido que con la alianza se buscaba, sobre todo, fortalecer la presencia de movimiento a nivel legislativo (Barrera, 2004). La emergencia de un *outsider*, de rasgos cholomestizos, que se pronunciaba contra la clase política los catapultó, no obstante, al ejercicio del poder. No se había leído adecuadamente el desgaste de los partidos dominantes y la imposibilidad de las elites de conciliar un programa político creíble y de proyección nacional.

Tales sectores veían con asombro y rechazo cómo indios, militares nacionalistas y militantes de izquierda llegaban al poder. En el resto del campo progresista –aún cuando se veía con reservas la alianza con ex militares– se avizoraba, al menos, un cierto recambio en el modelo económico. Las expectativas se derrumbaron rápidamente. Gutiérrez formó un gabinete que dejaba en un rol secundario a PK: optó más bien por personajes cercanos a su círculo militar y a sectores bancarios y productivos en los ministerios claves. Sólo Nina Pacari y Luis Macas –dirigentes históricos del MIE– fueron designados, respectivamente, como Canciller y Ministro de Agricultura. Por otro lado, las decisiones económicas, acordadas con el FMI, continuaron con la política fiscal ortodoxa. Gutiérrez optó, además, por alinear al país con los Estados Unidos en su política anti-narcóticos derivada del Plan Colombia. En cuanto al estilo de su gestión, el nuevo gobierno asumió rápidamente rasgos patrimonialistas, autoritarios y clientelares. Las denuncias de corrupción y nepotismo crecían rápidamente.

Las críticas a las decisiones presidenciales de parte de los funcionarios gubernamentales de PK aumentaban cada día. Tal tensión carecía de instancias políticas de procesamiento. Los límites del presidencialismo para soportar gobiernos de coalición se hacían más latentes a medida que Gutiérrez se encerraba en su círculo íntimo. Por lo demás, mientras ciertas organizaciones amazónicas y evangélicas, e incluso algunas filiales de la CONAIE, se alineaban con el régimen, otros sectores más doctrinarios e izquierdistas pedían una ruptura inmediata de la coalición. Dichas divergencias obligaron a un largo proceso de deliberación interna que el presidente utilizó para reforzar su política de penetración en las comunidades indígenas. Varios dirigentes –Antonio Vargas entre los más destacados– ocuparon puestos claves en

órganos estatales. Se creó, además, una federación india encargada de organizar las visitas de Gutiérrez y “sus” ministros a las distintas comunidades. Las organizaciones indígenas apenas si pusieron límites a la hora de entrar en nexos clientelares con el régimen. La capacidad de movilización del movimiento había sido neutralizada. *La estrategia dual entraba en crisis*. Los vínculos entre el PSP y dirigentes indígenas aún pueden advertirse hasta el día de hoy.

Mientras, la decisión del MPD de romper con el gobierno dejaba a la alianza al filo del abismo. El episodio final llegó cuando el Parlamento rechazó, con los votos de PK, un proyecto de ley acordado con el FMI¹¹. El presidente destituyó entonces a los funcionarios de PK. Inmediatamente la CONAIE desconoció a Gutiérrez y Pachakutik puso fin a su presencia gubernamental. La alianza había durado apenas siete meses. Aunque la decisión presidencial de forzar el rompimiento de la coalición permitió una salida relativamente cohesionada del movimiento, las relaciones internas quedaron en extremo fracturadas: se ahondaron las tensiones entre la CONAIE y PK, entre indígenas y mestizos, y entre organizaciones serranas y amazónicas. La lectura oficial responsabilizaba a los miembros blanco-mestizos de PK de la ruptura con el gobierno y colocaba a los indígenas como sus víctimas. Aunque el discurso presidencial abrigaba una óptica racista y proseguía en sus intenciones de fragmentar al movimiento, evidenciaba los problemas internos que aquel había enfrentado a lo largo, y aún antes, de la coalición (Ramírez Gallegos, 2003).

CRISIS POLÍTICA Y DESCOMPOSICIÓN ORGANIZATIVA

Desde su creación, en PK han convivido presiones “institucionalizantes” y pulsiones “movimientistas” que no han resuelto su ambigüedad constitutiva. ¿Movimiento de izquierda plurinacional de nuevo tipo, o simple brazo político del movimiento social? En los días de gobierno, esta indiferenciación institucional restringió el margen de maniobra de PK en su trabajo de articulación política y de acción parlamentaria –toda vez que debía pasar siempre por los filtros del movimiento social–, facilitó la penetración gubernamental de unas bases sociales que no se encontraban (ya) fácilmente disponibles para la movilización social y, en suma, aceleró el desgaste del conjunto del movimiento en medio de una crisis política que pulverizó la legitimidad de todos los actores políticos.

El frustrado paso por el gobierno modificó, en efecto, la percepción ciudadana sobre el MIE. Los indígenas pasaron a ser vistos como responsables del ascenso de un gobierno que no solo reiteró en las tra-

11 El proyecto establecía el aumento de las horas de trabajo de 40 a 48; facilidades para la remoción de empleados públicos, y el congelamiento de los salarios.

dicionales formas de acción política sino que frustró las expectativas de desmontar al neoliberalismo. La alianza con Gutiérrez lucía, para buena parte de la izquierda, como una decisión aventurada que había sobrestimado las capacidades políticas y organizativas del movimiento. Hacia el interior del MIE, mientras tanto, ganaba terreno el discurso “etno-radical”: los problemas del movimiento se originaban en el abandono de su agenda étnica y del proyecto de construcción del estado plurinacional. El protagonismo del brazo electoral, se insistía, había desviado los objetivos del movimiento social (Dávalos, 2004). Las tesis *movimientistas e indigenistas* salían a luz desde las mismas estructuras de decisión política del movimiento y reforzaban el conflicto entre indígenas y mestizos. El argumento sobre la autenticidad étnica empezó a jugar más que nunca como una espada de Damocles sobre las opciones más pluralistas del movimiento. El “cierre étnico” tomó forma en la configuración de los nuevos cuerpos representativos de la CONAIE y de PK. La principal organización indígena designó nuevamente a Luis Macas como su coordinador. Su programa enfatizaba en la necesidad de retomar el proyecto de las autonomías territoriales y de volver al trabajo en las comunidades. La CONAIE afirmaba, además, su interés de recuperar el control de PK. El Comité Ejecutivo que había coordinado al movimiento durante su paso por el gobierno, comandado por mestizos de izquierda, fue relegado a un segundo plano.

Mientras tanto, y ya desde la oposición, el bloque legislativo de PK estableció un acuerdo con los dos más grandes partidos del país, el PSC y la Izquierda Democrática (ID, socialdemócratas), en un intento por enjuiciar al Presidente por uso indebido de fondos públicos. Su acercamiento a tales partidos, considerados los “dueños del poder”, profundizaba el desprestigio de PK. La contraofensiva de Gutiérrez supuso captar la mayoría legislativa –en parte a través de la compra de diputados– para tomar el control de la Corte Suprema de Justicia. Una verdadera “guerra sucia partidaria” se desarrolló desde entonces en el poder legislativo en procura de estabilizar o recomponer la correlación de fuerzas que había permitido el descalabro de la Justicia y la búsqueda de control de otras instituciones públicas. Amenazas, sobornos, difamación, y golpes bajos resquebrajan las mínimas garantías para el ejercicio de la soberanía popular. Nunca antes el *modus operandi* del conjunto de la clase política había quedado tan expuesto a la luz pública. En ese escenario, una nueva movilización social volvía a irrumpir en la escena política para contestar, no solo la intervención presidencial en la justicia, sino la legitimidad del conjunto de los poderes constituidos.

Durante los diez días de protesta social que antecedieron al derrocamiento de Gutiérrez, en abril del 2005, el MIE *no estuvo en la*

calle. Bajo la consigna “que se vayan todos” –escuchada también en las movilizaciones argentinas del 2001– miles de ciudadanos bailaron, cantaron, hicieron sonar sus cacerolas y formaron asambleas como inéditos repertorios contenciosos. A diferencia tanto de la destitución de Bucaram en 1997, cuando las movilizaciones fueron encabezadas por los partidos y movimientos sociales –sobre todo la CONAIE–, como del derrocamiento de Mahuad, cuando los indígenas se enlazaron con mandos medios del ejército, las jornadas de abril 2005 fueron resultado del *desborde ciudadano* a la tutela partidista y al comando de cualquier estructura organizativa. El tercer derrocamiento presidencial fue, así, fruto de un conjunto de demostraciones sin ninguna dirección política pre-estructurada. Jóvenes y amplios segmentos de las clases medias urbanas componían el núcleo central de la revuelta. Era la primera vez, desde el levantamiento indígena de 1990, que la movilización social no giraban en torno a, o no estaban liderada por, el MIE. Su lugar fue ocupado por una pluralidad de inexpertos marchantes y de neófitas iniciativas colectivas: un radical anti-partidismo acercaba a oleadas de heterogéneos manifestantes que, sin densas redes organizativas previas, lograron altos niveles de coordinación *mientras se movilizaban*¹².

La malograda experiencia de PK en el ejercicio del poder y la nula participación del MIE en las acciones que propiciaron la caída de Gutiérrez señalaban el *fin de un ciclo* de alto protagonismo político e intensa movilización indígena. El descentramiento de la hegemonía indígena en el campo progresista ecuatoriano parecía haber llegado. Sin su impulso, el conjunto de la conflictividad social entraba en declive (ver Gráfico 1). No estaban en juego la descomposición del movimiento –la CONAIE promovió una contundente movilización contra la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en marzo de 2006– o la pérdida de vigencia de su agenda política, sino simplemente que sus prácticas políticas y su discurso no alcanzaban ya a interpelar a una multiplicidad de nuevos actores disidentes u opositores al orden vigente. En medio de su pérdida de prestigio social, tampoco parecía ya ser de su interés procurar la articulación con tales nuevos desafíos ciudadanos al sistema político.

12 Internet y teléfono móvil contribuyeron a la convergencia de sectores del todo dispares. Howard Rheingold (2005) analiza las movilizaciones previas a la destitución del presidente filipino J. Estrada en 2001, y acuña la expresión “multitudes inteligentes” para referirse a la centralidad de las tecnologías de la comunicación en la coordinación de las redes de acción colectiva. Tilly (2005) advierte, sin embargo, contra los peligros de un determinismo tecnológico en el análisis de los cambios en los movimientos sociales.

En diciembre del 2005 se proclamó la definitiva salida de PK de un importante grupo de dirigentes urbanos y organizaciones sociales que se contaban entre sus fundadores. Tales sectores defendían la tesis sobre la diferenciación institucional entre el movimiento social y la dinámica político-electoral, y sobre todo la necesidad de una amplia política de alianzas. Sin su contingente, PK perdía una base organizativa urbana de larga experiencia militante. Se reducían así las opciones de sostener los nexos entre lo clasista y lo étnico al interior del movimiento. Quedaba muy poco ya del impulso articulador que inspiró la emergencia de la Coordinadora de Movimientos Sociales.

Las tendencias hacia la fragmentación y el repliegue étnico de las organizaciones indígenas, hacia un progresivo distanciamiento entre éstas y las menos consistentes dinámicas asociativas de los sectores urbanos, y hacia la pérdida de credibilidad e influencia del conjunto de las organizaciones sociales que habían reconfigurado el espacio público democrático y desafiado el poder de las élites desde los años noventa se colocaban, en suma, como el complejo balance de su plena inmersión en las arenas de una política instituida en plena descomposición y crisis de legitimidad.

EL BREVE INTERREGNO DE LA MULTITUD (2005-2006)

La protesta social de abril del 2005 no cesó con la caída de Gutiérrez. Los alrededores de la Casa de gobierno tampoco concentraron todas las demostraciones. El tiempo y el espacio de la revuelta plasmaron notables diferencias con respecto a los dos anteriores derrocamientos: había ya, y muy probablemente gracias a éstos últimos, una comprensión más sofisticada sobre la mecánica del poder. Las sedes del Parlamento Nacional, de la representación diplomática de los países (Brasil, Estados Unidos) y organizaciones (OEA) concernidas en el desenlace de la crisis, las viviendas particulares de diversos políticos, entre otros lugares, vieron repetirse las protestas iniciadas con anterioridad. Las asambleas, que coordinaron en diversos puntos las acciones de protesta, prosiguieron también con sus dinámicas deliberativas luego de la caída del régimen. Otras se constituyeron en las semanas sucesivas. Hombres y mujeres, que se inauguraron a la vida pública en esos días, continuaron movilizados. Así, aún cuando se trataba de iniciativas moleculares, localizadas sobre todo en la ciudad de Quito y, dentro de ella, en ciertos estratos y espacios sociales, no se produjo –como en anteriores derrocamientos– un inmediato repliegue de la ciudadanía movilizadora a la normalidad de lo privado.

Algunos han interpretado tal dinámica como expresión de la actividad de un movimiento social: el “movimiento de abril” o el “movi-

miento forajido”¹³. Tales tesis sobrestiman la convergencia *en la calle* de ciudadanos y organizaciones con heterogéneas procedencias y filiaciones políticas e ideológicas, y tienden a dotarlos de un horizonte político común. Desde un inicio de las acciones contenciosas, por el contrario, las razones, intereses y proyecciones de los manifestantes fueron por vías disímiles y divergentes¹⁴. La identidad colectiva que, en el curso de la protesta, supo otorgar el mismo ex presidente a la multitud indignada cuando la bautizó como “forajida” fue disolviéndose y contestándose mientras emergía a la luz, precisamente, la diversidad –y las mismas contradicciones– de individuos, organizaciones, intereses y discursos que habían nutrido la revuelta. Más que de una identidad, entonces, cabría hablar de un provisorio mecanismo de identificación colectiva útil para los fines tácticos de los manifestantes *en* los días de la cólera –para utilizar una expresión cara a Pérez Ledesma (1994). Nada más que eso.

Por lo demás, pasados algunos meses de la destitución presidencial, el espacio político quedó aún más marcado por la fragmentaria presencia de una serie de dinámicas asociativas y de iniciativas individuales que muy difícilmente encontraron formas de coordinación política convergentes. Los ya para entonces clásicos movimientos sociales –indígenas, mujeres– seguían cabizbajos y sólo algunos de sus fragmentos trataban de orbitar en torno de la improvisada dinámica de movilización post-abril. Tal debilitamiento abría la ocasión, no obstante, para el surgimiento y para la visibilización de nuevas dinámicas de movilización colectiva que, entre otros giros, hablaban de una cierta ampliación y/o desplazamiento de lo rural a lo urbano en términos de los actores y prácticas que, desde la sociedad civil, desafiaban la vigencia del orden político imperante.

Aunque de controvertido estatus sociológico, la noción de *multitud* recoge la amplitud de los fenómenos contemporáneos de exclusión e incertidumbre estructural en que incuban una diversidad de movimientos populares o algo así como una irreductible multiplicidad de expresiones políticas de carácter, a la vez, subjetivo y colectivo. Dichas expresiones procuran hacer valer la singularidad de sus intereses mientras producen nuevas formas de acción política más bien alejadas de la necesidad de construir articulaciones o una base común de acumulación política. Si bien la agregación espontánea de una pluralidad de acciones dispersas no supone la constitución de un cam-

13 Ver, por ejemplo, J. Echeverría (2006), sobre todo el capítulo 5.

14 En ello coinciden diversos análisis: Unda (2005); Hurtado (2005); Silva (2005); Ramírez Gallegos (2005).

po de mediaciones políticas que soporten consistentes dinámicas de acción colectiva, la disponibilidad de la multitud para desenvolverse en escenarios contingentes amplía el espacio de lo posible (Bensaid, 2005). Sugerimos que tal imagen se corresponde de modo más adecuado con la evolución de una diversidad de dinámicas de movilización ciudadana y participación colectiva emergidas, en los “subsuelos de la política”¹⁵, en el marco de la profunda crisis de legitimidad de las instituciones democráticas del Ecuador a mediados de la primera década del nuevo siglo.

Aún en medio de las heterogéneas trayectorias y de las singulares formas de acción política de la multitud, sus marcos de significación devenían de un profundo malestar con la estructura de representación, con la voluntad de una recomposición ética de la política, y con la demanda por una reforma política inmediata. Las perspectivas más radicales apuntaban a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Entre 2005 y 2006 las trayectorias de la movilización estuvieron entonces atadas a un escenario en que las presiones y resistencias a la reforma política enfrentaban, otra vez, a la sociedad civil contra los partidos. Solo pequeños fragmentos organizativos apuntaban a consolidar específicos espacios autónomos de actividad política. Cuatro segmentos más o menos diferenciados pueden distinguirse, en cualquier caso, al interior de la heteróclita multitud que forjó abril.

Una primera constelación emergió en los mismos días de la revuelta con el objeto de coordinar acciones contestatarias e iniciar procesos de reflexión colectiva. La figura de las *asambleas* predominó como instancia de convocatoria y organización inicial. La idea de un espacio de participación y debate abierto, voluntario y horizontal, así como la ausencia de formas centralizadas de coordinación, aparecía entonces como la forma más adecuada para responder al desafío a la representación política. Universidades, estudiantes, barrios, redes de sociabilidad, colectivos etc., activaron tales espacios de deliberación política. Muchas de estas asambleas no funcionaron más allá de unas cuantas semanas. Otras, sobre todo de carácter barrial, abrieron desde entonces una sostenida actividad organizativa en que concurrieron viejos y nuevos militantes cercanos a pequeños grupos de izquierda y al campo de los movimientos sociales. Su agenda rebasaba las preocupaciones sobre el sistema político. Se situaba más bien en la búsqueda de nuevas formas de acción colectiva y democracia directa en el marco de la afirmación de un sentido autónomo

15 Con tal expresión Tapia (2001) hace referencia a los ámbitos políticos de baja visibilidad pública.

y radical de la política¹⁶. La ocupación de específicos territorios urbanos abría una novedosa dinámica de politización del espacio público en que se problematizaban los problemas locales a la luz de las tensiones nacionales. Algunas de entre ellas, pocas, funcionan hasta la actualidad.

Un segundo tramo de la multitud alude a las iniciativas organizativas que vieron en abril la oportunidad de recomponer iniciativas colectivas frustradas en los meses previos a la caída de Gutiérrez. Y es que desde fines del 2004, y bajo el paraguas de la Alcaldía de Quito, se constituyó la denominada “Asamblea de Quito” que trató de coordinar y liderar el proceso de contestación al gobierno. Su escasa voluntad para emprender acciones directas y su mismo origen “oficial-partidario” limitaron su potencial de articulación y propiciaron el desborde de la movilización por fuera de sus contornos. Pasados los días de mayor agitación, re-emergieron o se constituyeron diversas asambleas y colectivos con eminente voluntad de incidir en el proceso de reforma política y, más aún, de proyectarse rápidamente hacia la política instituida¹⁷. En tales espacios convergieron, sobre todo, algunas figuras políticas, sectores medios, profesionales y estudiantes con cierta experiencia militante e imaginarios políticos más o menos radicales. En su discurso se advertía un interés en representar lo que a sus ojos se colocaba como la “agenda de abril”. Su persistencia en el tiempo tuvo distinta suerte. El bloqueo final de la reforma desincentivó la continuidad de algunas dinámicas asamblearias. Otras prosiguieron y algunas de sus figuras más visibles se proyectaron dentro de nuevas coaliciones electorales formadas de cara a las elecciones generales del 2006. Otras, las menos, siguieron de cerca el errático proceso de reforma y, en lo posterior, continuaron monitoreando desde el terreno de la sociedad civil la evolución de la dinámica política. Así por ejemplo, la Asamblea de Mujeres de Quito conformó una veeduría social para hacer el seguimiento de un dispositivo participativo –el Sistema de Concertación Ciudadana (SCC)– que el nuevo gobierno debió diseñar para procesar las propuestas ciudadanas desde las cuales debieron establecerse las preguntas de una Consulta Popular que orientaría la reforma política. A dicha convocatoria se había comprometido, en su accidentada posesión¹⁸, el nuevo presidente

16 Se pueden citar como ejemplos a las asambleas de La Floresta, Parque Italia, Plaza Grande, Conocoto, entre otras. Ver al respecto Hidalgo *et. al.* (2006).

17 Destacaron la Asamblea de la Salesiana, la Asamblea de Mujeres de Quito (aún vigente); el Colectivo Democracia Ahora (donde participaron figuras de las organizaciones urbanas antes adscritas a PK).

18 Sobre las fracciones asamblearias en la violenta transmisión de mando a Palacio, ver Hurtado (2005).

Alfredo Palacio¹⁹. Esta y otras instancias de este segmento participativo tomaron también la calle en varias ocasiones en el curso del bloqueado proceso de reforma política.

Un tercer segmento provenía de una constelación de redes ciudadanas y figuras que, mucho antes de la caída de Gutiérrez, habían manifestado su malestar con la descomposición del orden democrático. En los últimos años, de hecho, habían encaminado iniciativas públicas de defensa del Estado de derecho a través de la puesta en marcha de mecanismos sociales de vigilancia de las instituciones políticas, y de observación de los actos de gobierno y la agenda pública. En los días previos a la caída presidencial efectuaron diversas demostraciones públicas, nunca masivas, con alto contenido simbólico –leer la Constitución de la República en las calles– y potencial de posicionamiento mediático. En otro lugar denominé a esta corriente participativa como “alta sociedad civil” para hacer referencia a un conjunto de actores sociales que incluyen nuevos movimientos políticos, pequeños colectivos, diversas ONG –conectadas con la cooperación internacional y fundaciones políticas transnacionales– preocupadas con temas de control institucional, rendición de cuentas y afirmación de cultura democrática²⁰. Entre sus particularidades destacan las frágiles conexiones que mantienen con organizaciones populares y movimientos sociales, y la centralidad de liderazgos provenientes de círculos académicos y redes profesionales de elite que les dotan de un alto capital simbólico-cultural y los sitúan como parte de los estratos medio-altos de la sociedad. Dicho posicionamiento explicaría la atención privilegiada que les otorgaron los principales medios de comunicación así como su ingreso “por lo alto” a la escena política. Articulando un discurso liberal de defensa de la institucionalidad democrática, gran parte de sus acciones políticas apuntaron a la denuncia, ante la opinión pública y los organismos pertinentes a nivel nacional e internacional, de la inconstitucionalidad de los actos de la clase política (Ramírez Gallegos, 2005: 38-39).

Ruptura-25, un movimiento político constituido por jóvenes universitarios y profesionales movilizadas en torno a un trabajo de formación cívica en temas ligados a la cuestión democrática apareció, en esta coyuntura, como uno de los nuevos actores políticos más dinámicos de este segmento de la multitud. Amparados, desde sus orígenes,

19 Fue vice-presidente de Gutiérrez. Una vez proclamada su destitución, se dio paso a la sucesión constitucional.

20 Se trata de proyectos vinculados a control de gasto electoral, monitoreo de medios, observatorios de política pública, etc. Los directores de ONG como Participación Ciudadana, Corporación Latinoamericana de Desarrollo, entre otras, adquirieron intenso protagonismo público en aquellos días. Algunos de sus líderes, tiempo después, pasaron a la escena electoral en el marco de coaliciones con diferente signo político.

en un discurso de rechazo frontal a la política partidaria y a la evolución democrática en los últimos 25 años (1979-2004), dicho movimiento concitó una alta atención pública en el marco de las movilizaciones de abril y, en lo posterior, entró en articulación con algunas de las asambleas antes descritas. Su proyección política fue en ascenso en los años siguientes. La izquierda tradicional y la gran mayoría de las organizaciones populares han tendido a desconocer los puntos de confluencia con la acción crítica de este movimiento.

Por último se sitúa un más incógnito e incierto grupo de ciudadanos sin filiación asociativa ni pertenencia política que, luego de ocupar las calles en abril, exploraron diversos espacios y rutas para su implicación política: participaron en foros de debate político y en algunas asambleas, escribieron cartas a los periódicos, prosiguieron con sus llamadas a la radio en las que se identificaban como “forajidos” y buscaron nuevamente las calles en reacción a distintas decisiones del nuevo gobierno. Uno de los indicios de su participación pública puede ser encontrado en las más de 52 mil propuestas de reforma política –solo el 5% de las cuales fue emitida por actores colectivos– enviadas al Sistema de Concertación Ciudadana²¹. La noción –de matriz republicana– de una “ciudadanía activa”, que afirmaba en todo momento su particular indignación moral ante el devenir de la política nacional, puede describir adecuadamente a este segmento de la multitud.

Con la creación del SCC, el gobierno puso en funcionamiento un mecanismo institucional para conectar la participación social con el nivel de la decisión política –las propuestas ciudadanas serían la base de las preguntas de la Consulta Popular– y preservar así los márgenes de legitimidad necesarios para acometer la reforma. Aunque el dispositivo avanzó, no sin contradicciones, hasta el cumplimiento final de sus objetivos, los desacuerdos partidarios, así como la debilidad política del Presidente, impidieron que la voz ciudadana pesara efectivamente en el desenlace del proceso.

En efecto, la ruptura de la socialdemocracia (ID) con el poder ejecutivo supuso el aislamiento de éste con respecto a las fuerzas representadas en el poder legislativo. Sin una mínima coalición política en que sostenerse, el presidente reactivó el “espíritu de abril”: convocó a organizaciones y asambleas a apoyarlo en su cruzada por la reforma. El Presidente buscó además la convocatoria a una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la instalación de

21 Según datos del informe final del SCC, el sistema recibió 230.930 “participaciones ciudadanas” y 52.415 propuestas ciudadanas entre junio y agosto del 2005. Sobre el frustrado proceso de reforma política y el funcionamiento del SCC ver Ramírez Gallegos *et. al.* (2006).

una Asamblea Constituyente. Muchas asambleas reactivaron entonces sus encuentros, forjaron documentos de reforma y organizaron foros de discusión. El debate público reverberaba. Los partidos, mientras tanto, procuraban concertar un paquete de reformas a ser procesadas por el mismo Congreso. Utilizando su control del órgano electoral bloquearon, finalmente, la consulta. Era un episodio más en una larga cadena de frustraciones social con la política instituida.

El zigzagueante trayecto del frustrado proceso de reforma política dejaba, en cualquier caso, señales precisas sobre el “nuevo pulso” entre partidos y ciudadanos. Por un lado, se hacía evidente la impenetrabilidad de los partidos y del sistema político para viabilizar transformaciones institucionales que den cabida a las diversas formas de participación popular. Por otro lado se constataba que, aun a pesar de la ilegitimidad partidaria y de la persistencia de una novedosa movilización social, la molecularidad de la acción política de la multitud y su débil predisposición articuladora impedían la acumulación de la fuerza necesaria para ganar en influencia en la puja por abrir un escenario democrático de cambio. El silencio del MIE y su virtual desconexión con las constelaciones anti-partidarias restaron además potencia organizativa al breve interregno de la multitud. Las ruidosas protestas contra el TLC (marzo 2006) recordaban al país que sin la movilización indígena –aún si fatigada– se reducía la resonancia de las demandas sociales en el espacio político. El rechazo al aperturismo comercial volvía a juntar, en cualquier caso, a los diversos fragmentos rurales y urbanos del campo popular. Las banderas anti-neoliberales articulaban otra vez, con relativa facilidad, a la izquierda social y política ecuatoriana.

EL DESACOMODO DEL CAMPO ORGANIZATIVO (2007-2010)²²

Marzo 2010: la prensa publica detalles de reuniones entre la Junta Cívica de Guayaquil y dirigentes de la CONAIE. Los encuentros tenían como objetivo apuntalar la oposición al gobierno de Rafael Correa. Según la Junta, los dirigentes indígenas les habrían solicitado apoyo financiero para emprender acciones contra el gobierno de la *Revolución Ciudadana*²³. Pocos daban fe de la verosimilitud de la noticia: la radicalísima CONAIE sentada junto a quienes tradicionalmente han representado lo más conservador de la oligarquía. Diversas organizaciones populares, partidos de izquierdas, e intelectuales críticos condenaron la maniobra. El gobierno rechazó, igualmente, tan bizarro acercamiento.

22 Este segmento del texto contiene parte de los argumentos desarrollados en Ramírez Gallegos (2010).

23 Así se autodefine el gobierno de Correa

El malestar al interior del propio movimiento fue también inculcable. Luis Macas censuró de modo tajante los hechos: “no tenemos nada en común con ellos (con la Junta) [...] no podemos sentarnos a conversar y si nos encontramos en la esquina hay que correr hacia el otro lado [...]” (El Comercio, 2010). Mientras, un editorial publicado en uno de los diarios quiteños enfrentados al gobierno encontraba en tales declaraciones un profundo sectarismo político. “Si lo hubiera pronunciado un mestizo, si lo hubiera dicho un dirigente empresarial, refiriéndose al movimiento indígena, habría merecido el repudio general por racista e insensato” (Hoy, 2010). El texto iba más lejos y sostenía que: “al contrario del sentido común político, entre Guayaquil y la CONAIE existe un punto nodal de convergencia: la demanda por la autonomía y el derecho al auto-gobierno [...]”. Aunque la dirigencia indígena desconoció la validez de la reunión, anunció sanciones para quienes propiciaron los encuentros, y dispuso la realización de una “limpia” (purificación ritual) de las oficinas de su sede donde habían permanecido los cívicos guayaquileños, no pudo revertir la percepción de que había confundido las cartas de navegación que la han ubicado, desde siempre, en las antípodas del poder establecido.

El episodio habla del complejo proceso de reconfiguración de la conflictividad sociopolítica abierto con el acceso de Correa al poder en 2007. Entre otra de sus características, dicha reconfiguración está atravesada por las tensas relaciones entre el presidente e importantes dinámicas de acción colectiva de la sociedad ecuatoriana. Tales tensiones se han incrementado luego de un período en que, alrededor de la Asamblea Constituyente (2007-2008), el proyecto político de Alianza País (AP)²⁴ generó algo más que “simpatía difusa” en el arco progresista. Múltiples organizaciones sociales y políticas operaron activamente, desde entonces, en el sostenimiento del proyecto de cambio. Algunos de sus militantes llegaron incluso a ser postulados como parte de las listas del oficialismo en las elecciones de 2008 y 2009. Ya antes, fragmentos de la multitud anti-partidista habían ingresado a la plataforma electoral que catapultó a Correa al gobierno.

No es raro escuchar, por ello, en boca de múltiples activistas que la Revolución Ciudadana se ha apropiado de su programa –“nos roban la agenda”– y que la participación electoral de algunos de sus “compañeros” ha repercutido en el funcionamiento habitual de las dinámicas asociativas. Y es que la emergencia de Correa no sólo aceleró el ocaso de los partidos que dominaron la escena política desde 1979, sino que *desacomodó* las líneas de articulación y los programas de acción de múltiples actores sociales.

24 Nombre del movimiento político liderado por Correa. P.A.I.S significa **P**atria **A**ltiva **I** Soberana.

Si un claro agotamiento de la movilización social antecedió al surgimiento de AP, el sólido posicionamiento del liderazgo presidencial y su escasa predisposición al reconocimiento de las dinámicas de acción colectiva autónoma han contribuido a un estrechamiento de sus márgenes de acción y a la intensificación del conflicto con el gobierno. En dicho escenario influirían, además, algunas diferencias programáticas en el procesamiento de la transición post-constitucional y, de modo menos visible, la des-configuración de las redes sociales ligadas a los movimientos. La implicación de segmentos de las clases medias radicales –activas partícipes del campo organizativo que se opuso al neoliberalismo y al dominio partidario– en el nuevo bloque gobernante habría generado un cierto vaciamiento de los acumulados organizativos en las arenas estatales.

Las sinuosas relaciones entre el nuevo gobierno ecuatoriano y diversas organizaciones sociales pueden ser mejor observadas si se las ubica en el marco de tres específicos momentos –el surgimiento de AP; el proceso constituyente; la transición legal– del proceso de cambio político que vive el Ecuador.

DESENCUENTROS DE ORIGEN

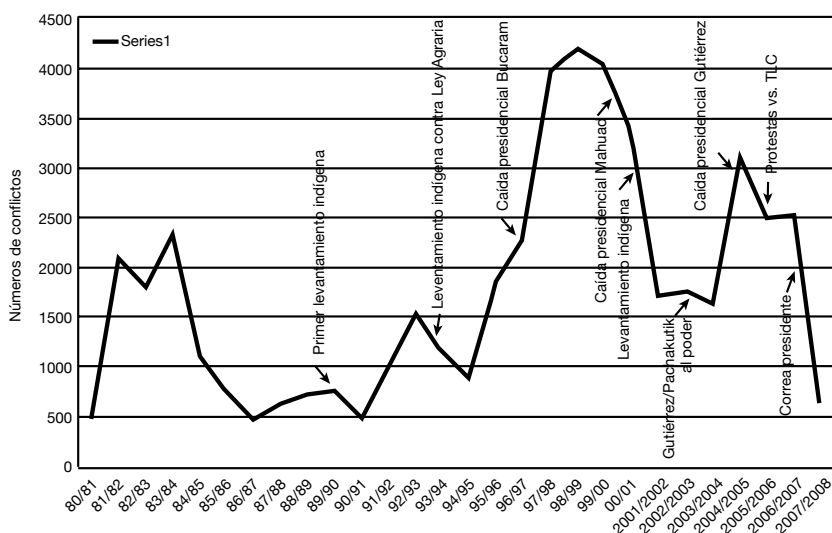
Desde la campaña electoral de fines del 2006, Correa y su recién nacido movimiento político –Alianza País (AP)– tomaron las banderas anti-partidarias herederas de abril. Sus propuestas (y luego, decisiones) de convocar a una Asamblea Constituyente, descartar la firma del TLC, demandar el fin del acuerdo para la concesión de la Base de Manta a los militares estadounidenses, revertir la primacía del neoliberalismo, y privilegiar el gasto social al pago de la deuda externa, entre otras, ocuparon prácticamente el mismo campo discursivo que el levantado por el MIE, otras organizaciones populares y pequeñas fuerzas de izquierdas durante las últimas décadas. La emergencia de Correa se colocaba, sin embargo, en medio de un reacomodo del campo progresista: entre el ascenso de nuevos liderazgos, fuerzas sociales y organizaciones ciudadanas –de escasa trayectoria militante– y, como se ha visto, el declive del movimiento indígena en torno de cuya acción se re-articuló la izquierda ecuatoriana en los noventa. Los resultados electorales del 2006 recogían de algún modo dichas tendencias. La candidatura presidencial de Luis Macas (Pachakutik) apenas alcanzó el 2,19% de los sufragios, el peor resultado obtenido desde el inicio de la participación electoral del movimiento. El candidato del MPD llegaba tan sólo al 1,3% de la votación. Correa pasó a disputar el *ballotage* con el 23% de los votos.

Alrededor del agotamiento indígena se asistía, a la vez, a una erosión del conjunto de la movilización social. La conflictividad desatada en torno al MIE contuvo diversas iniciativas regresivas, alteró

profundamente los órdenes de poder, y contribuyó a acelerar la crisis de legitimidad del sistema de partidos. Sin embargo, para el primer lustro del 2000, y salvo ciertos picos de agitación social –la caída de Gutiérrez y las protestas contra el TLC– el espiral ascendente del conflicto comenzaba a detenerse (Gráfico 1). Ello coincidía además con el decrecimiento, desde el inicio del nuevo siglo, de las tendencias participativas y asociativas a nivel nacional y local²⁵.

Para cuando emerge AP resultaba difícil ignorar la erosión de las energías reivindicativas de la sociedad y las escasas opciones electorales de las izquierdas. Nadie pareció sorprenderse, entonces, con el triunfo del multimillonario Álvaro Noboa en el primer turno de las presidenciales. La victoria final de Correa fue, en este escenario, casi providencial y aludía más bien a la preeminencia de un voto de rechazo –lo que Rosanvallon (2007) denomina “de-selección”– a la figura del bananero.

Gráfico 1
Conflictividad socio política 1982-2008



Fuente: CAAP.

25 En 2001, 34% de los ecuatorianos manifestaron haber participado en “comités mejoras de la comunidad”, en 2008 este indicador se ubicaba en 26%. La tendencia se repite para otras instancias asociativas. La participación ciudadana en los gobiernos locales decayó, igualmente, del 10,8% en el 2001, al 5,7% en el 2008 (Seligson, 2008).

Antes de ello, sin embargo, Correa procuró construir una fórmula presidencial conjunta con Pachakutik. El nuevo outsider, cuando joven, había realizado trabajo misionero (con los salesianos) en una de las parroquias indígenas más pobres del país. Conoció así de cerca las luchas campesinas y la iglesia popular, e incluso llegó a aprender kichwa: algo de lo que muy pocos intelectuales, incluso comprometidos, pueden jactarse (Ospina, 2009). Su salto a la arena política llegó de la mano de su nombramiento como Ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio. Se trataba del primer ministro del sector, en dos décadas y media, que no provenía de círculos empresariales ni estaba atado al canon *fondomonetarista*. Desde tales funciones reorientó los excedentes presupuestarios –provenientes de una renta petrolera creciente debido a los altos precios internacionales del crudo– hacia el gasto social y tomó distancia de las recomendaciones de austeridad fiscal de los organismos multilaterales. Correa, y el círculo de economistas heterodoxos cercanos a él, postulaban más bien la necesidad de una mayor presencia estatal en la economía y la urgente redistribución de la riqueza social. A pesar de su breve paso por el ministerio, tales decisiones y sus radicales proclamas anti-neoliberales le proyectaron como un promisorio liderazgo del campo progresista.

La disyuntiva de participar en las elecciones presidenciales dentro de una alianza con otras fuerzas de izquierda, como PK lo había hecho desde su origen, o de hacerlo con un candidato indígena “propio” activó una nueva pugna dentro del MIE. Con un altísimo nivel de tensión y sin llegar a unificar todas las posiciones, se impuso la segunda opción. Luego de la experiencia gubernativa, el escepticismo indígena con la reiterada presencia de figuras “externas” al movimiento desincentivaba cualquier tipo de alianza.

Cerrada esta opción, los ideólogos de AP privilegiaron antes que la construcción de un frente amplio o de una coalición de movimientos y partidos, la formación de una estructura de acumulación política *propia y diferenciada* de aquellos. Gustavo Larrea, uno de los fundadores de AP, señalaba al respecto:

“Si entrábamos a esas disputas (con las organizaciones) no teníamos posibilidades de construir *fuerza política inmediata* ya que el movimiento obrero, el movimiento indígena, el afro ecuatoriano, el movimiento de mujeres, tienen liderazgos legítimos que se han ganado a lo largo de la historia y con los cuales no hay por qué disputar [...] Nuestra organización resuelve no realizar coaliciones con frentes sociales sino *trabajar territorialmente*” (Larrea, 2008: 129; énfasis del autor).

El núcleo fundador de AP estuvo compuesto por antiguos dirigentes de la izquierda tradicional, por intelectuales y activistas de la nueva

izquierda social, por figuras provenientes de novísimas organizaciones ciudadanas (surgidas en abril), y por personajes sin trayectoria militante, cercanos al entorno personal del candidato presidencial. Emergía así una fuerza heteróclita amalgamada bajo el horizonte de un anti-partidismo extremo, la voluntad de superar el neoliberalismo, y el peso de un liderazgo político *–marketing* mediante– sofisticadamente empaquetado. Dicho perfil y composición entrañaban no sólo una ampliación del espectro de la representación social de las fuerzas de izquierda hacia lo que Quintero denomina “los sectores sociales auxiliares o las clases intermedias de la estructura global del país”²⁶, sino además una reorientación en sus lógicas de acción política y un reajuste en los equilibrios entre el liderazgo individual y las dinámicas de acción colectiva cercanas a la tendencia. El peso de estas últimas fue, desde los orígenes de AP, relativizado por los intentos de llegar al tejido micro-local de la sociedad:

“[...] se resolvió promover un tipo de organización familiar [...] puesto que no se trabaja sólo con los individuos. Son encuentros familiares de carácter geográfico. Esta definición generó un enorme contingente de compañeras y compañeros que en vez de dedicarse a pelear con otras fuerzas de izquierda, se dedicó a construir fuerza en cada cantón, en cada parroquia, en cada barrio” (Larrea, 2008).

Desde la primera campaña, AP puso en marcha, en efecto, los denominados Comités Ciudadanos Locales o Familiares. A través de una perspectiva territorial, ello proyectaba la base del recién nacido movimiento *–más allá de cualquier constelación organizativa–* hacia el amplio espectro de ciudadanos no organizados. La articulación con partidos y movimientos de mayor trayectoria organizativa fue siempre vista como innecesaria y potencialmente conflictiva. El acuerdo, más bien marginal, con el pequeño Partido Socialista Ecuatoriano ha sido la única salvedad. La debilidad del tejido organizativo, la desconfianza entre las fuerzas progresistas, y el pragmatismo del nuevo movimiento hacían prever que, hacia futuro, se reforzaría tal lógica de construcción política.

CONVERGENCIAS PROGRAMÁTICAS, TENSIONES PRODUCTIVAS

La posibilidad de que llegue al poder uno de los máximos representantes de la derecha oligárquica (Noboa) acercó a múltiples organiza-

26 Se trata de “los sectores sociales intermedios, urbanos y rurales, los trabajadores asalariados no proletarios, la pequeña burguesía urbana y rural, intelectuales, burócratas, profesionales urbanos y rurales, pequeños y medianos comerciantes, transportistas, obreros en activo, y muchos empresarios individuales *–no corporativizados–* con ideas nacionalistas” (Quintero, 2007: 41).

ciones sociales y populares a la campaña de AP. La dinámica asamblearia forjada entre 2005 y 2006 también se movilizó activamente. Dicha sintonía se profundizó cuando, el día mismo de su posesión, Correa convocó a una Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria (ANC).

Sin representación en el legislativo –para afirmar su vocación anti-partidaria AP no presentó candidatos parlamentarios– y con la derecha controlando la mayoría, la convocatoria al referéndum que diera paso a la ANC fue objeto de una intensa pugna entre los principales poderes del Estado. Si anteriores crisis políticas se resolvieron con las destituciones presidenciales de jefes de gobierno sin sólidos bloques parlamentarios y baja credibilidad social, en el 2007 sucedía lo inverso: un presidente cuyo único capital político era el robusto apoyo popular a su figura provocaba, sin estricto apego a derecho, la destitución –por parte del Tribunal Supremo Electoral– de 57 diputados acusados de obstruir ilegalmente la convocatoria a la consulta. La “caída parlamentaria” viabilizó el proceso constituyente.

En abril 2007, el 82% de la población aprobó la instalación de la ANC. El conjunto del campo popular y progresista sostuvo el voto afirmativo. Ya en los días de mayor conflicto entre Correa y el Parlamento, diversos sectores sociales se habían movilizado, incluso de modos violentos, contra los legisladores de oposición. El 1 de mayo 2007, en un hecho que no tenía precedentes en el vigente ciclo democrático, Correa encabezaba una multitudinaria marcha por el día del trabajo. La gran mayoría de organizaciones clasistas y populares caminaba junto al presidente. El sentido de los antagonismos trazados por Correa posibilitaba dicha confluencia: además de la confrontación con los partidos, su programa gubernativo le enfrentó con la banca, los grandes medios de comunicación, los gremios empresariales, la constelación de agencias transnacionales que sostuvieron el neoliberalismo y, sobre todo, con la poderosa elite guayaquileña cercana a Jaime Nebot, tres veces electo alcalde como parte del principal partido de la derecha ecuatoriana.

Las elecciones de los constituyentes, en septiembre 2007, favorecieron largamente al “campo del cambio”. AP obtuvo 80 curules de las 130 en disputa. El resto de las izquierdas (PK, MPD, ID) se acercó al 10%. Las alianzas entre ambos segmentos se dieron de modo marginal en pequeñas provincias. Se ratificaba así la opción de AP de privilegiar el apuntalamiento de su propia fuerza: el ciclo de éxitos electorales reforzaba dicha apuesta. Las listas del oficialismo incluyeron ya, en cualquier caso, a algunos segmentos del movimiento popular²⁷ y de

27 Dirigentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indíge-

las nuevas organizaciones ciudadanas portadoras de un discurso ético sobre la política: el caso emblemático ha sido el de Ruptura-25. AP adquirió así el perfil de una coalición de fracciones en que coexistían sectores de centro-derecha, vertientes del ecologismo, organizaciones de mujeres, expresiones de las iglesias progresistas (y no), militancias de izquierdas, ciudadanos inexpertos, y políticos oportunistas de larga trayectoria.

Si en la Constitución de 1998, la izquierda y las organizaciones sociales alcanzaron el reconocimiento de la figura de los derechos colectivos y el fortalecimiento del espectro de los derechos sociales, en el proceso 2007-2008 se empeñaron en sostener y ampliar dichas conquistas pero en el contexto de una disputa más global por la transformación del modelo de desarrollo. El horizonte de aspiración de la ANC combinó, en efecto, la superación del orden neoliberal y el desmonte de la dominación partidaria. Desde su origen, AP había colocado enfáticamente dichos lineamientos en el debate público. Tal entorno ideológico trazaba el terreno de la participación social.

En Montecristi²⁸ se verificó una activa e innovadora pero no tan ruidosa movilización popular. Además de la debilidad del campo organizativo, la localización de la sede de la Convención –alejada de los centros urbanos más importantes– conspiraba contra formas masivas de participación colectiva en su torno. Las organizaciones debieron modificar sus habituales tácticas de influencia: enviaron asesores permanentes, se desplazaron en los momentos decisivos, realizaron un trabajo de lobby con los distintos bloques. Se constituyeron entonces redes temáticas mixtas (sociedad-estado) para discutir tramos de la reforma constitucional en distintas áreas de política pública. La complejidad de las agendas propuestas y el desarrollo de específicas destrezas de negociación revelaban importantes niveles de profesionalización entre los activistas. Allí reside hoy en día, al igual que en otros países, una de las líneas de transformación del campo organizativo ecuatoriano. El rol de las ONG y la cooperación internacional ha sido clave en este aspecto. Las asociaciones consiguen desafiar así con mayor consistencia la definición “*top-down*” de las decisiones políticas: una suerte de “contra-experticia militante” disputa la construcción de la agenda pública con los tradicionales *decisores*. Foros públicos, plantones,

nas y Negras (FENOCIN), del Seguro Social Campesino, del Foro Urbano, ex militantes del Pachakutik, entre otros, terciaron por AP.

28 Pequeño cantón de la provincia de Manabí, al norte del litoral ecuatoriano, donde se desarrolló la Asamblea. Allí nació el general Eloy Alfaro, líder de la revolución liberal que a inicios del siglo XX consagró la separación entre la iglesia y el Estado y el derecho a la educación laica y gratuita. Es uno de los referentes de Correa.

marchas, y conciertos completaban el arco de repertorios de presión con que, desde sus particulares agendas, se posicionaban los distintos actores sociales en la Convención. Ésta puso también en marcha específicos mecanismos participativos que incluían foros nacionales e itinerantes, comisiones generales, y dispositivos virtuales²⁹.

La cercanía en las trayectorias militantes de múltiples asambleístas y dirigentes sociales facilitó el desarrollo de sus conexiones. La apertura del Presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, a la participación de los movimientos les confería, a su vez, mayor visibilidad política. A pesar de que los episodios de tensión no fueron pocos, el proceso constituyente supuso un momento de alta fluidez en las relaciones entre los procesos sociales y las instancias de representación democrática. Así, tanto por las formas de participación como por los contenidos constitucionales, la última ANC puede ser considerada como un punto en que, desde lo social y lo político, se encontraron aquellos sectores que se consideraban excluidos de los centros de poder y que habían asumido la forma de organizaciones de carácter reivindicativo y contestatario (León, 2009).

Entre el dinamismo participativo y las presiones del ejecutivo para que el proceso ganara en celeridad –Correa ha tendido, regularmente, a contraponer eficacia y participación–, AP decidió invitar a los asambleístas de las bancadas afines –Pachakutik, MPD, e ID– a sus deliberaciones internas. Se formó así un “mega bloque” de 90 constituyentes. Tales reuniones funcionaron como instancias de debate y decisión partidaria. En su seno se coordinaban –bajo la hegemonía de AP– las resoluciones que luego serían votadas en conjunto. Los disensos podían aparecer en esta instancia pero no debían expresarse en las sesiones plenarias. La unidad del bloque se preservaba con sigilo al costo de evitar la amplificación de ciertos debates en el pleno de la Asamblea.

La recurrencia de las fricciones al interior de AP se colaba, de todos modos, en la opinión pública. Los debates sobre la cuestión ecológica dejaron ver, más que cualquier otro tema, la intensidad de las disputas. Acosta y los asambleístas leales a Correa mantuvieron intensos duelos en relación a los límites ambientales de la explotación minera, a la declaración del agua como derecho humano fundamental y a la necesidad de consultar (tesis de Correa) u obtener el consentimiento previo (de Acosta) de las poblaciones y comunidades indígenas, cuando el Estado disponga la explotación de recursos naturales

²⁹ La ANC recibió alrededor de 70.000 personas entre movilizaciones y eventos. Los 23 Foros Nacionales contaron con la participación de 11.500 ciudadanos. Más de 3.100 propuestas fueron, además, enviadas por la ciudadanía (Birk, 2009).

en los territorios que ellas ocupan. La influencia moral e intelectual del presidente de la Asamblea, que contaba con el respaldo del bloque de PK, permitió que las tesis ecologistas salieran bien libradas en los dos primeros debates. Dio paso, además, a la *sui generis* consagración de los “derechos de la naturaleza”. El consentimiento previo fue, sin embargo, descartado. La dureza del debate dejó malogradas las relaciones entre las dos figuras más visibles de la Revolución Ciudadana, y entre Correa y el movimiento indígena.

Las primeras deserciones en AP vendrían, sin embargo, por otras razones. Algunas de sus facciones propendían hacia una modernización de la Carta Magna en materia de sexualidad. El activo rechazo de grupos cercanos a las cúpulas eclesiásticas y al Opus Dei aupó, entonces, la renuncia de dos asambleístas que decían defender la moral católica del país. Múltiples organizaciones de mujeres condenaron la timidez con que el oficialismo encaró el tema. El caso es, sin embargo, que la influencia de éstas últimas en el debate público ha sido eclipsada, durante los últimos años, por el dinamismo de sectores católicos ultra-conservadores. Ya en 2006 avanzaron campañas contra la venta de pastillas anticonceptivas de emergencia y contra la educación sexual. Luego, procuraron penalizar el aborto terapéutico. En Montecristi rechazaron incluso el uso de nociones como “identidad de género”. La visibilidad de este segmento asociativo dejaba entrever no solo la pérdida del dominio de los sectores contestatarios sobre la movilización de la sociedad civil (Ibarra, 2008), sino la fragilidad de los movimientos sociales en la disputa por la hegemonía cultural de la sociedad. Sólo el dinamismo de un grupo de asambleístas mujeres (AP) identificadas con la causa, y su conexión con jóvenes militantes feministas lograron contener, *in extremis*, los embates retardatarios de tal sector del asociacionismo católico.

Similares controversias y articulaciones se dieron en relación a otros tópicos. Si la promoción de la participación ciudadana o la recuperación de la regulación estatal sobre la economía generaban menos controversias, la declaración del Estado como plurinacional –demanda histórica del MIE– evidenciaba la influencia de las posturas “movimientistas” y pro-indígenas dentro de AP en medio de las tribulaciones presidenciales y los recelos de sus allegados. De igual modo sucedió con cuestiones relativas a las demandas de los maestros y sindicatos públicos por ciertos derechos colectivos, o a la gratuidad de la educación universitaria. Los nexos del ala izquierda del bloque con las organizaciones sociales y con ciertos segmentos del ejecutivo dejaban abierta la discusión de formulaciones promisorias. Ni la propensión *decisionista* de las interferencias presidenciales, ni la beligerancia de ciertas relaciones desmontaron, pues, el espacio de interlocución po-

lítica que había forjado la ANC. Honneth (1996) ha argumentado que los espacios públicos pueden estructurarse a través de conflictos en que actores con identidades e intereses diversos, e incluso contrapuestos, tienden a reconocerse políticamente. La convención entreveró en dicha lógica al nuevo bloque gobernante, a una gran variedad de organizaciones populares y a diversas iniciativas ciudadanas. La ampliación de los derechos, el incremento de los sujetos sociales que los portan³⁰ y de los ámbitos que atingen³¹, recogían la productividad de su presencia y de las disputas allí encaminadas. El proceso constituyente supuso el afianzamiento de las expectativas sociales de cambio y la expansión del espacio de reconocimiento político.

Así, aún a pesar del remezón que causó en la izquierda y en los movimientos sociales el pedido de AP para que Acosta dejara la dirección de la ANC a un mes de su terminación³², diversas organizaciones sociales, el MIE y Pachakutik optaron por respaldar el proyecto constitucional. Posicionaron, sin embargo, la tesis del “sí crítico.” Remarcaban, de este modo, sus distancias con el poder ejecutivo pero reconocían los avances del proyecto constitucional. El MPD, el socialismo, y las organizaciones clasistas más tradicionales sostuvieron, llanamente, la opción afirmativa. Una reducida fracción de sindicatos públicos (petroleros), pequeños grupos de izquierda, y disminuidos partidos centristas postularon la tesis de la abstención, del voto nulo, o incluso del no. Su posición reflejaba la necesidad estratégica de una nítida diferenciación con respecto a Correa y un rechazo a las irregularidades del procedimiento en la aprobación de la Carta Magna.

NUEVA POLARIZACIÓN

En abril del 2009 se convocaron a elecciones generales en el marco de las nuevas reglas políticas delineadas por la Carta Magna. Ésta dispuso, además, la elaboración inmediata de múltiples leyes fundamentales que echaran a andar los principios constitucionales. En ambos escenarios se verificaron las dificultades del gobierno para procesar las

30 Se hace referencia, entre otros, a los ecuatorianos residentes en el exterior; a las personas con discapacidad, montubios (campesinos de la Costa), extranjeros. En una formulación post-liberal, además, la Carta Magna reconoce a individuos y colectivos (pueblos, nacionalidades, organizaciones) como sujetos de participación.

31 Los denominados “derechos del buen vivir” incluyen dimensiones ambientales, tecnológicas, comunicativas, culturales.

32 La crisis del oficialismo provenía de las diferentes posiciones en relación al fin de la Asamblea. Acosta no quería sacrificar la calidad del debate en nombre de los tiempos políticos. Planteó extender las deliberaciones. Las encuestas evidenciaban, sin embargo, un acelerado desgaste del proceso. Correa y el comando central de AP leyeron la propuesta como un suicidio político.

relaciones con importantes dinámicas de acción colectiva autónoma y para estabilizar un campo de alianzas con actores sociales y políticos más o menos afines.

Dichas inconsistencias pesaron en el balance electoral que algunos calificaron como una amplia victoria del movimiento gobernante. A pesar de la histórica reelección de Correa en primera vuelta y de la consolidación de AP como la más importante fuerza política a nivel nacional y local, el oficialismo no alcanzó la mayoría parlamentaria absoluta, sus candidatos fueron derrotados para la alcaldía de Guayaquil y la Prefectura de Guayas –las grandes circunscripciones electorales del país–, y estuvo lejos del 63% con el que se aprobó la Carta Magna en septiembre 2008. El 52% de respaldo a la reelección evidenciaría que la agenda de cambio no es visualizada como bandera de un solo movimiento político. El MPD y PK recuperaron, en este marco, sus cotas de representación parlamentaria y local.

Antes y después de las elecciones generales la tensión y beligerancia entre Correa y, sobre todo, las organizaciones indígenas se mantuvo constante. Los primeros embates se dieron, en enero 2009, luego de que sectores indígenas y ambientalistas anunciaran su resistencia a la minería y acusaran al gobierno de neoliberal. Correa respondió violentamente. Habló de los peligros que representa el “izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil” para el proyecto nacional de cambio político. En adelante, la estrategia gubernamental pareció reorientar la polarización hacia la dirigencia indígena.

Con la instalación del nuevo parlamento, por otro lado, la “política de puertas abiertas” de la constituyente se revertió. La impaciencia revolucionaria de Correa y AP en Montecristi obligó a la función legislativa, electa en abril 2009, a aprobar más de once leyes en un año. Se trataba de un claro desincentivo institucional para la deliberación pública y para la búsqueda de acuerdos sustantivos entre AP y las minorías cercanas. Por lo demás, contener los problemas de heterogeneidad, diferenciación, e incluso antagonismo al interior de la renovada bancada oficialista aparecía, más bien, como la prioridad de sus coordinadores. En el nuevo bloque mayoritario se cuentan menos legisladores cercanos al campo de las organizaciones populares. La ruptura de la coalición política –desapareció el “mega-bloque”– tejida en Montecristi redujo, además, las opciones para que estas últimas puedan incidir en el debate parlamentario. Tal descomposición articuladora, que refleja e incuba recurrentes episodios de volatilidad programática, estimuló la reactivación del conflicto.

Así, además de los sectores que confrontaron al gobierno “por derecha” y desde el arranque mismo del gobierno, desde 2009 se observa una serie de protestas provenientes de sectores organizados más

o menos cercanos al arco progresista. En la configuración de tal escenario han pesado no sólo diferendos programáticos en la orientación de las leyes, sino la baja disponibilidad del oficialismo para entablar procesos de interlocución política incluso con aquellos sectores que le han sido globalmente afines. Las diversas líneas de oposición social a los proyectos de ley y las dificultades de coordinación al interior del bloque de AP han retrasado su procesamiento³³. El ritmo de cambio político de la Revolución Ciudadana se ha desacelerado en medio de la exasperación de un presidente al que la gran industria mediática califica como todopoderoso.

El punto más alto del conflicto, luego de tres años del gobierno de AP, llegó a fines del 2009, cuando convergieron las movilizaciones indígenas en rechazo a ciertos artículos del proyecto de Ley de Aguas, las protestas del gremio docente en contra de la evaluación académica de los maestros, y aquella de profesores y estudiantes universitarios en oposición al proyecto de ley que regularía la educación superior. La intensa cobertura mediática de las protestas no conseguía ocultar, sin embargo, la atomización de la acción colectiva y la des-implicación de una ciudadanía que, del todo distante de la política, aún no retira la confianza a su nuevo presidente. Aunque tales sectores han mantenido específicas críticas al gobierno y a los proyectos de ley presentados por AP, comparten entre sí un malestar similar por la subestimación política y la ausencia de interlocución con el oficialismo. Correa parece creer que en la dinámica de redistribución material que su gobierno presenta como uno de sus principales logros³⁴— está contenida la dimensión de reconocimiento moral y político con la que los sujetos consiguen inscribirse, de modo íntegro, en el proceso democrático de formación de la voluntad popular. El énfasis en la ampliación de los derechos sociales sin efectivo reconocimiento del valor público de las identidades políticas y de la contribución histórica de las fuerzas sociales a la producción y a la reproducción social tiende, no obstante, a restringir el margen de validez normativa de las pretensiones igualitarias de la agenda gubernativa.

El diálogo con el MIE —que desde 1990 se había “sentado” con todos los gobiernos de turno— sólo fue posible, sintomáticamente, una

33 Por mandato constitucional hasta fines del 2009 debían aprobarse 16 leyes que viabilicen el proceso de transición institucional y el cambio de régimen de desarrollo. Hasta marzo 2010 sólo han sido aprobadas 5.

34 La reforma tributaria de carácter progresivo, el consistente aumento de la inversión en política social, y el incremento de la cobertura del ingreso familiar con relación a la canasta básica aparecen como elementos nodales de la agenda redistributiva del gobierno. Ver Senplades (2009).

vez que la beligerancia de la protesta, sobre todo en la Amazonía, llegara a tal nivel que hubo de registrarse la muerte de un manifestante. Ya en los diálogos, uno de los principales reclamos que la dirigencia indígena planteó al presidente fue su falta de respeto al movimiento. El nuevo canal de televisión pública transmitió en vivo la dura crítica indígena. Por primera vez en tres años de gobierno, Correa era obligado a reconducir su estilo de gestión política, más bien *decisionista*, a favor de la puesta en marcha de un proceso de negociación. Para inicios del 2010, sin embargo, las conversaciones fueron interrumpidas. Para la CONAIE, el gobierno no tomó en serio el proceso ni acogió sus principales demandas. El gobierno, por su parte, ha argumentado que la dirigencia indígena se atrincheró en una agenda parcial que no toma en cuenta la globalidad del proceso político ni la orientación general de las políticas públicas.

En efecto, las elites empresario-bancarias refutan la idoneidad de la reforma tributaria, de la ilegalización de la tercerización laboral, del incremento del gasto público y de las remuneraciones, de la regulación bancaria, del arancelamiento a ciertas importaciones, y de las mismas coaliciones geopolíticas del país –Correa se ha acercado al eje Brasilia-Caracas-Buenos Aires-La Paz– como medidas gubernamentales que no propician un entorno seguro para la inversión extranjera. En medio de los problemas de generación de empleo que ha enfrentado el Ecuador en 2009, en el contexto de la crisis global del capitalismo, puján entonces por una vuelta a la agenda ortodoxa y rechazan la recuperación de las capacidades estatales para planificar, promover, y regular la economía y el desarrollo nacional.

Aunque con ciertos matices, los actores movilizados tienden a reconocer los avances de esta constelación de políticas post-neoliberales. Resienten sin embargo, por un lado, del activismo gubernativo y del relativo incremento del volumen de intervenciones públicas que no requieren necesariamente de la intermediación del mundo asociativo. La voluntad gubernamental de ampliar la cobertura de las políticas públicas y de entrar en directa conexión con la sociedad desestructuran, así, las agendas políticas y organizativas de unas dinámicas de acción colectiva que, hasta hace poco, ponían por delante tácticas puramente reivindicativas en procura de algo más de protección y presencia estatal en los territorios. Por otro lado, y en el marco de las mismas tensiones abiertas por el retorno del Estado, indígenas, maestros, y universitarios –entre otros– condenan una línea de reforma que apuntaría a la des-corporativización de las instituciones públicas. En su perspectiva, la autonomía de las organizaciones sociales se juega en la preservación de los espacios de representación conquistados en determinados segmentos de la administración pública. Defienden en-

tonces la legitimidad de la presencia de intereses e identidades políticas y gremiales *dentro* del Estado. Al así hacerlo toman distancia del universalismo de la Revolución Ciudadana y de su tendencia a colocar al ciudadano abstracto y a los actores organizados en un mismo plano de reconocimiento político.

En otro andarivel, empieza a expandirse una retórica contraria a un patrón de desarrollo –aún cuando sea post-neoliberal y redistributivo– que se centra en formas convencionales de explotación de los recursos naturales. Sus planteamientos han abierto un prolífico e inédito debate entre diversas tendencias de la izquierda, gubernativa y no, sobre los modelos de desarrollo. El post-extractivismo está en el horizonte de estas tendencias. La discusión se centra en qué tipo de vías se escogen, en el presente, para viabilizar un nuevo eje de acumulación en las próximas décadas. La opción minera espanta incluso a altos funcionarios gubernamentales. Correa no parece ver más alternativas inmediatas a mano. La protesta anti-minera, fundada en dinámicas comunitarias de base campesina e indígena y articulada en redes ecologistas transnacionales, tenderá entonces a cobrar mayor ímpetu en los próximos años. Las coaliciones socio-políticas que abran la ruta del post-desarrollo están, sin embargo, muy lejos de su cabal implantación.

Así, la implicación social en el debate sobre la más ambiciosa propuesta ambiental del gobierno, la iniciativa ITT, no termina de despegar. La sociedad mira con relativa distancia las fracturas gubernamentales³⁵ provocadas por las diferentes perspectivas con que se procesa la propuesta de no explotar el campo petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) a cambio del aporte financiero de la comunidad internacional por la contribución del país a la conservación de una de las reservas de biosfera más importantes del planeta -el parque nacional Yasuni³⁶. Luego de tres años del lanzamiento de la propuesta, apenas cuatro de cada diez ciudadanos “han oído hablar” de la iniciativa³⁷. Incluso las agendas gubernativas de nítido signo progresista tienen problemas para anclarse en procesos de movilización colectiva que, desde la sociedad, puedan otorgarles mayor legitimidad y fuerza política a la hora de encarar los conflictivos procesos de negociación que deben encarar dentro y fuera de un gobierno atravesado por una marcada heterogeneidad.

35 Fander Falconí, uno de los fundadores de AP, renunció como Canciller (enero de 2010) por controversias con el presidente sobre el manejo del fideicomiso que regentaría los aportes internacionales por el ITT.

36 Los detalles de la propuesta pueden encontrarse en el trabajo de Acosta *et. al.* (2009).

37 Ver Informe mensual *Perfiles de Opinión*, enero 2010.

Para fines de la primera década del siglo XXI, en suma, el combate a la “partidocracia” y al neoliberalismo habría dejado de funcionar como nodo articulador del campo progresista. Ciertas inconsistencias programáticas del gobierno, el unilateralismo político de su líder, y el cortoplacismo de múltiples demandas gremiales lo desmigajan y confrontan entre sí. Dicha confrontación exagera la incertidumbre estratégica en que se mueven todos los actores sociales y políticos en el proceso de transición hegemónica que vive el Ecuador. El errático comportamiento de los movimientos, y de los cívicos guayaquileños y de cierta dirigencia indígena, se sitúa en tal entorno de elevada incertidumbre. La incapacidad presidencial para reconocer cuánto del camino que hoy pisa fue despejado, hace poco, por diversas iniciativas colectivas democráticas no hace sino profundizar el desconcierto. Walter Benjamin creyó encontrar trazos autodestructivos en las visiones del progreso que licuaban la memoria de las víctimas de las generaciones pasadas en su pura apuesta por el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, Alberto et al. 2009 “Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido. Elementos para una propuesta política y económica para la Iniciativa de no explotación del crudo del ITT” en *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) N° 23.
- Andrade, Pablo 2005 “¿Populismos renovados? Ecuador y Venezuela en perspectiva comparada” en Andrade, Pablo (ed.) *Constitucionalismo autoritario: los regímenes contemporáneos en la Región Andina* (Quito: UASB/CEN).
- Barrera, Augusto 2001 “Nada sólo para los indios: a propósito del último levantamiento indígena” en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 10, abril.
- Barrera, Augusto (ed.) 2004 *Entre la utopía y el desencanto. Pachakutik en el gobierno de Gutiérrez* (Quito: Planeta)
- Bensaid, Daniel 2005 “Multitudes ventrílocuas” en *Viento Sur* N° 79, marzo.
- Birk, N. 2009 *The Participatory Process of Ecuador’s Constituent Assembly 2007/2008*, Tesis de Maestría, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
- Bretón, Víctor 2008 “La deriva identitaria del movimiento indígena en los Andes ecuatorianos o los límites de la etnofagia”, Ponencia en el 50° Congreso FLACSO-Ecuador, del 29 al 31 de octubre de 2007.
- Chiriboga, Manuel 2001 “El levantamiento indígena ecuatoriano de 2001: una interpelación” en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 10, abril.

- Dávalos, Pablo 2004 "Izquierda, utopía y movimiento indígena en el Ecuador" en Rodríguez, César *et. al.* (eds.) *La nueva izquierda en América Latina* (Bogotá: Norma).
- Echeverría, Julio 2005 *El desafío constitucional: crisis institucional y proceso político* (Quito: ILDIS/Abya Yala).
- El Comercio* 2010 (Quito) 17 de abril.
- Hidalgo, Francisco; Corral, Luis y Alfaro, Eloy 2005 "El 'que se vayan todos' y las asambleas populares en el Ecuador" en *Herramienta* (Buenos Aires) N° 29.
- Honneth, Axel 1996 "La dynamique sociale du mépris. D'ou parle une théorie critique de la société?" en Bouchindhomme, Christian y Rochlitz, Rainer (dir.) *Habermas, la raison, la critique* (París: Cerf).
- Hoy* 2010 (Quito) 25 de marzo.
- Hurtado, Edison 2005 "Lo que pasó en CIESPAL. Apuntes etnográficos sobre el poder, los medios y los sinsentidos de la violencia" en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 23.
- Ibarra, Hernán 2008 "Notas sobre las clases medias ecuatorianas" en *Ecuador Debate* (Quito: Centro Andino de Acción Popular) N° 74.
- Larrea, Gustavo 2008 "Alianza País: una apuesta política novedosa" en Ramírez Gallegos, Franklin (ed.) *La innovación partidista de las izquierdas en América Latina* (Quito: ILDIS).
- Leon, Jorge 2009 "A nova Constituição do Equador, 2008" en Serafim, Lizandra y Moroni, José Antonio (org.) *Sociedade civil e novas institucionalidades democráticas na América Latina* (San Pablo: Instituto Pólis/INESC).
- Moreano, Alejandro *et. al.* 1998 *La Nueva Constitución, escenarios, actores, derechos* (Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD).
- Offe, Claus 1992 *La gestión política* (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).
- Ospina, Pablo 2005 "El abril que se llevó al Coronel que no murió en el intento" en *Ecuador Debate* (Quito: Centro Andino de Acción Popular) N° 65, agosto.
- Ospina, Pablo 2009 "Historia de un desencuentro: Rafael Correa y los movimientos sociales en el Ecuador" en Hoetmer, Raphael (coord.) *Repensar la política desde América Latina. Cultura, Estado y movimientos sociales* (Lima: UNMSN).
- Pérez Ledesma, Manuel 1994 "Cuando lleguen los días de cólera" en *Zona Abierta* N° 69.
- Quintero, Rafael 2007 "Los socialistas de cara al próximo gobierno" en *La Tendencia* N° 4.
- Ramírez Gallegos, Franklin 2000 "Equateur: la crise de l'État et du model néolibéral de développement" en *Problèmes d'Amérique Latine* (París: La documentation Française) N° 36, enero-marzo.

- Ramírez Gallegos, Franklin 2002 “¿Hegemonías emergentes? Golpismo, política y resignificación democrática. Un contrapunto ecuatoriano-venezolano” en *Las FF. AA. en la región andina: ¿actores deliberantes o subordinados?* (Lima: Comisión Andina de Juristas/Embajada de Finlandia).
- Ramírez Gallegos, Franklin 2003 “El paso del movimiento indio y Pachakutik por el poder” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año IV, N° 11, mayo-agosto.
- Ramírez Gallegos, Franklin 2005 *La insurrección de abril no fue sólo una fiesta* (Quito: Taller El Colectivo/CIUDAD/Terranueva/Abya-Yala).
- Ramírez Gallegos, Franklin et. al. 2006 *Participación ciudadana y reforma política. El Caso del Sistema de Concertación Ciudadana* (Quito: Taller El Colectivo/PDDL-GTZ).
- Ramírez Gallegos, Franklin 2008 “Le mouvement indigène et la reconstitution de la gauche en Equateur” en Vommaro, Gabriel (ed.) *La Carte rouge d'Amérique Latine* (París: Du Croquant).
- Ramírez Gallegos, Franklin 2010 “Desencuentros, convergencias, polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales” en *Nueva Sociedad* N° 227, marzo-abril.
- Rheingold, Howard 2005 *Multitudes Inteligentes: la próxima revolución social* (Barcelona: Gedisa).
- Romero, M. 1999 “Coyuntura nacional: se profundiza la recesión y la incertidumbre” en *Ecuador Debate* (Quito: Centro Andino de Acción Popular) N° 47.
- Rosanvallon, Pierre 2007 *La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza* (Buenos Aires: Manantial).
- Saint-Upéry, Marc 2001 “El movimiento indígena ecuatoriano y la política del reconocimiento” en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 10, abril.
- Seligson, Mitchell 2008 *Cultura política de la democracia en Ecuador 2008* (Quito: Vanderbilt University/Cedatos).
- Senplades 2009 *Recuperación del Estado Nacional para alcanzar el buen vivir* (Quito: Senplades).
- Silva, Erika 2005 “El coronel y los forajidos” en *Renovación* (Cuenca) N° 7, mayo.
- Tapia, Luis 2001 “Subsuelo político” en García Linera, Álvaro et. al. *Pluriverso. Teoría política boliviana* (La Paz: Muela del Diablo).
- Tilly, Charles 2005 “Los movimientos sociales entran en el siglo XXI” en *Política y Sociedad* (Madrid: Universidad Complutense) Vol. 42, N° 2.
- Unda, Mario 2005 “Quito en abril: los forajidos derrotan al coronel” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año 6, N° 16.
- Zavaleta Mercado, René 2008 *Lo nacional-popular en Bolivia* (La Paz: Plural Editores).

CARLOS MOREIRA*

MOVIMIENTOS POPULARES Y LUCHAS SOCIALES EN URUGUAY

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, América Latina fue atravesada por un auge de las movilizaciones sociales donde actores de orientación contra hegemónica buscaron expresar sus intereses, demandas y objetivos. En ese contexto, Uruguay ha sido siempre un caso difícil de incorporar a los análisis, dado que es una sociedad que prioriza la lucha política institucionalizada a través de los partidos políticos. Sin embargo, dentro de la vigencia de este esquema se observan algunas transformaciones. En este trabajo, abordamos la actualidad de los movimientos sociales y populares en Uruguay, su situación actual y perspectivas de futuro. El mismo, aunque incluye referencias históricas de la evolución de los movimientos sociales en las últimas décadas, se concentra en realizar una caracterización de los principales temas y sujetos en conflicto durante el gobierno del Frente Amplio que transcurrió en el quinquenio 2005-2010.

A pesar de las políticas de asistencia social y negociación colectiva que se implementaron durante el gobierno del Frente Amplio en Uruguay bajo la presidencia del Dr. Vázquez (2005-2010), a comienzos del año 2007 fue posible visualizar algunos signos de quiebra del con-

* Político uruguayo. Profesor investigador de la Universidad Nacional de Lanús.

senso social alcanzado, y para la segunda mitad del gobierno del Frente Amplio diversos grupos y movimientos sociales se manifestaron públicamente y en forma masiva contra las políticas llevadas a cabo desde el Poder Ejecutivo. Con los resultados a la vista, sabemos que en materia electoral esto no representó ningún riesgo para el gobierno *frenteamplista*, ya que logró una mayoría ciudadana en las elecciones del 2009, pero si vale la pena prestarle atención a los sucesos que marcaron la relación entre el Frente Amplio gobernante y los movimientos sociales. Y es que el gobierno progresista uruguayo que construyó con éxito el consenso inicial para la primera mitad de su gestión, se enfrentó a partir del 2007 a una primera coyuntura crítica, donde el cemento de los acuerdos fue puesto a prueba, y en algunos casos comenzó a resquebrajarse, dejando lugar a significativas polarizaciones sociales dentro de su bloque de apoyo (Moreira, 2008).

EL AÑO DE LA FURIA: 2007

El 9 de marzo de 2007, una marcha multitudinaria recorrió la avenida 18 de Julio de la ciudad de Montevideo convocada para repudiar la presencia del presidente George Bush en el país. La consigna de la movilización fue *Con Artigas, por la Paz, la Unidad Latinoamericana y Contra el Imperialismo*, y los concurrentes (cerca de 15 mil) escucharon una proclama que evitó hacer críticas al gobierno. La central obrera Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) articuladora de la convocatoria, mantuvo de esta manera la posición de *apoyo crítico* que asumió desde la asunción del gobierno *frenteamplista* el 1° de marzo de 2005, en el entendido que otorgaba una carta de acción sin por ello convertirse en un aliado incondicional del mismo. Ese día y por la misma Avenida 18 de Julio aunque pocas cuadras más allá, se desarrolló otra marcha, convocada por la Coordinadora Antiimperialista, que definió claramente su posición en la lectura de la proclama: “este gobierno ha profundizado la política de entrega que durante décadas impusieron la burguesía y la oligarquía criollas con el instrumento de los partidos tradicionales y hoy nos entregan sin ningún pudor, arrodillados, al yanqui ladrón”. Los grupos convocantes, desde partidos integrantes del Frente Amplio hasta organizaciones sociales, plantearon que el gobierno del Frente Amplio se había prestado a la estrategia de división de los pueblos que lleva a cabo el imperialismo, por lo que “contra este camino humillante, de genuflexión, de ruptura con los principios más caros de la izquierda y el movimiento popular, debemos marcar otro camino” (Brecha, 2007).

Si bien no llegó a igualar a la que participó en la marcha del PIT-CNT, cerca de diez mil personas concurren a la protesta que criticó

tanto a Bush como a Tabaré Vázquez, y de esta manera, “los radicales pelearon cuerpo a cuerpo con los “institucionales” el primer puesto en concurrencia a las respectivas marchas” (Contreras, 2007). Esto demostró que si bien la importancia a nivel electoral de los grupos convocantes a la marcha radical podría ser menos significativa, a nivel de masas movilizadas dicho apoyo era importante, constituyéndose en “la primera manifestación callejera que enfrenta el gobierno progresista, la primera manifestación pública masiva de repudio y malestar ante sus políticas de Estado” (Sempol, 2007).

Un mes y medio más tarde, el 29 de abril se realizó la movilización ambientalista denominada *Un Abrazo al Río Uruguay*, que reunió a miles de personas en el lado argentino de dicho río, y que significó que decenas de manifestantes uruguayos y delegaciones de las localidades de Rocha, Montevideo, Canelones, San José, Colonia, Soriano y Fray Bentos se sumaran al rechazo a la instalación de la pastera Botnia, lo cuál no dejaba de ser un dato sorprendente frente al consenso mayoritario de apoyo explícito o tácito a la instalación de la multinacional finlandesa que existe en la sociedad y el sistema político uruguayo. Pocos días después, y ya en el terreno sindical, el 1° de Mayo se realizaron dos actos paralelos, bajo diversas consignas con motivo de Día de los Trabajadores. En líneas generales se repitió la dicotomía marcada el 9 de marzo con las marchas de repudio a Bush: uno de los actos fue convocado por el PIT-CNT –como central obrera– el otro acto, fue organizado por la Tendencia Clasista y Combativa, conglomerado minoritario de sindicatos de la misma organización. Mientras en el acto oficial del sindicalismo se volvió a desarrollar la ya mencionada postura de “apoyo crítico” al gobierno progresista, el segundo acto estuvo marcado por fuertes palabras hacia la dirigencia del PIT-CNT a quienes se calificó como “burócratas sindicales”, al tiempo que el discurso estuvo plagado de críticas a los lineamientos de acción del gobierno.

Esta secuencia de movilizaciones callejeras durante junio en ocasión del natalicio de José Artigas. Para el día 19 el gobierno *frenteampulista* anunció su intención de convocar a la ciudadanía a la Plaza Independencia de Montevideo, para iniciar un proceso de reconciliación nacional bajo el lema “nunca más uruguayos contra uruguayos”. Pocos días antes del acto, el presidente Vázquez debió cambiar la consigna de su convocatoria por “nunca más al terrorismo de Estado”, ante las críticas recibidas desde diversos sectores de la izquierda uruguaya, especialmente el Partido Comunista del Uruguay. Al evento concurren la mayoría de la dirección del FA, y la totalidad de los dirigentes de los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, este arco de dirigentes oficialistas y opositores no contó con el apoyo de

las bases de la militancia *frenteamplista*, y sólo entre tres y cuatro mil personas se hicieron presentes para escuchar el discurso del Presidente. Más aún, ninguna organización de derechos humanos concurrió a la convocatoria oficial (Página 12, 2007a). Ese día y a pocas cuadras de allí, como en ocasiones anteriores, se manifestaron los que se opusieron al acto oficialista, ahora en dos marchas distintas. Por un lado, los más próximos al gobierno con su postura de apoyo crítico, esta vez con la ausencia del PIT-CNT, que se abstuvo de concurrir a ninguno de los actos. Y por otro lado, la movilización de la Asamblea Popular, creada a comienzos del 2006 para unir a los sectores de izquierda disconformes con las políticas del gobierno *frenteamplista*, y que había tenido un importante protagonismo en la mencionada marcha anti Bush, en tanto núcleo central de la Coordinadora Antiimperialista. El impulso de estos sectores opositores fue tal que a partir de este 19 de junio se inició una campaña de recolección de firmas para reformar la constitución y convocar a otro plebiscito que permitiera derogar el resultado del plebiscito de 1989 mismo que sancionó la amnistía para aquellos que violaron los derechos humanos durante la dictadura.

Finalmente, esta serie de manifestaciones callejeras y de utilización del espacio público para la expresión de demandas que caracterizó al año 2007, tuvo su culminación en los meses de noviembre y diciembre cuando los vecinos de la Villa del Cerro, tradicional zona obrera de Montevideo, se movilizaron para exponer ante las autoridades la necesidad de ser consultados sobre el destino del ex Frigorífico Nacional, creado en 1928 y cerrado por la dictadura militar en 1978. Ante las autoridades del gobierno *frenteamplista*, los vecinos insistieron que el Estado tenía que comprometerse a desarrollar un proyecto productivo en el ex Frigorífico Nacional con el consenso y la participación de las organizaciones locales (Red Intersocial Oeste, 2008). Estas nuevas y recientes manifestaciones de descontento social expresadas en las calles y espacios públicos de Montevideo, similares a otros ocurridos en el país en el último año, como tomas de tierras fiscales que grupos sociales autoconvocados han realizado en Bella Unión (Departamento de Artigas) y Kiyú (Departamento de San José) para desarrollar emprendimientos productivos, son el objeto central de análisis del presente capítulo.

¿Qué había detrás de estos fenómenos sociales que parecían no responder a la ordenada tradición uruguaya de hacer política bajo la conducción de los partidos y el Estado? ¿Expresaban algún cambio o giro en la sociedad y la política uruguaya? ¿Los partidos políticos, la central sindical, las multinacionales, el propio Estado estaban siendo cuestionados por sujetos sociales que parecían moverse autónomamente?

Hasta aquí para los académicos ha parecido suficiente con caracterizar la política uruguaya como siguiendo un patrón estatista y partidocéntrico, que se ajusta imperfectamente a la escena y los protagonistas de la época *posbatllista* en que vivimos, y las a veces multitudinarias movilizaciones callejeras convocadas al margen de la voluntad de las organizaciones partidarias parecían poner aún más en cuestión esta creencia.

Nuestra hipótesis es que la revitalización de los movimientos populares se relaciona estrechamente con la existencia de un Estado uruguayo que solo da respuesta parcial a las demandas más urgentes de vastos sectores sociales, y por ende, la dinámica de los sujetos busca satisfacer las mismas desenvolviéndose autónomamente de los partidos políticos, especialmente respecto al Frente Amplio. Pero nuestra hipótesis va más allá. Aceptando que hay una crisis en el Estado y el sistema de partidos, sostenemos que dicha crisis tiene efectos complejos y diferenciales sobre los movimientos sociales y sus capacidades de acción. En otras palabras, la retirada del Estado y la crisis de representatividad de los partidos políticos, y en especial, del Frente Amplio como coalición tradicional de la izquierda uruguaya, parece plantear a los movimientos sociales una serie de oportunidades que facilitan a unos, y condicionan a otros, sus posibilidades de desarrollo futuro (Tarrow, 1999).

EL CONTEXTO

Durante las últimas cuatro décadas, coherentemente con las transformaciones ocurridas en el mundo, en Uruguay diversos aspectos del Estado social formado en las primeras décadas del siglo XX bajo el liderazgo de José Batlle y Ordoñez han tendido a desaparecer o vaciarse de contenido. Definido a grandes rasgos, el proceso comprendió la implementación gradual de tres tipos de reformas estructurales. En primer lugar, la reforma del sector público a través de privatizaciones y tercerizaciones. En los hechos esto significó que la satisfacción de las necesidades básicas de la población se fue retirando de la órbita estatal. En segundo lugar, las reformas del sector externo que tendieron a la liberalización de precios y la desregulación de los mercados, acompañadas del ajuste a nivel macro de la economía nacional con el objetivo de hacerla más competitiva en el concierto internacional. Esto significó abandonar todo vestigio del modelo de sustitución de importaciones en pos de otro basado en el comercio exterior. Por último, la implementación de una reforma del mercado de trabajo sobre la base de la desregulación del mismo y la suspensión de las negociaciones colectivas. Esto implicó una reestructura productiva que se reflejó en una caída del 10% de la participación del agro y la industria

en el PBI y un aumento de la dependencia del capital financiero (Bittencourt, 2006).

Desde el punto de vista social la consecuencia de este ciclo reformista fue que el Uruguay dejó atrás la mesocracia, para mostrar “signos inequívocos de desigualdad creciente”, erosionándose la integración y la cohesión social, hasta llegar “a la segregación cultural que separa más y más a las clases populares, medias y altas” (PNUD, 1999). Desde el punto de vista político, la fase neoliberal *posbatllista* se caracterizó por el predominio de la competencia electoral y el compromiso sobre el conflicto violento y global, aunque acompañado de un proceso de decadencia del Parlamento y de los partidos políticos (Moreira, 2003). En estos resquicios que los cambios y la crisis política-estatal y social han provocado en la estructura tradicional del Uruguay, surgieron ventanas de oportunidades para que (re)tomen su lugar en el escenario público antiguos y nuevos actores sociales.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESDE FINALES DE LA DICTADURA HASTA NUESTROS DÍAS

Desde los últimos meses de la dictadura hasta nuestros días, el desarrollo de los movimientos sociales en Uruguay atravesó tres etapas. En la primera, que se extendió desde los últimos meses de 1984 hasta comienzos de los años noventa, los movimientos sociales vivieron el auge propio de la recuperación del régimen democrático luego de años de represión dictatorial. En la segunda, los movimientos sociales después de la victoria en el plebiscito de 1992 que impidió las privatizaciones de las empresas públicas, paradójicamente entraron en un largo letargo, al mismo tiempo que la ofensiva neoliberal se manifestaba en otros campos de la acción estatal con las denominadas *tercerizaciones* impulsadas por el gobierno de Luís Alberto Lacalle. La tercera, iniciada entre 2002 y 2005 transcurre actualmente y en ella ha habido un nuevo impulso de la actividad los movimientos sociales. Veamos con detalle cada una de estas etapas.

DEL BLOQUE DEMOCRÁTICO AL BLOQUE PROGRESISTA

En 1984 la transición a la democracia fue impulsada por un heterogéneo bloque opositor a la dictadura donde convergieron partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales. Entre estos movimientos sociales se encontraban los de más importancia en aquel momento, esto es, la flamante central obrera PIT-CNT que articuló la tradición de los años sesenta con la nueva generación de sindicalistas, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas de Ayuda Mutua (FUCVAM) fundada en 1970, y los movimientos de derechos humanos entre los que se encontraba el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) fundado en

1981. Junto a ellos, compartieron el espacio público otros actores sociales de reciente creación, como los que se movilizaron tras la demanda de solución a la crisis de vivienda, a través de toma de tierra y el establecimiento de asentamientos irregulares. En esta primera fase, los movimientos sociales se unificaron en torno al reclamo de verdad y justicia sobre el tema de los desaparecidos. Esto implicó un rechazo a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado promulgada en diciembre de 1986 durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), que significaba suspender definitivamente toda posibilidad de juzgar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los movimientos sociales impulsaron la derogación de la Ley de Caducidad, pero el triunfo de la opción oficialista en el plebiscito de abril de 1989, sumado a que los partidos políticos ya reorganizados volvieron a ocupar paulatinamente el centro de la escena pública, marcó el inicio de una fase declinante en el papel y el accionar de los mismos.

En los años noventa, tanto FUCVAM como SERPAJ y demás organizaciones de derechos humanos trataron sin éxito que los sucesivos gobiernos de Lacalle (1990-1995), Sanguinetti (1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005) cumplieran con el artículo 4° de la Ley de Caducidad que preveía la investigación de los hechos de desaparición de personas. Al mismo tiempo, enmarcaron su estrategia subordinándose a la del FA en su largo trayecto hacia el poder. De esta manera, el bloque democrático opositor a la dictadura, que integraban todos los partidos políticos y movimientos sociales, con el gobierno de los partidos tradicionales Colorado y Blanco se transformó en un bloque progresista opositor al neoliberalismo. A partir de la crisis del año 2002, los movimientos sociales conocieron un nuevo auge, y con la llegada al gobierno del FA, esta revitalización se desarrolló en un escenario de crisis de su alianza con la coalición de izquierda.

OFICIALISTAS Y OPOSITORES

La división del bloque progresista entre oficialistas y opositores es uno de los fenómenos que caracterizó la gestión del gobierno del Frente Amplio. Los oficialistas consideraron que el gobierno *frenteamplista* realizó las cosas dentro del límite de lo posible, que los problemas fueron enfrentados con las máximas capacidades disponibles, y que si bien será necesario profundizar las reformas o acelerar el paso en una segunda administración, en el rumbo general de las políticas no será necesario introducir ningún cambio sustancial. Los segundos, por su parte, criticaron el gradualismo de la gestión *frenteamplista* considerándola una traición a las máximas programáticas que señalan la necesidad de impulsar desde un gobierno de izquierda medidas de

cambio radical. Mientras el gobierno consideró adecuado su modelo de desarrollo basado en una coyuntura favorable de precios para los productos agro exportables, la oposición progresista, aunque existieron muchas diferencias de globalidad y énfasis que veremos más adelante, considero que este modelo significó consolidar la dependencia del Uruguay respecto a los países desarrollados, y que en realidad el gobierno *frenteampartista* continuó la línea de acción de sus predecesores, los partidos tradicionales. En síntesis, el oficialismo se consideró representante de una línea moderna de la izquierda, emparentada con la socialdemocracia y la tercera vía europea, mientras que en la vereda de enfrente, los actores se reivindicaron representantes de la izquierda tradicional o de una nueva izquierda radical, y denunciaron al gobierno de neoliberal.

Sobre la evolución futura de esta división entre oficialistas y opositores también existieron perspectivas divergentes. Desde el gobierno *frenteampartista* se vio a la política en Uruguay como una política de bloques, por un lado, el bloque progresista (integrado como en los noventa por el Frente Amplio, la central sindical PIT-CNT y los movimientos sociales) por otro lado, el bloque conservador (integrado por los partidos tradicionales y las cámaras empresariales) y se creyó que a medida que se acercara el momento electoral las diferencias al interior del bloque progresista se minimizarían frente a las que se tuvieran en la competencia con el bloque conservador. Por su parte, la oposición radical sostuvo que en la medida que el gobierno no cambiara el rumbo, se iría generando una escisión permanente de sus fuerzas políticas y sociales, y el Frente Amplio perdería su carácter de coalición unitaria de la izquierda uruguaya (algo de ello ha comenzado a ocurrir con el retiro del 26 de Marzo, grupo fundador del FA, a comienzos de 2008).

Esta caracterización del bloque progresista que accedió al gobierno con el triunfo electoral del 2005 y su paulatina escisión en oficialistas y opositores, tuvo dos grandes consecuencias para los movimientos sociales. En primer lugar, la fractura interna del Frente Amplio, se trasladó a los movimientos que integraron el bloque progresista. Por ejemplo, el debate entre oficialistas y opositores atravesó gran parte de la actividad del PIT-CNT, que entre 2007 y 2009 decidió mantener un apoyo crítico al gobierno, como mejor manera de sintetizar las correlaciones de fuerzas internas levemente superiores del oficialismo. Otros movimientos fueron ubicándose en uno u otro campo, con mayor o menor nitidez en las definiciones, permaneciendo muchos de ellos en la inasible frontera de las posiciones intermedias. Claramente, en la medida que la tradición de lucha en común dentro del bloque democrático primero y progresista, sobrevivió y mantuvo su peso, la

lógica de la confrontación interna fue subordinada a la lucha frente al bloque conservador y las posibilidades para una fuga hacia la izquierda de grupos políticos y movimientos sociales opositores, se vieron seriamente afectadas.

SUJETOS EN CONFLICTO

Transcurrido el período del primer gobierno del Frente Amplio, es posible identificar, entonces, tres tipos de escenarios en el mapa de los movimientos sociales en el Uruguay actual, cada uno con sus actores y conflictos específicos.

EL GOBIERNO FRENTEAMPLISTA Y LA ASAMBLEA POPULAR

La coalición se mantuvo unida con el objetivo de ganar las elecciones nacionales de 2009, pero una vez en el gobierno las diferencias internas entre radicales y moderados se hicieron insalvables. De esta manera, nació en abril de 2006 la Asamblea Popular, un conglomerado de veinte partidos y organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles que se presentaron a sí mismo como una oposición de izquierda al carácter centrista del gobierno de Vázquez. El papel dominante en este colectivo de organizaciones lo tuvieron el 26 de Marzo y la Corriente de Izquierda. A comienzos de 2008, el 26 de Marzo rompió formalmente los lazos que lo unían al Frente Amplio y propuso a sus aliados que la Asamblea Popular se transformara en un nuevo partido político con el objetivo de lograr lugares en el Parlamento en las elecciones nacionales de octubre de 2009. La Corriente de Izquierda, luego de una reñida votación interna decidió no abandonar el Frente Amplio, lo que determinó que un numeroso grupo de dirigentes y militantes en abierto desacuerdo con la decisión adoptada pasaran a integrarse a la Asamblea Popular. Desde el punto de vista ideológico, esta nueva coalición se ubicó claramente dentro de la ortodoxia marxista de la izquierda uruguaya, se definió como anticapitalista y se propuso resistir al neoliberalismo con el objetivo de construir el socialismo. Al momento del auge de los movimientos populares del 2007, Jorge Zabalza, uno de sus líderes, declaró que el fracaso del gobierno estuvo en “no poder solucionar los problemas de las mayorías populares, pero no por falta de recursos o capacidad, sino por un compromiso con otro modelo de desarrollo indicado por los organismos financieros internacionales, las multinacionales y las clases dominantes del Uruguay” (Página 12, 2007b).

EL ESTADO Y LOS VECINOS ORGANIZADOS

Durante los últimos años, los movimientos de vecinos organizados han navegado en el término medio entre las ventanas de oportuni-

dades que la crisis de los partidos y el Estado les abrió, además de los obstáculos y condicionamientos que la misma les planteó. En esta situación encontramos una serie de movimientos autónomos de los partidos políticos con una importante experiencia de autogestión, vinculados a asuntos locales y medio ambientales, tanto en el medio urbano como rural.

Sabido es que en Uruguay, a pesar de existir un importante presencia de la ciudadanía en organizaciones de la sociedad civil, son casi inexistentes las instancias de participación en las políticas públicas estatales, así como en el control y la rendición de cuentas de las instancias gubernamentales (Instituto para el Desarrollo y la Comunicación, 2006). En estos casos, la crítica que los movimientos de vecinos organizados hacen al accionar del Estado y el gobierno no significa que tengan un modelo alternativo de políticas, sino que se concentra en un paso previo: luchar por la construcción de espacios para la participación articulada en la gestión pública con los actores estatales.

El surgimiento de estos nuevos sujetos sociales estuvo relacionado en gran medida con la problemática de la retirada estatal de los procesos de protección social aunado al aumento de la pobreza/marginalidad que se originaron con la implementación del modelo económico neoliberal. Por tanto, sus militantes de base se reclutaron en los barrios de la periferia montevideana y ciudades del interior, entre las personas que habían caído por debajo de la línea de pobreza fundamentalmente por una insuficiencia en el ingreso monetario. Dado que su emergencia, entonces, estuvo más asociada al fenómeno coyuntural del desempleo, los vecinos organizados constituyeron un grupo heterogéneo con altos niveles de movilidad e incertidumbre, cuya situación dependió de los cambios en el ingreso, especialmente el salario (Raus, 2003).

Uno de los grupos más importantes y activos de vecinos organizados lo constituyó la Red Intersocial Oeste que actuó –y actúa– en la zona del Cerro, uno de los tradicionales barrios obreros de Montevideo, hoy convertido en un cementerio de frigoríficos, fábricas y reservorio de desempleados. La trayectoria de este movimiento de vecinos preocupados por asuntos locales tiene una década. Nacieron en 1998 en oposición al proyecto de la Secta *Moon* de instalar un puerto en las costas del barrio que dan al Río de la Plata, y llega hasta hoy agrupando a diferentes organizaciones sociales como desocupados, ocupantes de tierras, vecinos contra las drogas, entre otros. El núcleo básico sigue siendo un grupo de vecinos que tienen como base ideológica declarada la oposición a los modelos de desarrollo capitalista salvaje, y que en 2005 cuando el Frente Amplio ascendió al gobierno se radicalizó como respuesta a lo que tempranamente visualizaron

como una derechización del gobierno. En los comienzos, además de la oposición al proyecto de la Secta *Moon*, los vecinos se organizaron para atender demandas concretas y urgentes de los pobladores. En ese sentido, podríamos definirlos como una organización de autodefensa social, y en la búsqueda de satisfacer esas demandas comenzaron a presionar sobre los poderes públicos, como la Policía y la Intendencia de Montevideo. Luego de esa etapa inicial se pasó a otra, donde el carácter reactivo se complementó con propuestas en el plano de las metodologías participativas para las políticas públicas locales. Al momento del primer gobierno *frenteamplista*, como ejemplo de propuestas activas, estos movimientos de vecinos propusieron al Estado una elaboración conjunta de un proyecto a desarrollar en el predio del ex Frigorífico Nacional. En esta evolución comenzaron a trascender los límites del Cerro, para pasar al resto de la ciudad, e incluso el país, organizando encuentros con organizaciones similares en los departamentos de Artigas y Tacuarembó. La crisis del modelo estatal desarrollista, así como la adopción de estrategias continuistas de las soluciones pro mercado por parte del gobierno *frenteamplistas*, condiciona esta evolución, pues los margina de los escenarios de elaboración de las políticas públicas.

LAS MULTINACIONALES Y LOS AMBIENTALISTAS

A nadie escapa que en Latinoamérica algunos gobiernos han perdido el control de sus economías, y los bancos y empresas transnacionales parece haber encontrado la fórmula mágica de obtener beneficios: “capitalismo sin trabajo, más capitalismo sin impuestos” (Beck, 1998). Un caso paradigmático lo constituye la instalación de plantas de celulosa en el Uruguay durante el primer gobierno *frenteamplista*. Con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, se formalizan acuerdos que otorgaron ventajas impositivas a las empresas y que les permitían, por ejemplo, dar por finalizado el contrato e iniciar acciones legales contra el Estado por los motivos más inverosímiles que entorpecieran el funcionamiento productivo. La dependencia hacia la creación de fuentes de trabajo temporales y la fragilidad del Estado uruguayo, permitieron que las multinacionales tomaran para sí un papel importante en la satisfacción del bienestar social de la población. Frente a ello, la mayor parte de los actores locales aceptaron esta realidad, mientras que unos pocos intentaron oponerse y transformarla (Moreira, 1998). El papel de oposición a las multinacionales dedicadas a la producción de celulosa, quedó en manos de los grupos ambientalistas nacionales. La historia reciente del movimiento ambientalista presenta tres etapas claramente diferenciadas.

En la primera, en los ochenta y noventa, el ambientalismo nació como movimiento de autodefensa, basado en una visión conservacionista que se opuso a la construcción del Canal Andreoni y su impacto en los bañados de Rocha. En esta etapa fundacional los grupos ambientalistas se nuclearon en la organización de segundo grado Red de Organizaciones No Gubernamentales (Red ONG) y concurren masivamente a la Cumbre de Río en el año 2000. Los hitos más importantes de esta etapa fueron la formación en 1996 del Grupo Movimiento por la Vida, el Trabajo, y el Desarrollo Sustentable (MOVITDES) de la localidad de Fray Bentos que logró frenar la instalación de la planta de celulosa Transpapel (Villalba, 2007), y la activa movilización de los vecinos de Sayago para impedir la instalación de una planta de *pórtland* en ese barrio de Montevideo. La segunda etapa dio comienzo al regreso de la citada Cumbre de Río, cuando un grupo de ambientalistas se orientó hacia la incorporación de perspectivas políticas y económicas sobre los modelos de desarrollo y se relacionó con el movimiento ambiental regional internacional, logrando la creación del movimiento Eco Tacuarembó que se opuso con éxito a la instalación de una central nuclear en la localidad de Paso de los Toros. Como consecuencia de esta nueva estrategia, la Red ONG se dividió en dos sectores, uno tradicional que continuó aferrado a las banderas conservacionistas y uno renovador que incorporó los planteamientos políticos. Este último grupo fue liderado por Redes Amigos de la Tierra y la naciente Organización Guazubirá, e integrado además por Eco Tacuarembó y MOTVIDES, comenzando en conjunto una batalla contra el modelo forestal impulsado por los gobiernos de los partidos tradicionales y actualmente por el gobierno *frenteamplista*. Esta etapa centrada en la oposición al modelo forestal fue nucleando nuevos aliados como los productores y vecinos de Libertad, en el departamento de San José, que protestaban por el funcionamiento de una planta de reciclaje de Cromo 6.

El apogeo de movilización y legitimidad social se alcanzó en el año 2004, cuando contando con el apoyo de los movimientos sociales y sindicales como FUCVAM y PIT-CNT, se logró someter a referéndum la intención gubernamental de privatizar los servicios de agua, logrando un amplio respaldo ciudadano contra esa medida y obligando al gobierno a iniciar su administración ante un resultado consumado. Al asumir el gobierno *frenteamplista*, se inició la tercera etapa de la trayectoria histórica de estos movimientos, y los enemigos principales pasaron a ser las multinacionales de fabricación de pasta de celulosa, específicamente la Empresa Nacional de Celulosa España (ENCE) y la finlandesa Botnia. Las organizaciones ambientalistas uruguayas dieron el alerta a sus colegas argentinos de las asociaciones de defensa

del Río Uruguay, y con el recrudecimiento del conflicto a partir del funcionamiento de Botnia en el 2007, el eje de la acción se trasladó de Uruguay a la ciudad argentina de Gualeguaychú. Esto produjo una nueva división entre los sectores renovadores del ambientalismo uruguayo, en un ala moderada y otra radical. La vertiente moderada, integrada básicamente por las organizaciones ambientalistas no gubernamentales más institucionalizadas, aspiró a convertirse en grupo de presión, manteniéndose autónoma de los partidos políticos. Su accionar pasó menos por la política en las calles y más por la política en las oficinas del Estado. Sus demandas específicas fueron incluidas en cuestionamientos globales sobre el modelo de desarrollo, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), o las iniciativas gubernamentales de privatización de las empresas públicas que controlan recursos naturales, como el agua. Tuvieron siempre una posición crítica hacia la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, a la que cuestionaron su utilización de los cortes de puentes y rutas como metodología de lucha. Por otra parte, creyeron que la pérdida de legitimidad de los temas ambientales, la desmovilización de la militancia *frenteambientalista* y el cierre de su acceso a las oficinas estatales, provocaron un estancamiento tal en la evolución de las organizaciones ambientales, que casi resultó fatal para sus posibilidades de convertirse en referentes de la sociedad uruguaya. Al final del primer gobierno *frenteambientalista* se encontraba en una situación de transición y sentía que el futuro era un gran signo de interrogación.

Por su parte, las organizaciones ambientales que conformaron la vertiente radical, fueron aliados de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y en conjunto se integraron en la Asamblea Ambientalista Regional que realizó tres reuniones, a saber: la primera en Nueva Palmira, donde la empresa Botnia tiene el puerto de salida de su producción, la segunda en Tacuarembó en diciembre de 2007, y la tercera en Gualeguaychú en marzo de 2008, sumándose a la misma organizaciones de Brasil y Paraguay. Las organizaciones uruguayas que son exponentes de esta vertiente ambientalista son los productores rurales de Cerro Alegre en Soriano y Mercedes, el MOVITDES de Fray Bentos, el sindicato de trabajadores de la forestación de Rivera, la Asamblea del Callejón de Montevideo, el Movimiento 10 de septiembre de 1815 de Tacuarembó (campesinos ocupantes de tierras en el departamento mas forestado del Uruguay), y el Grupo Sierras de Rocha, entre otros. Estas organizaciones trataron de romper las fronteras y barreras nacionales con la apelación al acuífero guaraní como la región compartida por uruguayos, argentinos, paraguayos y brasileños.

En términos programáticos, los ambientalistas uruguayos (tanto moderados como radicales) consideraron que la instalación de las fá-

bricas de celulosa en Uruguay provocó un proceso de extranjerización de la tierra, sobre explotación de la mano de obra y contaminación, y a diferencia de la Asamblea de Gualaguaychú que solicitó la relocalización de las plantas de celulosa, este movimiento pretendió que no hubiera ninguna planta de celulosa en Uruguay, dado los efectos negativos de la forestación sobre el agua, la tierra y el contexto social. Sin embargo, en Uruguay los argumentos de los ambientalistas contra el modelo de desarrollo forestal nunca fueron fruto de un debate nacional. La instalación de Botnia fue un hecho consumado, y con el corte desde el lado argentino, la defensa de las posiciones ambientalistas en Uruguay se ha visto deslegitimada ante la creciente ola de nacionalismo que impregna el debate sobre el tema entre 2005 y 2009. Las organizaciones ambientalistas realizaron diversos pedidos de audiencia al Presidente Vázquez, y éste no les ha concedido ninguna, y entre los movimientos políticos y sociales analizados (partidos, vecinos, ambientalistas), en este contexto de Estados mínimos y débiles decididos a proteger las inversiones extranjeras a cualquier precio, las organizaciones ambientalistas uruguayas son los que más se han visto afectados por la crisis de la matriz estatista y partidocéntrica.

CONCLUSIONES

Durante la primera década del siglo XXI, América Latina está atravesada por un auge de las movilizaciones sociales donde actores de orientación contra hegemónica buscaron expresar sus intereses, demandas y objetivos. En ese contexto, Uruguay fue un caso difícil de incorporar a los análisis, “toda vez que se presenta como una sociedad poco proclive a la confrontación y la política de la calle, donde hasta el presente el papel de organizaciones populares y movimientos sociales ha sido opacado por el rol de los partidos políticos” (López Maya *et al.*, 2007). Como hemos visto en este trabajo, los movimientos sociales en Uruguay presentan algunas características que es necesario destacar.

En primer lugar, desde el nacimiento del Uruguay los partidos políticos y el Estado tuvieron un papel tan fundamental, que es posible afirmar que no ha existido hasta el momento una tradición destacable de movimientos sociales que hubieran podido controlar, vigilar u obstruir el accionar de los mismos. No significa esto que no hayan existido a lo largo del siglo XX experiencias sociales de tipo político, si no que los movimientos han estado tan estrechamente vinculados a los aparatos partidarios que han funcionado como una suerte de brazo social de los partidos políticos. Fundamentalmente se puede decir que las representaciones de las dos grandes corrientes (obrero y estudiantil) que nacieron en la primera mitad del siglo pasado fueron abandonando la lucha eminentemente social para afianzarse,

en mayor o menor medida, a partir de los años setenta entorno a un proyecto partidario, proceso que desembocó en la fundación del Frente Amplio.

Si nos concentramos en los últimos años, a la salida de la dictadura esos movimientos fueron conformando una trayectoria de cierta relevancia, a partir de este bloque progresista que alcanzó su apogeo con el plebiscito de 1992 que logró frenar la estrategia privatizadora del gobierno de Luís Alberto Lacalle, pero ciertamente no encontramos allí un movimiento social independiente, sino un actor que actuó nuevamente de manera dependiente de la estrategia político partidaria del Frente Amplio.

En segundo lugar, resulta destacable que el movimiento social uruguayo optó, en esa y otras ocasiones, por la apelación a un formato institucional, a través de los recursos de plebiscitos y referéndum establecidos en la Constitución Nacional (Falero y Vera, 2004), que independientemente de sus ventajas y desventajas, acentuó la dependencia de los movimientos sociales hacia los partidos políticos, al punto que hoy esos instrumentos constitucionales tienen pocas posibilidades de utilizarse o de salir triunfantes, porque el propio Frente Amplio como fuerza oficialista no las apoya, y no es un secreto para nadie el vínculo de las organizaciones sociales con la coalición de izquierda gobernante.

En tercer lugar los líderes sociales están no sólo estrechamente imbricados al Estado y los partidos, son dependientes de ellos, al punto que la afirmación de la dirigente social argentina Milagros Sala sobre que “los políticos son los políticos, y los dirigentes sociales son los dirigentes sociales” (Página 12, 2009), en Uruguay es una frase de ficción. No extraña, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los representantes de la campaña por la nulidad de Ley de Caducidad desarrollada en vísperas de las elecciones de 2009, fuesen conocidos por su vinculación partidaria, por más que quisiesen operar desde otros roles. De la misma manera no puede sorprender que la lucha por implementar el voto epistolar, también derrotada al igual que la anterior en octubre de 2009, sin figuras o instituciones con peso partidario apoyando la iniciativa, haya quedado poco menos que en el anonimato. Es más, históricamente en Uruguay los grandes liderazgos sociales se han construido generalmente desde el Estado y los partidos políticos, es decir, desde el ejercicio del poder y no desde la oposición a él.

En este trabajo hemos abordado la historia reciente de los movimientos sociales y populares en Uruguay en un contexto de consolidación de las tendencias de cambio estructural iniciadas hace tres décadas, esto es, el afianzamiento de la matriz agro-exportadora con un crecimiento inédito de la desigualdad social, el retroceso de la ca-

pacidad estatal y una crisis de representatividad de los partidos, en especial del Frente Amplio como coalición de izquierda.

Hemos visto como al iniciarse la transición democrática en 1984, todos los partidos políticos y los movimientos sociales y populares estuvieron unidos en el bloque democrático opositor a la dictadura, y como para la década siguiente con el desprendimiento de los partidos tradicionales Colorado y Blanco que pasaron a alternarse en el gobierno, el bloque democrático se transformó en un bloque progresista opositor al neoliberalismo. Finalmente con la llegada del Frente Amplio al poder, este bloque progresista a su vez comenzó a transitar una nueva fase, con la escisión entre oficialistas y opositores al gobierno *frenteamplista*. En este contexto de crisis estatal y partidaria, especialmente de la izquierda, nuestra hipótesis guía es que dicha crisis tuvo efectos complejos y diferenciales sobre los movimientos sociales y sus capacidades de acción, en tanto planteó a éstos una serie de oportunidades de desarrollo a la vez que surgieron elementos que condicionan fuertemente el mismo. Por el lado de los efectos positivos el proceso de crítica y escisión de su propia coalición de las fuerzas opositoras más radicales, constituyó en conjunto un proceso que explica la revitalización de los movimientos sociales en los últimos años. Por el lado negativo, la crisis del modelo estatal desarrollista, así como la adopción de estrategias continuistas de las soluciones pro mercado por parte del gobierno *frenteamplista*, condicionó esta evolución pues los marginó de los escenarios de elaboración de las políticas públicas.

BIBLIOGRAFÍA

- Beck, U. 1998 *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización (s/e)*
- Bittencourt, G. 2006 “Uruguay 2006; desarrollo esquivo o rupturación de la historia”, en *América Latina Hoy* (Salamanca) N° 44.
- Brecha* (Montevideo) 16 de marzo.
- Contreras 2007 en *Brecha* (Montevideo) 16 de marzo.
- Falero, A. y Vera, A. 2004 “Transformaciones sociales y campo popular en Uruguay. Construcción de alternativas y escenarios posibles” en Brando, O. (comp.) *Uruguay hoy. Paisaje después del 31 de octubre* (Montevideo: Ediciones del Caballo Perdido).
- Instituto de Comunicación y Desarrollo 2006 “Brillos e impurezas de un diamante. Resultados del índice de la sociedad civil en Uruguay” en <http://www.lasociedadcivil.org/uploads/ciberteca/informe_final_isc_en_uruguay_copy1.pdf> acceso 16 de abril de 2008.
- López Maya, M., Iñigo Carrera, N. Calveiro, P. 2007 “Política de calle y contrahegemonía” en *Luchas contra hegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).

- Moreira, Constanza 1998 “Modernización, reforma del estado y consolidación democrática: el Uruguay en el contexto de las “nuevas democracias” en *Documento de Trabajo N° 12* (Montevideo: ICP/ Universidad de la República).
- Moreira, Constanza 2003 *Una mirada a la democracia uruguaya. Reforma del estado y delegación legislativa 1995-1999* (México: Porrúa).
- Moreira, Constanza 2008 “El gobierno del Frente Amplio en Uruguay y la (problemática) construcción del consenso (2005-2007)” en *Bajo el Volcán* (Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) Año 12. N° 7.
- Página 12* 2007a (Buenos Aires) 20 de junio.
- Página 12* 2007b (Buenos Aires) 18 de noviembre.
- Página 12* 2009 (Buenos Aires) 31 de octubre.
- PNUD 1999 *Desarrollo Humano en Uruguay 1999* (Montevideo: PNUD).
- Raus, D. 2003 “Transformaciones sociales y gobernabilidad política en América Latina y Argentina” en *Cuaderno N° 2* (Buenos Aires: Universidad Nacional de Lanús).
- Red Intersocial Oeste 2008 *El Frigorífico Nacional y el Uruguay productivo* (Montevideo: Red Intersocial Oeste/Universidad de la República/PIT-CNT/FLACSO Uruguay).
- Sempol 2007 en *Brecha* (Montevideo) 16 de marzo.
- Tarrow, S. 1999 “Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales” en McAdam, D., McCarthy, J., Zald, M. (eds.) *Movimientos sociales, perspectivas comparadas* (Madrid: Istmo).
- Villalba, D. 2007 *Haciendo camino* (Montevideo: El Tomate Verde Ediciones/Redes Amigos de la Tierra).

PATRICIA CHÁVEZ LEÓN*
DUNIA MOKRANI CHÁVEZ**
PILAR URIONA CRESPO***

UNA DÉCADA DE MOVIMIENTOS SOCIALES EN BOLIVIA

HACER UN BALANCE DE LAS LUCHAS de los movimientos sociales en Bolivia, bajo la perspectiva de que las mismas son parte de un proceso histórico de politización que terminó transformándose en el elemento catalizador para impulsar y posicionar una concepción de la acción y del discurso políticos como instrumentos para alcanzar la inclusión social, supone considerar tres elementos importantes que definen el contexto boliviano a lo largo de la última década: a) el hastío social frente a la incapacidad partidaria para involucrarse con las necesidades vitales de los representados; b) el hecho de que la fuerza de los movimientos sociales deriva de su capacidad de manejar un discurso de reivindicación de una política cotidiana. Es decir, de una política que va más allá de los esquemas partidarios de acción y organización. Una política que rechaza la homogeneización social y cultural que se ha ido construyendo desde una mirada liberal de prin-

* Socióloga. Investigadora del Centro de Estudios Andino-amazónicos y Mesoamericanos (CEAM), Bolivia.

** Politóloga. Investigadora del Centro de Estudios Andino-amazónicos y Mesoamericanos (CEAM), Bolivia; ex becaria de CLACSO (concurso para investigadores 2003).

*** Politóloga. Maestría en Política y Filosofía, CIDES-UMSA, La Paz, Bolivia.

cipios como igualdad y libertad, sin reconocer las diversas percepciones, concepciones y significados que a ambos términos les atribuyen las múltiples sociedades y subjetividades que conviven en Bolivia. En suma, una política que se construye no como un lugar para institucionalizar nuevos monopolios durables, desde una institucionalidad pensada desde el orden liberal de representación; ni para cerrar procesos, sino como un espacio para crear las condiciones de reinención de la propia política y de los espacios sociales de auto-organización; y c) la ruptura con un viejo tipo de la relación entre lo estatal y lo social, entre gobierno y organizaciones sociales, acompañada de un proceso de articulación de alianzas entre diversos sectores de la sociedad que se inventan, crean, recrean y promueven acciones populares orientadas a redefinir de forma más autónoma los alcances de la participación directa y la autodeterminación social para dar respuesta a sus propios requerimientos.

En esta vía, pensar una década de movimientos sociales en Bolivia supone problematizar la hipótesis predominante según la cual el gobierno de Evo Morales sería la forma más acabada de cristalización de la acción colectiva desplegada desde diversos escenarios de lucha desde el año 2000. En este sentido, el esquema más simplista para abordar el tema sería presentar una descripción de los cinco primeros años de lucha social para luego señalar el modo en que el gobierno actual “toma la posta” para continuar este proceso bajo el esquema gubernamental.

Alejándonos de dicho esquema, en las páginas que siguen proponemos realizar un balance que, además de tomar distancia de la visión anterior, también entra en polémica con las afirmaciones que, al dar cuenta del actual proceso político, señalan que el actual gobierno sería un simple usurpador del proceso de lucha abierto por los movimientos sociales.

Con ello, planteamos la necesidad de hacer un balance desde una mirada crítica, de manera tal que la lectura de una década de movimientos sociales en Bolivia no se reduzca a una descripción lineal de hechos que se suceden unos a otros hasta alcanzar lo que hoy se vive y se entiende como Proceso de Cambio. Más bien, nos inclinamos a visibilizar la complejidad de los acontecimientos que se han ido desarrollando a partir de varios horizontes, en diálogo pero también pugna, y por lo tanto no exentos de contradicciones y paradojas.

Nos parece importante aportar desde esta mirada, ya que existe una tendencia, que se da principalmente a nivel internacional, a no escuchar y a deslegitimar algunas voces críticas respecto a la forma en que el proceso está siendo conducido en Bolivia, desde argumentos según los cuales estas lecturas son calificadas como “conservadoras”

o como formas de “hacerle el juego a la derecha”; o ubicándolas también en un supuesto debate entre aquellos que sí habrían demostrado la habilidad de tomar el poder para transformar las relaciones de desigualdad, frente a una suerte de ingenuos que siguen pensando que “se puede cambiar el mundo sin tomar el poder”.

Consideramos que en el fondo del debate en Bolivia lo que está en cuestión no es si se tomó o no el poder, sino si el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) es la expresión última de una década de lucha o un elemento más de un amplio proceso que no termina en el ejercicio gubernamental, sino que debería mantener abiertos diferentes cauces de expresión de las luchas que se proponen transformar y desmontar los diversos núcleos de desigualdad, desde diferentes horizontes políticos.

El artículo está dividido en tres partes. La primera muestra los hitos de movilización social y los horizontes políticos habilitados por los mismos antes de la llegada al poder político estatal de Evo Morales, en el año 2005. La segunda parte reflexiona acerca del proceso constituyente y las formas de participación en él desplegadas, desde sus continuidades y quiebres con el proceso insurreccional previo. En un tercer acápite presentamos los momentos de mayor polarización política, en una evaluación de las resistencias al Proceso de Cambio y la ofensiva de la derecha en los primeros años del gobierno de Evo Morales. Finalmente, a modo de conclusión se plantean hipótesis sobre la coyuntura actual, sus perspectivas y desafíos.

LOS HORIZONTES POLÍTICOS DE LA OLA INSURRECCIONAL DE LOS AÑOS 2000 Y 2005

Desde el año 2000, Bolivia vivió una ola de movilizaciones sociales, que se caracterizó por poner en entredicho el orden institucional neoliberal impuesto desde 1985 –así como sus consiguientes prácticas y nociones de democracia–, y por ofrecer, fundado en su propia experiencia insurreccional y de resistencia, otras formas de ejercer la representación y la participación políticas, así como otro horizonte nacional opuesto al neoliberal. Tanto en la organización inmediata de la movilización como en la posterior cristalización de las consignas de lucha en propuestas públicas, fue concentrándose y al mismo tiempo concretizándose la llamada “Agenda de Octubre”, o “Agenda de los Movimientos Sociales”, en la que las demandas de “Nacionalización de la producción de hidrocarburos” y la realización de una “Asamblea Constituyente”, marcaban y resumían el carácter del proyecto popular que allí emergía y se configuraba. Así como de la Revolución Nacional boliviana de 1952 se dijo que estuvo signada por la presencia activa y la predominancia política del proletariado

minero (Zavaleta, 1990), el proceso político boliviano reciente estuvo dominado por el protagonismo campesino-indígena. Su preeminencia e iniciativa dentro del bloque popular insurgente, no sólo como fuerza movilizadora, sino como horizonte político posible, vino a jugar el papel que antes tuvieron los sindicatos obreros, desarticulados por la economía de libre mercado impuesta por las reformas de los gobiernos neoliberales. Se trata de un bloque popular con hegemonía campesino-indígena, donde se articularon diversas luchas, horizontes políticos y estructuras de movilización que denunciaban la desigualdad nacida de diversos núcleos de opresión, como el colonial y el capitalista, expresados respectivamente en una institucionalidad jerarquizada en torno a un componente blanco y mestizo, y en una política de libre contratación de la fuerza de trabajo y de privatización de las principales empresas hasta ese momento estatales.

En plena euforia del neoliberalismo, cuando las anteriores formas organizativas de la sociedad sufrían el desconocimiento y la persecución gubernamentales, se iban tejiendo lentamente lazos organizativos y corporativos, como los dados en el sector “cocalero” del Chapare, o en la amplia red de activistas rurales y urbanos existente por ejemplo en los barrios de las ciudades de Cochabamba (a través de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba) y La Paz (con las juntas vecinales), y en las provincias y pueblos del altiplano boliviano (con las federaciones y confederaciones campesinas). A esta reorganización hay que sumar las fuerzas de los pueblos indígenas del oriente y de tierras bajas del país que desde la década del noventa protagonizaron una serie de históricas marchas que buscaban el reconocimiento de sus territorios, la ampliación de su participación política a través de la realización de una Asamblea Constituyente, así como hacer parte del conocimiento público los conflictos históricamente acumulados con grupos de ganaderos, hacendados y empresarios madereros y agro-exportadores, constituidos como interlocutores privilegiados de los diferentes gobiernos en las regiones oriente y sur del país. Además, estas movilizaciones enriquecieron el horizonte popular, porque hicieron evidente la diversidad y complejidad del mundo indígena que hasta ese momento era identificado casi de manera exclusiva con las culturas aymara y quechua predominantes en las tierras altas de Bolivia. Haciendo un pequeño paréntesis, es necesario señalar que actualmente este avance en el reconocimiento de la pluralidad de la acción política de los pueblos indígenas está en peligro de sufrir un retroceso, debido a que el régimen electoral transitorio, aprobado para realizar las últimas elecciones presidenciales de diciembre de 2009, ha otorgado siete diputaciones de “circunscripciones especiales” a los pueblos de tierras bajas, las mismas que,

en primer término, no dan cuenta de todas las culturas existentes en esos territorios –que oscilan, según los investigadores, entre 32 y 36 pueblos indígenas–; y que en segundo término dividen lo indígena de manera artificial entre pueblos “mayoritarios” –aymaras y quechuas–, y pueblos “minoritarios” –el resto de las culturas–, reduciendo a una cuestión de números y densidad poblacional lo que de hecho en el ciclo de luchas sociales se propuso en términos políticos de igualdad entre naciones. Es decir, independientemente de la densidad poblacional de cada pueblo, éste tiene igual derecho que el resto a contar con mecanismos de representación e intervención en los asuntos generales de la colectividad boliviana. A lo anterior se suma como límite el hecho de que las candidaturas en las circunscripciones especiales indígenas se presentan a través de partidos políticos y no de manera autónoma.

Retomando el hilo de nuestra exposición, diremos que durante los años de 2000 y 2005 se dieron por lo menos cuatro momentos de insurrección popular que, tomados en conjunto, abrieron varios horizontes políticos de transformación: La Guerra del Agua (2000), Febrero Negro (febrero de 2003), la Guerra del Gas (octubre de 2003), y el ciclo movilizatorio de 2004 y 2005 en el que se sucedieron de manera turbulenta los gobiernos de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, y que culminó con la convocatoria a elecciones a fines de 2005, que son ganadas por Evo Morales.

La Guerra del Agua se da en abril del año 2000 debido a las acciones privatizadoras y encarecedoras del consorcio Aguas de Tunari, constituido por International Water Limited (Gran Bretaña), Edison (Italia), Bechtel (Estados Unidos), la empresa constructora y de ingeniería Abengoa (España) y dos compañías bolivianas, ICE y SOBOCE. Debido a una serie de irregularidades, como el alza desmedida de tarifas las en el servicio de agua o el intento de privatización de los pozos de agua que los habitantes cochabambinos habían abierto con su propio esfuerzo, se inició una insurrección que hizo tambalear al gobierno de turno, dirigido en ese entonces por Hugo Banzer Suárez. Fue un momento crítico, pues se trató de la experiencia de expulsión de empresas transnacionales –en especial, Bechtel–, y del cuestionamiento del modelo económico neoliberal dominante. La fuerza que le dio a la Guerra del Agua la amplia participación de sectores populares urbanos, campesinos regantes, cocaleros del Chapare, profesionales; entre otros, a través de una amplia diversidad de formas organizativas, permitió plantear la necesidad de un tipo de representación social en la Asamblea Constituyente que fuera más allá de las estructuras partidarias y además fue un núcleo de politización social, pues dio a los movilizados la certeza de que es posible hacer política en momentos amplios de deliberación colectiva.

De esa forma, la experiencia de la Guerra del Agua dio lugar a la conformación de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida en el año 2000, como una instancia *sui generis* de articulación de luchas, que tenía básicamente los rasgos de una red de organizaciones e individuos que se reunían a deliberar acerca de las acciones a tomar frente a las políticas de privatización de los servicios básicos y frente a la represión del gobierno banzerista. La Coordinadora significó un hito en el horizonte de reforma política, que implicaba la participación activa de la población en la toma de decisiones y en la gestión de lo público, así como el desborde de las formas liberales partidarias y de las formas tradicionales corporativas del sindicalismo paraestatal. En este período también es visible la impresionante movilización de las comunidades indígenas del altiplano, con su epicentro en el paradigmático pueblo de Achacachi, ubicado en el departamento de La Paz. Uno de los momentos más interesantes de este periodo, es la conformación del llamado “Cuartel Indígena de Qalachaka” en el pueblo de Achacachi, como una fuerza militar alterna a la del ejército regular boliviano, y que en realidad estaba constituido por representaciones de las comunidades indígenas de las provincias del norte altiplánico, a través en un complejo sistema de rotación y de turnos. Pero además, toda la trascendencia de las movilizaciones indígenas de 2000 y 2001 puede medirse en la pérdida de validez de la presencia y la fuerza física del Estado y sus organismos, cuando ni el ejército ni la policía podían retomar el control de las carreteras y los espacios territoriales copados por las fuerzas indígenas, que fueron las que, a través de los bloqueos, la vigilia en los cerros y los puestos de control en los caminos, terminarían poniendo en entredicho la institucionalidad republicana y practicando su propio control sobre el territorio que ocupaban mientras se movilizaban.

Así ingresamos al segundo y tercer momentos de la ola insurreccional boliviana, febrero (“Febrero negro”) y octubre de 2003 (La Guerra del Gas), que están signados por el desarrollo del discurso indígena de denuncia que alude a “las dos Bolivias”, la indígena y la blanca, lanzado públicamente desde el año 2000 por Felipe Quispe –Secretario Ejecutivo de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en ese momento. Así, en febrero de 2003 el gobierno de Sánchez de Lozada decide aplicar un impuesto sobre los salarios de los trabajadores bolivianos. Curiosamente, entre los movilizadores más activos para resistir este “Impuestazo” están los policías, que terminan enfrentándose al ejército. El saldo sangriento de esta confrontación profundiza la movilización de los sectores populares, que en multitudinarias manifestaciones piden la anulación del decreto y protestan por la represión gubernamental quemando y

saqueando las sedes de los partidos políticos en el poder. La fractura social abierta en este momento no se cierra hasta la llegada del llamado Octubre Negro o Guerra del Gas, en el que el mismo Sánchez de Lozada aprueba la exportación de gas a través de un puerto chileno. Esta medida es dramáticamente resistida por una movilización que se centra en las ciudades de El Alto y La Paz, y en las provincias altiplánicas, hasta extenderse en el transcurso de días a todo el territorio boliviano. La microscópica red de activistas sociales, independientes o ligados a organizaciones comunitarias y corporativas, que se movilizó de manera permanente desde el año 2000, difundiendo información destinada a reforzar un sentido general de crítica hacia la manera cuasi secreta, elitista e ineficiente, con que los distintos gobiernos habían encarado la gestión de los recursos naturales (agua, gas, petróleo, minerales, etc.); había producido una nueva interpretación del proceso neoliberal que en la cima de su poder se había presentado a sí mismo como un exitoso paradigma modernizador y de vinculación con la economía mundial. El sutil trabajo de estos activistas, sumado a la labor más visible de líderes, intelectuales y organizaciones sociales, más la memoria histórica del despojo marítimo sufrido por nuestro país en la Guerra del Pacífico (1879) con Chile, en la que Bolivia perdió su acceso al Océano Pacífico, hicieron que la negativa popular al proyecto de exportación de gas por Chile y a Chile, cobrara cuerpo rápidamente y se transformara en una eficaz consigna movilizadora.

Lo más interesante de la Guerra del Gas es cómo la sociedad civil propuso, no sólo en el campo discursivo sino en su misma acción, la alternativa política a las formas de organización y representación liberales. En las asambleas de barrio, los cabildos, los turnos entre vecinos para garantizar la fuerza de la movilización, las estrategias de abastecimiento de alimentos, gas y agua, y la forma cuasi militar de organización de la defensa de la ciudad asediada por el ejército; los movimientos sociales se presentaron a sí mismos como la fuente fáctica de un modo diferente de hacer política, con posibilidades reales de enfrentar y cuestionar las maneras partidario-electorales que hasta ese momento habían sido impuestas como las únicas posibles. También el “Cuartel Indígena de Qalachaka” volvió a rearticularse, con la expectativa de avanzar sobre las ciudades de La Paz y El Alto si la represión recrudecía, hecho que finalmente no sucedió debido a la renuncia de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de ese año –aunque eso no evitó que llegaran avanzadas del mismo que ingresaron a la ciudad de El Alto en ordenadas columnas. Recordamos este hecho aquí porque añade un elemento más a las potencialidades reales que tenía el horizonte de crítica al orden neoliberal y colonial. Durante esos años las movilizaciones dieron lugar a una entidad como la Coor-

dinadora del Agua, a la emergencia de una fuerte organización vecinal y comunal, y a la cuasi constitución –con el ejército de Qalachaka–, de una fuerza militar “propia”. Estas fueron las potencialidades más radicales constituidas en el proceso mismo de lucha.

Ahora bien, esto no implica que se descarten, entre las demandas, los procesos electorales y consultas populares vía referéndum, que son de hecho otro de los horizontes de la movilización. Por eso, el cuarto momento de esta descripción, el correspondiente al periodo comprendido entre los años 2004 y 2005, tiene que ver con la sucesión presidencial que siguió a la Insurrección de Octubre, y que puso en la jefatura del estado boliviano a Carlos Mesa (vicepresidente de Sánchez de Lozada). Esta gestión gubernamental arrastró toda la desconfianza y aprehensión que el sistema político había acumulado anteriormente. La ruptura entre el extemporáneo sistema de representaciones y las expectativas de los movimientos sociales provocó un sentimiento de insuficiencia e inconclusión del proceso, que sólo se cerraría con la renovación de la parte más visible y cuestionada de la estructura de gobierno y del poder legislativo. En este marco, en un ambiente de gran movilización nacional que exigía la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de la Asamblea Constituyente, se da la segunda renuncia presidencial, la de Carlos Mesa, en una sucesión constitucional que deja a la cabeza del gobierno al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Veltzé, quien asume la presidencia y convoca las elecciones de diciembre de 2005. En este punto, es interesante ver cómo las expectativas de la movilización popular estaban también dirigidas hacia el horizonte electoral, pues se exigía la realización de elecciones en diciembre de ese año para dar pie a una salida constitucional al conflicto. Es también interesante notar cómo, simultáneamente, en el Parlamento de ese entonces, la presencia indígena no era mayoritaria –aunque era la segunda fuerza en el Congreso Nacional, con un 20,9 % de los votos de las elecciones de 2002–, pero sí era una presencia importante por su capacidad de acción política, pues cuestionó, denunció y algunas veces logró frenar la aprobación de leyes impulsadas por el oficialismo. En realidad, esta representación indígena acompañó, con sus acciones de protesta en el congreso, las luchas sociales en las calles.

En síntesis, ¿cuál es el resultado de todo este momento movilizador que va del año 2000 al año 2005? Como hemos visto, el proyecto originario de éstas, que fue constituyéndose en la lucha, sobrepasaba en sus aspiraciones y en algunos de sus mecanismos prácticos –como la “Coordinadora de el Agua” (2000) en Cochabamba, el “Cuartel Indígena” de Qalachaka (2001) en Achacachi, los “gobiernos micro-barriales” (Mamani, 2005) de las movilizaciones de la “Guerra del Gas”

(2003), etc. – el horizonte social liberal y colonial. En sus momentos más radicales y dramáticos, los levantamientos pusieron en entredicho la forma estatal de gobierno, la mediación partidaria y el proyecto económico de alianza con los capitales extranjeros –llamada “capitalización” de las empresas estatales. Esta cualidad de plantear la posibilidad de ir más allá del capital, nacida en momentos de emergencia social y mantenida durante la misma, no pudo hallar caminos para persistir en el tiempo y convertirse en una alternativa frente al modelo económico y político capitalista. En momentos de “estabilidad institucional”, la organización de la sociedad se realiza en torno al modelo estatal (Gutiérrez, 2008). Entre los horizontes abiertos por la movilización, vale mencionar como dato que la fuerza social y política que cuestionaba de manera más radical el orden social de las cosas, fue quedando relegada en el camino y, simultáneamente, fue abriéndose paso un proyecto más contemporizador, pero sin duda con potencialidades transformadoras. Pensar en el poder era pensar en el poder del Estado, por eso gran parte de la expectativa popular pasó a centrarse en los tiempos electorales. Fruto de eso, se dio el surgimiento de una interesante mediación partidaria –el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), conjunción principalmente de sindicatos campesinos e indígenas, y agrupaciones urbanas populares–, que luego se constituyó en el Movimiento al Socialismo (MAS). Éste alcanzó a tener presencia importante en el Parlamento el año 2003, y se hizo Gobierno con las elecciones presidenciales de fines del 2005. También hubo otros partidos, como el Movimiento Indígena Pachakuti, liderado por Felipe Quispe, que tuvo menos suerte en el terreno electoral, pero que ejemplifica la fuerza de este horizonte.

La actual configuración de las fuerzas políticas en nuestro país plantea la necesidad de proponer la recuperación de la riqueza y la pluralidad de actores y proyectos que en la actualidad se pretende alinear detrás de un sólo actor (el MAS) y un sólo escenario (el partidario electoral), lo que contraviene la raíz y el origen del actual momento de transformación política que vive Bolivia.

UNA MIRADA AL PROCESO CONSTITUYENTE DESDE SUS CONTINUIDADES Y QUIEBRES CON EL PROCESO INSURRECCIONAL PREVIO

ANTECEDENTES DEL PROCESO CONSTITUYENTE EN LA AGENDA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

La Asamblea Constituyente, no sólo como demanda política esencial incorporada hace una década en la agenda reivindicativa de los movimientos sociales indígenas campesinos y urbano-populares en Bolivia,

sino como un horizonte político construido en diferentes momentos de insurrección y acción colectiva, logra finalmente implementarse como un espacio posible de construcción de un nuevo pacto social el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre.

La inauguración del trabajo de la misma, que supuso la apertura de instancias de participación, deliberación y decisión políticas, tenía como fin postular la refundación del Estado boliviano, impulsando como paradigmas la descolonización, la profundización de la democracia y la inclusión social. Re-pensar la forma en que la sociedad civil articularía sus demandas, expectativas, opiniones y propuestas en la consolidación de la norma máxima para luego trasladarlas al ámbito político; condujo a reconocer la legitimidad de las reivindicaciones de las y los diferentes actoras y actores sociales (colectivos, comunitarios, organizados, individuales, institucionales) que la integran, abriendo el espacio discursivo para ir forjando otra concepción sobre la ciudadanía y sus alcances, y de las subjetividades sociales como receptoras de derechos a los que la misma hace referencia.

La formulación de los contenidos que debía adoptar esta otra concepción de Estado y ciudadanía, sin embargo, no se da por primera vez en el debate constituyente impulsado desde el gobierno de Evo Morales, que asumió su puesta en marcha como compromiso y mandato popular. Por el contrario, dichos contenidos y alcances fueron pensados y presentados en el ámbito público a lo largo de casi dos décadas de acción de los movimientos sociales en su vertiente indígena, campesina y popular.

Haciendo una recapitulación histórica de este proceso, vemos como uno de sus importantes antecedentes la marcha de los pueblos indígenas del oriente “Por el Territorio, la Vida y la Dignidad”, organizada en 1990 por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)¹, mediante la cual se buscaba la aprobación de una propuesta de Ley ante el Congreso Nacional orientada a que los pueblos indígenas fueran finalmente reconocidos como actores visibles, protagónicos e impulsores de un proceso de cambio. Así se plantea la exigencia del reconocimiento de lo particular de las identidades indígenas de 35 pueblos y naciones, de sus cosmovisiones y de sus formas de organización, que no están separadas de su relación con el territorio, derivando en el cuestionamiento de las formas en que a lo largo

1 Esta es la primera de cuatro grandes marchas protagonizadas por los pueblos indígenas del Oriente. En 1996 se da la segunda marcha, denominada “Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas”; el año 2000 se realiza la “Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales” y el año 2002 una nueva gran movilización denominada “Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales.”

de la historia republicana estos sujetos sociales han sido excluidos de la participación política pública.

A pesar de contar con más de cien mil firmas de respaldo en ese entonces, se rechazó la aprobación de esa Ley Indígena, por lo que las movilizaciones sociales continuaron sucediéndose y alcanzaron a ejercer la suficiente presión sobre las instancias estatales. Así, en 1994, el derecho a la diferencia de los pueblos indígenas logró constitucionalizarse mediante la reforma del Artículo 1° de la norma máxima de 1967, en el que se caracterizaba a Bolivia como un país multiétnico y pluricultural, y del Artículo 171, en el que se estableció de forma expresa que los derechos de los pueblos indígenas debían ser reconocidos como tales.

Ahora bien, este tipo de reconocimiento tiene, al menos, dos grandes límites. El primero tiene que ver con su aplicación, ya que no sirvió para garantizar que los gobiernos que ejercieron el poder entre 1994 y 2000, los cuales se adherían al ejercicio de un tipo de democracia de corte representativo y neoliberal, promovieran la apertura de instancias de participación social, incorporando la visión de sectores que –pese a haber demostrado que eran mayoritarios, que tenían gran poder de convocatoria y de organización, y que por ello podían desplegar acciones de movilización que reafirmaban su fuerza– seguían estando excluidos de los espacios de decisión en los que se definían las políticas, los métodos y los procedimientos de gestión y administración social, económica y cultural. El segundo se refiere a que la introducción del reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural del Estado boliviano no trastoca significativamente el orden de dominación vigente. Sin embargo, y a pesar de estos límites, no se puede negar que estos logros posibilitaron la profundización del proceso de luchas sociales por la refundación del Estado, tanto por el hecho de que la demanda fue retomada y resignificada en otras luchas posteriores (durante la “Guerra del Agua” y la “Guerra del Gas”, por ejemplo), como porque posibilitó la propia profundización de la lucha de estos pueblos.

En consecuencia, la apertura de espacios de concertación de pactos entre el gobierno y los movimientos sociales de origen campesino, indígena y popular, que entre el 2000 y el 2003 interpelaron al Estado poniendo en evidencia que la faceta representativa de la democracia estaba en crisis, sólo pudo lograrse mediante la irrupción violenta, irrefrenable, súbita e irreversible de “otredades” que hasta el momento habían ocupado el lugar de lo subalterno.

De ahí que en el año 2000 haya nacido la propuesta de la Asamblea Constituyente, como mecanismo deliberativo mediante el cual los pueblos indígenas podrían asegurar su participación efectiva, con voz

propia, en el diseño de un estado plurinacional y multiétnico, siendo éstos una vez más los sujetos que colocaron el asunto en la agenda pública.

Para el 2004, tras el conflicto socio-político que derivó en una crisis de representación y legitimidad surgida tras la Guerra del Gas en 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa se termina por “constitucionalizar” la Asamblea, mediante la modificación del Artículo 232 que atribuye a la misma la potestad privativa de reformar totalmente la norma suprema del Estado.

¿CÓMO ORGANIZAR LA ASAMBLEA? TENSIONES EN TORNO A LA LEY DE CONVOCATORIA

Organizar la Constituyente en un país como Bolivia, donde conviven realidades sociales cargadas de matices, contrastes y significados diversos, involucró cuestionar y desarticular la idea de que re-presentar a nivel político supone asumirse como “la voz autorizada para hablar por otro que se piensa sin voz” (Spivak, 1988).

Pensar una estrategia de reversión del poder existente, que fijaba a los sujetos subalternos en una posición excluida, suponía entonces iniciar un proceso de recuperación de su propia expresión para poder hilvanar un discurso orientado a visibilizarse como actores políticos con potencialidades para participar en dicho poder, introduciendo sus propuestas y dialogando para consensuar qué tipo de Estado se aspiraba a implantar y qué derechos fueron, son y serán irrenunciables y, por lo mismo, debían figurar en el texto de la nueva Constitución.

A nivel operativo, promover la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente suponía definir una Ley Especial de Convocatoria (LE-CAC), donde se determinarían la modalidad electiva, el número de representantes a escoger y su composición en función a determinados criterios, como población, territorio, equidad e igualdad.

Sin embargo, en el proceso de negociación del texto de la LECAC, se terminó acordando que la postulación de candidatos y candidatas a la Asamblea se realizaría reconociendo como actores y actrices a asambleístas representantes de partidos o agrupaciones ciudadanas, y no a representantes que actuarían autónomamente llevando la voz de sus organizaciones sociales. Con ello, lo partidario nuevamente desplaza otras modalidades de representación, como la basada en los usos y costumbres de los pueblos indígenas, en lo organizacional sindical o en formas asambleísticas empleadas al interior de los movimientos sociales; haciendo que la Constituyente asuma un carácter derivado y no originario. Es decir, como un espacio de debate que “deriva” del poder constituido, enmarcado en los mandatos de la Constitución que en ese momento estaba vigente, y que intentaba dar a la Asamblea la

forma de “parlamento”, copiando o adaptando el reglamento de debates de la Cámara Baja y enarbolando el principio de los dos tercios como cuota base de aprobación de cada uno de los artículos de la nueva Constitución.

En este sentido, cabe apuntar de manera contundente que la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, a pesar de ser una de las primeras medidas orientadas a dar curso a la agenda política de los movimientos sociales, terminó constituyéndose en uno de los principales límites para una refundación profunda del Estado. Esta ley estableció a los partidos políticos, a las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas como las únicas instancias capaces de proponer asambleístas constituyentes (Art.7). En tanto la definición legal de lo que para la Corte Nacional Electoral es un “pueblo indígena” no es sino una variante de las formas partidarias de intermediación política clásicas, esto significó un dique a la aspiración de participación y representación política autónoma de una extensa porción de la sociedad boliviana organizada de otras maneras –la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, las diversas formas de articulación de los pueblos indígenas o de las juntas vecinales, etc. Este límite se expresa en el reconocimiento *de facto* de un sistema de partidos fuertemente quebrantado y por lo tanto significa una reducción del espacio político abierto por los movimientos sociales en los años de lucha anteriores, tanto por los actores que incluye como por las formas de hacer política que deja fuera.

Asimismo, la partidización de la Asamblea generó al interior de la misma una dinámica de correlación de fuerzas que concentró la atención en las confrontaciones entre los partidos (Unidad Nacional, Poder Democrático Social, Movimiento Nacionalista Revolucionario) y otras fuerzas socio-políticas de oposición (comités cívicos, gobiernos prefecturales), que abogaban por un proyecto constitucional donde se garantizaran aún sus prerrogativas y privilegios de clase en torno a la redistribución de recursos y la autonomía; y el partido de gobierno, el MAS, que terminó presentándose a sí mismo como la voz monopólica del cambio. Aquí parece importante apuntar una paradoja: el hecho de que la derecha sí tuvo que pensar en formas de acción política más allá de las partidarias, como necesidad para reinventarse a sí misma e intentar revertir su largo proceso de deslegitimación, mientras el MAS, que venía de una historia de luchas y formas de desborde del sistema tradicional de partidos, se cierra cada vez más a la forma partidaria.

Tras su instalación el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre, la Asamblea Constituyente se abocó a la tarea de definir la normativa para organizar y poner en marcha la deliberación para escribir la nue-

va Constitución, mediante la elaboración del Reglamento de Debates, labor que se dilató por siete meses, casi el 60% del plazo establecido por la LECAC para el periodo de su vigencia.

Acordar los contenidos de un Reglamento de Debates, tratando de conciliar las posiciones que representan los y las asambleístas, se convierte en el primer ensayo de lo que sería iniciar la discusión sobre cómo enfrentar la consolidación de lo que Veena Das define como el momento plural de la vida social (Das, 1997). Es decir, cómo, una vez que las clases y grupos subalternos han ocupado legítimamente un espacio de expresión discursiva, lo gestionan para consolidar una legalidad alternativa, respetando la simultaneidad de demandas y aspiraciones de todos los sujetos y sujetas participantes, comprendiendo que los mismos pueden inter e intra relacionarse dando cuenta de su multiplicidad. Además, cabe mencionar que la LECAC, al privilegiar la forma partidaria de representación benefició a la derecha con una fórmula electoral que termina por sobre-representarla. De esta manera, la derecha boliviana, carente de un proyecto político de transformación real y escudada en su demanda de autonomía departamental, tiene la posibilidad real, como se verá en un análisis posterior, de ejercer una estrategia de bloqueo constante de las propuestas de cambio en el seno del foro constituyente.

La necesidad de crear un “momento plural”, a pesar de los límites ya apuntados, exigió definir cómo participar y tomar decisiones en los debates; así, el reglamento propuso organizar el trabajo incorporando una estructura orgánica integrada por la Plenaria, la Directiva, las Comisiones y Subcomisiones, las Representaciones Departamentales y las Representaciones Políticas. Y es justamente en las Comisiones y Subcomisiones donde se instala el debate permanente en torno a las temáticas propuestas por las actoras y los actores sociales y políticos para que sean incorporadas al texto de la nueva CPE.

Paralelamente, con el fin de garantizar algún tipo de inclusión de las demandas ciudadanas no auto-representadas en el proyecto de nuevo texto constitucional, se establecieron como instancias de interrelacionamiento las audiencias públicas en el seno de cada Comisión al menos una vez a la semana, para que las organizaciones sociales, la ciudadanía en general y otros grupos sociales den a conocer sus proyectos de artículos. Asimismo, se dispuso la articulación de representaciones departamentales conformadas por constituyentes de un mismo departamento, para gestionar foros territoriales en los cuales puedan escucharse sus propuestas, consultar a los sectores que las presentan y coordinar con los mismos, en un ejercicio constante de retroalimentación entre representantes y representados/as, manteniendo un vínculo fundado en la igualdad.

Con esto, se plantea un escenario limitado pero posible para ir forjando como práctica deliberativa una nueva modalidad de debate público en la cual los y las representantes asumen su papel como sujetos y sujetas que ante todo deben canalizar las propuestas de todos aquellos sectores populares que les han dado el mandato.

EL PACTO DE UNIDAD: GARANTE DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Revertir la subalternidad mediante la organización de un espacio en el que los sujetos y las sujetas sociales comienzan a aceptar que es posible estar presentes, hablar, auto-representarse e ir construyendo y ocupando un lugar enunciativo reconocido como tal en la esfera política; tal ha sido la meta a la que los movimientos sociales aspiraron a llegar desde que comenzaron a visibilizar sus demandas en lo público. Así, a pesar del monopolio partidario de la representación en la conformación de la Asamblea Constituyente, nuevamente desde la sociedad organizada y movilizadora se potencia el debate político en este escenario. En este marco se dan las acciones de organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB); la Federación Nacional de Mujeres Indígenas, Originarias y Campesinas Bartolina Sisa (FNMC-BS); la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo (CONAMAQ); la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC); la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB); la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); el Movimiento de Trabajadores Campesinos Sin Tierra de Bolivia (MST-B) y la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (ANARESCAPYS).

Todas estas organizaciones, a fines de 2005 en la ciudad de Santa Cruz, consolidaron una alianza estratégica, conocida bajo el nombre de Pacto de Unidad, que tenía por objeto impulsar demandas de reivindicación étnica y social comunes, garantizando la amplia participación social en la Asamblea como espacio institucional desde donde impulsar reformas profundas a la estructura del Estado boliviano. Planteando como estrategias la movilización, la vigilia y la articulación de propuestas conjuntas en temas esenciales que hacen a la reconfiguración del poder, como la autonomía y la redistribución de los recursos naturales, el Pacto de Unidad fue la primera instancia social desde donde se impulsaron acciones para viabilizar la Constituyente a la brevedad posible, formulando una propuesta de ley de convocatoria y presionando para que el Congreso apruebe una norma especial que incluya su visión y sus demandas a la brevedad posible.

Dicha visión asumía la Constituyente como un espacio de expresión particular de las organizaciones indígenas, campesinas y urba-

no populares, que buscaban que la misma funcionara incluyendo lo étnico, lo demográfico y lo territorial, haciendo visible la diversidad social y la pluriculturalidad de los pueblos indígenas y aspirando a no reproducir los mecanismos de exclusión propios de una democracia netamente representativa y delegativa.

Así, el referente del Pacto para gestionar sus acciones fue el principio de reconocimiento cultural y de inclusión social que debía vincularse a la problematización de lo que para los sectores excluidos significaba estar en el mundo, es decir, saberse parte de una realidad fáctica cruzada de relaciones, jerarquías, necesidades, formas de interpretar los tejidos de relaciones que vinculan a cada actor social con otros mundos culturales y con otras “diferencias”. Sin embargo, a lo largo del proceso constituyente, el Pacto también consideró en sus discusiones cuáles debían ser los alcances de las acciones del MAS como instrumento político del cambio efectivo.

Para el Pacto, las negociaciones al interior de la Asamblea no debían perderse en la simple confrontación ideológica entre posiciones de izquierda y de derecha expresadas desde lo partidario. Ir más allá de las mismas, dando mayor jerarquía a las reivindicaciones históricas y estratégicas de sus sectores, debía ser el objetivo político esencial que permitiría establecer modalidades participativas capaces de abrir espacios de poder efectivo para garantizar el respeto al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y originarios, definiendo y nombrando con su propia voz en qué consisten los mismos.

Exigir que el MAS, desde su posición en un Estado heredado al que hay que transformar, tome posición constante respecto a las demandas específicas de los movimientos sociales constituyó una estrategia política para redefinir el poder y la ubicación diferenciada en el ejercicio del mismo. Con ello, el Pacto de Unidad evidenció que la capacidad de potenciar la igualdad tiene que ver con la concertación de consensos, con el pacto de alianzas que permiten transitar de lo que se asume como el “poder para” a lo que viene a ser el “poder con”, gracias al cual se aumenta la capacidad de impacto que puede alcanzar una movilización.

En este sentido, además de las miles de propuestas que llegan a la Asamblea desde diferentes espacios de la sociedad civil, el Pacto de Unidad logra, de alguna manera, revigorizar este escenario político, aunque no revertir del todo los límites auto-impuestos por LECAC. Así, la Asamblea Constituyente se desarrolla en un contexto en el que, al tiempo que delibera sobre los cambios a introducir en la nueva carta magna, tiene que defenderse de los continuos asedios de una derecha articulada en torno a las prefecturas departamentales y comités cívicos, quienes bajo un supuesto discurso de defensa a la democracia

recurren constantemente a acciones violentas contra la población de sus departamentos y en defensa de sus privilegios de clase.

LAS RESISTENCIA AL PROCESO DE CAMBIO Y LA OFENSIVA DE LA DERECHA EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL GOBIERNO DE EVO MORALES

En este ejercicio de análisis sobre los movimientos sociales en la última década en Bolivia merece especial atención la revisión de algunos de los principales momentos de polarización vividos en el país, que dan cuenta de la estrategia de grupos de poder de la derecha boliviana para resistir e intentar revertir el proceso de transformaciones sociales iniciado desde la acción colectiva. En este punto interesa presentar, de forma sintética, algunos elementos recurrentes que se plantean de manera más visible y concreta en momentos de mayor ofensiva de la derecha, no sólo contra el gobierno de Evo Morales, sino y principalmente contra los actores y espacios de resistencia y rebelión que se van articulando en los departamentos denominados de la Media Luna, donde la derecha crea su trinchera de resistencia y ofensiva. En este último acápite, nos concentraremos en la dinámica de polarización que se va tejiendo, desde el análisis de los actores involucrados, sus formas de articulación y los principales hechos que protagonizan. Finalmente, y a modo de conclusión, analizaremos el paso de un momento de intensa polarización hasta el momento actual, que puede caracterizarse como una suerte de despolitización electoralista.

Empecemos, entonces, por revisar brevemente, en las líneas que siguen, algunos de los momentos más álgidos de polarización, desde la toma de mando del presidente Evo Morales². Para ello nos concentraremos en tres momentos y espacios de polarización. El primero, durante el conflicto denominado “Enero negro”, en Cochabamba a inicios de 2007; el segundo momento referente a todo el proceso de polarización en el periodo de elaboración y aprobación del texto constitucional y el tercero relacionado al denominado Golpe Cívico Prefectural.

LA CRISIS DE “ENERO NEGRO”

Uno de los hitos de inicio de la confrontación más abierta fue la denominada crisis “Enero Negro”, ocurrida en Cochabamba el año 2007,

2 Para el desarrollo de este acápite utilizamos información recogida en el proceso de investigación del trabajo denominado “Poder y Cambio en Bolivia 2003-2007: Transformaciones en las relaciones de poder en las concepciones de democracia y en el modelo de gobernabilidad”, realizado en el año 2008 para el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia por un equipo conformado por Patricia Chávez, Dunia Mokrani y Luis Tapia. Una versión resumida de esta investigación ha sido publicada por la mencionada institución en el 2009.

donde se registran enfrentamientos civiles con un saldo de tres muertes y más de un centenar de heridos. Sobre los actores, discursos y hechos principales de esta confrontación, podemos observar que tenemos, por un lado, el bloque reunido principalmente en torno al sindicato cocalero, que aglutinó a otros sindicatos de carácter más urbano, como los fabriles, y a otras organizaciones como las de los regantes, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas y Originarias Bartolina Sisa (FNMIOC), el Movimiento Sin Tierra, gremialistas, vecinos y vecinas de los sectores periurbanos de la ciudad de Cochabamba. Puede decirse que, en general, los sectores movilizados en torno a este bloque eran los mismos –excepto algunos sectores urbanos medios de la sociedad cochabambina– que se sumaron a la demanda de recuperación de la gestión del agua durante la denominada Guerra del Agua del año 2000, pero que debido principalmente al crecimiento de la influencia de los proyectos autonomistas, al tipo de demanda y a la agudización y rebrote de los prejuicios racistas, no se adhieren esta vez a la movilización popular. La protesta popular surge a raíz de que el entonces prefecto y candidato del principal bloque opositor en las últimas elecciones de 2009, Manfred Reyes, plantea la convocatoria a un nuevo referéndum sobre autonomías, que suponía el desconocimiento de un referéndum anterior en el que dicho proyecto había perdido en este departamento. Las movilizaciones de este bloque estuvieron marcadas por las diferencias de criterio existentes entre gran parte de las mismas bases cocaleras, que no estaban dispuestas a detenerse hasta no haber logrado la renuncia del prefecto cochabambino, y la elite dirigencial que, siguiendo directrices del partido de gobierno, se niega a provocar la salida de una autoridad “elegida en democracia”, ya que así se ponía en riesgo un argumento electoral que sostenía la misma presidencia de Evo Morales y la presencia del MAS en el gobierno. La tensión existente entre ambas posiciones terminó poniendo en discusión, entre los mismos sectores movilizados, la relación de dependencia o independencia, y las diferencias, de su horizonte político propio respecto al horizonte estatal de la dirección partidaria. Del otro lado del conflicto, de manera gruesa, están los siguientes actores a) el propio prefecto Reyes Villa, sus colaboradores y seguidores políticos directos y los funcionarios prefecturales; b) la Asociación Jóvenes por la Democracia, principal autora de la convocatoria a una marcha que derivó en la embestida contra los sectores sociales, que cumplían su segundo día de vigilia en la plaza principal de Cochabamba. Por el tipo de convocatoria y los hechos violentos en que desembocara la marcha, un cierto nivel de organización que se evidencia por el uso uniforme de bates de baseball, en una cantidad desproporcionada en relación a la baja popularidad de este deporte en

el país; y sobre todo por el discurso racista de sus portavoces, se los ha asociado a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), principal grupo de choque de la derecha más radical en Santa Cruz; c) la masa de ciudadanos que acude a la convocatoria, que responde a diferentes motivaciones: algunos ven en el creciente poder de las organizaciones sociales y en su potencial hegemónico, la pérdida de su derecho a disentir. Otro grupo, el más numeroso, aglutina a personas que responden a la convocatoria desde una estructura de prejuicios de clase y raciales, en los que encuentran legitimidad para salir a las calles a restaurar “su paz” rota por la presencia indígena campesina en la ciudad. En medio de la masa también se identifica un grupo de gente armada, que provoca la muerte de un coccalero y deja un saldo de seis personas heridas por impacto de bala, algunos con antecedentes policiales delincuenciales; por último, d) los medios de comunicación que han sido identificados por muchos analistas como uno de los promotores de la confrontación alineados a este bloque y condenados y atacados por organizaciones sociales.

LA POLARIZACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL TEXTO CONSTITUCIONAL

En el marco de este escenario, un hecho fundamental que nos interesa resaltar es lo ocurrido el 24 de mayo de 2008, cuando, para evitar la concurrencia de grupos de campesinos, de indígenas y de sectores populares a un evento de entrega de ambulancias por parte de las autoridades gubernamentales nacionales, una muchedumbre enardecida en la ciudad de Sucre somete a vejaciones inhumanas a un grupo de mujeres y hombres indígenas en la plaza central de dicha ciudad, obligándolos a arrodillarse y besar la bandera del departamento. En este hecho cualquier aparente intención de inclusión real y creíble del problema indígena dentro del discurso del bloque interinstitucional se ve desbaratada. A pesar de que hubo intentos de borrar la imagen anti-campesina del bloque interinstitucional, con la postulación a la candidatura de una mujer indígena para el cargo prefectural y pese al triunfo electoral de la misma, no se consiguió que se neutralizara la disociación existente entre dicha candidata y la base rural del departamento de Chuquisaca.

Es importante también acotar que los conflictos suscitados en Chuquisaca, en especial en su capital Sucre, no pueden comprenderse si no se hace referencia al contexto nacional, que se caracterizaba por el despliegue y la pugna entre dos fuerzas y dos proyectos políticos opuestos. En este marco, el proyecto autonómico, centrado especialmente en el departamento de Santa Cruz, percibe en el conflicto chuquisaqueño una oportunidad de expansión, a través de una estrate-

gia de avance sobre un territorio político y electoralmente favorable al partido de gobierno. Por su parte, el Comité Interinstitucional vio conveniente aliarse a la demanda autonomista, para así contar con mayores fuerzas que aumentarían sus posibilidades de poner en agenda su demanda de *capitalía* plena³. Chuquisaca era, pues, conceptualizado como uno de los departamentos en disputa, cuya ganancia o pérdida en términos políticos, facilitaba o frenaba la potencialidad de ampliación del proyecto autonomista.

A nivel general, durante el largo proceso de la Asamblea Constituyente y en otros múltiples escenarios de conflicto a nivel nacional, algunos de los actores principales o más visibles de la oposición al gobierno de Evo Morales fueron los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija que conforman el denominado Consejo Nacional Democrático (CONALDE). Esta articulación se pretendía defensora de una institucionalidad democrática que denunciaban como amenazada. Frente a ello se da una articulación de organizaciones sociales matrices a nivel nacional bajo el denominativo de Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), que disputa este sentido de democracia para poner énfasis en que la democracia tiene que ver con la defensa del proceso de Cambio y no con la institucionalidad heredada. En este marco, la CONALCAM se convierte en un instrumento de lucha y presión para que las definiciones del poder constituyente no sean bloqueadas por el denominado poder constituido, expresado principalmente en un Parlamento en el que la oposición controlaba la Cámara Alta, con una fuerte capacidad de bloqueo a las iniciativas legislativas del oficialismo. Una vez aprobado el texto constitucional, tras un enfrentamiento en la Escuela Militar de la Glorieta y la posterior aprobación de la propuesta de nuevo texto constitucional en el departamento de Oruro⁴, la CONALCAM realiza una multitudinaria marcha desde diferentes puntos del país hasta la sede de gobierno para presionar al Congreso para que apruebe la ley de convocatoria al referendo constituyente y dirimidor de tierras. El texto constitucional puesto a consideración de la población en el referéndum realizado el

3 La demanda de *capitalía* plena fue una de las principales estrategias de bloqueo a la Asamblea Constituyente y consistía en la demanda de traslado de la Sede de Gobierno desde La Paz, que es la capital histórica de Bolivia.

4 La Glorieta es un cuartel militar ubicado cerca de la ciudad de Sucre y donde los asambleístas, principalmente del oficialismo, se habían trasladado, debido a que al momento de aprobar la propuesta constitucional existía un clima de violencia existente en la ciudad de Sucre, propiciado principalmente por el Comité Interinstitucional y la oposición, con el objetivo de que no se diera la sesión aprobatoria. El clima de enfrentamientos se trasladó hasta La Glorieta por lo que los asambleístas terminaron aprobando el texto constitucional en el departamento de Oruro.

25 de enero de 2009 no es el aprobado en Oruro, sino uno previamente reformado en una Comisión Especial de Concertación con fuerzas partidarias opositoras. Finalmente, a nivel nacional, el nuevo texto constitucional es aprobado logrando un 61,4% de votación. A nivel departamental, el mayor apoyo ciudadano a la implementación de una nueva Constitución se registra en los departamentos de La Paz (78,1% por el sí), Potosí (80,07%), Oruro (73,6%) y Cochabamba (64,9%). En los departamentos cuyas dirigencias departamentales integran el CONALDE, los resultados fueron los siguientes: en Chuquisaca el porcentaje de votación por el “sí” alcanza 51,5%, mientras que el “no” triunfa en Tarija, con un 56,6%, Santa Cruz, con un 65,2%; Beni, con un 67,3% y Pando (59 %). A pesar de estos resultados, se mantiene la tendencia a la polarización debido a que el CONALDE pretende rebatir la legitimidad del triunfo nacional de aprobación de la nueva CPE a partir de lecturas sobre el significado de los resultados regionales de la votación. Los más radicales plantean que la nueva constitución sería reconocida y acatada sólo si es aprobada en cada uno de los nueve departamentos del país. El gobierno, por su parte, rebatía estos argumentos desde la posición de que los resultados de la consulta son nacionales y que, por lo tanto, no se aceptarían lecturas regionales, advirtiendo que la minoría debe acatar la decisión de la mayoría, pues así son las reglas de la democracia.

EL “GOLPE CÍVICO PREFECTURAL”

La masacre de campesinos ocurrida en la localidad de El Porvenir, en el departamento de Pando, el 11 de septiembre de 2008 y el denominado Golpe Cívico Prefectural, efectivizado con la toma de instituciones en el departamento de Santa Cruz y los atentados contra gasoductos y refinerías en Tarija por integrantes y simpatizantes del movimiento cívico de la Media Luna es uno de los puntos culminantes de una serie de conflictos derivados de la resistencia de los grupos más duros de poder económico contra el proceso de transformaciones políticas y sociales que se vive en el país.

La característica de este escenario de polarización fue, una vez más, la violencia desatada en Pando, Tarija y Santa Cruz, y la ampliación de la misma al departamento del Beni, bajo la forma de amedrentamiento y amenazas a los líderes sindicales y organizaciones afines al partido de gobierno, lo que constituía una estrategia más para medir las fuerzas y la capacidad de mantener presencia y posesión territorial en las zonas convulsionadas.

Este escenario se da como una medida extrema y desesperada de la derecha frente a los resultados del Referéndum Revocatorio de Mandato Popular, del 10 de agosto de 2008, que había sido

empleado como un recurso del gobierno nacional para buscar una salida a la polarización política por medio de la consulta en las urnas. En esta nueva consulta el mandato de Evo Morales es ratificado con el 67,4% de los votos mientras las autoridades departamentales del núcleo opositor de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, son ratificadas, alcanzando la siguiente votación: 66,4%, en Santa Cruz; 64,2% en Beni; 56,2% en Pando y 58% en Tarija. Con estos resultados no se modifica sustancialmente el tablero de fuerzas y se inicia una nueva disputa por la interpretación del voto. En Santa Cruz se inicia una campaña violenta para desconocer la ratificación de Evo Morales. Es curioso cómo el discurso de legitimación de las medidas violentas asumidas por la derecha se sustenta en la supuesta existencia de un “otro pueblo”, que busca la descentralización administrativa, mediante la profundización de la autonomía departamental, como base del desarrollo regional. Este discurso democratizador encuentra sus límites de legitimación en los acontecimientos violentos provocados por grupos de choque de la UJC; las agresiones a la institución policial y a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la toma y destrucción de instituciones del gobierno nacional y de la infraestructura energética.

En este escenario de polarización los actores principales son, por un lado, el denominado CONALDE, los Comités Cívicos Departamentales y otras instancias de representación de intereses empresariales. También son parte de esta articulación la UJC y las agrupaciones similares conformadas y promovidas por ésta en los departamentos de Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca. La relación orgánica del CONALDE con estas agrupaciones juveniles, se hace convenientemente difusa en el discurso a medida que sus acciones e intervenciones públicas se hacen más violentas. Es entonces cuando se diluye la responsabilidad de los actos de estas agrupaciones, principalmente bajo dos figuras: la “espontaneidad del pueblo cansado del centralismo” o la intervención de “infiltrados” de la oposición para “deslegitimar las luchas”.

Ahora bien, ¿quiénes son los actores al otro lado del conflicto? Desde la caracterización del conflicto como un Golpe de Estado Cívico Prefectural, el actor principal es el gobierno nacional, al cual se busca desestabilizar. La toma de instituciones, determinada por una resolución del CONALDE, como una medida supuesta para ejecutar los estatutos autonómicos, se manifiesta en los hechos en el avasallamiento y saqueo a las instituciones del gobierno nacional en las regiones y la interrupción de la señal de los medios de comunicaciones estatales y alternativos, y en los daños ocasionados a la infraestructura energética en el Chaco, con la toma de válvulas e incendio de gasoductos. Todos estos hechos evidencian, por un lado, la incapacidad de los sectores opositores de plantear proyecto polí-

tico democrático alternativo y develan que su accionar se ha limitado al bloqueo a las iniciativas gubernamentales y principalmente a las populares. Ahora bien, nos interesa aquí destacar una suerte de tercer actor, que en la mayoría de los análisis no es visibilizado fuera o de manera independiente al gobierno nacional. Este actor es la masa de población que en los departamentos resiste cotidianamente la violencia de los grupos opositores. Las y los vecinos del Plan 3000 en Santa Cruz (barrio popular de migrantes de origen quechua y aymara), por ejemplo; las organizaciones sociales, campesinas e indígenas en los departamentos, y las propias bases del MAS a nivel departamental, cuyas sedes han sido continuamente avasalladas. Hacemos esta distinción para evidenciar que la resistencia al cambio no apunta sólo a la desestabilización de un gobierno, sino y principalmente a dismantelar las estructuras de resistencia y autoorganización al interior de los departamentos, a través de la imposición de un régimen de violencia y terror. Así, las organizaciones, las propias estructuras departamentales del partido en función de gobierno e inclusive las mismas delegaciones presidenciales en estos departamentos viven de manera más directa la embestida de la derecha más radical. A lo anterior se suma el hecho de que la presencia de la estructura gubernamental central tiene un carácter de presencia intermitente en estos lugares de conflicto, no sólo por la dificultad que supusieron las acciones de los grupos de choque de la derecha, llegando incluso a impedir el aterrizaje de aviones de las más altas autoridades nacionales a estos departamentos, sino porque no existen indicios, de parte del gobierno, de una interacción con las diferentes experiencias de resistencia y de democratización en las regiones más allá de los límites partidarios y electorales. Uno de los ejemplos significativos de esta capacidad de propuesta social es la sugerida por el colectivo “Los Igualitarios” del Plan 3000 que, retomando el pensamiento de Andrés Ibáñez, interpelan el discurso autonomista de la elites por no problematizar suficientemente la noción de igualdad al interior de los departamentos. Este tipo de lecturas políticas no tiene eco en el gobierno nacional, que en este tema se ha limitado a hacer suya la bandera autonómica de la derecha, sin problematizarla.

La derecha no fue únicamente desnudada, de manera contundente, en sus afanes de desestabilización de la democracia –a pesar de su discurso de supuesta defensa a la institucionalidad democrática– durante el intento de Golpe Cívico Prefectural, sino también a través de un operativo gubernamental para dismantelar una “célula terrorista” descubierta en la ciudad de Santa Cruz. Más allá de los confusos hechos policiales, judiciales y legales que se dieron durante el mencio-

nado operativo⁵, el hecho develó de manera más clara que estaba en marcha un plan separatista, impulsado y financiado por algunos grupos empresariales y que tenía como base de operación la articulación de grupos fascistas fuertemente armados y violentos, cuyo objetivo era llevar la polarización al extremo.

A MANERA DE CONCLUSIÓN. LA COYUNTURA ACTUAL: DE LA POLARIZACIÓN A LA DESPOLITIZACIÓN ELECTORALISTA

La falta de consistencia del discurso de democracia del grupo más conservador de la derecha fue puesta en evidencia cuando se develaron sus planes separatistas y antidemocráticos. Este hecho dio lugar a un momento de distensión de la polarización que caracterizó a los primeros años de gobierno. Uno de los efectos inmediatos fue que muchos de los líderes más visibles de la oposición en las regiones se concentraron en tomar distancia de las formas más radicales de las expresiones separatistas, por otro lado, los grupos de choque empezaron a dispersarse en el escenario político. Asimismo se dieron indicios de grupos empresariales que comenzaron a mostrar su simpatía con el gobierno y viceversa. Todo esto se da en el contexto del inicio de un año signado por una dinámica pre-electoral, de cara a las nuevas elecciones generales de diciembre de 2009. En esta nueva coyuntura se aprueba la Ley de Régimen Electoral Transitorio, cuyo contenido da cuenta una vez más, como en el caso de la Asamblea Constituyente, de una falta de apertura de los operadores políticos a un tipo de representación gestada desde espacios autónomos más allá de las estructuras partidarias, a pesar de que el nuevo texto constitucional reconoce, además de la democracia liberal representativa, otras formas de democracia directa participativa y comunitaria. En ese marco, inclusive las innovaciones como el establecimiento de circunscripciones especiales indígenas, creadas con el objetivo de otorgar representación directa a los pueblos indígenas, terminan siendo planteadas a través de candidaturas postuladas por partidos políticos.

En este escenario de distensión de la polarización, otro hecho digno de resaltar son las alianzas electorales del partido en función de gobierno con actores institucionales y con candidatos/as antes claramente ubicados/as en las filas de la derecha. Merecen especial mención la alianza con las cabezas más visibles de la UJC, así como con líderes y ex autoridades de agrupaciones y partidos opositores o pertenecientes al esquema tradicional de partidos. Frente a este tipo de alianzas se

5 Durante este operativo ocurre la muerte de uno de sus presuntos cabecillas, Eduardo Rószka, de nacionalidad húngara y mercenario en Croacia, además de otros dos implicados de nacionalidad rumana e irlandesa.

dan algunas críticas importantes desde sectores que lucharon contra las estructuras de choque de la derecha en los momentos más álgidos de la conflictividad, y que se cuestionan de manera muy pertinente hasta dónde conviene entrar en el juego del cálculo electoral en este tipo de alianzas con la derecha como una estrategia para desarticular a la oposición, y dónde comienza a desestructurarse un proyecto propio con la llegada de gente que estuvo directamente ligada con los conservadores más recalcitrantes en el país⁶.

En la última contienda electoral el MAS logra un nuevo triunfo con un porcentaje, a nivel nacional, del 64,2% de apoyo. Fruto de estos resultados, el MAS obtiene en la nueva Asamblea Plurinacional una mayoría aplastante, que desde una lectura de construcción de hegemonía acorde a los momentos de luchas que abrieron este proceso, deberían llevar a recuperar el espacio de debate necesario amplio y plural entre las fuerzas que propiciaron las condiciones para el proceso de cambio; posibilidad que fue arrebatada en los primeros años de gobierno por la estrategia de bloqueo y por la ofensiva violenta de la derecha. Sin embargo, las primeras actuaciones de la Asamblea Plurinacional muestran indicios de que este espacio, lejos de ser un espacio plural de debate, se está convirtiendo en un instrumento funcional a las decisiones asumidas en el Ejecutivo, cerrando la posibilidad de que la aplicación del nuevo texto constitucional sea producto de un proceso de politización similar al que se vivió en los primeros años de lucha de los movimientos sociales.

Actualmente nos encontramos frente a un nuevo proceso electoral, a través del cual en abril próximo se configuran los nuevos gobiernos departamentales y locales, en esta etapa se reproducen el tipo de alianzas antes descritas con un nuevo elemento digno de análisis, el hecho de que el MAS en esta etapa pretende mostrarse con más claridad como la última expresión del proceso de cambio, señalando abiertamente que el que no está con el MAS, no está con el proceso de cambio. En este sentido se da una contradicción en el hecho de que por un lado el MAS recibe en sus filas y recicla cuadros de la derecha a la vez que promueve el voto de castigo contra antiguos aliados, ya sean de organizaciones sociales o partidos, que hayan decidido presentar candidatos fuera de las estructuras masistas y plantear miradas alternativas en el marco del propio proceso de cambio.

Consideramos que estrategia del MAS de presentarse como el único actor legítimo para enarbolar las banderas del cambio, tiene

6 Reflexiones hechas durante unas entrevistas a activistas, participantes de la lucha del Plan 3000 y el Cerco a Santa Cruz en 2008, Plan 3000, 21 de diciembre de 2009, realizadas por Marxa Chávez.

que ver mucho más con sus cálculos electoralistas que con los desafíos planteados con el nuevo texto constitucional, cuyo desafío principal está en plantear de forma crítica el cambio de toda la normativa donde se refuerzan patrones coloniales, excluyentes y patriarcales formalizando las coincidencias que se dan entre las reivindicaciones de clase, de género y de pertenencia cultural para que la igualdad no se limite a ser un concepto utilitario para ganar adhesiones y legitimar el nuevo proyecto de país, sino más bien contribuya a que la diferencia deje de ser un elemento de dominio para transformarse en referente y propuesta de pensamiento donde existen muchas expresiones de política, no una sola que aspire a ser hegemónica y que asigne identidades singulares a las mismas reproduciendo esquemas de poder sustentados en el temor a la diferencia.

Queda pendiente por tanto la deconstrucción de códigos simbólicos y prácticos de exclusión que influyen en el mantenimiento de estructuras de poder jerárquicas, a través de una transformación radical de la política en la que la autocrítica y la *transcrítica* (Tapia, 2006) sean instrumentos fundamentales de lucha. Es decir, plantearse cómo aprovechar los beneficios y la experiencia ganada durante el tiempo constituyente, en los momentos en que distintas miradas tuvieron la posibilidad de hablar y expresarse desde sus diversas posiciones subjetivas y prácticas, rompiendo los esquemas que las definen como presencias vulnerables, dependientes y desprotegidas para resaltar su capacidad de articular propuestas como agentes sociales que deciden por sí mismos. Ello supondrá a la larga cuestionar también cómo las organizaciones y los movimientos sociales planean intervenir el nuevo proyecto de descolonización estatal que supone revertir los cánones de exclusividad y privilegio que daban derecho sólo a unos cuantos a tomar decisiones e influir en el destino de la política. Es decir, ir mucho más allá de un recambio de elites.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnold, Denisse 2004 *Pueblos indígenas y originarios de Bolivia. Hacia su soberanía y legitimidad electoral* (La Paz: CNE).
- Barragán, Rossana 2006 *Asambleas Constituyentes* (Bolivia: Muela del Diablo).
- Calla, Andrés y Kantuta, Muruchi 2008 "Transgresiones y racismo" en *Observando el racismo* (La Paz: Presencia).
- Ceceña, Ana Esther 2004 *La Guerra por el Agua y por la Vida* (Cochabamba: Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida).
- Centro Andino de Estudios Estratégicos 2007 "Evo Morales entre: entornos blancoides, rearticulación de las oligarquías y movimientos indígenas" *Willka* (El Alto) Año 1. N° 1.

- Costas, Patricia; Chávez, Marxa y García, Álvaro 2004 *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia* (La Paz: Diakonia/Oxfam).
- Crabtree, John 2005 *Perfiles de la protesta. Política y movimientos sociales en Bolivia* (La Paz: PIEB/UNIR).
- Cuellar, Elva Teresa 2004 *De la utopía indígena al desencanto: reconocimiento estatal de los Derechos territoriales indígenas* (Santa Cruz: CEJIS/PIEB).
- Das, Veena; Kleinman, Arthur y Lock, Margaret (eds.) 1997 *Social suffering* (Los Angeles: University of California Press).
- Do Alto, Hervé; Monasterios, Karin; Stefanoni, Pablo (eds.) 2007 *Reinventando la Nación en Bolivia: movimientos sociales, Estado y poscolonialidad* (La Paz: Plural/CLACSO).
- García Linera et al. 2000 *El Retorno de la Bolivia Plebeya* (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- García Linera et al. 2001 *Tiempos de Rebelión* (La Paz: Muela del Diablo).
- García Linera et al. 2003 *La Guerra del Agua. Abril de 2000 la crisis de la política en Bolivia* (La Paz: PIEB).
- Gómez, Luís 2004 *El Alto de pie. Una insurrección aymara en La Paz* (La Paz: Indymedia/Comuna).
- Gutiérrez Aguilar, Raquel 2008 *Los ritmos del Pachacuti* (La Paz: Textos Rebeldes).
- Hoffmann et al. 2006 *La reconstrucción de lo público: movimiento social, ciudadanía y gestión del agua en Cochabamba* (La Paz: Muela del Diablo/AOS/IUED/NCCR).
- Mamani, Pablo 2005 *Microgobiernos barriales* (La Paz: CADES/IDIS).
- Mamani et al. 2006 *Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia* (La Paz: Tercera Piel Editores).
- Molina, Carlos Hugo (coord.) 2008 *El Movimiento Cívico frente al proceso de descentralización y autonomía (1994-2006)* (Santa Cruz de la Sierra: El País/Jacs Sud América/CEPAD).
- Patzi, Felix 1998 *Insurgencia y sumisión. Movimientos indígenocampesinos (1983-1998)* (La Paz: Comuna).
- Prada, Raúl 2006 *Horizontes de la asamblea Constituyente* (La Paz: Yachaywasi Plural).
- Prado, Fernando; Seleme, Susana y Peña, Claudia 2007 *Poder y elites en Santa Cruz. Tres visiones sobre un mismo tema* (Santa Cruz: El País).
- Spivak, Gayatri Chakravorti 1988 “¿Puede hablar el sujeto subalterno?” en Nelson, C. y Grossberg, L. (comps.) *Marxismo y la interpretación de la cultura* (Basingstoke: Macmillan).
- Zavaleta, René 1990 (1967) *La formación de la conciencia nacional* (Cochabamba: Editorial Los Amigos del Libro).
- Zegarra, Karim 2008 “La Asamblea Constituyente: una trampa para enmudecer” en *Observando el racismo* (La Paz: Presencia).

ANDRÉIA GALVÃO
ARMANDO BOITO
PAULA MARCELINO*

BRASIL: O MOVIMENTO SINDICAL E POPULAR NA DÉCADA DE DOIS MIL

I. INTRODUÇÃO

No Brasil, a luta operária e popular passou ao longo da década de dois mil, por um período que, em contraste com as décadas precedentes, poderíamos denominar um período de acomodação política. A luta reivindicativa não refluíu, mas a agitação e a luta contra o modelo capitalista neoliberal perderam terreno.

A década de oitenta foi a década da luta e da organização operária e popular no Brasil. Os indicadores da mobilização popular mantiveram-se muito altos e o salto organizativo do período foi muito grande. Na primeira metade da década de oitenta, tivemos a construção da Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Movimento dos Sem-Terra (MST). Essa foi também a década da legalização e do crescimento de antigos e novos partidos e organizações marxistas –como o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), a Convergência Socialista (CS), que se transformaria no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e outras organizações menores.

* Os autores deste artigo são pesquisadores do Centro de Estudos Marxistas (Cemarx) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil. O presente texto beneficia-se do trabalho coletivo do Grupo de Pesquisa Neoliberalismo e relações de classe no Brasil (sediado no Cemarx). Em <www.ifch.unicamp.br/cemarx>

Nesse período, ocorreu uma explosão inédita de greves, colocando o Brasil, juntamente com a Espanha, que também saía de uma ditadura, como campeões incontestes da atividade grevista em escala mundial. Grandes greves de massa marcaram o cenário político e social daquele período: as greves do operariado fabril, principalmente das cidades industriais do chamado no ABC paulista (São Bernardo, Santo André e São Caetano), as greves dos trabalhadores rurais –como as greves dos canavieiros da Zona da Mata nordestina e do município de Guariba no interior de São Paulo– e as greves do funcionalismo público por todo o país. Esses movimentos grevistas tornaram irreversível a crise da ditadura militar. Se eles não foram suficientes para impor uma saída popular para a crise da ditadura, limitaram as opções da burguesia brasileira. Essa luta e esse crescimento organizativo retardaram a implantação do capitalismo neoliberal no Brasil.

A década de noventa foi uma década de refluxo do movimento operário e popular. Diversos fatores –econômicos e políticos, nacionais e internacionais– concorreram para tal. Logo no início dos anos noventa, a posse do governo neoliberal de Fernando Collor, que derrotara a candidatura Lula na eleição presidencial de dezembro de 1989, a recessão e a política econômica do novo governo acuraram politicamente o movimento sindical e popular e derrubaram a produção e o emprego de maneira abrupta. A difusão dos processos de reestruturação produtiva e, no plano internacional, a desintegração da antiga URSS, que provocou uma crise ideológica no movimento operário e socialista, somaram-se àqueles fatores para configurar uma conjuntura que abateu o movimento operário e popular brasileiro e o levou ao refluxo. Quando, doze anos mais tarde, na eleição presidencial de 2002, a “candidatura Lula” foi vitoriosa, o programa da campanha e do candidato já era outro. A candidatura Lula e o PT tinham abandonado o programa de reformas sociais avançadas que defenderam nos anos oitenta e passaram a conciliar com o modelo neoliberal.

A década de dois mil foi, como dissemos, a década da acomodação política do movimento operário e popular. Essa acomodação política não significou o desaparecimento das lutas. As greves operárias e de trabalhadores de classe média e as ocupações de terra pelo movimento camponês mantiveram-se num nível elevado ao longo da década de dois mil. Ademais, essa foi também a década de várias edições dos Fóruns Sociais Mundiais sediados no Brasil e de diversas outras manifestações de luta e de inconformismo dos setores populares com o modelo capitalista neoliberal –poderíamos citar a disseminação dos movimentos de moradia por todo o país e a agitação do movimento estudantil. Contudo, a existência do Governo Lula, um governo que, ao mesmo tempo, manteve e reformou o neoliberalismo, contribuiu

para que essas lutas se mantivessem confinadas no nível reivindicativo e localizadas, desviando-se do objetivo de uma luta política geral contra o próprio modelo neoliberal.

A repressão do período Collor e FHC foi substituída por uma política de pequenas concessões e, principalmente, de aproximação com as lideranças dos movimentos. A política econômica do governo teve impacto no movimento operário e sindical. As centrais sindicais, inclusive a CUT, acomodaram-se ao neodesenvolvimentismo— uma política de desenvolvimento limitada pelo caráter financeira do modelo neoliberal e voltada, crescentemente, para a exportação. Acomodaram-se, também, graças à política de cooptação do governo. Centenas de sindicalistas ou ex-sindicalistas assumiram cargos em ministérios, na administração pública e em diretorias de empresas estatais¹. O governo Lula reformou também parte da legislação sindical, de modo a dotar a direção das centrais sindicais de um controle maior sobre as suas bases e de modo a provê-las com fundos financeiros vultuosos. A política social do governo repercutiu nos movimentos populares de urgência, como os sem-teto e sem-terra, e no movimento estudantil. O social-liberalismo do Governo Lula enxerta no capitalismo neoliberal uma ampla gama de políticas compensatórias, como a bolsa família, os programas de crédito bancário para a população pobre e o financiamento das mensalidades escolares para estudantes universitários oriundos de famílias de renda insuficiente. São medidas paliativas, que não alteram a situação crítica do desemprego, da concentração da renda e da privatização da educação, mas que produzem o impacto político de angariar simpatia e apoio difuso para o Governo Lula junto à população empobrecida pelo próprio modelo capitalista neoliberal.

Essa situação, que reúne um reformismo superficial e conservador —posto se tratar de um reformismo que, justamente, possibilita a reprodução do modelo neoliberal de capitalismo—, somada a uma política de cooptação de dirigentes do movimento popular e à acomodação política de tais dirigentes lembra, em alguns de seus aspectos, a situação política criada na crise do regime militar entre 1978 e 1985. Naquela ocasião, a chamada política de abertura do Governo Geisel —que combinava a manutenção do regime ditatorial com recuos secundários frente ao crescimento da oposição democrática— pode ser comparada, mudando o que deve ser mudado, com a política econô-

1 A participação de sindicalistas no Governo Lula foi examinada pela imprensa e criticada de uma perspectiva conservadora. Ver Brandt, Ricardo e Tosta, Wilson (2008) “Era Lula consagra república sindical” em *O Estado de São Paulo* (São Paulo) 6 do abril y Felício, César (2005) “Empresários temem ‘república sindical’” em *Valor Econômico* 16 do março.

mica neodesenvolvimentista e a política social do social-liberalismo na conjuntura presente. O neodesenvolvimentismo e o social-liberalismo combinam a manutenção do capitalismo neoliberal com recuos secundários frente às aspirações populares. Trata-se de uma atualização da tradição política brasileira de confiscar a insatisfação popular e integrá-la num pacto burguês construído pelo alto.

II. A LUTA SINDICAL E GREVISTA

O Brasil vem assistindo, pelo menos desde 2004, à recuperação da atividade sindical e grevista. Na base, a ação grevista vem se mantendo num nível razoavelmente alto e a grande maioria das greves têm permitido ganhos reais de salários; na cúpula do movimento, a disputa política acirrou-se com o surgimento de cinco novas centrais sindicais. Essa recuperação da luta sindical pode ser tomada como um indicador da vitalidade do sindicalismo como movimento social. Acreditamos que, se tomarmos a atividade grevista como indicador, poderemos afirmar que o sindicalismo brasileiro encontra-se, na década de dois mil, em fase de recuperação². Esses dados nos fornecem, assim, algumas indicações sobre o equívoco das teses que prognosticaram o declínio histórico do movimento sindical, tese defendida por muitos autores europeus e brasileiros como Rosanvallon (1988) e Rodrigues (2002).

Focalizaremos nossa análise na atividade grevista para descrever a situação do movimento sindical brasileiro na década de dois mil; isso, por duas razões. A primeira é uma razão de ordem prática: os dados mais sistemáticos e gerais que temos sobre o sindicalismo brasileiro na década de dois mil são os dados sobre greves coletados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-econômicos, o Dieese –mesmo assim, só dispomos de dados sistemáticos para o quadriênio 2004-2007– ; para os demais anos, dispomos de dados bastante incompletos. A segunda é uma razão sociológica: a greve não é a única ação importante e pertinente do movimento sindical, mas é, seguramente, uma de suas ações mais contundentes e de maior visibilidade política e social.

Para iniciar, digamos uma palavra sobre as prováveis causas da recuperação do movimento sindical brasileiro. Essas causas podem ser as seguintes: a) uma retomada, ainda que tímida, do crescimento econômico; b) a recuperação do emprego observada desde 2004: entre 2003 e 2008, a taxa de desemprego nas regiões metropolitanas caiu, segundo

2 Utilizaremos nas nossas considerações sobre esse ciclo de greves as pesquisas do Dieese, Sistema de Acompanhamento de Greves (SAG). Tal pesquisa baseia-se na coleta de dados realizada pelos técnicos daquela instituição junto aos grandes jornais e aos jornais sindicais –tanto em suas versões impressa quanto eletrônica. O resultado das pesquisas de greve é publicado na série do Dieese intitulada *Estudos e Pesquisas* e boa parte dos textos pode ser encontrada na rede mundial de computadores.

dados do Dieese, de 21,8 para 14,1% da PEA; c) o fato de a inflação dos alimentos atingir taxas superiores à taxa média de inflação, isto é, há uma taxa de inflação, ocultada pela inflação média, que atinge mais pesadamente os trabalhadores; d) a existência de um regime democrático; e) o fato de a equipe governamental, bem como as presidências e diretorias de empresas estatais serem compostas, no período dos mandatos presidenciais de Lula da Silva, por pessoas oriundas, em grande parte, do movimento sindical –no quadriênio 2004-2007–, o Governo Federal e as empresas estatais negociaram com mais de 90% das greves deflagradas pelo funcionalismo público federal e pelos trabalhadores das empresas estatais; f) o desgaste da ideologia neoliberal, que aparece na eleição de Lula e nos novos governos de esquerda e centoesquerda na América Latina; g) a concorrência política entre as centrais sindicais brasileiras, cujo número e variedade de orientações político-ideológicas cresceram, como já dissemos, entre 2004 e 2007.

Ou seja, nossa hipótese é que as alterações na conjuntura econômica, política e ideológica podem ter propiciado uma recuperação do sindicalismo. Vejamos, agora, algumas das características do perfil da atividade grevista no ciclo atual que merecem ser destacadas:

1. O número de greves e de grevistas vem se mantendo num patamar relativamente elevado –pouco mais de 300 greves por ano e uma média anual de 1,5 milhões de grevistas. Nota-se a participação majoritária do setor público-funcionalismo público e empregados de empresas estatais. Observa-se, porém, que a participação dos trabalhadores do setor privado é elevada e crescente ao longo do quadriênio, quer consideremos o número de greves ou o número de grevistas. As duas tabelas que reproduzimos a seguir nos apresentam esses números.

Tabela 1
Distribuição de greves nas esferas pública e privada
Brasil, 2004-2007

Esfera/Setor	2004		2005		2006		2007	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Pública	185	61,3	162	54,2	165	51,6	161	50,9
Func. público	158	52,3	138	46,2	145	45,3	140	44,3
Empresas estatais	27	8,9	24	8,0	20	6,3	21	6,6
Privada	114	37,7	135	45,2	151	47,2	149	47,2
Pública e Privada	3	1,0	2	0,7	4	1,3	6	1,9
TOTAL	302	100,0	299	100,0	320	100,0	316	100,0

Fonte: Dieese.

Tabela 2
Distribuição de grevistas nas esferas pública e privada
Brasil, 2004-2007

Esfera/Setor	2004		2005		2006		2007	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Pública	826.074	64,0	1.380.585	68,1	770.240	56,6	713.259	49,6
Func. público	791.920	61,3	1.137.423	56,1	729.600	253,6	546.955	38,0
Empresas estatais	34.154	2,6	243.162	12,0	40.640	3,0	166.304	11,6
Privada	249.258	19,3	484.915	23,9	388.673	28,6	641.766	44,6
Pública e Privada	216.000	16,7	161.000	7,9	201.100	14,8	82.750	5,8
TOTAL	1.291.332	100,0	2.026.500	100,0	1.360.013	100,0	1.437.769	100,0

Fonte: Dieese.

Obs.: Foram consideradas apenas as greves sobre as quais se obteve informação acerca do número de trabalhadores parados: 151 greves em 2004; 159 em 2005; 178 em 2006 e 211 em 2007.

É importante destacar, para que conheçamos melhor as características do atual ciclo de greves, que esse nível de atividade grevista ainda é inferior ao verificado na década de noventa, quando a média anual foi de cerca de 900 greves (Noronha *et. al.*, 1998). Tabelas 1 e 2.

2. As greves têm sido, em sua maioria, greves ofensivas, isto é, por novas conquistas, e não greves para recuperar ou evitar as perdas. As reivindicações mais presentes são por ganho real de salário e por conquista ou majoração da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Reduziu-se o número de greves defensivas –por pagamento de salários atrasados, por respeito a direitos já existentes, etc. A frequência de ações ofensivas não é a mesma em todos os setores. No setor privado, por exemplo, esse tipo de ação é típico dos trabalhadores da indústria, enquanto as paralisações no setor de serviços são notadamente defensivas (Dieese, 2006: 37).

Nos anos de 2004 e 2005, cerca de metade das greves apresentou a reivindicação de reajuste salarial. Em 2004, a reivindicação de pagamento de salário atrasado apareceu em 19% das greves, ocupando o terceiro posto na lista de reivindicações. Já em 2005, a cobrança de salário atrasado caiu para o quinto posto nessa lista, com “apenas” 12% de ocorrências. Apenas no setor de serviços da esfera privada, a reivindicação de pagamento de salário atrasado mantém-se tão importante quanto a reivindicação por reajuste salarial. No conjunto do quadriênio 2004/2007, as reivindicações ofensivas estiveram presentes na grande maioria das greves –em porcentagem, isso corresponde a 65% ou mais do total de greves de cada ano. Essa tendência é

contrária àquela verificada na década de noventa, quando, embora as greves ocorressem em maior número, predominavam nas greves as reivindicações de caráter defensivo, segundo o levantamento do Dieese (2008: 32). Ou seja, na década de noventa, parece que os trabalhadores tiveram de correr muito apenas para lograr permanecer no mesmo lugar, enquanto na de dois mil, com menos esforço, isto é, com um número menor de greves, estão logrando avançar em novas conquistas. A predominância das reivindicações ofensivas nas greves do quadriênio 2004-2007 aparece na Tabela 3.

Tabela 3
Distribuição de greves por caráter das reivindicações
Brasil, 2004-2007

Caráter	2004		2005		2006		2007	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Ofensiva	197	65,2	207	69,2	217	67,8	209	66,1
Defensiva								
Revogação ou manutenção das condições vigentes	161	53,3	135	45,2	168	52,5	146	46,2
Descumprimento de direitos	54	17,9	72	24,1	110	34,4	61	19,3
	107	35,4	70	23,4	87	27,2	101	32,0
Protesto	28	9,3	50	16,7	49	15,3	48	15,2
Solidariedade	2	0,7	2	0,7	2	0,6	1	0,3
Sem informação	0	-	2	0,7	0	-	0	-
Número de greves	302	-	299	-	320	-	316	-

Fonte: Dieese, modificada.

Obs.: A última linha desta tabela representa o total de greves de cada ano. Ela não representa a soma das colunas visto que uma mesma greve pode apresentar mais de um tipo de reivindicação.

3. Podemos afirmar que os trabalhadores estão logrando avançar em novas conquistas porque essas greves mais ambiciosas em seus objetivos têm sido, na maioria, bem-sucedidas na obtenção, total ou parcial, das reivindicações que as motivaram.

As reivindicações que motivaram as greves foram, ao que tudo indica, total ou parcialmente, atendidas. Cerca de 90% delas conseguiram estabelecer negociação com os empregadores e a pesquisa do Dieese constatou, para o ano de 2005, que 75% das greves para as quais se obteve esse tipo de informação terminaram com a obtenção de algumas ou de parte das reivindicações. O montante de greves que

não logrou obter nenhuma reivindicação é insignificante, tanto para o ano de 2004, quanto para o ano de 2005 –apenas 7% das greves de 2004 e 6% das greves de 2005 podem ser consideradas indubitavelmente derrotadas. Em 2007, apenas 6% das greves não obtiveram nenhuma satisfação. Em 2007, tiveram suas reivindicações atendidas, total ou parcialmente, 61% dos movimentos grevistas. De setor para setor, varia bastante o montante de greves que obteve algum sucesso. Os trabalhadores das empresas estatais têm sido os mais bem-sucedidos nas ações grevistas (86% delas tiveram suas reivindicações atendidas, total ou parcialmente). Esse percentual cai para 71% das greves na esfera privada e para 50% nas greves do funcionalismo federal, estadual e municipal. (Dieese, 2008: 21). Os dados gerais de greves que obtiveram total ou parcialmente suas reivindicações para o quadriênio são os seguintes: 2004: 70%; 2005: 75%; 2006: 75%; 2007: 60%.

Os dados sobre reajuste salarial também são muito significativos. Eles aparecem na tabela abaixo e contemplam um período mais longo, permitindo algumas comparações.

Tabela 4
Distribuição dos reajustes salariais em comparação com o INPC-IBGE
Brasil, 1998-2007

Ano	Acima do INPC		Igual ao INPC		Abaixo do INPC		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
1998	141	43,5	64	19,8	119	36,7	324	100
1999	111	35,1	46	14,6	159	50,3	316	100
2000	190	51,5	56	15,2	123	33,3	369	100
2001	214	43,2	97	19,6	184	37,2	495	100
2002	123	25,6	134	27,9	223	46,5	480	100
2003	103	18,8	125	22,8	320	58,4	548	100
2004	361	54,9	171	26	126	19,1	658	100
2005	459	71,7	104	16,3	77	12	640	100
2006	565	86,3	70	10,7	20	3,1	655	100
2007	627	87,7	59	8,3	29	4	715	100

Fonte: Lucio, Clemente Ganz 2008 "Balanço das negociações coletivas e das greves no Brasil no período 1998-2007" (Dieese: São Paulo), pág. 5.

Note-se que foi exatamente no ano de 2004, ano que estamos considerando o ponto inicial do atual ciclo de greves, que o número de acordos salariais com reajuste acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) cresceu muito, saltando da faixa de 18% para 54% dos acordos. A partir de então, esse montante continuou crescen-

do, atingindo a porcentagem impressionante de 87% de acordos com reajuste acima da inflação no ano de 2007.

4. Outra característica do ciclo de greves de 2004-2007 diz respeito à amplitude das greves e aos métodos de luta mais agressivos utilizados pelos trabalhadores. Em números, predominam as greves localizadas, porém as grandes greves de massa também têm ocorrido com certa frequência. Os grevistas realizaram, também, ações públicas para pressionar os empregadores.

Em 2005, ocorreram 25 greves envolvendo mais de 10 mil trabalhadores cada uma; dessas, nove greves contaram com mais de 50 mil grevistas. Em 2007, ocorreram quatorze greves envolvendo mais de 10 mil trabalhadores cada uma; dessas, sete greves contaram com mais de 50 mil grevistas. Muitas dessas greves massivas são ações do funcionalismo público, principalmente pessoal da educação e da saúde. Porém, elas ocorrem também em número significativo e em grande escala na esfera privada e nas empresas estatais. Vejamos alguns exemplos.

No quadriênio 2004-2007, tivemos uma greve nacional de metalúrgicos que contou com 170 mil grevistas; uma greve estadual dos metalúrgicos paulistas que contou com 190 mil grevistas; uma greve dos trabalhadores da construção civil paulista que envolveu 130 mil grevistas; mais de uma greve dos trabalhadores dos Correios com cerca de 80 mil grevistas cada uma; mais de uma greve de petroleiros envolvendo cerca de 100 mil grevistas; greves de massa de bancários e outras. As greves massivas têm sido na sua quase totalidade ações ofensivas para conquista de aumentos reais e/ou de novos direitos e melhores condições de trabalho.

Como dissemos, um número considerável de greves lançou mão de métodos de luta que exigem um nível de organização e de mobilização mais elevado e que dão maior visibilidade à ação sindical –atos públicos, passeatas, piquetes e ocupações.

A pesquisa do Dieese obteve a informação sobre atos públicos, passeatas, piquetes e ocupações. Em 2005, essas ocorrências foram registradas em 66 greves (22% do total de greves do ano). Dessas 66 greves, em 39 delas os grevistas realizaram atos públicos, em 25 saíram em passeata, em vinte lançaram mão do piquete para manter a greve, oito greves foram acompanhadas de ocupação do local de trabalho, em cinco foram realizados acampamentos dos grevistas e em três os grevistas fizeram vigília. Em 2007, o número de greves nas quais os grevistas realizaram atos públicos subiu para 83; em 42 greves, os trabalhadores saíram em passeata, em vinte lançaram mão do piquete, em dezenove ocorreu ocupação, em doze acampamentos dos

grevistas e em duas os grevistas fizeram vigília. Isto é, as ações que dão visibilidade política e social à ação grevista e que endurecem o conflito com os empregadores cresceram muito entre 2005 e 2007.

5. A maioria das greves tem sido realizada pelos setores que são, há muito tempo, os setores mais mobilizados do movimento sindical – tais como os metalúrgicos, os petroleiros, os trabalhadores da construção civil, os bancários e os funcionários públicos, notadamente dos setores da educação e da saúde. O ciclo grevista de 2004-2007 parece indicar, portanto, que, as mudanças ocorridas no sindicalismo brasileiro não foram tão radicais como poderíamos ser levados a crer lendo os autores que insistiram, de modo unilateral e genérico, na idéia da crise do sindicalismo como resultante da mutação tecnológica, da nova organização do processo de trabalho e da transformação na composição das classes trabalhadoras.

Outras características da fase anterior do sindicalismo brasileiro mantêm-se em vigência na atual fase de recuperação. Alguns dos dados que já citamos permitem-nos indicar o seguinte: a) predominância, na esfera privada, das greves no setor industrial, com o setor de serviços ocupando uma posição secundária no quadriênio 2004-2007; b) predominância, no setor industrial, das greves no ramo metalúrgico. No ano de 2005, 70% das greves da indústria foram realizadas por metalúrgicos. No ano de 2007, duas grandes greves do operariado metalúrgico, uma nacional e outra no Estado de São Paulo, reuniram nada menos que 360 mil grevistas; c) os outros setores em destaque tampouco representam novidade: em 2005, 20% das greves foram realizadas por trabalhadores da construção civil e 125 mil petroleiros entraram em greve. Em 2007, 130 mil trabalhadores da construção civil entraram em greve; d) no setor de serviços, predominância dos bancários, dos trabalhadores dos Correios e dos trabalhadores em transporte, com destaque para o transporte urbano, como os setores sindicalmente mais mobilizados. Os trabalhadores do transporte coletivo urbano responderam por 45% das greves no serviço privado em 2005. No ano de 2005, 160 mil bancários e 86 mil carteiros entraram em greve; e) predominância, no ramo metalúrgico, das greves nas montadoras de veículos; g) inatividade grevista em setores como o comércio, setor que permanece de importância muito pequena no movimento sindical apesar de reunir um contingente muito grande de trabalhadores. No quadriênio 2004-2007 o registro de greves pelo Dieese no setor do comércio variou entre nenhuma ou apenas uma greve em cada ano.

Outro traço de continuidade aparece no fato de que as greves mantiveram-se, no geral, concentradas na Região Sudeste do país e,

particularmente, no Estado de São Paulo. Em 2005, 87% das greves ocorreram na Região Sudeste; dessas, mais de 60% tiveram lugar no Estado de São Paulo. Em 2007, o Sudeste respondeu por 83% das greves ocorridas em todo o país, mantendo-se o patamar elevadíssimo de concentração.

6. É certo que o setor público tem realizado a maioria das greves. Mas, essa é uma mudança que vem se desenhando há bastante tempo, tendo se iniciado já no decorrer do ciclo grevista de 1978-1992.

Por outro lado, surgiram novidades nas mobilizações do setor público –por exemplo, a polícia federal, as polícias civil e militar, os funcionários do judiciário, do Banco Central, os auditores fiscais e alguns outros. Porém, o sindicalismo do setor público apresenta traços visíveis de continuidade, como a predominância das greves do funcionalismo estadual nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007 e, nesse funcionalismo, destaque para professores e profissionais da saúde.

O estudo da fase atual do movimento sindical brasileiro pode requerer, mais que em outras épocas, a atenção para o conflito no local de trabalho. A substituição das greves por pequenas paralisações por setor no interior de uma mesma empresa –modalidade de ação que cresceu na Europa, e que cresceu, inclusive, devido às novas formas de organização do trabalho na empresa capitalista– pode, também, estar ganhando corpo no Brasil. Se confirmada essa hipótese, essa seria uma novidade importante da atual fase do sindicalismo brasileiro – um sindicalismo que, como se sabe, mantém-se, apesar de alguns avanços importantes nas últimas décadas, fundamentalmente fora do local de trabalho.

Vemos, assim, que na década de dois mil, as alterações na conjuntura econômica, política e ideológica puderam propiciar uma recuperação da atividade sindical no Brasil. Ainda não nos é possível avaliar os impactos da crise econômica mundial, iniciada no final de 2008, sobre o sindicalismo brasileiro. Em meados de 2009, o Dieese divulgou os dados sobre o movimento grevista do ano de 2008. O Dieese registrou que nesse ano foi estabelecido o recorde de greves da década: foram 411 greves, cerca de cem a mais que o montante de greves que vinha sendo mantido ao longo dos anos anteriores. Segundo os dados do Dieese, verifica-se um aumento da proporção de greves no último trimestre de 2008 quando comparado a igual período dos anos anteriores; e essas greves mantiveram as mesmas características apontadas no quinquênio todo: foram greves ofensivas, por conquistas de novos direitos e/ou ampliação dos já assegurados. Quanto a 2009, as projeções do Dieese apontavam que esse ano fecharia, muito provavelmente, com um número de greves próximo ao de 2008. Até junho

de 2009, aquela instituição de pesquisa sindical havia registrado 250 greves e, embora a crise possa ter tido alguma responsabilidade no aumento do número de greves defensivas nos setores mais atingidos por demissões e dificuldades econômicas (autopeças e frigoríficos, por exemplo), um balanço prévio, com dados referentes a 100 greves, indica que, comparando-se com 2008, mais categorias conseguiram, pelo menos, a reposição inflacionária. Ou seja, a crise, ao menos no seu início, não tirou a força do movimento grevista. Mas, a reversão ou a continuidade desse quadro de recuperação da luta sindical dependerá da duração e profundidade da crise e, também, da resposta das organizações sindicais e partidárias dos trabalhadores. Essa resposta, como veremos a seguir, está muito condicionada às relações políticas das centrais sindicais com o Governo Lula.

III. AÇÃO E ORIENTAÇÃO POLÍTICA DAS CENTRAIS SINDICAIS

A despeito da significativa e vitoriosa atividade grevista da década de dois mil, o movimento sindical brasileiro no nível das centrais sindicais, passa como dissemos no início, por um processo de acomodação política.

Pode desenvolver-se uma contradição entre, de um lado, o processo de acomodação política na cúpula, e, de outro, o ativismo sindical na base do movimento. Isso, contudo, não se verificou até o presente momento –a defasagem indicada não tem criado maiores dificuldades para as centrais sindicais. Mas há, de fato, uma diferença entre a *base* do movimento sindical– que sofre diretamente os efeitos do modelo capitalista neoliberal e tende a reagir por meio dos instrumentos sindicais clássicos como a greve –e as organizações de *cúpula*, muito distantes, no caso do Brasil, dos problemas do “chão de fábrica” e mais propensas a se enredarem em acordos com o governo e o patronato. Foi a eleição de Lula em 2002 que modificou a relação entre movimento sindical e governo. O Governo Fernando Henrique Cardoso enfrentara a oposição do setor mais combativo do sindicalismo brasileiro. Hoje, as duas maiores centrais sindicais brasileiras, CUT e Força Sindical, fazem parte da base de apoio ao governo.

A diferença entre base e cúpula do movimento sindical resultou também na criação de novas centrais sindicais a partir do ano de 2004. Essa divisão do sindicalismo brasileiro comporta dois aspectos contraditórios. De um lado, indica vitalidade, pois a criação de novos organismos de cúpula foi o caminho encontrado por uma parcela do movimento sindical para organizar os trabalhadores de forma independente do governo e para disputar as bases sindicais com as centrais sindicais acomodadas. De outro lado, essa mesma divisão permitiu, também, que a política sindical de acomodação com o governo

fosse “premiada”, já que algumas organizações foram criadas visando apenas a usufruir as benesses oferecidas pelo governo graças à nova legislação sindical. O benefício mais visado é o financeiro –a reforma da legislação sindical promovida pelo Governo Lula instituiu o repasse de um percentual significativo do imposto sindical³ às centrais oficialmente reconhecidas. Antes, as centrais sindicais dependiam da contribuição depositada espontaneamente pelos sindicatos de base; agora, a lei estabeleceu o repasse direto de parte da arrecadação do imposto sindical para as centrais.

Esses elementos indicam que a divisão organizativa do sindicalismo brasileiro tem diferentes motivações e significados. A despeito da manutenção da legislação que impõe um único sindicato por categoria, isto é, que estabelece a unicidade sindical na base do movimento, as divisões proliferam na cúpula, nível em que a lei facultou maior liberdade de organização. Essas divisões são tanto de ordem político-ideológica quanto de ordem pragmática. Para apreender a complexidade desse processo, examinaremos, de maneira sintética, as tendências políticas das principais centrais sindicais na década de dois mil, o modo pelo qual a ação do Governo Lula incide sobre essas tendências e o processo de reconfiguração na cúpula do movimento sindical durante os mandatos do presidente Lula.

III. 1 – O IMPACTO DO GOVERNO LULA SOBRE O MOVIMENTO SINDICAL

Como afirmamos anteriormente, os anos noventa foram um período de refluxo do movimento sindical. As dificuldades do período repercutiram intensamente no discurso e na prática sindical.

Desde o início dos anos noventa é possível identificar uma mudança na prática sindical da CUT –que foi abandonando as reivindicações mais avançadas e os métodos mais contundentes da luta sindical– e um movimento de aproximação com a Força Sindical, que reunia os sindicatos mais burocratizados e conservadores. Tal aproximação, porém, não foi isenta de disputas e confrontos, já que ambas as centrais permaneceram em campos políticos diferentes, tendo assumido posições distintas e adotado estratégias diferenciadas em relação à política neoliberal: enquanto a Força Sindical nasceu sob o signo do neoliberalismo, defendendo as privatizações, a desregulamentação do mercado de trabalho e a eliminação daquilo que o neoliberalismo designava como os “privilégios” do setor público (Trópia, 2002), a CUT

3 Trata-se de uma contribuição compulsoriamente paga por todo trabalhador, seja ele filiado ou não a sua entidade sindical, e cujo valor corresponde ao salário de um dia de trabalho.

oscilou entre a assimilação de alguns *elementos* do discurso e do programa neoliberal e a resistência à política do neoliberalismo (Galvão, 2002). Assim, enquanto a Força Sindical apoiou os governos Collor (1990-1992) e Fernando Henrique Cardoso em seus dois mandatos (1995-2002), a CUT, apesar de ter assimilado alguns elementos do programa neoliberal, assumiu, de modo geral, uma postura crítica frente àqueles governos, considerando-os adversários dos trabalhadores. Na década de noventa, houve momentos em que a CUT buscou resistir, procurando, por exemplo, impedir a retirada de direitos sociais e trabalhistas.

A eleição de Lula modificou a relação entre movimento sindical e governo (Galvão, 2006). Essa mudança é mais visível quando se observa a trajetória da CUT, que resultou no aprofundamento da tendência à acomodação política por parte da direção e, ao mesmo tempo, no acirramento dos conflitos no interior da central. Esse resultado pode ser atribuído, ao menos, a duas ordens de fatores.

Em primeiro lugar, à dupla militância, uma vez que vários militantes do PT militam também na CUT. Isso fez com que vários ministros e funcionários do primeiro escalão do governo fossem recrutados junto à central, caso de Jacques Wagner, ex-ministro do Trabalho e do Emprego, ex-ministro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) e ex-ministro da Secretaria de Relações Institucionais (ex-presidente do Sindiquímica da Bahia e fundador da CUT naquele estado); de Ricardo Berzoini, ex-ministro da Previdência e ex-ministro do Trabalho e do Emprego (ex-presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo); de Luiz Gushiken, ex-secretário de Comunicação do Governo e ex-secretário do Núcleo de Assuntos Estratégicos (também ex-presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo); de Luiz Marinho, ex-ministro Trabalho e do Emprego e ex-ministro da Previdência (ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e ex-presidente da CUT). Nesse contexto, a CUT passou a enfrentar dificuldades crescentes para manter sua independência frente a um governo que não apenas havia ajudado a eleger e com o qual se identificava, mas que contava com a participação direta de lideranças cutistas.

Em segundo lugar, o resultado supra mencionado se deve às estratégias utilizadas pelo governo para envolver o movimento sindical com sua plataforma política: foram criados organismos tripartites – o já citado Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) e o Fórum Nacional do Trabalho (FNT)– para discutir as reformas previdenciária, tributária, trabalhista e sindical, na tentativa de construir consensos em torno das questões mais polêmicas e de minimizar uma eventual reação dos trabalhadores às políticas a serem adotadas.

A participação da CUT nessas instâncias foi criticada pelas correntes minoritárias da central, que consideram o tripartismo uma forma de cooptação e de conciliação de classe.

A Força Sindical, por sua vez, passou a ocupar uma posição institucional de menor destaque no primeiro governo Lula, chegando a esboçar algumas críticas –sobretudo à manutenção das altas taxas de juros – e tentando se firmar no inédito papel de oposição. Mas não era fácil se posicionar – mesmo que fosse somente no plano do discurso– contrariamente a um governo respaldado por amplo apoio popular e dirigido por um partido historicamente aliado a uma parte significativa do movimento sindical. Assim, no segundo mandato de Lula a Força Sindical, tradicional opositora da CUT e do PT, passou a apoiar o governo e um de seus principais dirigentes, Luiz Antonio de Medeiros, tornou-se Secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego em março de 2007.

A despeito da participação de sindicalistas no governo e da expectativa que a eleição de Lula havia gerado no meio sindical, desde o primeiro ano de mandato o petista adotou medidas que provocaram o descontentamento de alguns setores sindicais, como a reforma da previdência, aprovada em 2003. Embora essa reforma tenha retirado direitos dos funcionários públicos, importante base social da CUT, nenhuma resistência foi organizada pela central. Os novos servidores perderam o direito à aposentadoria com vencimento integral e seus benefícios deixaram de ser reajustados na mesma proporção que os salários dos servidores ativos. Os critérios para a aposentadoria dos servidores já em exercício tornaram-se mais rígidos, de modo a dificultar-se a obtenção da aposentadoria integral. A perda sofrida no valor da aposentadoria seria supostamente compensada pela expansão dos fundos de pensão, destinados a assegurar uma aposentadoria complementar.

As reformas sindical e trabalhista também geraram insatisfação em algumas correntes sindicais. No que se refere à reforma trabalhista, o governo Lula, embora apresente um discurso de defesa de direitos, não interrompeu o processo de *flexibilização* da legislação, ainda que o tenha feito em ritmo menor do que o verificado sob o governo de Fernando Henrique Cardoso. Com efeito, o governo vem realizando mudanças pontuais, sem discuti-las publicamente, a despeito da criação de fóruns tripartites, como o FNT, supostamente dedicados a essa tarefa. Assim, implementou algumas medidas flexibilizantes, a exemplo da contratação de prestadores de serviços na condição de empresas constituídas por uma única pessoa (a chamada “pessoa jurídica”) e da Lei do Super Simples, que possibilita a redução do pagamento de alguns direitos trabalhistas para micro e pequenas empresas. Já a

reforma sindical, a despeito de todo o debate realizado no FNT, não avançou. Ainda assim, o projeto em discussão gerou muita polêmica. Parte dessa polêmica dizia respeito às propostas de extinção da unicidade sindical e de algumas das contribuições sindicais compulsórias⁴. Outro foco de tensão estava relacionado às medidas que promoviam a centralização do poder nas cúpulas sindicais, o que reduziria a autonomia dos sindicatos de base e, conseqüentemente, a possibilidade de resistência das correntes sindicais minoritárias no interior das centrais⁵. Diante de tamanho dissenso, as mudanças introduzidas no âmbito da legislação sindical foram poucas, embora politicamente importantes: o reconhecimento oficial das centrais sindicais e o seu financiamento com dinheiro proveniente do imposto sindical, mudanças aprovadas no segundo mandato de Lula (Lei 11.648, 2008)⁶.

III. 2 – A RECONFIGURAÇÃO DO MOVIMENTO SINDICAL DURANTE OS GOVERNOS LULA

O cenário sindical brasileiro alterou-se significativamente durante os governos Lula. Uma dessas alterações foi a proliferação de centrais sindicais. Essa nova configuração do sindicalismo se deveu a dois motivos:

1. à insatisfação de uma parcela do movimento sindical com a manutenção dos pilares do modelo neoliberal pelo Governo Lula, bem como com o apoio da CUT e da Força Sindical a essa política;
2. à possibilidade oferecida pela legislação criada no Governo Lula de as centrais sindicais reconhecidas oficialmente terem acesso a vultuosos recursos financeiros. A referida legislação estabelece critérios de representatividade (a representação de, no mínimo, 5% do total de trabalhadores filiados a sindicatos no país, além da comprovação da filiação mínima de 100 sindicatos) e assegura o repasse de 10% da contribuição sindical para as centrais reconhecidas.

4 Ainda que o projeto de reforma em discussão no *Fórum Nacional do Trabalho* (FNT) não assegurasse plenamente nenhuma dessas mudanças.

5 A centralização de poder na cúpula resultaria de um sistema de negociação em diferentes níveis, que atribua ao contrato coletivo de maior abrangência o poder de indicar as cláusulas não passíveis de negociação nos níveis inferiores. O temor das correntes de esquerda, minoritárias na CUT, era que as entidades de cúpula celebrassem acordos lesivos ao trabalhador, que não poderiam ser alterados pelas entidades de base.

6 Embora as centrais sindicais existissem de maneira ininterrupta desde 1983, quando a CUT foi criada, não havia na legislação brasileira nenhum instrumento jurídico que as reconhecesse “de direito”.

Esses fatores desencadearam movimentos de divisão e de fusão de correntes sindicais. A CUT sofreu um processo de cisão interna e perdeu alguns sindicatos importantes, como o dos metalúrgicos de São José dos Campos e Região e o Andes (Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior), que participaram da criação da Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas). Essa nova entidade, segundo seus documentos oficiais é “[...] composta por entidades sindicais, organizações populares e movimentos sociais que têm como objetivo organizar a luta contra as reformas neoliberais do governo Lula [...] e também contra o modelo econômico que este governo aplica no país, seguindo as diretrizes do FMI” (Conlutas, 2004). Outros dirigentes e sindicatos da CUT criaram a corrente denominada *Intersindical*, por entenderem que a CUT deixou de ser um instrumento de organização e unificação do movimento sindical para ser um instrumento de colaboração e conciliação de classes. Porém, nem todos os dirigentes e sindicatos que integram essa nova corrente deixaram a CUT, optando por atuar nas duas organizações (Intersindical, 2006).

Fora da CUT, sete entidades ligadas ao sistema confederativo⁷, historicamente contrárias a mudanças na estrutura sindical, criaram a *Nova Central Sindical de Trabalhadores* (NCST), com o objetivo de defender a permanência, supostamente ameaçada, da unicidade sindical (NCST, 2005).

A legislação que possibilitou o reconhecimento oficial das centrais sindicais gerou um processo contraditório. Por um lado, verificaram-se movimentos de fusão, a exemplo do processo que resultou na criação da União Geral dos Trabalhadores (UGT). Essa nova central originou-se da fusão de três pequenas centrais. Por outro lado, ocorreram novas divisões. Um grupo de sindicalistas da CUT criou, em 2007, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). Tanto no caso da criação da UGT quanto no da criação da CTB, as decisões parecem ser de ordem pragmática: no que se refere à UGT, pequenas centrais se fundiram visando cumprir os critérios de representatividade para ter acesso ao reconhecimento legal e à fonte de custeio garantida pelo governo. Assim, a fusão não resulta, necessariamente, de uma afinidade político-ideológica que existiria entre elas. No caso da CTB, tratou-se também de aproveitar a oportunidade de passar a

7 São as seguintes: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSBP), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura (CNTEEC), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Alimentação e Afins (CNTA), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (CONTRATUH), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT).

receber os recursos da contribuição sindical, pois seus dirigentes não tinham divergência política de fundo com a direção da CUT, tanto que alegam que, embora tenham se retirado da CUT, não pretendem romper com ela e nem tratá-la como adversária⁸.

Mais do que uma disputa quanto à melhor forma de organização sindical, que oporia os defensores da estrutura sindical de um lado e seus críticos de outro, o surgimento de novas entidades sindicais foi fruto de disputas políticas sobre a relação do sindicalismo com o governo e sobre o posicionamento perante as reformas neoliberais, bem como da corrida aos recursos financeiros oferecidos às centrais sindicais que lograssem se legalizar. Mesmo assim, o apoio sindical ao governo Lula prevalece, na medida em que as entidades que lhe oferecem resistência possuem um espaço de atuação ainda pequeno, enfrentando dificuldades para organizar e mobilizar os trabalhadores. Esse apoio pode ser melhor dimensionado no quadro abaixo:

Quadro 1
As centrais sindicais no Governo Lula

	Data de criação	Origem	Posição frente ao governo	Principal reivindicação	Apóia a negociação com o governo?
CUT	1983	Novo sindicalismo	Apoio amplo	Redução da jornada para 40 horas semanais	Sim
CGTB	1986	CGT	Apoio amplo	Redução da jornada para 40 horas semanais	Sim
Força Sindical	1991	CGT	Apoio amplo	Redução da jornada para 40 horas semanais	Sim
Conlutas	2004	CUT	Oposição	Reversão das reformas neoliberais	Não
Inter Sindical*	2006	CUT	Oposição	Reversão das reformas neoliberais	Não
CTB	2007	CUT	Apoio crítico	Redução da jornada para 40 horas semanais	Depende do que é negociado
UGT	2007	SDS + CGT + CAT	Apoio amplo	Redução da jornada para 40 horas semanais	Sim

Fonte: própria.

* Embora a rigor não constitua uma central, é uma organização que agrega diferentes sindicatos de base e que foi criada no governo Lula, razões pelas quais figura no presente quadro.

8 Cfr. Entrevista de João Batista Lemos a Lobregatte (2007). Ao mesmo tempo, os dirigentes da nova central alegam que a saída da CUT se deve ao hegemonismo da corrente majoritária e à falta de democracia interna da central, apontando sua falta de autonomia em relação ao governo (Gil, 2007).

As centrais que apóiam o Governo Lula (CUT, FS, CTB, UGT, NCST e CGTB) destacam o “bom relacionamento” desse governo com o movimento sindical, expresso nas negociações e consultas efetuadas nos fóruns tripartites, mesas de negociação sobre salário mínimo, sobre serviço público e aposentadoria e na lei de reconhecimento das centrais. Embora faça uma avaliação positiva do governo, a CTB apresenta críticas pontuais a ele, recusando-se, por exemplo, a firmar o acordo que definiu o reajuste das aposentadorias em 2009 por considerá-lo um acordo rebaixado, na medida em que previa que o valor das aposentadorias teria um reajuste inferior ao concedido ao salário mínimo.

Conlutas e Intersindical constituíram-se em oposição ao governo –identificado como neoliberal– e suas reformas, e apresentam uma postura reivindicativa combativa, recusando-se a negociar acordos que impliquem concessões e perda de direitos aos trabalhadores. Essas afinidades político-ideológicas levaram-nas a um movimento de aproximação organizativa. Um Congresso de unificação da Conlutas com a Intersindical está programado para o ano de 2010.

O processo de reconfiguração que procuramos descrever acima indica que, embora a posição de apoio ao governo seja predominante, uma parcela do sindicalismo procura se reorganizar para fazer frente a ele.

IV. OS MOVIMENTOS DE URGÊNCIA

Estamos denominando “movimentos de urgência”, tal como Mouriaux (2002), os movimentos populares cujos integrantes lutam por um tipo de reivindicação cujo não atendimento pode colocar em risco, no curto prazo, a sobrevivência do grupo. Trata-se dos desempregados, das famílias sem moradia e, também, do campesinato sem terra. Não poderemos analisar em detalhes todos esses movimentos. Daremos uma idéia sobre alguns deles.

IV. 1 – A LUTA DOS SEM-TERRA

Como é sabido, e contrariando inúmeros autores que, desde a década de sessenta, previam o declínio da luta camponesa pela terra no Brasil, previsão sustentada, por exemplo, por Caio Prado Jr. (1987), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) tem sido, desde 1984 quando foi criado, um dos principais –se não o principal– movimento popular no Brasil. Ao longo da década de noventa, surgiram outros movimentos camponeses organizados no padrão do MST, como, por exemplo, o Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), que é muito ativo na região Nordeste do país. Esses movimentos todos representam o campesinato pobre, aquele que não possui terra ou que tem terra insuficiente. A sua reivindicação principal

é, por isso, a distribuição de terras. O meio que o movimento camponês apresenta para viabilizar tal reivindicação é a desapropriação das terras improdutivas ou ociosas, o que assegura o respaldo constitucional para sua reivindicação. O campesinato remediado, que possui terra, mas enfrenta problemas graves com o financiamento e venda da sua produção, tem outras reivindicações: financiamento, assistência técnica, preço mínimo assegurado para seus produtos e outras. Esse campesinato remediado está representado nas federações estaduais dos trabalhadores rurais que são organismos da estrutura sindical corporativa de Estado e que, no nível nacional, estão unificadas na Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura). Falando da luta camponesa na década de dois mil, trataremos neste texto, quase que exclusivamente, da luta do campesinato pobre, que tem sido a luta de maior impacto político e social.

O número de acampamentos –que em sua maioria representam uma ação de ocupação de terra– bem como o número de famílias acampadas cresceu na década de dois mil quando comparados com os dados da década de noventa. Vejamos a tabela abaixo.

Tabela 5
Acampamentos Sem-Terra
1990-2006

Ano	Acampamentos	Famílias
2006	–	150.000
2005	778	127.872
2004	661	114.776
2003	633	117.482
2002	526	67.298
2001	585	75.334
2000	555	73.066
1999	538	69.804
1998	388	62.864
1998	388	62.864
1996	250	42.682
1995	101	31.619
1994	125	24.590
1993	214	40.109
1992	149	20.596
1991	78	9.203
1990	119	12.805

Fonte: Portal do MST (2009). Em <<http://www.mst.org.br>> Acesso em 2 de julho de 2009.

Temos aqui uma situação semelhante àquela que verificamos na análise do sindicalismo. Na base, a luta mantém-se ativa e em ritmo crescente. Porém, na cúpula do movimento também podemos constatar uma tendência à acomodação política. Recordemos que a década de noventa foi a década das grandes manifestações políticas do MST contra o capitalismo neoliberal e os governos de Fernando Henrique Cardoso. Hoje, o movimento está dividido quanto à posição a tomar diante do Governo Lula, pois esse governo não tem correspondido à expectativa do MST no que respeita à desapropriação de terras. Transcrevemos abaixo o balanço mais recente que pudemos encontrar do MST sobre a reforma agrária sob o Governo Lula.

“Reforma agrária

O II Plano Nacional de Reforma Agrária tinha a previsão de assentar 550 mil famílias entre 2003 e 2007. No entanto, segundo a Unesp (Universidade do Estado de São Paulo), apenas 163 mil famílias desta meta foram assentadas, ou seja, o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) cumpriu apenas 29,6% da Meta. Quanto à Meta 02 -regularização fundiária, que era de 500 mil famílias de posseiros- legiti- mou apenas 113 mil, ou seja, 22,6% da meta. A conclusão: o governo Lula não fez a reforma agrária onde o agronegócio não queria e fez a regularização fundiária onde ele queria.

Violência no campo

Entre 1985 a 2007, a CPT (Comissão Pastoral da Terra) registrou de 1.117 ocorrências de conflitos com a morte de 1.493 trabalhadores rurais. Em 2008, ainda dados parciais apontam 23 assassinatos. Do total de conflitos, só 85 foram julgados até hoje, tendo sido condenados 71 executores dos crimes e absolvidos 49 e condenados somente 19 mandantes, dos quais nenhum se encontra preso⁹. [...]

As ocupações de terra em nosso país têm como causa a não implantação da Reforma Agrária pelo governo que, ao invés de exercer a lei que obriga o cumprimento da função social da terra, prioriza as políticas de fortalecimento da grande propriedade e do agronegócio, como fonte da produção de mercadorias de exportação, fazendo com que haja reações de todas as formas para desconcentrar a terra”¹⁰.

Como indicam os documentos acima, a avaliação que o MST faz do desempenho do Governo Lula na política de reforma agrária, tanto no primeiro quanto no segundo mandato, é muito nega-

⁹ Disponível em <<http://www.mst.org.br>>. Portal do MST. Acesso em 10 de julho de 2009.

¹⁰ Bogo, Ademar (2009) “As ocupações de terra em legítima defesa”, 27 de abril. Em <<http://www.mst.org.br>> Acesso em 10 de julho de 2009.

tiva. Apesar disso, o MST tem um posicionamento hesitante diante desse governo.

Se a direção do MST hesita e se divide na definição de seu posicionamento diante do governo Lula, isso se deve, em parte, ao fato desse governo ter uma política de aproximação com a direção do movimento, nomeação de políticos simpáticos ao movimento para os cargos do Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRRA) e fornecimento de fundos financeiros para viabilizar os projetos educacionais do movimento são dois elementos importantes dessa aproximação. Se recordarmos que, durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, o MST estava sob a mira de uma campanha concertada do governo e da grande imprensa que procurava criminalizar a luta camponesa pela terra, perceberemos o impacto político que essa mudança no comportamento governamental pode ter.

Mas, além da política de aproximação com a direção do movimento, o Governo Lula implantou, também, uma política visando a atrair o campesinato remediado, isolando o campesinato pobre e sua luta pela terra. De fato, o crédito agrícola para a agricultura familiar, que, justamente, envolve o campesinato remediado, cresceu muito durante os governos Lula¹¹. Ora, além de favorecer a base da Contag, essa política favorece, também, uma parte da base do MST e demais movimentos de luta pela terra: os trabalhadores já assentados, que receberam seus títulos de propriedade e que continuam vinculados ao MST, estão preocupados com financiamento, assistência técnica

11 O MST mostra, em seus documentos, que o Governo Lula mantém a concentração do crédito agrícola nas grandes propriedades de terra e no agronegócio, em detrimento da pequena propriedade e da agricultura voltada para o mercado interno. Essa informação diz muito, de fato, sobre a natureza de classe do Governo Lula. Contudo, isso não significa que o crédito para a agricultura familiar não tenha crescido em relação aos governos de Fernando Henrique Cardoso e nem que tal crescimento não tenha um impacto político junto ao campesinato remediado. Transcrevemos, a seguir, o informativo documento do MST, “Relação entre crédito/Tamanho da propriedade/Produção”, a respeito da concentração do crédito agrícola: 1) O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social concedeu em empréstimos, apenas no ano passado, mais de R\$17,2 bilhões de reais para empresas do agronegócio. Menos de um ano depois, estas empresas já demitiram mais de 9.300 trabalhadores; 2) O Banco do Brasil emprestou por meio de linhas de crédito especial mais R\$ 10 bilhões para 20 empresas do agronegócio – produção, insumos, industrialização e comércio (2008)– 1,2 milhão de famílias de agricultores familiares devem receber, na safra 2008-2009, cerca de R\$ 7,2 bilhões (projeção); 3) Os pequenos agricultores acessam 13,4% do crédito e produzem 56,8% da produção, num total (em 2001) de 910.466 contratos; 4) Os médios agricultores acessam 48% do crédito e produzem 29,6% da produção, num total (em 2001) de 547.520 contratos; 5) Os latifundiários acessam 34,6% do crédito, produzem 13,6% da produção e são um total (em 2001) de 10.926 contratos. Disponível em <<http://www.mst.org.br>>. Acesso em 10 de julho de 2009.

e preço mínimo e não mais, fundamentalmente, com a distribuição de terra. Esta última é, fundamentalmente, a preocupação básica dos acampados –camponeses sem terra que realizam acampamentos em propriedades agrícolas ou estradas para reivindicar a desapropriação e a distribuição de terras. Em suma, a base social do MST não é homogênea e o Governo Lula tomou medidas que favorece uma parte dessa base e não outra.

IV. 2 – O MOVIMENTO DOS SEM-TETO

Outro movimento popular de urgência que se disseminou pelas cidades grandes e médias do Brasil já ao longo da década de noventa, e que se mantém muito ativo ao longo da década de dois mil, é o movimento popular de luta pela moradia, mais conhecido como movimento dos sem-teto. Esse movimento reúne famílias e pessoas em condições distintas, mas que têm em comum o fato de não possuir moradia e nem dispor de renda suficiente para pagar um aluguel. Essas famílias, que habitam cortiços insalubres e super-povoados, que foram despejados do imóvel que alugavam por falta de pagamento ou que estão na iminência de sê-lo são a base dos movimentos populares por moradia. Trata-se de pessoas empregadas com renda muito baixa, pessoas desempregadas, que vivem do trabalho informal e incerto que, no geral, representam aquilo que parte da sociologia latino-americana convencionou denominar “massa marginal”, produto típico do capitalismo dependente. Os sem-teto, como são genericamente chamados, dividem-se em dezenas de movimentos localizados em todo o Brasil e agem, algumas vezes, de modo mais ou menos espontâneo. Esses movimentos não são homogêneos politicamente. Alguns deles, como o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), vinculado ao MST, procura ligar a luta por moradia à luta contra o modelo neoliberal de capitalismo. Outros, politicamente mais limitados, restringem toda a sua plataforma à reivindicação da casa própria. Em qualquer dos casos, a organização dos sem-teto é muito difícil e a obtenção da moradia tende a desmobilizar aquele que a conseguiu (Oliveira, 2006).

Se tomarmos como exemplo a cidade de São Paulo, encontraremos atuando nessa metrópole cerca de cinco movimentos de moradia importantes. A maior parte deles utiliza o método da ocupação de edifícios e de terrenos como instrumento de luta. Fazem tanto ocupação que poderíamos denominar táticas, isto é, para chamar atenção do governo e do público para o problema da moradia, quanto ocupações que podemos denominar estratégicas, vale dizer, ocupações que visam obter a desapropriação do edifício ou do terreno ocupado e sua entrega para os sem-teto que encetaram a ação (Oliveira, 2006). Além desse tipo de ação direta, os sem-teto valem-se de outros méto-

dos tradicionais do movimento popular –como manifestações de rua, abaixo-assinados, etcétera.

Não é fácil obter dados sobre a luta dos sem teto, que se disseminou por todo o Brasil e que não possui um organismo centralizador capaz de, de fato, dar uma direção geral ao movimento. Um levantamento junto aos órgãos de imprensa, realizado por Oliveira (2010), chegou a alguns dados sistemáticos sobre as ocupações de edifícios e de terrenos urbanos pelos sem-teto na cidade de São Paulo. Entre 2001 e 2009, a grande imprensa noticiou cerca de 76 ocupações na Grande São Paulo, originando em média cerca de oito ocupações por ano. Seria interessante comparar o período dos governos de Fernando Henrique Cardoso com o dos governos Lula. Entre 1995 e 2002, foram noticiadas pela grande imprensa escrita 79 ocupações na Grande São Paulo, isto é, uma média de quase dez ocupações por ano. Já, entre 2003 e 2009, registram-se 60 ocupações, perfazendo em média cerca de oito ocupações por ano, ou seja, ligeiramente abaixo das ocupações ocorridas nos anos FHC (Oliveira, 2010: 203). Sobre o número de participantes nessas ocupações, Oliveira encontrou informações mais sistemáticas sobre o número de famílias participantes em cada uma delas. Somando-se tais montantes, teríamos, para a década de 2000, cerca de 20 mil e setecentas famílias participando de ocupações urbanas. Se considerarmos quatro pessoas por família, teríamos, somente na região da Grande São Paulo, mais de 82 mil pessoas envolvidas na dura atividade de ocupação de edifícios, públicos ou particulares, ou de terrenos ociosos entre os anos de 2001 e 2009 (Oliveira, 2010: 204). O número de famílias envolvidas em ação de ocupação foi significativamente maior durante os dois governos Lula (2003-2009) que durante os governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), apesar de estarmos deixando de lado um ano ainda não cumprido do segundo mandato do governo Lula. Entre 1995 e 2002, cerca de 13 mil e setecentas famílias participaram de ocupações na Grande São Paulo, enquanto que entre 2003 e 2009, esse número elevou-se para 17 mil e cem famílias.

Oliveira (2010) mostra que a ação de ocupação de edifícios e terrenos urbanos é uma ação dura, que exige muita organização e disciplina dos participantes além de expô-los ao risco da repressão. Assim que um prédio é ocupado, a água e a luz podem ser cortadas. As famílias ficam sem elevador, utilizam a luz de velas e são obrigadas a utilizar a escada para chegarem aos seus quartos. Necessitam fazer muita força para carregar baldes de água escada acima. As crianças, numa ocupação, vivem em condição péssima, muitas vezes sem escola. Não raro, a repressão às ocupações é violenta. Quando se trata de ocupação de terrenos urbanos, nos quais os ocupantes erguem barracas,

acontece, muitas vezes, de a ação de despejo envolver a ação de tratores que passam por cima das barracas levando de roldão os pertences das famílias pobres acampadas. Outras vezes, contudo, as ocupações são vitoriosas. Não raro, um processo de ocupação demora anos até chegar a um desfecho, favorável ou não aos sem-teto.

Ao longo do ano de 2009 e 2010, os movimentos dos sem-teto têm lutando para que o programa de construção de moradias lançado pelo Governo Lula como instrumento de política econômica de combate à crise, programa intitulado “Minha casa, minha vida”, contemple, na forma devida, as famílias cuja renda total seja igual ou inferior a três salários mínimos. As famílias pertencentes a essa faixa de renda respondem por 90% do déficit habitacional do país; no entanto, o programa “Minha casa, minha vida” prevê que apenas 40% de sua dotação será destinada à população das famílias de baixa renda. Na luta contra o caráter elitista desse programa, os sem-teto têm feito passeatas e atos públicos por todo o país (Hirata, 2010).

V. OS MOVIMENTOS DE CLASSE MÉDIA

A classe média é um setor social muito heterogêneo. Essa classe é composta pelos trabalhadores não manuais, assalariados em sua maioria, mas, também, profissionais liberais, que possuem, eventualmente, posição de responsabilidade dentro das empresas –gerência, chefias intermediárias etc. Essa classe se unifica por um fator ideológico que poderíamos denominar consciência *meritocrática*: a valorização do trabalho socialmente percebido como não-manual e o correspondente desprezo pelo trabalho manual. Tal consciência concebe a desigualdade social e a hierarquia salarial como decorrentes dos dons e méritos de cada indivíduo. Essa classe grande e heterogênea não reagiu de modo homogêneo frente ao modelo capitalista neoliberal ou frente ao governo Lula.

A alta classe média dividiu-se entre o apoio amplo e o apoio crítico ao neoliberalismo. Os trabalhadores de alta classe média do setor privado parece terem aderido amplamente ao neoliberalismo. Já os trabalhadores dessa mesma fração inseridos no setor público –juízes, médicos, professores universitários, oficiais das Forças Armadas, fiscais do Estado e outros– sentiram-se, ao menos em parte, prejudicados pelo capitalismo neoliberal, posto que esse modelo atingiu suas aposentadorias e salários e minou o prestígio da função e dos serviços públicos.

A baixa classe média foi a fração mais atingida pelo neoliberalismo. Essa fração resistiu ou lutou contra o modelo neoliberal de diferentes maneiras e em vários movimentos sociais. Sua ação de resistência está presente, por exemplo, no movimento sindical do fun-

cionalismo público, principalmente, no sindicalismo do pessoal da área de saúde e de educação. Contudo, houve um movimento em que parte da classe média procurou politizar a sua resistência ao modelo neoliberal. Estamos nos referindo às sucessivas edições do Fórum Social Mundial que, apesar do que anuncia o título de tal evento, trata-se de um evento predominantemente brasileiro¹².

O Fórum sempre reuniu, predominantemente, pessoas e organizações de classe média. A esmagadora maioria dos frequentadores do Fórum possui curso superior completo ou incompleto. As organizações sindicais da classe operária e as organizações camponesas, quando participam das edições do Fórum, constituem, nele, um elemento marginal. As reivindicações que ganham destaque no Fórum denotam o interesse em recuperar o prestígio e importância dos serviços públicos –saúde, educação–, em conquistar os direitos das mulheres e em preservar o ambiente. São reivindicações progressistas, mas limitadas pelo universo de preocupações e interesses desses setores intermediários. Parte da classe média foi muito atingida com a restrição aos direitos sociais. Foi atingida na condição de portadora de direitos sociais e usuária dos serviços públicos, mas foi atingida, também, na condição de profissionais que garantiam e produziam tais serviços – o médico, o professor, o pessoal da educação e saúde dentre outros. As reivindicações do Fórum apontam para a recuperação desses serviços. Em suma, o setor da classe média diretamente atingido pelo modelo capitalista neoliberal vê nas edições do Fórum um evento de protesto contra esse modelo econômico.

Também os métodos de organização e de luta implementados pelo Fórum trazem a marca da classe média. A classe operária, quando lutou e luta por reformas, o faz organizando-se em torno de um programa reformista. Embora existam disputas dentro do Fórum, o que predomina é a, justamente, a negação em se definir um programa de lutas e a estabelecer, em torno desse programa, uma organização com direção coletiva e centralizada para dirigir a luta. Contentam-se em lançar apelos periódicos em defesa dos serviços públicos, do ambiente e das mulheres. Parece que esperam a intervenção de uma força externa e superior que daria forma política às suas reivindicações esparsas e aplicaria tal programa no lugar das associações que organizam os encontros anuais do Fórum.

Arias e Corrêa (2010) mostram que, ao longo da década de dois mil, o Fórum Social Mundial, nas suas edições brasileiras, foi perdendo público e impacto político. Na Edição de 2010 em Belém do

12 Na análise do movimento altermundialista e do Fórum Social Mundial, baseamos em Corrêa e Arias (2010).

Pará, o Fórum Social Mundial logrou uma recuperação, com a participação de 130 mil pessoas, talvez em decorrência da crise econômica de 2008. Contudo, as organizações e os intelectuais que se bateram, na edição paraense do Fórum, para que esse definisse um programa de luta e colocasse em pé uma organização que o defendesse, foram derrotados. A força hegemônica do Fórum continua considerando que definir um programa e formalizar uma organização seria antidemocrático.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento sindical, o Fórum Social Mundial, o movimento camponês e dos sem-teto expressam, cada um a seu modo e representando setores distintos das classes trabalhadoras, a resistência popular ao modelo capitalista neoliberal. Esses movimentos não chegaram a se unificar num amplo movimento de massa com um programa alternativo ao neoliberalismo, mas obrigaram os governos a realizar concessões que atenderam, mesmo que parcialmente, reivindicações populares.

Este rápido balanço da luta popular no Brasil poderia ser mais completo. Alguns movimentos populares, como o movimento de desempregados, e também outros movimentos de setores da classe média prejudicados pelo capitalismo neoliberal –como é o caso de uma parte do movimento estudantil– não foram examinados neste texto. Acreditamos, contudo, que o pequeno balanço que apresentamos oferece ao leitor uma idéia das potencialidades e dos limites do movimento sindical e popular no Brasil da década de dois mil.

BIBLIOGRAFIA

- Arias, Santiane y Corrêa, Ana Elisa 2010 “O movimento altermundialista, a classe média e a resistência ao capitalismo neoliberal” (Campinas) mimeo.
- Boito Jr. Armando 2003 “A crise do sindicalismo” em Santana e Ramalho (orgs.) *Além da Fábrica: trabalhadores, sindicatos e a nova questão social* (São Paulo: Boitempo).
- Boito Jr., Armando 2007 “Classe média e sindicalismo” em *Estado, Política e Classes Sociais* (São Paulo: UNESP).
- Conlutas 2004 “Coordenação pretende se construir como uma alternativa de luta para os trabalhadores” em <www.conlutas.org.br> acesso 5 de junho de 2004.
- Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicas) 2008 “Balanço de Greves em 2007” em <[www.sinal.org.br/download/macro/\(272008118David\)Greves2007.pdf](http://www.sinal.org.br/download/macro/(272008118David)Greves2007.pdf)> acesso 15 de março de 2009.

- Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicas) 2006 “As Greves em 2005” em <www.mte.gov.br/observatorio/Prod03_2006.pdf> acesso 15 de março 2009.
- Galvão, Andréia 2002 “A CUT na encruzilhada: dilemas do movimento sindical combativo” em *Idéias* (Campinas: Instituto de Filosofia e Ciência Humanas da Unicamp) Vol. 9, Nº 1.
- Galvão, Andréia 2006 “O movimento sindical frente ao governo Lula: dilemas, desafios e paradoxos” em *Outubro. Revista do Instituto de Estudos Socialistas* (São Paulo: IES) Nº 14.
- Galvão, Andréia 2009 “A reconfiguração do movimento sindical no governo Lula” em *Outubro. Revista de Instituto de Estudos Socialistas* (São Paulo: IES) Nº 17.
- Gil, Rosângela Ribeiro 2007 “CTB: mais uma central sindical no Brasil” em <www.portogente.com.br> acesso 16 de outubro de 2007.
- Intersindical 2006 “Manifesto: Intersindical, um instrumento a serviço da luta de classes” em <<http://acaopopularsocialist.locaweb.com.br/textos/manifesto-intersindical-2006.pdf>>.
- Lobregatte, Priscila 2007 “Batista: por uma central democrática, unitária e autônoma” em <www.csc.org.br> acesso 29 de agosto de 2007.
- Lucio, Clemente Gans 2008 “Balanço das negociações coletivas e das greves no Brasil no período 1998-2007”. Em <www.ibret.org/ui/evento/historico.aspx> acesso em 15 de março de 2009.
- Marcelino Pereira, Paula Regina 2008 *Terceirização e Ação Sindical. A singularidade da reestruturação do capital no Brasil*. Tese de doutorado em Ciências Sociais, Unicamp.
- Mouriaux, René 2002 “À esquerda e a reanimação das lutas sociais na Europa. Entrevista realizada por Andréia Galvão” em *Crítica Marxista* (São Paulo) Nº 14: 150-170.
- Noronha Garuti, Eduardo *et. al.* 1998 “Explicações para um ciclo excepcional de greves: o caso brasileiro”, Artigo apresentado no XXI Congresso Internacional (LASA). Em <<http://lasa.international.pitt.edu/LASA98/GarutiNoronha-Gebrine-Elias.pdf>> acesso 15 de março de 2009.
- Nova Central Sindical de Trabalhadores 2006 “Por que uma outra central sindical?” Em <www.ncst.org.br> acesso em 10 de janeiro de 2006.
- Oliveira, Nathalia 2006 *Os movimentos dos sem-teto da cidade de São Paulo frente aos governos neoliberais (1995-2002)* Monografia em Ciências Sociais (Campinas: Unicamp).
- Oliveira, Nathalia 2010 “Os movimentos dos sem-teto da Grande São Paulo”. Dissertação de Mestrado (Campinas: Unicamp).

- Prado Jr., Caio 1987 *A Revolução Brasileira* (São Paulo: Brasiliense).
- Rodrigues, Leôncio Martins 2002 *Destino do Sindicalismo* (São Paulo: Edusp/Fapesp).
- Rosanvalon, Pierre 1988 *La Question Syndicale* (Paris: Hachette).
- Trópia, Patrícia 2002 “A adesão da Força Sindical ao neoliberalismo” em *Idéias* (Campinas: Instituto de Filosofia e Ciência Humanas da Unicamp) Vol. 9, Nº 1.

MARCO ANTONIO PONCE*

LUCHA HEGEMÓNICA, DEMOCRACIA Y AUTORITARISMO EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

ANALIZAR LA ÚLTIMA DÉCADA VENEZOLANA implica escudriñar un proceso económico, político, social y cultural de participación popular, gobernabilidad y correlaciones de fuerza, con características multidimensionales y complejas, lleno de avances, estancamientos y retrocesos. Con numerosas elecciones o consultas populares, que han legitimado a la misma administración de gobierno por más de una década, matizada por un breve golpe de estado. Con un enclave en la explosión del desarrollo comunitario y el poder popular, que soporta una doctrina de gestión pública en construcción, denominada Socialismo del Siglo XXI.

El estudio toma como base el enfoque gramsciano sobre las luchas por la hegemonía, y se complementa con los enunciados de Foucault para entender la correlación de fuerzas y sus pugnas. Dividido en dos partes, se intenta agrupar los aspectos representativos del período 2000-2009, abordando principalmente elementos internos que favorecen una comprensión concreta del país, priorizándolos sobre análisis o razonamientos de política internacional o relaciones de fuerzas pro o anti capitalistas o imperialistas en el mundo. En la primera resaltan los referentes históricos representativos del ascenso del chavismo al

* Documentalista. Investigador de la conflictividad social en Venezuela. Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

poder y la fuerza que lo adversa, así como la concentración de poder con rasgos autoritarios en la gerencia gubernamental, contextualizada con la promoción del poder comunal y organización de las bases sociales. En la segunda, se revisan los aspectos relacionados a los movimientos sociales, formas asociativas, principales actores, demandas y repertorios de luchas, destacando el papel del Estado en el empoderamiento de la colectividad a través de la legislación y la transferencia de procesos de la gestión pública a la comunidad.

REFERENTES HISTÓRICOS DE LA LUCHA POR EL PODER

La reciente década está impregnada de cambios y transformaciones surgidos, en gran medida, a raíz de los intentos de golpe de estado del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. Acciones cívico-militares que fueron consecuencia del debilitamiento democrático derivado de la crisis económica en la región y políticas gubernamentales neoliberales históricas, que siempre fueron rechazadas por la población, y que produjeron estallidos sociales como el *Caracazo* a finales de la década del ochenta¹.

Las secuelas de los intentos de golpe propician la construcción o establecimiento de una ola social crítica a la concepción y ejercicio de la democracia, instaurada desde el 23 de enero de 1958 con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La ejecución del proceso democrático tuvo como principales protagonistas a los partidos dominantes, Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD), quienes establecieron alianzas con otros grupos minoritarios para asegurar el poder, una de ellas y las más emblemática fue el Pacto de Punto Fijo, o *puntofijismo*², que propuso la alternabilidad en el poder para los partidos más importantes, constituyendo una elite política con respaldo de las Fuerzas Armadas, un círculo que agotó la tranquilidad social venezolana, mantenida hasta entonces con la renta petrolera. Tal sosiego fue vulnerado por gestiones públicas ineficien-

1 El 27 de febrero de 1989 un número indeterminado de personas provenientes de los estratos populares iniciaron una serie de disturbios en la ciudad de Guarenas, Estado de Miranda, como consecuencia del aumento de las tarifas de transporte urbano y de la falta de reconocimiento del pasaje preferencial estudiantil por parte del “Poder Ejecutivo” que eran los efectos inmediatos de un paquete económico neoliberal decretado por el gobierno nacional y redactado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Los sucesos de febrero y marzo de 1989, según cifras oficiales, dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, dicha lista fue desvirtuada por la posterior aparición de fosas comunes” (Corteidh, 2002: 47)

2 Puede acceder al pacto de punto fijo en <http://www.analitica.com/bitblbio/venezuela/punto_fijo.asp>

tes y anti-populares, grandes escándalos de corrupción y el aumento de los índices de desigualdad y pobreza.

Esta nueva visión crítica congregó movimientos y grupos sociales de base³ que tenían como eje central el rechazo a la democracia representativa tradicional. Asumiendo como representantes a los militares y civiles que lideraron los intentos de golpe de estado de 1992⁴, que con un discurso revolucionario y de cambio capitalizaron el descontento de los sectores sociales mayormente excluidos o signados por la pobreza.

El fervor causado por este nuevo movimiento social materializó la opción revolucionaria sobre la tradicional en las elecciones presidenciales de 1998, dando como ganador a Hugo Chávez Frías, con 62,46% de los votos, quien se caracterizó por un discurso popular de democracia representativa, participativa y protagónica.

Con Chávez en la presidencia se desarrolla en Venezuela una clara lucha hegemónica por el poder en esta última década⁵. El nuevo gobierno, el de los pobres, se establece en febrero de 1999, y el mismo año, en abril, convoca a diferentes sectores de la vida nacional a conformar una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico. Y en diciembre se realiza un referéndum popular donde se elige una nueva Constitución, que pasaría a reemplazar a la carta magna vigente desde 1960.

Venezuela llega al año 2000 con un gobierno con altos niveles de popularidad, principalmente en los sectores de bajos ingresos económicos. En el mes de julio se realizan nuevas elecciones, en el marco de la recién aprobada Constitución, para legitimar todos los cargos públicos, incluyendo al presidente, y Chávez obtiene un 59,76% de los votos y mayoría en la Asamblea Nacional, antiguo Congreso. Así, el chavismo, como se conoce popularmente al movimiento afecto al gobierno, controla gran parte del país, impactando en la lucha hegemónica, hasta entonces liderada por el puntofijismo.

Siendo mayoría en noviembre de 2001 el ejecutivo se enfrenta por primera vez, y de manera frontal al empresariado venezolano, con la promulgación, por decreto presidencial de 49 leyes económicas. Siendo las más sensibles las de Pesca y Costas, Hidrocarburos y la de Tierras.

3 El término movimiento u organizaciones de base sirve para identificar a las organizaciones de carácter social, popular o político en contacto permanente con la comunidad.

4 De los civiles y militares golpistas resalta el teniente coronel Hugo Chávez Frías, quien lideró la intentona del 4 de febrero.

5 Para esta investigación tomaremos el enfoque gramsciano sobre hegemonía. Definida por la dominación y mantenimiento del poder por un grupo, estableciendo un estado de homogeneidad en su entorno.

Teniendo como respuesta el 10 de diciembre de 2001, una huelga general, o paro cívico, convocado por la Federación de Cámaras Empresariales (Fedecámaras). “Fedecámaras consideró violado su derecho a la participación consagrado en la Constitución y decidió organizar el paro cívico nacional. Respaldado por diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Bloque de Prensa Venezolano, Pro Venezuela, Fetrabanca y prácticamente todos los partidos de oposición. La CTV⁶ y la Federación de empleados públicos también respaldaron el paro” (Provea, 2002). Los representantes del poder económico burgués capitalista tradicional y la administración de gobierno sopesan sus fuerzas, arrastrando a la población venezolana a un espiral de fragmentación sociopolítica que se va radicalizando con el devenir de los años.

Para 2002 Venezuela registra uno de los índices más altos de conflictividad y polarización social en su historia, se encuentra dividida en dos grupos o bloques excluyentes uno del otro, y con visiones de país incompatibles. Tomando como referencia el enfoque de Foucault, se establece una relación de poder con base en la existencia de dos fuerzas opuestas, por un lado los afectos al gobierno, pertenecientes a los sectores populares, y por otro los opositores, identificados con la democracia tradicional y grupos de clase económica media alta. Este año es clave para entender el rumbo que toma Venezuela en lo que queda de la década, inmersa en una férrea contienda por el poder, involucrando a distintos actores sociales, incluyendo grupos políticos y económicos en constante confrontación con el gobierno.

A partir del segundo semestre de 2001 y hasta abril de 2002 se intensifican las movilizaciones de calle y protestas a favor y en contra del gobierno, llegando a un punto clave el 11 de abril de 2002, cuando una multitud, convocada por partidos de oposición, realiza una marcha hasta el Palacio de Gobierno, en el centro de Caracas, enfrentándose con un grupo de personas afectas al presidente, quienes demostraban su apoyo frente al Palacio. La lucha entre manifestantes contrastó con una fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y el accionar de grupos de civiles armados, que dejó un saldo de 19 personas muertas y centenares heridas.

En este contexto sociopolítico, al día siguiente un grupo de civiles, identificados con el sector capitalista empresarial, en compañía de fuerzas militares, dan un golpe de Estado y remueven al presidente y ministros. Con el golpe se autoproclama presidente de la República Pedro Carmona Estanga, máximo dirigente de Fedecámaras. El 13 de abril de 2002 simpatizantes de Chávez e integrantes de grupos de base se concentran en las inmediaciones del Palacio para rechazar al nuevo

6 CTV son las siglas de Confederación de Trabajadores de Venezuela.

gobierno, y exigen el retorno del presidente legítimo, quien se encuentra detenido por un grupo de militares. En este escenario el sector opositor afirma que no es un golpe de Estado sino una situación de vacío de poder, argumentando las declaraciones del ministro de la defensa, Lucas Rincón, el 12 de abril de 2002 que afirmó en cadena de radio y televisión que el presidente había renunciado a su cargo.

“Los miembros del Alto Mando Militar de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los integrantes del Alto Mando ponen sus cargos a la orden los cuales entregaremos a los oficiales que sean designados por las nuevas autoridades” (Amigó, 2002)

A pesar de la declaración del ministro, la población se concentra en las adyacencias del Palacio de Gobierno, exigiendo el retorno del presidente, produciéndose numerosas protestas violentas que dejaron un saldo de al menos 50 fallecidos.

Ante la presión de los chavistas y militares leales, Carmona Estanga dimite de su cargo, y Diosdado Cabello, vicepresidente de la administración de Chávez, asume la presidencia hasta que en la madrugada del 14 Chávez retorna al Palacio, con todo su tren ministerial. A su regreso, acusa a los Estados Unidos de Norteamérica, partidos opositores, medios de comunicación y empresarios de ser los partícipes del golpe de estado.

En diciembre de 2002 los partidos de oposición, Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), promueven otra huelga general que dura más de dos meses, e incluye la paralización de la principal industria del país, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La paralización de la industria fue catalogada desde el gobierno como un sabotaje petrolero. Fuentes oficiales, a través del portal <www.pdvsa.com> afirman que “el paro trajo como consecuencia una disminución abrupta de las principales actividades económicas del país y secuelas tanto para la corporación como para la sociedad venezolana” impactando de manera directa a los sectores sociopolíticos polarizados inmersos en continuas acciones de protesta.

En el segundo semestre de 2003 el sector opositor continúa en la pugna por alcanzar espacios de poder y toma de decisiones, ahora a través de mecanismos democráticos, activando los recursos provistos en la Constitución, sobre la aplicación de un referéndum revocatorio al presidente. El Artículo 72 de la Constitución establece que una vez “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, se podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato”. De esta manera para junio de 2004 se emprende la fase preparatoria para el

referéndum que es realizado el 15 de agosto de 2004, dando como resultado la permanencia de Hugo Chávez en la presidencia.

En 2005 se realizan las elecciones legislativas y el bloque de partidos de oposición decide no participar, como un mecanismo para deslegitimar el proceso eleccionario. Sin embargo, la consulta se realiza y los seguidores del presidente asumen los 167 puestos de la Asamblea Nacional. Es en este punto donde la lucha hegemónica por el poder favorece plenamente al chavismo, que concentra los principales espacios políticos y sociales. Decretando la construcción del nuevo paradigma para ejercer la democracia, el Socialismo del Siglo XXI⁷. A pesar de que el sector oficialista conserva el control de los principales centros de poder, las corrientes contrarias, aunque disminuidas, persisten en constante movimiento. Intentando retomar los espacios que mantuvieron durante el periodo puntofijista, denominado también Cuarta República.

La concentración del poder es reafirmada en 2006, con las elecciones presidenciales, en las que Hugo Chávez, contando con el apoyo de más de 20 partidos políticos, es reelegido con más de 60% de los votos para el período 2007-2012. Antes de finalizar el año, el presidente determina la creación de un partido único para congregar a los grupos políticos y fuerzas que lo mantienen en el poder, y así nace el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)⁸.

Para 2007, el ejecutivo propone un proyecto de reforma a la Constitución, y hace un referéndum popular para su aprobación. La forma en que es presentada la propuesta, de manera vertical, autoritaria, carente de discusión en las bases del PSUV y otros partidos minoritarios aliados, desencadena el primer revés electoral para el gobierno. Ya que la movilización de partidos de oposición y el descontento de

7 El presidente Hugo Chávez anunció que impulsaría el desarrollo de algo que denominó "Socialismo del Siglo XXI" el 30 de enero de 2005, en Porto Alegre, ante el V Foro Social Mundial. Su concepto todavía está en construcción, a pesar de ser la bandera del ejecutivo en la conducción del país. Desde el alto gobierno se proponen algunos elementos que pudieran definir la estructura del Socialismo del Siglo XXI: a) La moral. Debemos recuperar el sentido ético de la vida; b) La democracia participativa. Hay que centrar todo en el pueblo, el partido debe estar subordinado al pueblo; c) Igualdad conjugada con la libertad. Una sociedad de incluidos, de iguales, sin privilegios; d) Cooperativismo y asociativismo. Se está poniendo en marcha un ensayo de empresas de producción social y unidades de producción comunitaria.

8 El 15 de diciembre de 2006 el presidente resaltó que el tema más importante a abordar en el país es el socialismo. La construcción de un modelo socialista endógeno y la conformación de un partido único, al cual denominó Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Afirmando que "la revolución requiere de la creación de un partido unitario, totalmente opuesto a la sugerencia de un frente amplio". (Prensa presidencial, 2006). Luego de los trámites ante el poder electoral el 10 de octubre 2007 se constituye el partido con la juramentación de 14.145 voceros y voceras, provenientes de todo el país.

un sector chavista crítico negaron la posibilidad de reformar la Carta Magna. Sin embargo, es un triunfo efímero para la oposición, que tiene sus causas en la relación de fuerzas internas del grupo político dominante, y no en la fuerza de la dirigencia del sector opositor.

Con la reelección de Chávez en 2006 y el nacimiento del PSUV, existe un minúsculo contrapeso en la toma de decisiones y gestión pública. Desde el ejecutivo se emprende un proceso de nacionalización de industrias básicas calificadas como estratégicas para el desarrollo del país. Por otra parte, se decretan leyes que respaldan la visión gubernamental sobre la geopolítica y soberanía del Estado, desde los niveles básicos de producción con impulso del desarrollo endógeno del poder comunal⁹. Un ejemplo de ello es la promulgación de la Ley para el Fomento de la Economía Popular en 2008, que afecta de manera directa a diversos sectores productivos del país. Consolidando la figura de Empresas de Producción Social (EPS)¹⁰, con la que el Estado puede declarar de su propiedad a sectores empresariales privados.

La aplicación de procesos administrativos legales a distintos medios de información venezolanos, acusados de formar parte de un proceso conspirativo proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica, caracteriza el discurso del chavismo al final de la década. Desde 2007 se abre un abanico controlador sobre los medios de comunicación e información venezolanos. Alegando la necesidad de soberanía del espectro radioeléctrico en el territorio nacional, progresivamente va cancelando concesiones de transmisión a distintos medios. A pesar del costo político, la imagen internacional del gobierno y la vulneración a la libertad de expresión, 34 emisoras de radio y canales de televisión, de gran audiencia, finalizan sus transmisiones por disposición gubernamental, al no ser renovado el permiso para su funcionamiento. La afectación a la libertad de expresión, icono de la democracia, se da independientemente de que los medios de comunicación formen parte de grupos económicos críticos al gobierno. Aun si tomamos en cuenta que los usuarios tienen el derecho a elegir cual medio de difusión sintonizar, en cualquier país los medios están al servicio de grupos

9 El poder comunal se refiere al empoderamiento de los sectores populares organizados, constituyendo las bases de un nuevo poder del Estado venezolano, el Poder Popular.

10 Son "Empresas de Producción Social las entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado y auténtico, no existe discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios en el trabajo asociados a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificación participativa y protagónica y bajo régimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinación de ambas" (PDVSA, 2009).

económicos de poder, incluyendo a los gobiernos, y el caso venezolano no es la excepción. Lo relevante para este análisis es evidenciar cómo, dentro de la correlación de fuerzas internas, el Estado radicaliza sus medidas contra los oponentes, sin tomar en cuenta la opinión o las necesidades reales de los ciudadanos.

De esta manera, como se dijo en las líneas previas, la concentración de poder y verticalidad caracteriza los últimos 4 años de la década. En 2008 se realizan las elecciones para elegir a los mandatarios regionales, y el partido de gobierno gana 17 de las 22 gobernaciones en disputa y más del 80% de los municipios, graficando el mapa de Venezuela con el color rojo, que identifica al chavismo.

En este contexto, y con un resultado que cohesionó a sus seguidores, el presidente propuso hacer un referéndum nacional, en febrero de 2009, con el fin de aplicar una enmienda a la Constitución, y de esta manera tener la posibilidad de ser reelegido para un tercer período de gobierno, ya que la Carta Magna venezolana sólo permite la reelección inmediata por un período adicional. De esta manera, a comienzos de 2009, se desarrolla la campaña a favor y en contra de la propuesta de gobierno, y el 15 de febrero se realiza el referéndum para aprobar o rechazar la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución. La enmienda fue rechazada por los sectores opositores al gobierno, argumentando que se estaría sustentando jurídicamente la permanencia de una misma persona en la presidencia, contradiciendo el principio de alternabilidad propuesto en los sistemas democráticos. Por otra parte, desde el ejecutivo nacional se justificaba afirmando que la enmienda fortalecería los derechos políticos de los ciudadanos, al darles la posibilidad de elegir a sus gobernantes las veces que sean requeridas, y en el caso de la presidencia, no sería una elección vitalicia, sino una posibilidad de que el presidente de turno pueda participar en continuas elecciones populares.

Los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), certifican un 54,85% de los votos para la opción del SI favorable a la enmienda. La opción del NO, opuesta a la enmienda, obtiene un 45,14% de los votos, ratificando el triunfo de la propuesta presidencial.

La reforma a la Constitución se presenta a los 10 años del proceso revolucionario, liderado por el presidente Chávez, denominado Socialismo del Siglo XXI, traduciéndose en una oportunidad para la actual administración de continuar en el poder y confirmando la tesis del establecimiento de un solo bloque o grupo que, sin ser dictatorial, establece los rumbos del país con fuertes rasgos de autoritarismo. A continuación se presenta una tabla con datos relevantes sobre el proceso participativo y democrático del periodo en estudio:

Tabla 1

Principales elecciones presidenciales y referéndum consultivos realizados en Venezuela 1998 - 2009

Elecciones presidenciales			
Fecha	Candidatos principales	Votos (%)	
diciembre 1998	Hugo Rafael Chávez Frías	62, 45	
	Enrique Salas Römer	31,46	
	Irene Sáez	4, 60	
julio 2000	Hugo Rafael Chávez Frías	59,72	
	Francisco Arias Cárdenas	37, 52	
	Claudio Fermín	2,72	
diciembre 2006	Hugo Rafael Chávez Frías	62,84	
	Manuel Rosales	36,9	
	Luis Reyes	0,04	
Referéndum Consultivos			
Fecha	Pregunta	Respuesta	Votos (%)
Referéndum consultivo de la Constitución abril 1999	¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?	Si	81, 74
		No	12,75
Referéndum aprobatorio de la Constitución diciembre 1999	¿Aprueba usted La Constitución elaborada por la Asamblea General Constituyente?	Si	71,78
		No	28,22
Referéndum presidencial 15 de agosto de 2004	¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial?	Si	59,1
		No	40,64
Referéndum reforma Constitucional diciembre 2007	¿Aprueba usted el proyecto de Reforma Constitucional con sus Títulos, Capítulos, Disposiciones Transitorias, Derogatoria y Final, presentado en dos bloques y sancionado por la Asamblea Nacional, con la participación del pueblo y con base en la iniciativa del Presidente Hugo Chávez?	Resultados para el bloque A	
		Si	44,29
		No	50,70
		Resultados para el Bloque B	
Si	48,94		
No	51,05		
Referéndum aprobatorio de la enmienda constitucional febrero de 2009	¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo, con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo, por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección, exclusivamente, del voto popular?	Si	54,85
		No	45,14

Fuente: Elaboración propia con datos del CNE

MOVIMIENTOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN Y PROTESTAS EN LA DÉCADA

La concentración de poder, icono del puntofijismo o democracia representativa, incentivó la aparición de grupos y movimientos sociales de base que se congregaron o plegaron al movimiento revolucionario propuesto por el presidente Chávez surgido a finales de la década de los noventa.

Aunque siempre existió en Venezuela un proceso organizativo como el cooperativismo, sindicatos y organizaciones de trabajadores¹¹, movimientos estudiantiles, campesinos y organizaciones no gubernamentales (ONG); es en la década más reciente y con el chavismo que ocurre una explosión en la organización y articulación de la comunidad. Dando desde el Ejecutivo rango constitucional a la organización y participación popular en los principales sectores productivos del país¹².

Sobre la participación en Venezuela Cilano y Córdova (2009) proponen que en “los últimos 20 años, el estudio y desarrollo práctico de la participación ciudadana atraviesa por dos modelos esenciales”: el primero vinculado a la democracia representativa y el segundo a “las experiencias que se han desarrollado en el marco [...] de la Constitución Nacional de 1999, y en lo que se ha denominado por parte del gobierno Revolución Socialista”.

Antes de la llegada de Chávez al poder los grupos comunitarios se venían concentrando en Círculos Bolivarianos¹³. Pero es a partir del 2000 cuando se perfilan expresiones organizativas inclusivas como las Mesas Técnicas de Agua¹⁴, Comités de Tie-

11 Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Unión Nacional de Trabajadores (UNETE)

12 Artículo 18 de la Constitución: “reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos”

13 Los Círculos Bolivarianos, son grupos organizados, conformados por el pueblo en un número variable que puede oscilar entre 7 y 11 personas, las cuales se reúnen para discutir los problemas de su comunidad y canalizarlos a través del organismo competente, para buscar su pronta solución. En <www.gobiernoonlinea.ve.>, 2009

14 Es la organización de una comunidad para gestionar junto a las empresas del Estado el servicio de agua, desde fallas en el suministro, botes de agua potable o de aguas servidas, filtraciones, problemas de recaudación, hasta la implantación de red de tuberías, entre otras actividades.

rras¹⁵, y en los últimos años las cooperativas¹⁶. Dando máximo nivel de representatividad y legitimidad a la administración de gobierno, bajo la consigna de democracia representativa participativa y protagónica, al menos en los sectores de estratos sociales bajos, que son la mayoría del país.

Desde el ejecutivo se respalda la consolidación de grupos organizados, que en gran medida son propuestos por el propio gobierno, incluyéndolos en el ordenamiento jurídico nacional¹⁷. Convocando las principales fuerzas sociales en los denominados Consejos Comunales, con los que se busca estructurar a la población en elementos organizados con la capacidad técnica y jurídica para hacer contraloría a los entes de gobierno.

Con la aparición de estos grupos se presenta un fenómeno particular, y es que el proceso asociativo se da en la mayoría de los casos por la presencia de entes del Estado, más que por voluntad o iniciativa de las bases. Ya que la figura del Consejo Comunal es indispensable para la ejecución de los proyectos de gobierno en todo el territorio nacional, principalmente los de infraestructura y servicios públicos básicos, y progresivamente en las áreas agrícola e industrial. A pesar de esta situación no se deslegitima el proceso, al contrario, adquiere mayor fuerza al contar estos grupos con presupuestos y partidas económicas propias para que la comunidad ejecute sus obras.

Los movimientos sociales agrupados en los Consejos Comunales participan en todas las misiones creadas por el gobierno bolivariano¹⁸, motorizando los lineamientos expuestos en estas políticas

15 Comunidad organizada en comités para regularizar la titularidad y tenencia de las tierras donde habitan o tienen alguna producción agraria.

16 La Cooperativa es una empresa de producción, obtención, consumo o crédito de participación libre y democrática, conformada por personas que persiguen un objetivo en común económico y social en donde la participación de cada socio, en el beneficio, es determinado por el trabajo incorporado al objetivo común y no por la cantidad de dinero que haya aportado. A diferencia de las compañías anónimas, es una sociedad de personas, no de capitales. Se fundamenta en la igualdad de derechos de sus integrantes en cuanto a la gestión social. Además, las cooperativas reparten sus excedentes o ganancias en función de la actividad realizada por sus asociados en el logro del propósito común. En cambio, en una empresa mercantil, la ganancia se distribuye entre los socios de manera proporcional al capital económico. (Sunacoop, 2009)

17 Por ejemplo con la promulgación de la Ley de Cooperativas y un Ministerio de las Comunas, configurando lo que desde el alto gobierno se denomina el poder comunal, como máxima expresión del socialismo.

18 El Artículo 14 de la propuesta de reforma constitucional de 2007 expone que las misiones están "constituidas por organizaciones de variada naturaleza, creadas para atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la po-

sociales en el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar¹⁹; configurando una de las principales características de los movimientos sociales en estos últimos 5 años, organizados en Consejos Comunales y ejecutando las misiones sociales en conjunto con las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

La articulación de los movimientos sociales con las misiones fue investigada exhaustivamente por D'Elia, en 2008, destacando que las misiones más importantes eran las relacionadas con los servicios de salud "Misión Barrio Adentro" y con el acceso a los alimentos "Misión Mercal"²⁰.

En la década han sido numerosos los actores sociales que han participado en la lucha de fuerzas para formar parte del poder, para conservarlo o para que sus demandas de necesidades básicas sean atendidas. Con el empoderamiento de la colectividad, como se expuso en las líneas previas, se desarrolla un proceso mediante el cual la comunidad intenta ejercer el llamado poder comunal y con ello contraría a los entes públicos.

A partir de la mitad de la década las instancias gubernamentales se encuentran observadas progresivamente por los Consejos Comunales, grupos de base y opositores al gobierno. Este período se caracteriza por un nivel bajo de respuesta satisfactoria a las demandas por derechos sociales y políticos, en todos los sectores, pero principalmente en el laboral y el de servicios básicos públicos. Ante la ausencia de respuestas efectivas se producen diferentes protestas sociales, teniendo como principales actores a vecinos, trabajadores, estudiantes y grupos opositores al gobierno. En la Tabla 2 se puede observar la fluctuación en el número de manifestaciones por año.

blación, cuya prestación exige de la aplicación de sistemas excepcionales, e incluso experimentales, los cuales serán establecidos por el ejecutivo mediante reglamentos organizativos y funcionales".

19 Es el primer Plan Socialista, que establece las líneas generales de Desarrollo Económico y Social 2007-2013. Este plan, no tiene carácter de Ley, pero a nivel político se le da mucha importancia. Los proyectos de las instituciones del Estado se enmarcan en sus líneas para alcanzar la suprema felicidad social, la nueva ética socialista de democracia protagónica revolucionaria, con un modelo productivo socialista. Se puede acceder al Plan en < www.mpd.gob.ve/Nuevo-plan/PROYECTO-NACIONAL-SIMON-BOLIVAR.pdf. > .

20 El trabajo de D'Elia publicado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales puede ser consultado en < <http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/PolycymisionesYolanda.pdf> > .

Tabla 2
Protestas 1998-2009

Período	Acciones de protesta	Promedio diario
98-99	855	2,34
99-00	1.414	3,87
00-01	1.312	3,59
01-02	1.262	3,46
02-03	1.543	4,23
03-04	1.255	3,44
04-05	1.534	4,20
05-06	1.383	3,79
06-07	1.576	4,32
07-08	1.763	4,83
08-09	2.893	7,92
Total	16.790	4.18

Fuente: Informe anual de Provea, octubre 2008-septiembre 2009

Según los datos publicados por organizaciones de derechos humanos venezolanas, en los últimos tres años se han presentado los registros más altos de protestas desde 1999, incluso superando abiertamente el año más conflictivo como fue el 2002 (ver Tabla 2), que involucró grandes protestas, paros, huelgas, en el marco de una polarización social extrema²¹. Los datos más relevantes los ofrece la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), que anualmente realiza un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y donde se analiza desde hace 20 años el derecho a la manifestación pacífica. Con base en los registros expuestos por esta ONG, se presenta un panorama que ilustra el desarrollo de las luchas populares, sus repertorios, actores, principales demandas y la respuesta que les da el Estado. A modo de ejemplo, y centrándonos principalmente en elementos cualitativos, exponemos algunos datos sobre las luchas populares, sus actores y repertorios, en los últimos dos años del período en estudio. Cada año puede ser analizado con detenimiento en los informes anuales de PROVEA²². (Ver Tablas 3 y 4).

21 De octubre 2008 a septiembre 2009 se registraron 2.893 protestas, el número más alto en la gestión del presidente Chávez (PROVEA, 2009: 295).

22 Los informes de Provea pueden ser descargados completamente en el sitio <www.derechos.org.ve>.

Tabla 3
Política de calle y principales actores. Octubre 2008- Septiembre 2009

Actores	Acciones de Protesta	Pacíficas		Violentas	
		subtotal	%	subtotal	%
Trabajadores	989 (34,18%)	984	99,94	5	0,6
Vecinos	762 (26,33%)	753	98,81	9	1,18
Estudiantes	370 (12,78%)	333	90	37	10
Transportistas y choferes	159 (5,49%)	159	100	0	0
Otros	613 (21,18%)	593	96,73	20	3,26
Total	2.893	2.822	97,54	71	2,45

Fuente: Informe anual de Provea, octubre 2008-septiembre 2009

Tabla 4
La protesta de calle y su repertorio Octubre 2008- Septiembre 2009

Repertorio	Acciones de protesta	Pacíficas		Violentas	
		subtotal	%	subtotal	%
Cierre de calle y avenida	1.012 (34,98%)	981	93,85	31	3,06
Concentración	959 (33,14%)	941	98,48	18	1,87
Marcha	262 (9,05%)	262	100	0	0
Paro	214 (7,39%)	214	100	0	0
Toma de establecimiento	146 (5,04%)	134	95,76	12	8,21
Otros	300 (10,36%)	290	98,05	10	3,33
Total	2.893	2.822	97,54	71	2,45

Fuente: Informe anual de Provea, octubre 2008-septiembre 2009.

En un levantamiento de información realizado por las ONG Espacio Público y PROVEA durante todo el 2009²³, se asegura que las principales exigencias están relacionadas con derechos laborales, servicios básicos, educación y seguridad ciudadana. Dirigidas esencialmente

23 En la investigación presentada por Espacio Público y PROVEA se afirma que de enero a diciembre de 2009 se registraron 3.297 manifestaciones. Se puede acceder en < <http://www.espaciopublico.info/index.php> > .

a los gobiernos regionales, municipales y nacional. En Venezuela, las manifestaciones por derechos políticos, a favor y en contra del gobierno, son las más visibilizadas por los medios de comunicación, enmarcadas en el panorama de confrontación entre medios oficiales y privados. Sin embargo, la frecuencia real de manifestaciones por exigencias políticas es baja, ubicándose en un séptimo lugar de la presente tabla:

Tabla 5: Principales exigencias durante 2009

Derecho	Total	%
Derecho laboral	1.187	36,00
Servicios básicos	477	14,47
Derecho a la educación	312	9,46
Seguridad Ciudadana	211	6,40
Justicia	183	5,55
Demandas civiles	155	4,70
Demandas políticas	143	4,34
Otras	629	19,07
Total	3.297	100,00

Fuente: Espacio Público-Provea

En el mismo estudio se “constata que la mayoría de las movilizaciones en el país se desarrollan de manera pacífica. El 97.24 % de las protestas son de carácter pacífico. Sólo 2.76% de las protestas presentaron características violentas”.

Como se expuso en el ítem dedicado a los hechos representativos de la década, la centralización de poder se ha convertido en un problema para el proceso de contraloría social, evidenciando un atraso en la política progresista de poder comunal y constituyendo un gobierno sin contrapeso en el ejercicio de la gestión pública, que cataloga a quienes protestan como enemigos del proceso revolucionario o integrantes de grupos conspirativos financiados por el imperio norteamericano. Con tales acepciones se intenta deslegitimar las luchas populares democráticas y las exigencias de diversos movimientos sociales.

Adicionalmente a la descalificación de quienes salen a demandar derechos, se registra en los últimos años una marcada represión a manifestantes, estas prácticas poco democráticas están ausentes o presentan índices muy bajos en los primeros años de la década. (Ver Tabla 6).

Tabla 6
Protestas reprimidas 1999-2009

Período	Acciones de protesta	Porcentaje de reprimidas
99-00	1.263	4,27
00-01	1.169	3,59
01-02	1.141	3,94
02-03	1.243	2,81
03-04	1.037	2,98
04-05	1.417	1,27
05-06	1.280	4,53
06-07	1.521	6,44
07-08	1.763	4,70
08-09	2.893	6,62

Fuente: Elaboración propia con datos de Informe anual de PROVEA, octubre 1999-septiembre 2009.

En Venezuela el derecho a la manifestación está consagrado en el Artículo 68 de la Constitución²⁴. Sin embargo, a partir de la mitad de la década se ha sancionado y aplicado un conjunto de leyes discordantes con la Constitución, con las que se criminaliza a quienes intentan hacer contraloría social y exigir sus derechos a través de la protesta pacífica. Un ejemplo de ello es la penalización de los cierres de calle, entre otras formas de lucha. Si bien, la posibilidad de abrir o cerrar una calle no es un componente del derecho humano a la manifestación pacífica, en Venezuela salir a la calle es la expresión de protesta más utilizada por manifestantes durante la presente década, reivindica un espacio histórico de lucha social para la comunidad. (Ver Tabla 4)

Algunas leyes indican que se debe solicitar un permiso para ejercer este derecho humano, otras establecen zonas de seguridad para la nación, principalmente en las industrias básicas, prohibiendo y penalizando concentraciones, paros o huelgas. Incluso se han sancionado leyes con las que se puede acusar de terrorismo a los trabajadores que paralicen sus actividades²⁵.

24 Artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otro requisito que los que establezca la ley”.

25 Para soportar tal afirmación exponemos algunas leyes que atentan contra el derecho a la protesta pacífica: Artículo 51 de la Ley de Transporte Terrestre. Artículos 24, 25 y 26 de la Ley Especial en Defensa Popular Contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios. Artículo 56 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Artículos 218, 250, 283, 286, 296, 357, 360, 471 y 506 del Código Penal.

De esta manera, el movimiento de derechos humanos venezolano, denunció en 2009 que en los últimos 4 años en el país existen más de 2.200 personas con antecedentes penales, bajo juicio, con medidas sustitutivas de libertad o en prisión, por ejercer su derecho humano a la manifestación²⁶.

Evidenciando una contradicción y retroceso abismal para el proceso revolucionario, que nació con las bases populares, que ahora demandan atención y el cumplimiento de promesas electorales y las leyes.

A pesar de la progresiva criminalización de las luchas populares, y la falta de respuesta a las demandas de la comunidad, es paradójico, dado que la gestión de gobierno mantiene altos índices de aceptación, y no existe ningún grupo político, económico o social con la capacidad para desplazarlo en el plano democrático y participativo.

Como se mencionó en los párrafos iniciales, Venezuela experimenta, en la década, un fenómeno sociopolítico único, que a simple vista podría considerarse contradictorio o extraordinario, si se compara con otros países de la región. Sin embargo, y basándonos en datos de los procesos electorales, por ejemplo, la respuesta a ese fenómeno difícil de entender, la podríamos encontrar en el carisma y liderazgo del presidente Chávez, triunfador en todas las consultas para la máxima instancia de poder, que simboliza la garantía de la continuidad del proyecto de gobierno.

El proceso bolivariano representa la ruptura con viejos esquemas capitalistas de dominación extranjera que caracterizaron la bonanza petrolera durante los últimos 40 años. Esta condición fortalece al chavismo frente a todos los grupos opositores, carentes de credibilidad y aceptación en la mayoría de la población. Finalizando los últimos años de este período 2000-2009, a lo externo, como un icono de lucha antiimperialista para los países de la región, y a lo interno, con la figura de Chávez como el principal protagonista y eje medular en la correlación de fuerzas y lucha por el poder en la Venezuela socialista del siglo XXI.

SIGLAS

AD	Acción Democrática
CCRS	Centrales Cooperativas Regionales
CNE	Consejo Nacional Electoral
CNATEL	Comisión Nacional de Telecomunicaciones

26 La cifra fue aportada por el movimiento de derechos humanos venezolano que en el mes de agosto de 2009 inició una campaña denominada “protestar no es un delito, es un derecho”. Se puede obtener más información sobre esta campaña en <<http://protestarnoesundelito.blogspot.com>>.

COPEI	Comité de Organización Política Electoral Independiente
CORTEIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CTV	Confederación de Trabajadores de Venezuela
EPS	Empresas de Producción Social
FEDECÁMARAS	Federación de Cámaras Empresariales
FETRABANCA	Federación de Trabajadores Bancarios
IIDH	Instituto Interamericano de Derechos Humanos
ONG	Organización No Gubernamental
PSUV	Partido Socialista Unido de Venezuela
PDVSA	Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
PIB	Producto Interno Bruto
PROVEA	Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
RCTV	Radio Caracas Televisión
SUNACOOP	Superintendencia Nacional de Cooperativas
UNETE	Unión Nacional de Trabajadores
URD	Unión Republicana Democrática

BIBLIOGRAFÍA

- ABN “Presidente llama a conformar el Partido Socialista Unido de Venezuela” en <http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=106327> consultado el 10 de octubre de 2009.
- Amigó, Valentín Arenas 2002 “Análisis del anuncio de Lucas R. “Chávez, un presidente de facto” en <<http://www.analitica.com/va/politica/opinion/4117749.asp>> consultado el 12 de septiembre de 2009.
- Arconada, Santiago 2006 “Mesas Técnicas de Agua y Consejos Comunitarios de Agua” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas: FACES) N° 3.
- Cilano Peláez, Johanna; Córdova Jaimes, Edgar y Chaguaceda, Armando 2009 “Participación ciudadana y reforma del Estado en Venezuela: entender la política a través del ciudadano” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 26, octubre.
- Collier, D (1985) *Nuevo Autoritarismo en América Latina* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Colectivo de Autores 2009 *Estudio cuantitativo de opinión sobre los Consejos Comunales* (Caracas: Centro Gumilla del Observatorio de Participación y Convivencia Social de Venezuela).
- CNE “Referéndums y elecciones en Venezuela 1998-2009” en <<http://www.cne.gov.ve>> consultado el 12 de septiembre de 2009.
- CORTEIDH 2002 “Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y Costas)” en <<http://>

- www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf>
consultado el 12 de septiembre de 2009.
- D'Elia, Yolanda y Cabezas, Luis 2008 *“Las misiones sociales en Venezuela”* (Caracas: Ildis).
- Gobierno en línea “Círculos Bolivarianos” en <<http://www.gobiernoenlinea.ve/cartelera/CirculosBolivarianos.html>>
consultado el 12 de septiembre de 2009.
- Gramsci, Antonio 1995 *Selections from the Prison Notebooks* (Nueva York: Internacional Publishers).
- Harnecker, Marta 2008 *Gobiernos comunitarios. Municipio Libertador, Estado Carabobo, Venezuela* (Caracas: Centro Internacional Miranda/Monte Ávila Editores).
- Hidrocapital 2009 “Mesa técnica de agua” en <http://www.hidrocapital.com.ve/index.asp?spg_id=9>.
- IIDH 2009 “Diccionario” en <http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/autoritarismo.htm>
consultado el 18 de octubre de 2009.
- Lander, Edgardo 2002 “El papel del gobierno de EEUU en el golpe de Estado contra el presidente Chávez” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 7, junio.
- Lander, Edgardo 2007 “El Estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 22, septiembre.
- López, Margarita 2003 “La protesta popular venezolana entonces y ahora: ¿cambios en la política de la calle?” en <http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-97572003000100009&lng=es&nrm=iso> consultado el 18 de octubre de 2009.
- López, Margarita 2006 *Del viernes negro al referendo revocatorio* (Caracas: Alfadil).
- MINCI “Comités de tierras urbanas” en <http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/10099> consultado el 18 de octubre de 2009.
- MINPADES 2006 “Consejos Comunales Base del Poder Popular, ¡Construir El Poder Desde Abajo!” en <http://gp.cnti.ve/site/minpades.gob.ve/view/Consejos_Comunales.php> consultado el 18 de octubre de 2009.
- Parker, Dick 2002 “Debilidades en la conducción política del proceso también facilitaron el golpe” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 7, junio.
- PDVSA 2009 “El sabotaje contra la industria petrolera nacional” en <http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuhist.tpl.html&newsid_obj_id=119&newsid_temas=13>
consultado el 18 de octubre de 2009.

- PDVSA 2009 “Qué son las Empresas de Producción Social “en <www.pdvsa.com> consultado el 10 de octubre de 2009.
- PROVEA 2009 *Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informes anuales octubre 1998-septiembre 2009* (Caracas: Provea).
- SUNACCOOP 2009 “Cooperativas” en <<http://www.sunacoop.gob.ve/contenido.php?id=205>> consultado el 12 de septiembre de 2009.
- SUNACCOOP 2009 “Cooperativas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” en <<http://www.sunacoop.gob.ve/contenido.php?id=213> > consultado el 12 de septiembre de 2009.
- SUNACCOOP “Historia de las cooperativas” en <<http://www.sunacoop.gob.ve/contenido.php?id=211>> consultado el 12 de septiembre de 2009.
- Uzcátegui, Rafael 2006 “Consejos Comunales: Autonomía y Movimientos Sociales” en *Venezuela Analítica* en <www.analitica.com> consultado el 15 de septiembre de 2009.

QUINTÍN RIQUELME*

PARAGUAY: NUEVO ESCENARIO PARA VIEJOS CONFLICTOS

INTRODUCCIÓN

El Paraguay, desde su conformación como Estado-nación, pasó por procesos sociopolíticos y económicos diametralmente opuestos. De 1811 a 1870, tuvo dos gobiernos, uno caracterizado como propio de un Estado autocrático popular (Galeano, 2010), y el otro como propio de un Estado mercantilista. En lo económico, el primero de 1813 a 1840 impuso una clara política de desarrollo hacia adentro, el segundo, de 1840 a 1870, una paulatina apertura a la economía regional y mundial. Estas experiencias autonómicas de relativa estabilidad tanto política como económica, fueron truncadas con la guerra conocida como de la Triple Alianza –Brasil, Argentina y Uruguay en contra de Paraguay, de 1865 a 1870–, en la que se produce la “ruptura definitiva de un modelo de crecimiento económico que significaba en la época la base para una formidable expansión capitalista” (Herken y Jiménez, 1983).

Con la finalización de la guerra en 1870 se instaura en el país la República liberal, con la cual se dio comienzo a otro proceso también bastante uniforme, pero absolutamente opuesto al anterior. Du-

* Investigador del Centro de Documentación y Estudios (CDE).

rante el período que comienza en la década citada, se sucedieron en la administración del Estado gobiernos controlados por los vencedores, Argentina y Brasil, y posteriormente por dos partidos políticos, el Colorado y el Liberal, ambos fundados hacia finales del siglo XIX y de la misma orientación político-ideológica, la liberal. El Partido Colorado gobernó el país desde su fundación en 1887 hasta 1904, año en que fue desplazado por el Partido Liberal con un golpe de Estado. El Partido Liberal gobernó desde 1904 hasta 1940, con un pequeño intervalo en el año 1936-37. En febrero de 1936 fue desplazado por un militar, el coronel Rafael Franco, quien dio origen posteriormente a la fundación del Partido Febrerista, de orientación más popular. En junio de 1937 retoma el poder el Partido Liberal con otro golpe de Estado, hasta 1940. Del 40 al 47, gobierna un militar sin mostrar afinidad por uno u otro partido, hasta que en 1947 se instala en el poder el Partido Colorado, después de una cruenta guerra civil entre colorados y liberales y otros partidos, ganada por el primero de los sectores nombrados. Esta guerra civil duró 7 meses y significó la muerte y el exilio de miles de paraguayos. Los colorados administraron el Estado paraguayo desde entonces y hasta el 2008, año en que fueron desplazados por la coalición Alianza Patriótica para el Cambio, que postuló a la presidencia de la República al ex obispo Fernando Lugo, actual presidente de la República. Fernando Lugo es el primer presidente opositor que logró llegar a la primera magistratura a través de las urnas; en todos los casos anteriores, los cambios fueron con golpes de Estado.

A partir de esta breve contextualización se podría afirmar que son dos los hechos históricos relevantes que podrían explicar los conflictos sociales en Paraguay:

Primero: la instauración de la república liberal en 1870. Con este cambio, el Paraguay se incorpora al proceso capitalista mundial aportando su recurso más importante, la tierra, vendida masivamente a los enclaves agroforestales de la época y a los dueños de grandes capitales. Según Cueva, “en Paraguay, la guerra de 1870 fue el medio que facilitó su incorporación al proceso de acumulación originaria en la que la propiedad precapitalista estaba resguardada por un sólido sector estatal y en donde las condiciones internas todavía no habían madurado lo suficiente como para que aquel proceso pudiera efectuarse por la sola respuesta endógena a los requerimientos procedentes del exterior” (Cueva, 1977). La masiva venta de las tierras propiedad del Estado dio origen a uno de los conflictos de más larga data en la historia del país, la lucha por el acceso a la tierra.

Segundo: el autoritarismo en el ejercicio del poder. Esta práctica que durante años imperó en la política paraguaya, excluyó a la

mayoría de la población de la participación política y social y en lo económico significó la ampliación de la brecha entre ricos y pobres. Sin embargo, y a pesar de este autoritarismo, la participación de los diferentes actores sociales en el proceso político y social del país tuvo momentos de auge y de declive, dependiendo de las circunstancias sociopolíticas y de las modalidades organizativas predominantes en cada etapa de dicho proceso. La capacidad de respuesta de los actores y las conquistas logradas estuvieron estrechamente vinculadas con la postura asumida por los actores políticos en función del poder y por el nivel de organización de los actores sociales.

La participación podría ser caracterizada dentro de dos grandes modalidades:

Por un lado: formas de participación de los actores sociales colectivos caracterizadas por su escasa proyección social y política. Son solidaridades limitadas y carentes de un proyecto político de cambio social. En este ámbito, la participación tiene un carácter mutualista y localista, lo que implica que no hay cuestionamiento a las estructuras de opresión y mucho menos búsqueda de cambio de las mismas. En respuesta a esta situación, la población desarrolla una gama de prácticas participativas que van desde las relaciones informales de cooperación individuales o interfamiliares, hasta formas de cooperación comunitarias más amplias como las distintas actividades, pro-caminos, puentes, escuelas, campos de deportes, oratorios, puestos de salud, etc. Estas formas de cooperación y de participación que responden a necesidades sentidas de la población eran las predominantes hasta la década de los años ochenta, en la que el control político ejercido por la dictadura obstaculizaba toda forma de participación independiente de la estructura de poder que implicara un potencial peligro al orden impuesto por ella. Uno de los momentos en que esos límites fueron sobrepasados se dio con las Ligas Agrarias que, desafiando el control ejercido por la dictadura, fueron extendiendo su área de influencia a espacios territoriales cada vez más amplios y ocupando también espacios públicos reservados a ciertos sectores como la Iglesia, los partidos políticos tradicionales, etc., lo que les valió la fuerte represión en los años 1975 y 1976.

Lo anterior no implica que esta modalidad de participación haya desaparecido con la caída de la dictadura y apertura política en 1989, sino que la misma se ha desarrollado en un ambiente de mayor libertad, y la posibilidad de reclamar más participación a los gobiernos locales, departamentales y nacionales se ha acrecentado notoriamente. Obviamente, con la apertura política en febrero de 1989, los espacios de participación se ampliaron, pero, una amplia mayoría de la población continúa sin aprovechar en su real dimensión la conquista de

esos espacios por la pervivencia de la vieja cultura de la dependencia y la obediencia. Se ha notado, sin embargo, un avance significativo.

En segundo lugar: formas de participación de los actores sociales colectivos caracterizadas por un mayor nivel de proyección política y social. En esta modalidad de participación los actores colectivos no sólo cuestionan las injusticias estructurales, sino se constituyen en actores políticos de cambios. Esta forma de participación se dio con mayor énfasis desde la apertura política en Paraguay.

En general, se puede afirmar que la participación de los actores sociales, y por lo tanto de los conflictos sociales, fue creciendo y se observa un paso importante de una participación de tipo más comunitarista, pre-política, a una participación más amplia, de tipo más política, en la medida en que los actores sociales comienzan a cuestionar y a reclamar cambios sociales, económicos y políticos cada vez más profundos. Esto no significa que la tendencia pueda ser generalizada, aún perviven importantes segmentos de la población que sufren las consecuencias de la larga opresión política, lo cual se refleja en su comportamiento a la hora de las definiciones políticas (Baireiro *et al.*, 2004)

En el marco de este contexto caracterizado muy brevemente, se desarrollaron los conflictos sociales en Paraguay, cuya dinámica estaba en directa relación con los intereses en pugna.

CRISIS POLÍTICA Y ECONÓMICA MARCA EL INICIO DEL TERCER MILENIO

La década del 2000 marca un hito importante de los conflictos sociales en Paraguay. El proceso se inicia con el llamado “Marzo Paraguayo” (1999) en el que se produjo un levantamiento ciudadano contra el presidente de la República Raúl Cubas Grau (1998-1999), por el asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, lo que obligó al Congreso a desplazarlo del gobierno con un juicio político. Cubas Grau pertenecía a un movimiento interno del Partido Colorado, denominado Unión Nacional de Colorados Éticos (UNACE), liderado por el ex general Lino César Oviedo. Durante los sucesos del Marzo Paraguayo la participación de las organizaciones sociales fue fundamental. Por un lado, la muerte del vicepresidente coincide con la marcha anual de la Federación Nacional Campesina (FNC) que en un número aproximado a 15.000 manifestantes ocupó las plazas del Congreso, uniéndose a la convocatoria realizada por otras organizaciones sociales y políticas para repudiar el asesinato del vicepresidente. La convocatoria fue uniendo a casi todas las organizaciones sociales, políticas y ciudadanas. En esta jornada de repudio, murió el campesino de la FNC Cristóbal Espínola, quien

junto con otros siete jóvenes recibió disparos mortales de francotiradores fieles al gobierno depuesto.

El desplazamiento del presidente Raúl Cubas Grau dio oportunidad a la formación de un gobierno de unidad nacional, integrado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, menos el ala fascista del Partido Colorado liderado por Lino César Oviedo, presunto responsable de la masacre de jóvenes en la plaza. Asumió la presidencia de la República el entonces presidente del Congreso, Luis Ángel González Macchi (1999-2003).

Este gobierno, antes que buscar solución a la grave crisis –económica, política y social– por la que atravesaba el país, profundizó la corrupción y el prebendarismo, agravando aún más dicha crisis. Durante el gobierno de González Macchi se creó la Secretaría de la Reforma, con el objetivo de llevar adelante la privatización de los entes estatales, propósito desmantelado por las organizaciones campesinas y obreras, con el apoyo de sectores progresistas y movimientos y partidos políticos de izquierda.

El 2000 también fue un año de profundización de la crisis económica. Se concretó por tercer año consecutivo la recesión (1998/2000), algo sin precedente en la historia económica contemporánea del país, según el analista Pablo Herken. Este autor cita como principales razones: el manejo politizado, partidizado y electoralizado de la política económica en general y de la política cambiaria en particular; la falta de transformaciones de fondo o estructurales del Estado; caída del comercio de triangulación o reexportación; magro desempeño de la agricultura y caída del consumo interno, entre otras (Noticias, 2000). La reserva internacional cayó de 988,2 mil millones a 699 mil millones de dólares estadounidenses. El déficit de la balanza comercial llegó a 1.186,5 millones de dólares estadounidenses (ABC, 2000).

En lo político, el escenario de inestabilidad y de ingobernabilidad acrecentó la desesperanza y la incredulidad hacia el gobierno, los partidos políticos y los políticos en general, los cuales eran vistos por la población como los principales responsables del atraso, al priorizar sus intereses particulares sobre los generales.

En lo social hubo retroceso. El índice de desempleo subió al 17% de la PEA, aumentaron los índices de delincuencia e inseguridad. En el sector rural, la ausencia de una política agraria a favor de los pequeños productores postergó el desarrollo de la economía campesina e incrementó el fenómeno migratorio campo-ciudad. La no aprobación de un nuevo Código Agrario, así como la falta de un catastro rural, generaron innumerables conflictos por la tenencia de la tierra. Desde entonces la lucha por la tierra cobró mayor intensidad, alcanzando su pico más alto en el año 2004 con 149 conflictos, 75 ocupaciones y

1.400 detenciones. Las dos principales causas que provocaron la intensificación de los conflictos fueron la concentración de la tierra y la expansión de la producción sojera.

El gobierno que asumió en agosto de 2003, logró estabilizar la economía, repuntó el crecimiento económico con el incremento de la producción de soja y los buenos precios internacionales de la carne y de los cereales en general. Este crecimiento, sin embargo, no se revirtió en mejores condiciones de vida de la población en general, la riqueza generada por estos dos rubros fue concentrada por un grupo muy pequeño.

CASOS RELEVANTES DE CONFLICTOS SOCIALES

LA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN ARTICULA A ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

El conflicto de mayor impacto político y económico ocurrido en los primeros años de la década del 2000 fue el generado por el Estado que, en su propósito de privatizar algunas empresas estatales, encontró una férrea oposición en los movimientos sociales y políticos, que logró movilizar a numerosas organizaciones durante 16 días.

La propuesta de privatización de las empresas del Estado desde el año 2000, había generado malestar en el seno de las organizaciones campesinas y sindicales, las cuales, desde un principio, manifestaban una postura contraria a la enajenación de estas empresas. A las protestas de campesinos y obreros, se sumaron posteriormente otras organizaciones sociales, movimientos políticos y estudiantiles preocupados por la inminente venta de estas empresas del Estado. Esta inquietud llevó a la conformación del Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, integrado por organizaciones campesinas, sindicales, sin techos y movimientos políticos progresistas. Otro frente fue la Plenaria Popular contra el Terrorismo de Estado, creado a raíz del secuestro por policías de dos dirigentes del Partido Patria Libre; acusados supuestamente del secuestro de la esposa de un empresario. En este frente se articularon también organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, indígenas y movimientos políticos de izquierda.

El proceso de privatización en curso, así como el peligro inminente de revivir el terrorismo de Estado en el país, convocaron a las dos organizaciones de reciente formación a discutir estrategias de acciones conjuntas para hacer frente a la ofensiva del gobierno en los dos temas señalados. De esta unión surgió el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), que tomó la decisión de iniciar las acciones contra la ley de privatización y contra otros proyectos de ley en proceso de

estudio en el Parlamento en mayo y junio de 2002. Los proyectos en estudio eran:

1. La Ley 1.615 que habilita la privatización de las empresas del Estado
2. El proyecto de Reforma de la Banca Pública
3. El proyecto de Ley Antiterrorista
4. El proyecto de Ley de Concesión de Rutas;
5. El proyecto de Ley del IVA agropecuario

Las movilizaciones comenzaron el 21 de mayo con bloqueos de las más importantes carreteras del país en varios departamentos: Caaguazú, en tres localidades; Misiones, en dos; San Pedro, en tres; Cordillera, en dos; Alto Paraná, Concepción, Caazapá, Itapúa y Canindeyú. Las protestas duraron 16 días, tiempo en el cual los manifestantes lograron que el gobierno retirara del Congreso todos los proyectos de ley.

El asesinato en la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú) del manifestante campesino Calixto Cabral, oriundo del distrito de Nueva Germania (San Pedro), por policías que bloqueaban el paso a los manifestantes, aceleró la negociación en la Cámara de Senadores para la suspensión de los estudios de los proyectos.

El logro obtenido por el Congreso Democrático del Pueblo acaparó la atención de la prensa y de la ciudadanía en general. Detener la privatización de las empresas públicas fue un acontecimiento histórico, habida cuenta de la tendencia generalizada en América Latina de aplicación de las recetas neoliberales. En esta encrucijada, el campesinado fue el actor que mayor protagonismo tuvo. Uno de los dirigentes campesinos señaló entre otras cosas que la “privatización como punto fuerte del modelo neoliberal globalizador se está empezando a desarrollar en nuestro país, dentro de un marco de otros varios programas económicos y financieros como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la ley supranacional que se impone a los países y que va a estar por sobre las leyes nacionales, es decir, ellos ya tienen estructurada una serie de medidas que están encaminando, de fases que están quemando dentro de las cuales está también la privatización y que sigue bajo la subordinación de los centros de poder, las órdenes vienen del norte. Entonces creemos que el tema acá no es sólo la venta de una empresa como la de comunicación (ANTELCO), ese es sólo un punto de los reclamos, estamos en contra del modelo que nos quieren imponer” (IC, 2002: 6).

Esta visión clara de los dirigentes que estuvieron al frente de la movilización de lo que constituye la privatización de las empresas públicas como uno de los núcleos centrales del modelo económico

neoliberal fue un factor clave de aglutinamiento de todas las organizaciones sociales y políticas. Otros factores que contribuyeron a acelerar el proceso de negociación fueron la debilidad del gobierno y el discurso ambiguo de los principales referentes del Partido Colorado con respecto a la privatización. Teniendo en cuenta su alto porcentaje de electorado cautivo en estas empresas estatales, privatizarlas implicaría la fuga de dicho electorado.

Otro hecho relevante de esta larga jornada de protesta fue el reencontro de las organizaciones campesinas: la Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización Nacional Campesina (ONAC) y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MC-NOC), que se habían separado en bloques diferentes en el año 1998.

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL CAMPO

La lucha por el acceso a la tierra

La lucha por el acceso a la tierra en el Paraguay es un fenómeno que se remonta al último cuarto del siglo XIX, cuando la población paraguaya mayoritariamente campesina e indígena se vio acorralada por los nuevos latifundios, resultado de la venta masiva de tierras a capitales extranjeros. Las primeras denuncias de problemas de tierra comenzaron desde la década de 1880 y hasta hoy sigue siendo el mayor generador de conflictos sociales en el país. El acceso a la tierra, de esta manera, se constituyó en una de las demandas históricas del campesinado.

Como es de conocimiento, la lucha por la tierra es la lucha por la reforma agraria, que en América Latina comenzó a tener vigencia desde principios del siglo XX. Si bien no fue un proceso uniforme, estuvo condicionado por posicionamientos político-ideológicos y contextos diferenciados y tuvo, sin embargo, la particularidad de generar políticas estatales destinadas a la redistribución de tierras concentradas en grandes latifundios. Hoy, la reforma agraria ya no es sólo una acción institucional del Estado, o de los gobiernos exclusivamente, sino de movimientos y organizaciones campesinas e indígenas que la asumen como una construcción colectiva enmarcada en la lucha por la soberanía alimentaria y la defensa de los recursos naturales. Desde esta redefinición, la reforma agraria pasa a convertirse en un objetivo de lucha no exclusivo de sectores sociales rurales, sino en una lucha por la transformación no sólo del modelo agrícola sino también del propio modelo económico de los países del continente (Ledesma, 2006).

En Paraguay, el concepto de reforma agraria fue incorporado en la legislación agraria en la década del treinta, en el Decreto Ley N°

1.060 promulgado como Ley por el Congreso en 1936. Posteriormente, en el año 1940 se promulga el primer Estatuto Agrario, que recoge y amplía las leyes agrarias existentes hasta entonces. En la década siguiente, en 1951, se cambia el Departamento de Tierras y Colonización por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y en 1963 se crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y se promulga otro Estatuto Agrario (Pastore, 1972), que estuvo vigente hasta el año 2002. En el 2002 aparece un nuevo Estatuto Agrario y en el 2004 se crea el organismo de aplicación que es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra (INDERT).

Desde entonces la reforma agraria pasó a formar parte del discurso y de la estrategia de los gobiernos pero sin llegar jamás a consolidarse como una política que transformara la estructura territorial y buscara el desarrollo económico y social de la población rural. Su vigencia tuvo más sombras que luces, en teoría pregonaba la eliminación gradual del minifundio y del latifundio; sin embargo, a siete décadas de su aparición, la concentración de la tierra sigue aumentando, al igual que el minifundio, lo que coloca a las organizaciones campesinas frente al uso de estrategias fuera del marco legal como mecanismos de presión para acceder a dicho recurso. Los datos oficiales proveídos por los censos agropecuarios realizados en diferentes décadas –1921, 1944, 1956, 1981, 1991 y 2008– confirman la creciente concentración de la tierra en el país. Las tierras distribuidas a las familias campesinas en el marco de la “reforma agraria”, poco tiempo después pasaron de nuevo a engrosar los latifundios por el escaso apoyo estatal. En la práctica, la reforma agraria se convirtió en un instrumento a favor de intereses de los sectores cercanos al poder, los ganaderos y grandes productores, altos funcionarios estatales y de las fuerzas públicas.

La desigual distribución del recurso tierra, que históricamente tienen los países, se ha visto fuertemente agravada en los últimos años: a) por un proceso de modernización tecnológica excluyente derivado de los cambios en la comercialización y del negocio agropecuario internacional que promueven la concentración; b) por la falta de políticas sostenidas en el tiempo, que faciliten el acceso al recurso de la tierra pero también a otros recursos clave; y c) por un proceso de extranjerización creciente dado por la abundante disponibilidad de recursos naturales a un bajo costo relativo que hace atractiva la inversión de multinacionales en la región (Voces del Sur, 2006).

De esta manera, en Paraguay la ocupación de la tierra es el principal mecanismo que utiliza el movimiento campesino para acceder a ella. El Estado, obligado por estas ocupaciones, ha debido tomar decisiones y llegó a desafectar algunos latifundios para la creación de

nuevas colonias agrícolas, aunque insuficientes para la cantidad de *sin tierras* que existen en el país. En términos cuantitativos el promedio de conflictos por el acceso a la tierra en Paraguay es de 50 por año aproximadamente.

La lucha por la tierra al mismo tiempo supuso un costo muy alto a los/as protagonistas, pagado en vidas humanas y en imputaciones penales y encarcelamientos. Se estima que alrededor de 3.500 campesinos/as que participaron en movilizaciones y ocupaciones están judicializados/as desde el 2004 y más de 100 campesinos/as fueron asesinados/as desde 1989, por policías y civiles armados. En lo que va del gobierno Lugo, 7 campesinos fueron asesinados por policías y guardias privados de latifundistas.

A partir de estos datos, se puede afirmar que la lucha por la tierra seguirá siendo uno de los puntos de mayor tensión en la relación entre las organizaciones campesinas, de mujeres campesinas e indígenas con los gobiernos si estos no cambian su política que históricamente favoreció los intereses de la oligarquía que monopoliza la tierra.

La lucha contra el agronegocio

El modelo agroexportador en Paraguay, se impuso desde comienzos de 1970 y se afianza cada vez más, con fuerte apoyo estatal, con lo cual la agresión a las comunidades campesinas e indígenas y en particular a las organizaciones campesinas que denuncian su impacto negativo, va en aumento.

En este sentido, desde que se impuso este modelo de producción, varios casos de intoxicación y muertes fueron denunciados, pero la mayoría de ellos quedó en la impunidad por desidia de las autoridades y por la protección que reciben de fiscales, policías y jueces. Los casos más relevantes fueron los de la colonia Pirapey, departamento de Itapúa, en el que dos familias campesinas sufrieron intoxicación con productos químicos utilizados por un agricultor en la fumigación de un sojal ubicado en las cercanías de sus casas. Un niño de 11 años, Silvino Talavera, falleció en enero de 2003 y otros siete pequeños y dos adultos sufrieron intoxicaciones severas. La muerte del menor se registró en el centro de salud de la ciudad de Encarnación, capital departamental de Itapúa, hasta donde fue trasladado luego de haber recibido atención médica en un puesto de salud cercano a su domicilio. El informe médico dice que la causa del fallecimiento sería una intoxicación. Éste es el único caso en que los responsables, dos productores brasileños, fueron sentenciados a dos años de prisión, por haber sido encontrados culpables del hecho. La condena de los responsables se logró después de años de presión, no sólo por parte de familiares sino de varias organizaciones sociales y el apoyo

de la ciudadanía. De lo contrario hubiese terminado como tantos otros, en la impunidad.

Tres años después, el tío de Silvino, Serapio Villasboa, de 35 años y padre de 6 hijos, fue asesinado. Se sospecha que el asesinato fue por ser el hermano de Petrona Villasboa, madre de Silvino y miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), que entonces ya llevaba 3 años de lucha por conseguir justicia respecto a la muerte de su hijo Silvino.

Serapio Villasboa Cabrera desapareció el día 28 de abril de 2006 y su cuerpo fue encontrado sin vida el 8 de mayo en el interior de un monte, aproximadamente a 400 metros de su domicilio. Según la autopsia realizada, Serapio fue asesinado brutalmente el mismo día de su desaparición con 11 puñaladas, dejándosele en su cuerpo clavado el puñal con el que lo mataron.

Otro caso violento, relacionado al modelo agroexportador sojero, ocurrió en la colonia Tekojoja, distrito de Vaquería, Caaguazú. El 24 de junio del 2005 se produjo el asesinato de dos campesinos miembros del Movimiento Agrario Popular (MAP), organización que reclamaba la recuperación de varios lotes que irregularmente estaban en poder de productores de soja. El crimen fue ejecutado por colonos brasileños armados al mando del productor sojero Adimir Aloisio Oppermann. Fueron asesinados Ángel Cristaldo (20 años) y Leoncio Torres (49 años) y resultó herido también otro joven de la organización. Un testigo clave, el antropólogo canadiense Andrés Craig, que presenció la balacera y tomó fotografías de los hechos, ayudó posteriormente a esclarecer el crimen.

El delito ocurrió tras un desalojo ejecutado sin orden de juez competente, llevado a cabo por la fiscal Nelly Varela. Una hora después de que ella se retirara del lugar, los grupos armados al mando de Oppermann, echaron a los ocupantes y quemaron sus viviendas, ante la mirada atenta de los oficiales de policía destacados en el lugar. Así también, tuvieron total libertad para realizar los disparos, que no eran intimidatorios, o para defenderse, como declararon luego, sino a matar.

La fiscal fue acusada por el senador José Nicolás Morínigo, “por negligencia en ejercicio y producir desalojo de campesinos sin orden judicial”, se procedió a un sumario en el que la fiscal resultó procesada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Sólo después de todos estos procedimientos ella emplazó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDERT) para que en 24 horas le presentase los informes que antes jamás pidió.

Estos crímenes, que cobraron resonancia en los medios de comunicación, llamaron la atención de algunos sectores políticos, de organizaciones sociales y de derechos humanos, quienes emitieron co-

municados denunciando la situación caótica que se vive en el campo con el avance desmedido de la soja. También se constituyó el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida, un espacio de unidad de diferentes sectores populares creado con el objetivo de defender los bienes nacionales que pertenecen al pueblo y exigir al gobierno la reactivación económica y productiva del país. Este frente realizó en el año 2004 la mayor ocupación de tierras en el país, con el objetivo de recuperar algunos de los grandes latifundios y frenar la expansión de la siembra de soja, 104 ocupaciones en el mes de noviembre, lo que obligó al gobierno a utilizar las fuerzas armadas para reprimir estas ocupaciones.

La violencia estructural en contra de quienes no pueden ejercer sus derechos elementales y hacia quienes buscan ejercerlos, es una espiral que puede no tener fin cuando las condiciones materiales imposibilitan el desarrollo de una vida digna. Estas condiciones han empeorado en el país, pues con la expansión del monocultivo el espacio por donde transita la vida de una amplia mayoría de la población campesina se estrecha cada vez más. Las tierras de cultivo se achican, de acuerdo al censo agropecuario 2008, 271.701 productores de menos de 100 hectáreas cuentan con una superficie total de 2.419.667 hectáreas, mientras la soja cubre un total de 2.463.510 hectáreas. Por otra parte, los asentamientos campesinos antiguos y nuevos además de estar abandonados a un desarrollo vegetativo por falta de apoyo, reciben fuertes presiones de empresarios ganaderos y sojeros para abandonar sus tierras. La política económica y social de los gobiernos durante la década del 2000 continúa sin contar con un plan coherente; por un lado mantiene el equilibrio de poder de grupos privilegiados y, por otro, reprime los reclamos de sectores populares que puedan producir desequilibrios en la estructura socioeconómica vigente.

Se puede temer que la continuidad de este sistema y el celo con que las instituciones buscan evitar el resquebrajamiento de esta estructura de poder, conduzcan indefectiblemente a una mayor violencia, porque no queda otra alternativa.

Las violaciones a los derechos humanos de los/as campesinos/as en el Paraguay ocurren a diario. En estas violaciones están implicados el gobierno, la policía, las fiscalías, el sector privado y la sociedad en su conjunto al aceptar tan pasivamente que los crímenes contra campesinos sigan cometiéndose en el Paraguay, por reclamar derechos contemplados en las leyes del país. Estos crímenes son consecuencia de un sistema político económico que no reconoce al sector campesino como sujeto de derecho político, económico y social e interviene en consecuencia.

LUCHA CONTRA EL ALCA

Organizaciones sociales ratifican su desacuerdo con el ALCA

El proyecto del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 2005, fue duramente criticado y resistido por las organizaciones campesinas, obreras y otras organizaciones sociales y políticas en Paraguay. De acuerdo a los plazos establecidos, el convenio del ALCA se debía haber firmado en diciembre del año 2004 y a partir de enero del 2005 hasta diciembre de ese año los parlamentarios de los países debían estudiar la propuesta para aprobarla o rechazarla. Como es sabido, en toda América, incluyendo a Paraguay, existieron voces que cuestionaban este proyecto que se discutía solamente a nivel gubernamental. Los y las representantes de diversos sectores como el de los/as campesinos/as, trabajadores/as, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, no estaban representados/as en las mesas de negociaciones y no tenían participación alguna en las discusiones. Se buscó imponer un acuerdo que defendía intereses muy ajenos a los sectores sociales y que encierra riesgos de exclusión para aquellos países como Paraguay que no están adecuadamente preparados para las fuertes demandas de competitividad propias de acuerdos de libre comercio como éste.

Felizmente, desde el inicio de las negociaciones, el Paraguay ha tomado parte no de manera individual, sino que lo ha hecho como parte integrante del MERCOSUR, que desde el año 2000 tomó la decisión, como parte de una política externa, de que todas las negociaciones serán realizadas de manera conjunta, o sea, ningún país del MERCOSUR en particular puede negociar de manera individual proyectos que afecten al bloque (Scappini, 2003).

En Paraguay, en torno a este tema se articularon alrededor de 20 organizaciones que, con debates públicos, campañas de información y movilizaciones presionaban al gobierno para que no firmara el referido acuerdo. Para estas organizaciones, era claro que con el supuesto libre mercado, lo que se buscaba era monopolizar el control monetario, controlar el mercado; además de imponer un control militar y jurídico. La mayor oposición fue de las organizaciones de pequeños productores, movimientos sociales y pequeños industriales, debido a que están golpeados todos los días por esta política. A cambio, estos sectores plantearon un modelo de desarrollo alternativo basado en los intereses nacionales y en la soberanía nacional. El proyecto ALCA fue derrotado definitivamente durante la cumbre de presidentes, realizada en Mar del Plata, Argentina, en el año 2005.

YCUÁ BOLAÑOS: LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA PREPOTENCIA

El incendio del supermercado Ycuá Bolaños, ocurrido el domingo 1 de agosto de 2004 en la ciudad de Asunción, es la tragedia civil más grande sucedida en Paraguay. El domingo 1° de agosto de 2004, aproximadamente a las 11:25 (hora local) se produjeron explosiones al interior del recinto comercial que albergaba, entre varias cosas, el supermercado, un estacionamiento para vehículos, oficinas comerciales y un restaurante, produciéndose un gigantesco incendio.

Según informes de la Policía Nacional, al momento de producirse el accidente, los guardias de seguridad cerraron las puertas del recinto para evitar que las personas, que colmaban el centro comercial, escaparan con bienes que no hubieran pagado. Como resultado 396 personas murieron (la mitad de ellas niños/as), quedando más de 500 con heridas de diversa consideración, incluyendo a 56 personas con quemaduras de tercer grado.

El juicio seguido contra el dueño de la cadena, Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel Paiva y el guardia Daniel Areco, culminó en primera instancia el 5 de diciembre de 2006, cuando el tribunal, con los votos de dos de sus tres jueces, los condenó como responsables de “homicidio culposo” con una pena de 5 años de prisión, en vez de los 25 años que solicitaban los querellantes y la fiscalía como autores del delito de “homicidio doloso agravado”. Esta decisión provocó graves incidentes cuando las víctimas saltaron de sus asientos y tiraron las sillas contra los jueces, interrumpiéndose la lectura de la sentencia. Este hecho ha sido argumentado por diversas instancias judiciales y por querellantes para sostener que en este juicio no hubo sentencia, puesto que no se leyó completamente la decisión de los jueces y el proceso quedó interrumpido antes de su conclusión.

La Corte Suprema de Justicia admitió esta tesis al rechazar los recursos de inconstitucionalidad contra la resolución que apartó de la causa a los jueces, Helio Ovelar y Manuel Aguirre –quienes estuvieron a favor de calificar el hecho como homicidio culposo, no así la jueza Dody Báez, que estimó que el hecho configuraba un homicidio doloso–, sosteniendo que no existió arbitrariedad ni violación a las garantías constitucionales. Dicha resolución de la Corte Suprema de Justicia dio vía libre para la realización de un nuevo juicio.

El juicio volvió a iniciarse el 31 de agosto de 2007, continuando los debates sobre el tipo de homicidio provocado durante la tragedia. Debido a un incidente previo planteado por la defensa, el tribunal de sentencia determinó, finalmente, que se estaba llevando un nuevo juicio que no puede entenderse como un doble juzgamiento ya que el anterior juicio quedó nulo por no haber concluido.

El 7 de septiembre del mismo año, Víctor Daniel Paiva recuperó la libertad, pero con restricciones impuestas. Ante ello, las organizaciones de apoyo a las víctimas del incendio se manifestaron en contra de dicha medida, tanto en la sede del Poder Judicial, como frente al único local que aún pertenece a la cadena Ycuá Bolaños. El 10 de septiembre de 2007, Juan Pío Paiva recuperó la libertad. Las víctimas continuaron manifestándose en contra de estas medidas.

El 9 de enero de 2008 el Tribunal de Sentencia dio por terminado el debate del juicio y dispuso el inicio de las deliberaciones sobre el caso. Finalmente el Tribunal determinó que los acusados principales, Víctor Daniel Paiva, Juan Pío Paiva y Daniel Areco, eran culpables de “homicidio doloso simple” por dolo eventual, “homicidio doloso en grado de tentativa agravada” y “exposición de personas a lugares de trabajo peligroso” (los dos primeros delitos relacionados jurídicamente y el tercero en referencia a las condiciones del edificio siniestrado), lo cual significaba una pena de 5 a 15 años de prisión según el Código Penal de Paraguay. Las penas establecidas por los jueces fueron de 2, 6 y 12 años, para los principales responsables. La decisión del tribunal fue apelada por la defensa de los condenados, pasando así la causa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó el fallo del tribunal, ratificando las condenas.

El caso Ycuá Bolaños es un ejemplo paradigmático de la sostenida lucha por lograr el objetivo, emprendida por las víctimas de la tragedia. Tuvieron que pasar cinco años para que los responsables recibieran castigo. Esta victoria parcial de las víctimas es resultado de la presión y la perseverancia de los familiares, las víctimas y de la ciudadanía que los acompañó; de ninguna manera puede ser catalogada como un triunfo de la institución judicial, que buscó por todos los medios posibles dejar sin efecto esta causa y lograr la impunidad de los responsables.

EL FIN DE LA ERA COLORADA EN EL PODER

El domingo 20 de abril de 2008 se realizaron elecciones generales en el Paraguay, en las cuales se produjo un hecho histórico relevante en la vida política del país: la caída del Partido Colorado tras 61 años en el poder. El triunfo de Fernando Lugo, candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) se concretó con el 40,8% de los votos, seguido por la candidata del Partido Colorado Blanca Ovelar, con el 30,7 % y en tercer lugar el ex general Lino Oviedo, con el 21,9% de los sufragios. El resto del porcentaje electoral quedó dividido entre cuatro pequeños partidos políticos, votos en blanco y nulos. La participación fue del 65%, un poco más de 1 millón 800 mil electores, de un total de 2 millones 800 mil empadronados.

Un hecho resaltante es que el candidato electo que derrocó al Partido Colorado es un ex obispo de la iglesia católica. Fernando Lugo fue ordenado obispo el 17 de abril de 1994 y asignado a la diócesis de San Pedro, una de las regiones más pobres del país, donde se destacó por su apoyo a los campesinos sin tierra en unos momentos de fuerte conflictividad rural. Era considerado un representante de la iglesia progresista paraguaya.

En el 2005 renuncia al obispado y pasa a ser obispo emérito de la Diócesis de San Pedro. En marzo de 2006 impulsó la organización Resistencia Ciudadana, que agrupó a los principales partidos políticos de la oposición, las cinco centrales sindicales y varias organizaciones y asociaciones civiles del Paraguay. En marzo de 2006, organizó una marcha de protesta contra el presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, quien había violado la Constitución Nacional al proclamarse presidente del Partido Colorado; en esta marcha logró convocar a más de 40.000 personas. También lideró la creación de un movimiento de concertación nacional con el objetivo de derrocar al Partido Colorado del poder. Posteriormente presentó su renuncia al ministerio sacerdotal y episcopal, con lo cual anunció oficialmente su ingreso a la política con miras a las elecciones generales de 2008.

El 18 de septiembre de 2007, la mayoría de los partidos y movimientos políticos y las organizaciones sociales de la Concertación Nacional (CN) constituyeron formalmente la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) con los movimientos y partidos del Bloque Social y Popular (BSP), para propugnar la candidatura de Fernando Lugo a presidente de la República del Paraguay y la de un candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para vicepresidente en las elecciones generales de 2008. Esta es la síntesis de la meteórica carrera política de Fernando Lugo, que en menos de dos años pudo articular a la mayoría de las fuerzas políticas y sociales de la oposición, así como a la ciudadanía, para vencer al Partido Colorado.

Desde las elecciones generales de abril pasado que dieron ganadora a la Alianza Patriótica para el Cambio, los diversos sectores sociales comenzaron a movilizarse para hacerse sentir. Los funcionarios públicos presionan por la firma de contratos colectivos, la formación de sindicatos y la afiliación masiva a los sindicatos ya existentes. Otro hecho importante que se dio con este sector fue la masiva concurrencia de los funcionarios a las instituciones públicas, los eternos “plañilleros” se vieron obligados a concurrir a sus oficinas, de las cuales muchos de ellos carecían o no contaban con escritorios, sillas, etcétera. Es que en la administración anterior no necesitaban recurrir a sus oficinas, bastaba con mostrar sus credenciales de colorados y estar al servicio de alguna seccional colorada para no ser molestados.

Otro sector que estuvo muy activo fue el de los sin tierra, que protagonizó ocupaciones de tierra en varios departamentos del país. Los sin tierra, acompañados de sus organizaciones, comenzaron las ocupaciones con el propósito de colocar a la reforma agraria como prioridad en la agenda del nuevo gobierno. Posteriormente a las múltiples ocupaciones, declararon una tregua para que el presidente electo tenga la posibilidad de armar su gabinete sin muchas presiones.

Los ganaderos y los sojeros, por su parte, que utilizaban agresivos discursos en contra de las insinuaciones de cambios, moderaron sus discursos después del 20 de abril, a la espera de interlocutores con el nuevo gobierno.

También las organizaciones de sin techos, varias de las cuales respondían directamente al Partido Colorado y trabajaron por la candidata oficialista, tuvieron que adecuarse al cambio, se reciclaron y posteriormente formaron una coordinadora única de sin techos con la finalidad de trabajar por una propuesta de construcción de viviendas populares para todo el país.

Los estudiantes que pelean por el boleto estudiantil y por una educación gratuita y de calidad, también estuvieron muy activos, cerrando calles en reclamo de sus demandas.

Algunas organizaciones de mujeres rurales también realizaron movilizaciones reclamando Reforma Agraria Integral y mayor atención a la salud materno-infantil. Igualmente, redes de organizaciones de mujeres se pronunciaron a favor del nombramiento de mujeres en altos cargos de decisión y pidieron políticas integrales y transversales de igualdad de género. Cabe resaltar la conquista de las mujeres al lograr incorporar a las trabajadoras del hogar en el Seguro Social Estatal.

Los indígenas reclamaron su derecho a la tierra y otros servicios básicos, además de solicitar al presidente electo que la dirección del Instituto Nacional del Indígena (INDI) sea ocupada por referentes indígenas.

Estas movidas de los sectores sociales tuvieron, por un lado, el propósito de conservar e incluso aumentar conquistas ya logradas. Es el caso de los y las trabajadores del Estado, que tenían el paraguas del Partido Colorado para conseguir sus reivindicaciones y mantenerse en sus puestos de trabajo, y que con el cambio de gobierno se vieron obligados a recurrir a sus organizaciones naturales para la defensa de sus intereses como trabajadores. Por otro lado, los sectores históricamente excluidos de los favores estatales, presionan por sus demandas y exigen sean incorporadas en la agenda del nuevo gobierno.

La lucha política por ganar espacios de poder fue otra característica al interior del nuevo gobierno. El presidente Lugo, desde los

inicios de su gestión, está siendo presionado por los partidos y movimientos que forman parte de la Alianza Patriótica para el Cambio por cupos de poder. Estas presiones surtieron efecto, no necesariamente en la dirección que parte importante de la ciudadanía deseaba y esperaba, pues las nominaciones en algunos cargos importantes no fueron resultado de un proceso de selección de los más idóneos sino del *cuoteo* político. Los partidos apelaron a su caudal electoral para reclamar cupos y muchos de los cargos fueron ocupados por personas que no gozaban de la confianza de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que apoyó el cambio.

El nuevo proceso político que vive el país, como es sabido, no fue resultado de la constitución de una fuerza social y política importante, sino de la aparición de una figura aglutinante que logró capitalizar el desgaste, el quiebre institucional y el desprestigio de los eternos gobernantes. Esto explica las dificultades que tiene el actual gobierno para la implementación de sus planes de gobierno. La derecha, que tiene sus exponentes en el Punace, en la ANR y en un sector del PLRA, comienza a poner trabas, amenazar con juicio político al presidente y en el caso del PLRA a exigir mayor cuota de poder a cambio de concesiones. Este hecho será probablemente la constante en todo el mandato del Presidente Lugo.

El hecho resaltante en estas elecciones fue la fragmentación de la izquierda, la cual quedó al margen de los cargos electivos, (Parlamento y Juntas Departamentales) por su incapacidad de lograr consensos a la hora de seleccionar a sus candidatos, pese a que, a diferencia de otras elecciones, obtuvo una buena participación. Con este panorama, Lugo se verá obligado a una negociación permanente con los partidos políticos que no necesariamente tienen como prioridad temas centrales de su campaña como la Reforma Agraria, el combate a la corrupción, etcétera. Los diversos sectores sociales y políticos esperan que la corrupción, la impunidad y la represión a los sectores sociales que demandan sus derechos, sean desterradas definitivamente. Que la Reforma Agraria se haga realidad por el bien de los miles de campesinos sin tierra y de los productores que trabajan en pequeñas fincas. Que la equidad y la igualdad de género sean incorporadas en los programas de las diferentes instituciones; que la industria repunte para la generación de puestos de trabajo, en fin, que la recuperación de la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos fundamentales sean la prioridad.

El gobierno, como era de esperar, está lidiando con intereses contrapuestos de terratenientes que piden seguridad jurídica; empresarios que piden reforma del Estado; campesinos que piden reforma agraria; empleados públicos que piden estabilidad y beneficios laborales; es-

tudiantes que piden educación gratuita y de calidad, reforma universitaria y boleto estudiantil; desocupados, oferta de empleo decente; y, los excluidos, programas sociales sin clientelismo, salud, educación y otros servicios básicos.

Todos los sectores esperan que mejoren las condiciones económicas y sociales. El drama es el de los presupuestos que, además de ser deficitarios, destinan gran parte de lo que se recauda a gastos corrientes. A esto se agrega la baja presión tributaria, apenas el 12%, la más baja en América Latina. Si bien en Paraguay se habla de un gigantismo estatal, en realidad el Estado existe solamente en las grandes ciudades; los municipios pequeños y las comunidades que conforman estos municipios carecen de los elementales servicios como salud, agua potable, vivienda, educación, etcétera.

Con reclamos diversos y contradictorios al Estado, el mecanismo de presión que afrontarán el Estado y el gobierno será, fundamentalmente, la protesta en sus diferentes modalidades.

CONSIDERACIONES FINALES

Durante la década del 2000, los movimientos sociales obtuvieron triunfos importantes pero también reveses, que explican las contradicciones del proceso social y político del país. Sin duda, el movimiento social fue el actor que protagonizó las luchas sociales y políticas más relevantes, logró avances cualitativos importantes al pasar de demandas puntuales a demandas más generales y a la constitución de frentes sociales populares y movimientos y partidos políticos, lo que le ha permitido incursionar en la esfera política y pelear por espacios en la estructura de poder. Sin embargo, la debilidad es aún patente, el movimiento social no pudo articularse en torno a propuestas electorales unificadas, en lo económico no ha generado propuestas o programas de desarrollo alternativos al vigente en la actualidad y en lo social la atomización sigue predominando. Es la principal razón por la cual los espacios institucionales, llámense parlamento, juntas departamentales o municipales, siguen estando mayoritariamente en poder de partidos políticos conservadores, que mantienen el status quo y hacen que el modelo de desarrollo siga respondiendo a intereses de grupos de poder económicos y políticos.

En el año 1989, con la caída de la dictadura, las necesidades sociales y económicas eclosionaron en fuertes conflictos. El Estado, acostumbrado a la resolución de los conflictos con la represión, no pudo encontrar una salida institucional. Con el cambio en el 2008 ocurrió algo parecido, los conflictos aumentaron porque los sectores sociales que históricamente padecieron los defectos del Estado prebendario-clientelista creyeron que había llegado el momento de cam-

bios profundos, pero nuevamente el Estado se mostró incapaz de dar respuesta institucional a la crisis social. Al parecer, la vieja práctica no termina de desaparecer y la nueva no comienza, haciendo que la incertidumbre y la impaciencia comiencen a apoderarse con mayor fuerza sobre algunos actores sociales, como los sin tierras, los sin techos, los indígenas, etc., generándose múltiples conflictos sociales.

Se podría considerar la creación de los frentes sociales y populares como el avance más significativo del movimiento social en esta década. Éstos articulan a organizaciones campesinas, obreras, sin techos, indígenas, mujeres, pobladores, movimientos y partidos políticos progresistas y de izquierda. Su particularidad radica en que están integrados por los mismos actores, persiguen objetivos similares, sin embargo, son espacios paralelos que restan fuerza al movimiento popular en general. En algunas circunstancias se unen en acciones comunes, pero en otras se distancian, imposibilitando la generación de propuestas comunes y la posibilidad de presionar articuladamente por políticas públicas de mayor alcance. Esta situación de atomización, sin embargo, no ha dejado de ser una preocupación y en distintos momentos de la historia del país los movimientos sociales buscan articularse. En la actualidad una de esas articulaciones entre los movimientos sociales y políticos constituye el Espacio Unitario-Congreso Popular, donde convergen dos de los Frentes junto con movimientos y partidos políticos progresistas y de izquierdas.

Si analizamos los conflictos sociales claramente sobresalen la cuestión de la reforma agraria para el caso de los/as campesinos/as; viviendas o hábitat, en el caso de los sin techos; tierra y producción en el caso de los indígenas; salario y beneficios sociales en el caso de los docentes y trabajadores estatales en general; la igualdad y no discriminación en el caso de las mujeres y de los diversos grupos sociales.

Con relación a la participación del movimiento social en la conquista de sus derechos sociales y políticos, se ha podido verificar un avance significativo. En muchos casos, sus propuestas han sido reconocidas por el gobierno pero, la mayoría de las veces, ellas se convirtieron en promesas incumplidas por parte de las autoridades. Las organizaciones campesinas, por ejemplo, casi siempre son obligadas a recurrir a movilizaciones de protesta para que sus demandas sean escuchadas y sus propuestas sean implementadas. Lo mismo ocurre con los gremios obreros, quienes siguen reclamando condiciones mínimas como el cumplimiento de las 8 horas de jornada laboral o el pago de los beneficios sociales y el salario mínimo legal. Con relación a las organizaciones de mujeres e indígenas, el Estado sigue incumpliendo compromisos nacionales e internacionales en los casos de la violencia intrafamiliar, el trabajo de los/las menores y los derechos

de los/as indígenas sobre sus tierras ancestrales. De esta manera, las demandas sociales en la generalidad de los casos, transitan primero por el sendero de los conflictos para luego ser tenidos en cuenta. El aparato estatal o gubernamental se mueve en función de los conflictos que el movimiento social va generando, no a la inversa.

Una de las grandes paradojas del Estado en Paraguay es su aparente sobredimensionamiento, sin embargo, la presencia del Estado se reduce a un área geográfica muy limitada, Asunción y sus alrededores. El gobierno actual ha mejorado su presencia en el interior del país, pero la precariedad sigue siendo grande. La descentralización administrativa es aún muy parcial, razón por la cual los gobiernos departamentales son simples órganos burocráticos que recargan aún más el escuálido presupuesto del país.

El movimiento social en la actual coyuntura del país tiene un rol importante. Como corresponsable de impulsar el proceso de cambio político debe asumir desafíos y compromisos, pero la serie de contradicciones en el accionar del gobierno lo colocan frente a disyuntivas difíciles de sortear y le complica mantener una postura coherente con este proceso. Las demandas históricas siguen sin ser resueltas, por la debilidad del Estado, por la oposición de los sectores con poder económico, pero también por la fragmentación del movimiento social. El no aprovechamiento del nuevo proceso iniciado en abril de 2008 podría implicar el regreso a situaciones mucho más conflictivas y también más difíciles de revertir.

BIBLIOGRAFÍA

- Abc* 2000 (Asunción) 28 de diciembre.
- Araujo, Laudiceia 2006 *Voces del Sur* (Asunción) N° 1.
- Cueva, Agustín 1977 *El desarrollo del capitalismo en América Latina* (México DF: Siglo XXI).
- Galeano, Luis 2010 *La hegemonía de un Estado débil* (Asunción: CPES).
- Herken, Juan Carlos y Giménez de Herken, María Isabel 1983 *Gran Bretaña y la Guerra de la Triple Alianza* (Asunción: Editorial Arte Nuevo).
- IC* 2002 (Asunción) N° 164.
- Ledesma, Reinaldo 2006 "La Reforma Agraria en el Mercosur" en *Voces del Sur* (Asunción) N° 1.
- Noticias* 2000 (Asunción) 27 de diciembre.
- Pastore, Carlos 1972 *La lucha por la tierra en el Paraguay* (Montevideo: Antequera).
- Scappini, Marcelo, de la Cancillería Nacional, negociador por Paraguay del ALCA 2003 *IC* (Asunción) N° 178.

MASSIMO MODONESI*
LUCIO OLIVER**
FERNANDO MUNGUÍA GALEANA***
MARIANA LÓPEZ DE LA VEGA****

MÉXICO 2000-2009: UNA DÉCADA DE RESISTENCIA POPULAR

A DIFERENCIA DE OTROS PAÍSES de América Latina en los cuales la movilización civil y social muestra amplios márgenes de autonomía y en los que la acción colectiva ha desbordado los sistemas de partidos, creado crisis políticas y modificado radicalmente la correlación de fuerzas, en México la primera década del siglo XXI se ha caracterizado más bien por el crecimiento y la politización de la resistencia. Nos referimos al fortalecimiento de instancias de organización y movilización social cuyo valor no puede ocultar el rasgo defensivo que las definió en el contexto de una relativa estabilidad de las estructuras de dominación neoliberal. Antes de formular con mayor precisión este

* Profesor investigador de la UACM y Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Coordinador del Comité de Seguimiento del Conflicto Social México, OSAL. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.

** Coordinador del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y Profesor titular del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Coordinador del Comité de Seguimiento del Conflicto Social México, OSAL. Doctor en Sociología, UNAM.

*** Miembro del Comité de Seguimiento del Conflicto Social México, OSAL. Licenciado en Sociología por la UNAM.

**** Miembro del Comité de Seguimiento del Conflicto Social México, OSAL. Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.

balance agríndice o claroscuro, revisaremos las experiencias de movilización que caracterizaron la década, destacando el quiebre de 2006 como punto de inflexión fundamental para entender la acumulación de fuerzas populares y, al mismo tiempo, sus límites.

Del México de estos años son ampliamente conocidos dos movimientos socio-políticos que en la actualidad siguen siendo referentes políticos nacionales de las diversas expresiones sociales de resistencia popular: el zapatismo y el *obradorismo*. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde 1994 no ha dejado de ser un catalizador político de las resistencias y, en la última década, ha promovido una serie de movilizaciones ligadas tanto a la promoción legal de derechos como a la construcción *de facto* de la autonomía indígena así como, desde 2005, una iniciativa de alcance nacional –la *Otra Campaña*– orientada a articular las experiencias de resistencia más radicales –“abajo y a la izquierda”–, al margen del sistema de partidos y con una clara perspectiva anticapitalista.

Por otra parte, la novedad de la década fue el nacimiento del movimiento obradorista, entre 2005 y 2006, expresión masiva del rechazo al neoliberalismo y al autoritarismo en México, movimiento que creció, en particular, a partir de la resistencia al fraude electoral de 2006 contra la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La oleada de movilización en contra de la imposición de Felipe Calderón cristalizó en una “red de organizaciones y de ciudadanos” que respaldan al “Gobierno Legítimo”, encabezado por el excandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un frente de oposición social que, en algunas coyunturas importantes, ha mostrado ser un contrapeso frente a las políticas impulsadas por el gobierno federal.

Al mismo tiempo, aún sin la continuidad y el alcance nacional del zapatismo y el *obradorismo*, a lo largo de la década aparecieron dos experiencias de movilización con impactos significativos en la historia de la resistencia y la rebelión en el México de estos años. En primer lugar, la conformación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Atenco, que se opuso exitosamente a la expropiación de tierras para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) resistiendo a violentas embestidas represivas. En segundo lugar, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que puso en jaque al gobierno del estado y protagonizó una experiencia de autogobierno antes de replegarse frente a la intervención militar.

Finalmente, durante estos diez años (2000-2009), prosperaron una serie de protestas, acciones colectivas y conflictos locales y sectoriales de claro tinte antineoliberal, todos ellos marcados por un rasgo defensivo –resistencial– frente a un agravio específico: en defensa

de recursos naturales frente a políticas de despojo y explotación; en defensa de los derechos humanos frente a la represión brutal o a la criminalización; en defensa del derecho al trabajo frente a despidos y cierre de empresas públicas y privadas; en defensa del campo mexicano frente al agronegocio y el abandono por parte del Estado.

2000-2005: DEL ESPEJISMO DE LA ALTERNANCIA A LA RENOVADA CONTINUIDAD DE LA DOMINACIÓN

Entender la trayectoria de la movilización socio-política en el país implica situarla en el contexto de un proceso de continuidad y reconfiguración de las estructuras de dominación fincado en el pacto y recambio relativo de los grupos dirigentes, condición para garantizar los intereses de las clases dominantes.

El neoliberalismo en México trató –y trata– de consolidarse como sistema oligárquico modernizador a partir de la alternancia bipartidista entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). En efecto, la década se abre en México con un espejismo mediático e institucional; la tan esperada alternancia en el poder ejecutivo, después de más de setenta años de monopolio del PRI –en una coyuntura de debilidad de la fuerza social e institucional de los grupos subalternos e incapacidad del conjunto de las organizaciones de izquierda para disputar la hegemonía–, se resolvió a favor de la oposición de derecha, el PAN. La elección de Vicente Fox en julio del año 2000 selló así el proceso de “transición” democrática. A la apariencia del cambio formal correspondió una profunda continuidad de contenidos socioeconómicos y político-institucionales. Allá donde los hubo, los cambios se experimentaron más bien en un endurecimiento de la represión y en un giro político-cultural, orientado por valores conservadores, clasistas y clericales. El simple y sólo parcial recambio de la clase dirigente frustró las esperanzas de una renovación institucional que habían sido canalizadas en la contienda electoral y en la esfera político-institucional, abriendo una crisis de legitimidad democrática y un proceso de despolitización ciudadana, sólo parcialmente compensados por la creciente politicidad de los movimientos sociales.

Si bien podía ser evidente desde aquel momento que el PAN no sería la palanca de la transformación profunda que México requería –pues su propia tradición no era la de un partido progresista– se podía esperar que su gobierno propiciara una reforma política que rompiera el armazón priista, que desarmara la concentración de poder en manos de una clase política monolítica, abriera la posibilidad de relaciones menos verticales entre Estado y sociedad civil y propiciara nuevas dinámicas de participación social. Esta expectativa llevó al llamado

“voto útil” en las elecciones de 2000 hacia la opción panista, drenando votos de la oposición cardenista y el PRD.

Sin embargo, la transición político-institucional se caracterizó tanto por la continuidad en las políticas socioeconómicas como por la permanencia de prácticas priistas en el ejercicio del poder político, tanto en sus facetas autoritarias como en la búsqueda del consenso impuesto por la vía de la manipulación mediática. Este dato de fondo da cuenta de cómo la alternancia resultó un dispositivo funcional a la estabilidad neoliberal. De hecho, considerando que el PRI impulsó un acuerdo de gobernabilidad con el PAN, mantuvo la mayoría de los gobiernos locales y recuperó en 2009 la mayoría parlamentaria, es posible hablar de un cogobierno *de facto*, de un equilibrio de poderes que confirma la hipótesis de la existencia de un proyecto bipartidista o inclusive de la existencia de un único partido histórico –el PRIAN– que se presenta en forma diferenciada en el momento electoral. Sin embargo, detrás de esta continuidad y homogeneidad de proyectos oligárquicos, la llegada del PAN al poder presidencial produjo algunos cambios que introdujeron algunas variantes significativas en el escenario político mexicano, en particular –como veremos más adelante– desde 2007, con el gobierno de Felipe Calderón.

En este contexto de cambios parciales y aparentes en las estructuras de dominación, entre 2000 y 2005, se produjeron algunas movilizaciones significativas que evidenciaron la continuidad del proyecto de dominación oligárquico.

2001: EL ZAPATISMO EN MARCHA Y LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS INDIOS

En diciembre del 2000, dos días después de que Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) del EZLN hacía un llamado público al “Congreso Nacional Indígena, a la sociedad civil nacional e internacional, a las organizaciones políticas y sociales y a todas las personas en general a [realizar] una gran movilización con el fin de conseguir del Congreso de la Unión mexicano el reconocimiento constitucional de los Derechos y Cultura Indígenas, de acuerdo con la iniciativa de la COCOPA”¹ (CCRI/EZLN, 2000).

1 COCOPA se refiere a la Comisión de Concordia y Pacificación. La llamada “Ley COCOPA” retoma lo más importante de los primeros Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno y el EZLN en febrero de 1996; en lo fundamental, la “Ley COCOPA” reconoce constitucionalmente una realidad: los pueblos indios son parte de México y tienen sus propias formas de organización social y política, es decir, tienen el derecho a ser indígenas y a ser mexicanos. (Centro de Documentación sobre el Zapatismo, 2001) en <<http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=407>>.

Con esto, los zapatistas reiteraban la disposición al diálogo y al consenso como medios para salir de la guerra de “baja intensidad” que el gobierno de Ernesto Zedillo había mantenido en su contra, y para conseguir que las demandas centrales de su lucha y resistencia armada encontrarán una solución política. Una delegación del CCRI, conformada por 24 de sus integrantes, emprendería la Marcha por la Dignidad Indígena a la Ciudad de México recorriendo 13 estados de la República, con la intención de exponer, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la urgencia de llevar a la práctica los Acuerdos de San Andrés².

En medio del hostigamiento mediático, la Marcha se inició el 24 de febrero y, a lo largo de su recorrido, mostró la existencia de un gran apoyo a nivel nacional hacia el EZLN y sus demandas. El 28 de marzo la delegación zapatista pudo hablar desde la tribuna del Congreso de la Unión y ahí, la comandanta Esther fue clara al afirmar que el EZLN estaba dispuesto a dialogar y a llegar a un acuerdo con el gobierno federal por la paz, pero que el diálogo pasaba necesariamente por la aprobación constitucional de la Ley COCOPA. Esther sentenciaba: “Cuando se reconozcan constitucionalmente los Derechos y la Cultura Indígenas de acuerdo a la iniciativa de Ley COCOPA, la Ley empezará a unir su hora a la hora de los pueblos indios” (comandanta Esther, 2001). El 25 de abril el Senado aprobó las reformas a los Artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución Política, sobre los derechos de los pueblos indígenas y, el 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó con 386 votos favorables, incluidos 13 de legisladores del PRD, las reformas a la Constitución en materia de Derechos y Cultura Indígena. Las modificaciones realizadas, sin embargo, desconocieron las “bondades” de la iniciativa de Ley COCOPA de las que había hablado la delegación zapatista en la marcha; quedaron fuera temas fundamentales como el reconocimiento de la autonomía y libre determinación de los pueblos indios como sujetos de derecho público; el derecho del uso de sus tierras y territorios, así como de los recursos naturales que en ellos se encuentran; la elección de sus autoridades municipales y el derecho de asociación regional. De manera inmediata, el EZLN hizo un pronunciamiento público desconociendo las reformas pactadas en el Congreso y anunció que “no retomará el camino del diálogo con el gobierno federal hasta que sean reconocidos constitucionalmente los derechos y la cultura indígenas de acuerdo a la llamada ‘iniciativa de ley de la COCOPA’”; de esa forma, aclararon su decisión de mantenerse

2 Los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996, son compromisos y propuestas conjuntas que el gobierno federal pactó con el EZLN para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado.

en “resistencia y rebeldía” y convocaron a los pueblos indios de México y a la sociedad civil nacional e internacional a realizar movilizaciones para exigir al gobierno “dar marcha atrás en la burla legislativa y cumplir con el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígenas” (Marcos, 2001).

El rechazo a la iniciativa pacífica del EZLN mostró que el “gobierno del cambio” no estaba dispuesto a asumir la tarea de llevar adelante la consolidación de un régimen democrático, pluralista e incluyente; lejos de eso, el perfil conservador, clasista y etnicista del panismo se mostraba nítidamente y encontraba en el PRI un firme aliado a la hora de sostener posturas autoritarias en lo político y neoliberales en lo económico. Al mismo tiempo, al interior del PRD se hicieron evidentes las contradicciones entre sectores institucionalistas y otros con cierta tendencia movimientista, y entre oportunistas y sectores que defendían principios, lo que marcó una difícil convivencia interna y hacia afuera, una ruptura en la confianza que el EZLN todavía depositaba en el conjunto de este partido, el cual empezó, quizá desde entonces, un largo proceso de descomposición.

2001-2002: ATENCO Y LA DEFENSA DE LA TIERRA

Hacia finales de ese mismo año una acción colectiva de protesta y resistencia se desató en varios pueblos del Estado de México, principalmente en San Salvador Atenco, situado a pocos kilómetros de la capital del país. El 22 de octubre el Gobierno Federal publicó 19 decretos expropiatorios de tierras ubicadas en 13 ejidos³ para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Este proyecto era estratégico en la medida en que sellaba la alianza entre el nuevo gobierno y el capital nacional y extranjero al proporcionarle la infraestructura y los financiamientos para la construcción paralela de un corredor comercial e industrial que pretendía convertirse en un detonador de la actividad económica de la zona⁴. En

3 Los ejidos son una forma jurídica y de organización social que implica una propiedad rural de uso individual y colectivo. Los ejidos afectados eran los siguientes: Cuautlalpan, San Bernardino, Boyeros, Huexotla, San Felipe, Santa Cruz, Tocuila y Magdalena Panoaya, del municipio de Texcoco, Francisco I. Madero, Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac, San Francisco Acuexcomac y San Salvador Atenco, del municipio de Atenco y Chimalhuacán, del municipio del mismo nombre.

4 “La inversión inicial anunciada por el gobierno federal era de 18 mil millones de pesos, 40% más barato que la opción de Hidalgo. Este proyecto era financiado con un 75% de participación privada y un 25% restante de participación gubernamental. Sin embargo, no se trataba sólo de un aeropuerto, sino de todo un modelo de desarrollo que traía consigo un proyecto urbanístico, comercial y de servicios a 50 años”. (Camacho Guzmán, 2008)

respuesta a los decretos, las comunidades afectadas se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para impedir que el gobierno expropiara más de cinco mil hectáreas y desplazara a 4375 familias. El FPDT empezó a realizar movilizaciones con machetes en mano, cerrando importantes vías de comunicación, al tiempo que trataba de detener las expropiaciones por la vía legal, por medio de un amparo contra el decreto presidencial. La combinación de la movilización, la organización de los pueblos y la solidaridad de varios movimientos hizo del FPDT una fuerza que alcanzaba resonancia en el ámbito nacional. A partir de diciembre de 2001, el municipio de Atenco se constituyó en municipio “rebelde”, impulsando medidas de autogestión y, en medio del acoso gubernamental, de autodefensa. En los meses siguientes la tensión se mantuvo constante pero finalmente el FPDT –con el apoyo y solidaridad de importantes sectores populares– logró que el 1° de agosto del 2002 se cancelara el proyecto; el 6 de agosto se abrogaron los decretos expropiatorios y, el 18 de agosto del 2003, se firmó un acuerdo político que ratificaba la cancelación del proyecto⁵. El gobierno, entre la abrogación del decreto y la firma del acuerdo, usando un recurso que se volverá constante en casos similares, promovió la criminalización y el hostigamiento al FPDT que se tradujo en más de 350 averiguaciones previas, 10 militantes procesados y órdenes de aprehensión que aún están pendientes. En este contexto, el hecho de que el FPDT no retrocediera y sobre todo lograra frenar el proyecto lo convirtió en un ejemplo y un referente de la lucha contra las políticas neoliberales en México.

2002-2004: EN DEFENSA DEL CAMPO

Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, los productores mexicanos, principalmente la enorme cantidad de campesinos propietarios de pequeñas extensiones de tierra, quedaron subordinados al mercado dominado por las empresas transnacionales y se volvieron más dependientes de los apoyos agrícolas de las administraciones en turno. Por esto, en el año 2002 miles de campesinos conformaron el frente llamado “El Campo No Aguanta Más” (ECNAM), que agrupaba a doce organizaciones de diversas ramas productivas y de varios estados del país, para exigir apoyo de parte del Estado⁶, así como una política que limitara los efectos negativos

5 Este acuerdo lo firmaron el FPDT, el gobierno del Estado de México y el gobierno de la República, en el que se destaca la voluntad para mantener un diálogo.

6 En enero del año 2000, el presidente Vicente Fox vetó la Ley del Desarrollo Rural que daba un poco de certidumbre económica al campo mexicano y rompió el viejo pacto entre el Estado y el movimiento campesino.

de la apertura de la penúltima etapa del TLCAN –que liberalizaba 19 ramos de productos de consumo básico–, y por la aprobación de la Ley Agrícola estadounidense (*Farm Bill*) que aumentaba los subsidios y permitía el *dumping*⁷.

Si bien el ECNAM no representaba a todas las organizaciones campesinas, el movimiento logró reunir desde un principio a unos 500 mil labriegos (Ramírez Cuevas, 2003). Meses después se consolidó como un movimiento de alcance nacional cuando se anexaron tres importantes organizaciones: el Barzón, el Consejo Agrario Permanente y la Confederación Nacional Campesina (CNC). El 12 de noviembre del 2002 el movimiento hizo públicas seis propuestas para la revalorización del campo que incluían la moratoria del apartado agropecuario del TLCAN, el programa emergente 2003 y de largo plazo 2020⁸, una verdadera reforma financiera rural, mayor asignación presupuestal, inocuidad y calidad agroalimentaria para los consumidores mexicanos y reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios (La Jornada, 2002). La presión ejercida por las intensas movilizaciones obligó al gobierno a abrir un diálogo y aceptar la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) en el que se comprometía a establecer condiciones para que “la soberanía y seguridad alimentarias y el desarrollo de la sociedad rural se alcancen mediante este acuerdo”⁹. Posteriormente este documento fue aprovechado por el gobierno para promover prácticas clientelistas que no resolvían la problemática de fondo, dejando una vez más al campo mexicano a la deriva de las grandes compañías trasnacionales.

Las movilizaciones campesinas continuaron en los años siguientes, en particular contra la puesta en marcha de la última fase del TLCAN –que se dio en 2008 y se refiere a la apertura comercial para el maíz y el frijol–, así como la disminución de los subsidios estatales

7 El 13 de mayo de 2002, Bush firmó la Ley de Seguridad e Inversión Rural (*Farm Bill*) en la cual se incrementó 80% los subsidios a la agricultura de Estados Unidos comparado con la ley de 1996.

8 ¡El campo no aguanta más!, 2002 “Seis propuestas para la salvación y revaloración del campo mexicano” en <<http://ierd.prd.org.mx/coy112/seis.htm>>.

9 Las líneas de acción que proponía el Acuerdo eran las siguientes: Participación de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, definición de los compromisos de corto, mediano y largo plazos, contar con un diagnóstico realista y objetivo sobre las causas de la problemática y los medios eficaces para alcanzar los fines descritos, establecer con claridad los derechos y obligaciones del sector público y la sociedad, fortalecer el marco institucional, legislativo, normativo, programático, presupuestario y de rendición de cuentas; así como los mecanismos que permitan combinar los recursos públicos, privados y sociales para realizar las tareas propuestas.

y la aprobación del uso de semillas transgénicas¹⁰. En este panorama lúgubre, las organizaciones campesinas impulsaron campañas –todavía en curso– como la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo, “Sin Maíz no hay país y sin Frijol tampoco, ¡Pon a México en tu boca!”.

2003-2005: EL AUTONOMISMO ZAPATISTA

Luego de permanecer en silencio desde el regreso a Chiapas en abril de 2001, en medio de incursiones paramilitares y militares en las zonas de influencia zapatista, el año 2003 implicó un repunte significativo de la actividad política del EZLN. La jornada de conmemoración del alzamiento armado, el 1° de enero, sería el inicio de una serie de comunicados, cartas y declaraciones en los que se iría definiendo una nueva etapa de la lucha. En aquel acto, realizado en San Cristóbal de las Casas, los comandantes del CCRI dejaron en claro la postura de la organización frente a la aprobación de la *contrarreforma indígena*: “Los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se negaron a la solución política y pacífica a las demandas de los pueblos indios de México” (comandante Tacho, 2003). En consecuencia, los zapatistas proponían avanzar por su cuenta en la construcción de la autonomía indígena: “Ya es tiempo que todos nos organicemos y que formemos nuestros municipios autónomos. No hay que esperar hasta cuando el mal gobierno dé permiso. Debemos organizarnos como verdaderos rebeldes y no esperar que alguien nos dé permiso para ser autónomos [...]” (comandante Brus Li, 2003).

Así, ser autónomos sin esperar la aprobación del mal gobierno significaba organizar sus propias formas locales de gobierno, conducidas por el “mandar obedeciendo”. En agosto del mismo año, en Oventic, se llevó a cabo la extinción de los Aguascalientes y la inauguración de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, destinados a consolidar territorialmente la autonomía indígena en las comunidades zapatistas¹¹, misma que había sido ya una práctica cotidiana

10 El 22 de octubre del 2009, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la SAGARPA, dio a conocer que otorgó 15 permisos de liberación al ambiente en fase experimental de maíz genéticamente modificado (GM) y rechazó 4 de ellos.

11 Con los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, el EZLN avanza en la construcción de espacios autonómicos diferenciándose radicalmente de la división política estatal. Así, la lógica zapatista del “mandar obedeciendo” se materializa en una estructura política emanada de las comunidades y del mismo EZLN. De esta forma, la organización comprende cinco Caracoles: a) La Realidad, “Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños”; b) Caracol de Morelia, “Torbellino de Nuestras Palabras”; c) Caracol de la Garrucha, “Resistencia hacia un Nuevo Amanecer”; d) Cara-

desde hacía varios años y que los “políticos oficiales” se habían negado a reconocer formalmente¹².

Esta nueva etapa, se dijo, implicaba un nuevo proyecto político. En esa misma ocasión se dio a conocer el Plan La Realidad-Tijuana, en el que se delinean los caminos a seguir por el zapatismo: la autonomía, la rebelión y resistencia frente al “mal gobierno” y los partidos políticos, así como la búsqueda para establecer redes de comunicación y de intercambio con distintos sectores populares en resistencia.

Ese fue el preámbulo de lo que más tarde quedaría manifiesto en la *Sexta Declaración de la Selva Lacandona*. En este documento, los zapatistas cuentan su historia, explican su forma de lucha, hacen un análisis de cómo ven e interpretan la realidad del mundo y de México, de cómo entienden la relación entre la clase hegemónica, “los neoliberalistas”, y la clase dirigente, “el mal gobierno y los partidos políticos electorales”; así, los zapatistas definen su postura en términos anticapitalistas y antineoliberales. La iniciativa queda delimitada en los siguientes términos: “vamos a caminar por todo el país, por las ruinas que ha dejado la guerra neoliberal y por las resistencias que, atrincheradas, en él florecen [...] Vamos a buscar, desde La Realidad hasta Tijuana, a quien quiera organizarse, luchar, construir acaso la última esperanza de que esta Nación, que lleva andando al menos desde el tiempo en que un águila se posó sobre un nopal para devorar una serpiente, no muera. Vamos por democracia, libertad y justicia para quienes nos son negadas. Vamos con otra política, por un programa de izquierda y por una nueva Constitución”. La invitación estaba dirigida a los sujetos y las organizaciones que no tuvieran vínculos con los partidos políticos ni con el Estado para sumarse a esta “Campaña Nacional para la construcción de otra forma de hacer política,

col de Roberto Barrios, “El Caracol que habla para todos”; e) Caracol de Oventik, “Resistencia y rebeldía por la humanidad”; cada uno de estos Caracoles implica la existencia de una Junta de Buen Gobierno (JBG), que a su vez comprenden una serie de Municipios Autónomos con los que trabaja directamente: 1) JBG Selva Fronteriza “Hacia La Esperanza”; 2) JBG Tzots Choj “Corazón del Arcoíris de la Esperanza”; 3) JBG Selva Tzeltal “El Camino del Futuro”; 4) JBG Zona Norte De Chiapas “Nueva semilla que va a producir”; y 5) JBG Altos De Chiapas “Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo”. Sobre la estructura y el funcionamiento de esta forma de gobierno zapatista: Bartra (2003).

12 El 6 de septiembre de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedentes 322 controversias constitucionales presentadas por municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. De esa manera, la posibilidad de corregir las reformas en materia de Derechos y Cultura Indígena realizada por el poder Legislativo a la Constitución y respaldas por el presidente de la República, era negada por el poder Judicial.

de un programa de lucha nacional y de izquierda, y por una nueva Constitución”¹³.

La estrategia era clara: recorrer el territorio nacional para escuchar y aprender de las distintas luchas que cubren su geografía, para dialogar con ellos y construir un nuevo proyecto nacional que integre a los “muchos Méxicos”; la consigna anterior, en la que demandaban que no podía haber un México sin los indios se ampliaba ahora para decir que no podía haber un país sin todos los excluidos del sistema, pero que, para que eso fuera una realidad era necesaria otra forma de hacer política (González Casanova, 2009; Almeyra, 2006). Así, antes de que iniciara la campaña electoral presidencial, el Delegado Zero¹⁴, en representación de los zapatistas, inicia la marcha de la *Otra Campaña* (Almeyra y Thibaut, 2006).

2006: LAS CARTAS SOBRE LA MESA

Hacia el final del sexenio de la presidencia de Vicente Fox, primer gobierno no priísta en la historia partidista de México desde la fundación de su antecesor en 1929 –el Partido Nacional Revolucionario–, la balanza del conflicto social estaba decididamente inclinada hacia la preservación de derechos y espacios y, desde ahí, a la reproducción de contenidos, formas y mecanismos de resistencia que diversos sujetos y organizaciones habían tenido que implementar como estrategia defensiva ante la embestida ideológica, mediática y policiaca. Las experiencias represivas en San Salvador Atenco y en Oaxaca, además del intento por desaforar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal (reseñadas más adelante) mostrarían no sólo la actitud reaccionaria y represiva del ejecutivo, ante la cual los movimientos sociales se enfrentarían con evidente desproporción de fuerzas, sino también el pacto de gobernabilidad excluyente entre el PAN y el PRI y la descomposición de la clase gobernante toda; en ese sentido, la nula respuesta de las autoridades políticas y judiciales sobre las violaciones tumultuarias de derechos humanos será caso paradigmático de ello. Así pues, el año 2006 sería paradójicamente el colofón de una transición de pretensiones transformistas, tanto como el preámbulo de la coyuntura actual en la que la relación abierta entre dominación y resistencia marcan la pauta de la conflictividad en el país.

Como casi siempre sucede en los años electorales, más aún cuando está en juego la presidencia de la República, los intereses políticos

13 CCRI-CG EZLN, 2005 *Sexta Declaración de la Selva Lacandona* en: < <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/especiales/2>>

14 El “Delegado Zero” fue el apelativo utilizado por el Subcomandante Insurgente Marcos durante el recorrido que hizo por el país en el contexto de la Otra Campaña.

y económicos se expresan con particular claridad. Sin embargo, antes de las elecciones y de la crisis política que se suscitó, dos conflictos sociopolíticos tendrían lugar en puntos geográficos distintos pero en los que se pueden encontrar similitudes: nuevamente San Salvador Atenco y la ciudad de Oaxaca, en los cuales se vivirían dos manifestaciones trascendentales de organización popular y de criminalización de la protesta social que revelarían tanto la capacidad de resistencia de los pueblos como el rostro represivo de la clase dirigente.

EL GOLPE DE ATENCO

El 3 y 4 de mayo del 2006, la policía del gobierno del Estado de México desalojó con excesiva violencia a un grupo de floristas y campesinos que vendían sus productos en las afueras del mercado Belisario Domínguez, de Texcoco. Tras una “disputa” (así fue manejada por los grandes medios de comunicación y el gobierno) por la venta de flores y el cierre de una avenida, que en realidad era una lucha por el derecho al trabajo, los gobiernos federal, estatal y municipal reprimieron brutalmente a los campesinos y a todos los que se solidarizaron con ellos: al FPDT, a los integrantes de la Otra Campaña y a las comunidades cercanas, realizando un despliegue de fuerza que dejó tras su paso muertos, violaciones tumultuarias, cateos ilegales, golpes, hasta torturas psicológicas y físicas efectuadas por la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México¹⁵.

Los integrantes del movimiento fueron encarcelados y se les imputaron diversos cargos, tan inverosímiles como el grado de represión que habían desplegado las policías en su contra; a algunos se les acusó de secuestro equiparado, con castigo de hasta 32 años de cárcel, a dos más, Héctor Galindo y Felipe Álvarez 67 años, y al dirigente más emblemático del FPDT, Ignacio del Valle, 112 años de cárcel, sin que existiera prueba alguna de los delitos por los que se les condenó, y con el objetivo de mostrar un “castigo ejemplar” contra la resistencia y la organización popular¹⁶. Los miembros de las policías y las autoridades que cometieron innumerables violaciones a los derechos humanos –documentadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales– fueron exonerados de toda responsabilidad.

15 “El saldo fue de dos jóvenes muertos y 212 personas detenidas, en su totalidad golpeadas y torturadas. Entre ellas hubo nueve menores de edad (ocho hombres y una mujer) torturados durante cuatro semanas, cuatro heridos graves y al menos veintiséis mujeres violadas, de las cuáles varias fueron encarceladas más de un año” (Arenas y Gutiérrez, 2008)

16 Tres de los 12 presos políticos se encuentran actualmente en cárceles de máxima seguridad, y otros tienen órdenes de aprehensión en su contra.

Con este tipo de “estrategia contrainsurgente” contemporánea, la represión y la criminalización de la protesta social; la Otra Campaña, el mismo FPDT y otras organizaciones solidarias han visto reducido su empuje y capacidad de articulación política, ya que luego de la represión han volcado buena parte de su fuerza a la exigencia de justicia y la liberación de sus presos políticos¹⁷ por lo que para el movimiento social se ha convertido en un referente de lucha y solidaridad¹⁸.

LA COMUNA DE OAXACA

Los maestros de escuelas públicas de la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca demandaban en el 2006 la re zonificación salarial, aumento del presupuesto educativo, así como el establecimiento de una mesa de negociación entre el gobierno estatal y el Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas, para lo cual y, como una forma de presión para el cumplimiento de sus demandas, establecieron un plantón en la plaza principal de la capital del estado (Vicente Cortés, 2006). El 14 de junio el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz (URO) ordenó desalojarlos con uso desmedido de violencia y trató de destruir la radio del magisterio, Radio Plantón. En respuesta, los maestros llamaron a la comunidad a solidarizarse con ellos y expresar su rechazo contra Ulises Ruiz, lanzando la convocatoria para conformar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que en sus inicios agrupó a más de 300 organizaciones y ciudadanos oaxaqueños¹⁹.

La Asamblea logró aglutinar las inconformidades de la población y el desacuerdo contra las prácticas políticas del priismo –sintetizadas en la demanda central de renuncia del gobernador–; por ejemplo, en las elecciones del 2 de julio del 2006 se promovió el abstencionismo o el voto de castigo, que impactó en la derrota abrumadora del PRI. Además, logró articular la fuerza para boicotear la fiesta pública principal

17 El FPDT organiza varias iniciativas para demandar nacional e internacionalmente la libertad de los presos políticos y el cese de la criminalización de la protesta social. Ejemplo de ello es la campaña nacional de libertad y justicia por los presos políticos.

18 La solidaridad se volvió un eje de rearticulación para el FPDT; acompañó la lucha contra megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca; la lucha del Frente del Casino de la Selva en Cuernavaca; por la autonomía municipal en Tlalnepantla, Morelos; contra la construcción de la presa “La Parota” en Guerrero.

19 Este movimiento popular estaba conformado por varias organizaciones políticas y frentes, entre ellas se encontraban la Sección XXII del SNTE; el Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas, la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, el Frente Popular Revolucionario, el Comité en Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), la Nueva Izquierda de Oaxaca (NIOAX); y por un número incalculable de ciudadanos no organizados y simpatizantes.

de Oaxaca, la Guelaguetza, e impulsar una celebración alternativa de corte popular con muy buena respuesta de la población. Se conformó también la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres de Oaxaca (COMO), misma que el 1° de agosto organizó una movilización y posteriormente solicitó 15 minutos de transmisión en la televisión (Canal 9) y radio estatal para exponer sus demandas y dar una visión alternativa. Ante la negativa y el maltrato recibido tomaron pacíficamente las instalaciones y transmitieron el por qué de su lucha y sus objetivos, sin embargo la represión se encrudeció y el 20 de agosto sufrieron un ataque armado.

Con diversas iniciativas políticas y culturales, y por medio de la movilización permanente, la APPO se consolidó y logró integrar las demandas de los pueblos originarios y de varios sectores de Oaxaca, diversas organizaciones desde ambientalistas hasta feministas y empezó a tener apoyo nacional, que se mostraba en las consignas de varios estados que decían: ¡Todos somos Oaxaca!

Ante tal acumulación de fuerzas, la estrategia ofensiva del estado fue intentar vincularlos con grupos guerrilleros para justificar la represión e intimidación sistemática, y una campaña mediática de tintes clasistas y racistas. Esta estrategia arreció desde el 10 de agosto durante una marcha en la cual es asesinado un militante, y posteriormente el gobierno implementó las llamadas “caravanas de la muerte”. (Leyva, 2008)

La APPO organizó barricadas para defender las radios y los espacios conquistados. Entre los diferentes jaloneos con las autoridades locales y federales, circuló la propuesta de un Pacto por la Gobernabilidad, la Paz y el Desarrollo del Estado de Oaxaca que sería firmado el 4 de octubre al tiempo que, sectores de derecha, solicitaban la aniquilación del movimiento. Esta propuesta no fructificó, porque si bien el Pacto reconocía la necesidad de cambios profundos, no incorporaba la remoción del gobernador, lo que mostraba una vez más que la clase política en el poder no pensaba ceder en nada y seguiría con la política de criminalización. Mientras tanto la tensión crecía, teniendo como punto más álgido el 27 de de octubre, cuando se produjeron incidentes provocados por sicarios del gobierno estatal. La APPO se declaró en estado de alerta máxima pues ya había más de 4 muertos. Finalmente, el 28 de octubre, Vicente Fox ordenó la entrada de las fuerzas federales a Oaxaca y el 29 el de la Policía Federal Preventiva. Al día siguiente la APPO se plantó en la plaza de Santo Domingo para seguir su resistencia. La confrontación continuó, se realizaron numerosas marchas, al tiempo que la PFP se atrincheró en el zócalo y empezó a detener arbitraria y masivamente.

Aún en medio del clima de terror instaurado por la ocupación militar, el movimiento volvió a tomar fuerza y para el 2 de noviembre,

cuando la PFP trató de derribar una barricada denominada “Cinco Señores”, la policía quedó rodeada por elementos de los diferentes contingentes de la APPO por lo que tuvo que replegarse. La respuesta fue el aumento de la intimidación y la violencia. Finalmente la APPO organizó una marcha para el 25 de noviembre la cual fue agredida por la PFP con gases lacrimógenos y aumentaron las detenciones. El aumento de la represión logró desgastar el movimiento, el cual se replegó y asumió una forma más difusa, menos organizada y con menor capacidad de articulación de las distintas organizaciones y sectores populares. Terminaba una experiencia de resistencia que había llegado, por medio del recurso extremo a la rebelión, a substituir al gobierno local por el autogobierno popular.

EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRADORISTA

Desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en el año 2000 –si bien por un estrecho margen frente al candidato del PAN, Santiago Creel–, y luego de ser Presidente Nacional del PRD de 1996 a 1999, su imagen política alcanzó una proyección sin equivalentes en el interior de su partido y en el conjunto de la “centroizquierda” institucional. Pronto se erigió como una figura trascendental para el PRD y para las aspiraciones presidenciales de 2006, en tanto que durante su administración en el Distrito Federal ganó la simpatía de millones de ciudadanos aplicando políticas redistributivas y de justicia social, acotadas pero significativas, en relación con la época y el contexto nacional, de austeridad presupuestal, fomentando el empleo e, incluso, haciendo partícipe a la inversión privada de proyectos de infraestructura.

El primer intento del Gobierno Federal para impedir que AMLO fuera candidato presidencial se presentó en mayo de 2004, dos años antes de las elecciones presidenciales de 2006, cuando se abrió en su contra el Juicio de Desafuero, promovido por la Procuraduría General de la República (PGR), con la evidente intención de inhabilitarlo para participar en los comicios electorales, acusándolo de haber desacatado una orden judicial que le impedía abrir un camino, cuyo trazo pasaba por el predio El Encino, para dar tránsito a un hospital. El 7 de abril del 2005, 360 Diputados Federales, todos del PAN y del PRI, votaron a favor del desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal. El gobierno foxista, apoyado en la artillería de los medios de comunicación, no cesaba en esgrimir que la decisión estaba “apegada a derecho” y “que nadie podía estar por encima de la ley”. Con ello, pretendían hacer pasar como legal su estrategia para deshabilitar al político que, ya desde entonces, tenía las preferencias más altas en todas las consultas de opinión para ganar las próximas elecciones presidenciales. Lo que

la reacción conservadora de las fuerzas de derecha propició fue que a partir de entonces el Jefe de Gobierno se convirtiera en el líder de un movimiento popular que se prolonga hasta la actualidad, el *obradorismo*, el cual comenzaría a cobrar un perfil cada vez más definido.

López Obrador se separa entonces de su cargo como jefe de gobierno para permitir el proceso penal y demostrar su inocencia ante los cargos imputados en su contra. El 24 de abril se realiza la “marcha del silencio” en la capital, una muestra masiva de apoyo –con más de un millón de personas²⁰– que deja de manifiesto que de seguir adelante con la supuesta defensa del “Estado de derecho”, las consecuencias políticas para el gobierno podrían significar que la derecha no lograra sostenerse en el poder; toda la legitimidad que habían alcanzado justamente por la vía electoral quedaba anulada mediante un proceso que no respondía a motivos jurídicos, sino evidentemente se afianzaba en intereses políticos. En el mitin realizado el día de la marcha en el Zócalo, López Obrador expuso ante sus simpatizantes lo que pretendía convertir en su programa de gobierno: “aplicar una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política y una nueva convivencia social con menos desigualdad y más justicia y dignidad”, para lo cual resultaba imperioso, según su opinión, encontrar los acuerdos necesarios con los diversos sectores de la sociedad para impulsar el proyecto de cambio pues, “la mejor garantía de seguridad y tranquilidad está en evitar que siga creciendo la desigualdad social en nuestro país. Por eso hemos dicho y repito: por el bien de todos, primero los pobres” (La Jornada, 2005)

Vicente Fox, en medio de la crítica y las movilizaciones que ya se asemejaban a los “amarillos mares” que más tarde desbordarían el cauce normal de las instituciones, no tuvo otra alternativa que echar atrás, en sus palabras, “la decisión más difícil de su sexenio” y reconocer que López Obrador podía legalmente contender en las próximas elecciones (Bartra, 2006a).

El camino hacia las elecciones de 2006 estuvo caracterizado por el temor creciente de las clases dominantes frente al proyecto nacional-popular encabezado por López Obrador, que se tradujo en un apoyo masivo e irrestricto al candidato del PAN, Felipe Calderón. La manipulación mediática, la inversión millonaria en publicidad durante la campaña electoral, la estrategia del miedo frente a las supuestas expropiaciones de casas que iba a promover López Obrador y a su carácter violento y autoritario; y la constante intervención de Vicente

20 Los datos que se difundieron en la prensa y que respondían a la información de la Secretaría de Seguridad Pública federal hablaban de no más de 120 mil manifestantes.

Fox a favor de Calderón fueron elementos decisivos de lo que más tarde sucedería.

EN DEFENSA DEL VOTO

En las elecciones más ceñidas que hayan tenido lugar en México, el candidato del PAN, Felipe Calderón, se hizo de la “victoria legal” con una diferencia sospechosa, pero en todo caso suficiente para ser reconocido como presidente electo: 35,71% de los votos, contra el 35,15% conseguido por AMLO. Ni siquiera el poder de la maquinaria estatal, el dinero de los sectores económicamente dominantes, el voto del clero, una campaña llena de calumnias, escándalos fabricados y exageraciones discursivas lograron derrotar a Obrador por la vía del voto; fue necesario manipular los resultados electorales para garantizar un resultado favorable a Calderón e impedir que López Obrador asumiera la presidencia.

Denunciando el fraude electoral, cientos de miles de simpatizantes de López Obrador tomaron entonces las calles, esta vez por lapso de varios meses. Con la consigna “Voto X Voto; Casilla X Casilla” millones de ciudadanos demandaban el respeto del voto ciudadano que ratificara la inclusión y el reconocimiento por parte de un sistema enajenado.

Una de esas grandes manifestaciones de desobediencia civil y pacífica se realizó en el plantón de miles de simpatizantes que ocuparon la avenida Reforma –que atraviesa la ciudad de oriente a poniente– con construcciones improvisadas, carpas y lonas. Aquél, fue un encuentro masivo de ciudadanos de diferentes partes del país, algunos movidos por la militancia, otros por la indignación ciudadana.

El Tribunal Electoral desechó la petición de la Coalición por el Bien de Todos –plataforma partidista que impulsó la candidatura de AMLO, conformada por el PRD, el PT y Convergencia– de hacer un recuento total de los votos de la jornada del 2 de julio. A pesar de haber aceptado que hubo “anomalías importantes” se declararon válidas las elecciones pues se argumentó que era imposible evaluar sus consecuencias y se ratificó a Calderón como presidente electo, con una diferencia de 0.56% de los votos contabilizados. En respuesta al fraude, el 16 de septiembre, en acto masivo realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador es nombrado en un mitin multitudinario, autodefinido como Convención Nacional Democrática, “Presidente Legítimo” de México y, paralelamente, nació el Frente Amplio Progresista (FAP) que estaría encargado, según sus objetivos, de “articular a todos los ciudadanos y organizaciones políticas y sociales que se expresaron durante la campaña, como para recibir nuevas adhesiones” así como para “enfrentar al bloque conservador, al brazo político de la

minoría rapaz que tanto daño ha causado a nuestro país”. Una nueva veta se abría en la política nacional, un camino que intentaría sostener una relación horizontal y directa entre el movimiento ciudadano, que ya rebasaba por mucho a los partidos que respaldaban a López Obrador, y la oposición institucional partidista. La lucha, entonces, debía sostenerse en ambos niveles, en las dos vías, la del movimiento y la que podía asegurar los cargos políticos de los miembros del FAP, con la intención de ejercer un contrapeso efectivo ante los poderes de la Unión²¹. Vale decir que este era también un esfuerzo inédito, en su amplitud, profundidad y radicalidad; una opción de participación y movilización que fue posible a partir de la politicidad de amplios sectores populares. No era en aquel momento, como se quiso manejar maniqueamente, la incompatibilidad del “adentro y afuera” o “arriba y abajo”, tampoco la reacción violenta de renegados, sino la práctica inteligente de un movimiento de izquierda que se organizaba, otra vez, para resistir la embestida de la clase dirigente conservadora y de los sectores dominantes (Bartra, 2006b).

Felipe Calderón tomó posesión el 1° de diciembre ante la televisión y recibió la transmisión del mando por el ejército, y sólo más tarde, ese mismo día, lo hizo en la tribuna del Palacio Legislativo tomada por los legisladores del FAP y en medio de una ilegitimidad tangible. Las clases dominantes respaldaban la continuidad de la administración panista, pero evidentemente exigían que el PAN gobernara para beneficio de sus intereses de clase.

El nacimiento del movimiento encabezado por AMLO ha sido sin duda un acontecimiento histórico, no sólo por su masividad y su crítica frontal a la derecha y las oligarquías, sino por la profundidad de sus raíces populares, por la trascendencia de la politicidad alcanzada entre sectores que se habían mantenido desmovilizados por años y, porque a pesar de no haber alcanzado la victoria por la vía electoral

21 AMLO era claro al definir el por qué aceptaba tal cargo y cuáles eran las razones de continuar con la lucha empezada un par de años atrás: “[...] acepto este honroso cargo no por ostentación o por ambición al poder. Lo asumo, incluso a sabiendas de que también por esto voy a ser atacado. Pero lo hago convencido de que así voy a seguir contribuyendo, junto con muchos otros mexicanos, mujeres y hombres, como ustedes, en las transformaciones del país, por nosotros y por las nuevas generaciones, por los que vienen detrás, por nuestros hijos, que podamos verlos de frente y no nos reclamen porque en estos momentos de definición supimos estar a la altura de las circunstancias. Además, en las actuales circunstancias, aceptar este encargo es un acto de resistencia civil pacífica, y es lo que más conviene a nuestro movimiento [...]” (López Obrador, 2006, 16 de septiembre). Para una explicación del significado y necesidad de impulsar y respaldar un esfuerzo redistributivo, capaz de poner un freno a la rapacidad neoliberal que las últimas décadas ha dominado el horizonte estatal en el país, véase: (Sosa Elízaga, 2006)

—siempre reivindicada por el mismo AMLO— hizo evidente la inexistencia de la democracia en el país, la descomposición de la clase política mexicana, la organicidad de ésta con los sectores económicamente dominantes y, sobre todo, contribuyó en mucho a la *acumulación de experiencia política* entre los subalternos y eso, como muestra la terca historia de las insubordinaciones populares, representa la mayor parte de las veces, un punto nuevo de partida en la radicalidad del antagonismo, en la prefiguración de otros horizontes. Así, sin perder de vista el peso indiscutible del líder carismático, y el verticalismo caudillista demostrado por él en reiteradas ocasiones, conviene apreciar, en sus diversos matices, la conformación de un movimiento sociopolítico de histórica importancia y de un peso indiscutible en el actual escenario político mexicano.

La opción obradorista no representaba la puesta en marcha de una transformación de alcance radical, pero los intereses estrechamente vinculados con la continuidad y profundización del neoliberalismo no quisieron aceptar que a la Administración Federal accediera un partido de centroizquierda enaltecido, cuando no enardecido, por la figura de un líder *sui generis* que insistía en el papel decisivo del Estado para administrar y distribuir la riqueza social a contracorriente del gobierno panista de Fox. Reconocer que en el seno del *lopezobradorismo*, más aún, en el círculo político e ideológico más cercano a la dirección del mismo, existe apenas un programa de tipo reformista y redistributivo no impide establecer una diferenciación con el proyecto encabezado y defendido por el partido gobernante y la derecha priísta; aquél aspira decididamente a la *recuperación* de la *justicia social*, arrebatada por el proyecto neoliberal impuesto en México²².

2007-2009

Por lo antes mencionado, podemos considerar que, en efecto, el año 2006 marca un hito interpretativo de la conflictividad social y representa un *parteaguas* en la historia de la década. En términos de análisis socio-histórico, se vive una coyuntura de acumulación y desbordamiento antagonista que es capaz de cuestionar la dominación estatal. Es también un año en el que, con un grado alto de acción autónoma,

22 Escrito a partir del video documental que realizara el cineasta mexicano Luis Mandoki, “¿Quién es el señor López?”, el libro de Andrés Manuel López Obrador *La mafia nos robó la presidencia* resulta un documento interesante por cuanto que ahí está registrada, con el lenguaje llano y directo que lo caracteriza, la visión del líder sobre la política nacional, la relación de la “sociedad política” con el “pueblo”, en el que hace balances de los logros alcanzados por la izquierda institucional y los años recientes y valora las opciones del movimiento de resistencia civil y pacífica por él encabezado. (López Obrador, 2007)

tiene lugar la acción insurrecta y libertaria de miles de personas que en distintos lugares de la geografía política del país, valiéndose de sus tradiciones e historias compartidas de agravios y rebeliones, expresan el deseo impostergable de cambiar su realidad, romper las relaciones de dominación y abrir horizontes de emancipación.

Campeños armados con machetes en San Salvador Atenco, Estado de México, confluyen con organizaciones movilizadas a partir de la Otra Campaña y el Delegado Zero; la resistencia civil y pacífica en contra del fraude electoral, que paraliza la Ciudad de México por espacio de tres meses; la “guerra civil” en Oaxaca que se convierte en un movimiento con aspiraciones *destituyentes* sobre la base de prácticas comunitarias locales. El balance general de todas estas experiencias antagonistas, sin embargo, nos muestra que la relación de fuerzas no supera el nivel de la resistencia o de la defensa generalizada de derechos y libertades usurpadas permanentemente por el bloque hegemónico.

En el repliegue que supuso la resistencia en tiempos de represión y autoritarismo, algunos movimientos optaron por estrategias de lucha que terminaron por aislarlos. En ese sentido podemos aludir a la política zapatista de la Otra Campaña. Consiguió en efecto llevar adelante la tarea ecuménica de convocar a miles de sujetos y organizaciones que, a su manera, buscan la construcción de otro mundo y de esa forma visibilizar conflictos locales, soterrados muchas veces por la represión estatal y que a pesar de ello sostienen luchas contra las diversas formas de dominación de dicho Estado y del capital; visto así, la iniciativa de “la Otra” desfeticizó la imagen de un régimen de gobierno, en sus tres niveles, monolítico y unidimensional, mostrando que la dominación y la resistencia son, efectivamente, las expresiones relacionales del conflicto social existente a lo largo del país. (Roux, 2006)

El grado de inestabilidad política, la vigencia de las elecciones a nivel nacional y popular e incluso la magnitud de la violencia con la que el Estado reaccionó para sostenerse, no sólo abrían la posibilidad para que los zapatistas no se limitaran a expresar su solidaridad con los pueblos de Atenco y Oaxaca y a participar en algunas expresiones de resistencia, sino que, como nunca antes, era también un momento propicio para buscar otro tipo de alianzas y configurar un proyecto de izquierda nacional contrahegemónico, proyecto que los mismos zapatistas negaron en el momento de diferenciarse de la clase política y aún de aquellos sectores populares que respaldaron la iniciativa obradorista²³. La imposibilidad de acuerdos o acercamientos políticos

23 Para analizar los argumentos defendidos por el EZLN, que fueron asumidos también por los adherentes de la Otra Campaña, ver: “L@s zapatistas y la Otra: los peato-

y la incapacidad de propiciar o permitir convergencias sociales a nivel de base produjeron, indudablemente, un debilitamiento de ambos movimientos en beneficio de la derecha. (Figueroa Ibarra, 2007)

Igualmente grave para el movimiento popular de izquierda ha sido el desmoronamiento del único partido político institucional con posibilidades de representarlo. Con el acceso a la dirección del PRD de una fracción proclive a la negociación con el PAN se evidenció la fractura interna de un partido que podía haber sido un interlocutor de la protesta social y las demandas ciudadanas en tiempos de la embestida ideológica de la derecha. Así, las opciones representadas por sus dos principales corrientes, Nueva Izquierda (NI) e Izquierda Unida (IU) llevaron al PRD a la desarticulación interna, pues los proyectos implicaban dos posturas difícilmente conciliables; la primera ligada a la institucionalidad y el burocratismo de la política oficial; la segunda más cercana al movimiento social lopezobradorista. De cualquier manera, con el triunfo de NI, prorrogado por las protestas de ilegalidad en la elección interna, y la pérdida de influencia de López Obrador, hoy el PRD parece no tener un papel trascendente en la articulación de la izquierda mexicana, y lejos de eso, muestra cada vez más su descomposición y su renuncia a posicionarse ideológicamente en la izquierda institucional, al considerar la posibilidad de entablar alianzas con el PAN en un momento en que éste está mostrado de forma inequívoca su carácter neoliberal y autoritario.

EN DEFENSA DEL PETRÓLEO: LA MEMORIA NACIONALISTA

A principios del año 2008 fue presentada la Iniciativa Presidencial en Materia de Reforma Energética de Calderón. Con el argumento de la necesidad imperiosa de modernizar y potenciar la actividad de la industria petrolera nacional, dicho proyecto proponía reformar la Constitución para que se pudiera dar entrada al capital privado a una serie de actividades estratégicas hasta ese momento a cargo de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), sustento de la economía nacional desde hace varias décadas. Así el gobierno mostraba una vez más su organicidad con los sectores económicamente dominantes, dentro y fuera del país, y mostraba hasta dónde era capaz de llevar su proyecto neoliberal²⁴.

La propuesta del Ejecutivo federal encontró de inmediato un freno entre diversos sectores de la sociedad; en primera instancia con la

nes de la historia”, en <<http://enlace Zapatista.ezln.org.mx/la-otra-campana/456> > .

24 Para el análisis puntual del contenido de la Reforma Energética y las respuestas dadas por diversos actores políticos ver: (Comité de Seguimiento del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana de México. OSAL, 2008).

oposición partidista del PRI y del PRD, que tímidamente, sopesando sobre todo las repercusiones electorales que apoyar la medida les significaría, se negaron a secundar en bloque la propuesta. La defensa decidida de la industria petrolera nacional la harían definitivamente los sectores movilizados del *obradorismo*, amparados por el bloque de izquierda partidista conformado luego del fraude electoral, el FAP.

En efecto, después del fraude electoral se mantuvo vigente una estructura organizativa que conformó dos años después el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que con sus movilizaciones y actos políticos frenó parcialmente la iniciativa del Ejecutivo federal de reformar la Constitución para abrir a la inversión privada sectores estratégicos de la industria petrolera nacional. Nuevamente, aquellos sectores que habían denunciado la inoperancia de las estructuras político-institucionales en 2006 hacían patente su oposición al gobierno criticando su “entreguismo”, realizando manifestaciones a lo largo del país y convocando a un gran debate nacional, en el que participarían diversas voces y tendencias, para definir el futuro de la empresa estatal de petróleos, PEMEX.

Entonces, la apelación a la memoria nacionalista cobró una nueva fuerza al recuperar la “epopeya” de la nacionalización de la industria petrolera que marcó de forma definitiva el rumbo industrializador de México en el siglo XX. (López Obrador, 2008; Gilly, 2008)

2008-2009: EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Si bien las mayores y más relevantes movilizaciones populares se desarrollaron alrededor de la exigencia de respeto y cumplimiento de derechos (sociales, económicos, culturales y políticos), es necesario destacar también las luchas que, en otra dimensión, exigían la participación de las comunidades en las decisiones que significaban la transformación y cambios de sus territorios, así como la preservación del medio ambiente; a raíz de ello los movimientos socio-ambientales han cobrado en los últimos años una visibilidad en el horizonte de los movimientos sociales en México.

En agosto del 2008 surge la Asamblea de Afectados Ambientales (AAA) con el objetivo de integrar un frente amplio en contra de la contaminación que afecta ríos, lagos, mantos acuíferos, zonas boscosas y en lucha para evitar la depredación de territorios y el despojo de tierras a todo lo largo del país. A la fecha, se han realizado cinco asambleas, en las cuales participan diferentes comunidades, desde las que han sido afectadas por escurrimientos de vertederos de industrias, como las de Huaxtla, San Lorenzo y Milpillas, en el estado de Jalisco, hasta las que buscan que se detengan la construcción de relleños sanitarios o la minería a cielo abierto.

Las comunidades en resistencia han desplegado distintas formas de lucha: movilizaciones, campamentos, plantones; han combinado la movilización popular con la jurídica, y generalmente son ellas mismas, junto con los pueblos originarios, las que se movilizan para defender su territorio de los megaproyectos e intereses de las empresas trasnacionales, además que combaten contra las mineras²⁵, la tala de bosques y la construcción de presas²⁶.

Otro ejemplo son los conflictos relacionados a la construcción de basureros y confinamientos de desechos tóxicos; aunque este problema no es nuevo, cada vez se organizan más comunidades, y defienden su territorio²⁷.

Estos movimientos, abiertos y pacíficos, son de menor dimensión que los anteriores, pero son un indicador de la proliferación y diferenciación de los espacios de resistencia.

2009: EN DEFENSA DEL TRABAJO

El año 2009 se cierra con una agresión mayúscula a los trabajadores organizados. El 10 de octubre del 2009, el gobierno de Felipe Calderón, promulgó un decreto presidencial con el que extingue la compañía estatal dedicada a suministrar la energía eléctrica en el centro del país, Luz y Fuerza del Centro (LFC), ocupando las instalaciones de la empresa con la Policía Federal y terminando las relaciones contractuales con más de 44 mil trabajadores de la misma, organizados en el centenario Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Calderón,

25 La lucha contra la minera San Xavier, por ejemplo, que obtuvo un permiso para operar su proyecto de destrucción ecológica en Cerro de San Pedro; aun cuando por la vía jurídica y de movilización popular se había cancelado el permiso, la minera destruyó con explosivos el Cerro, que es el emblema del Escudo de Armas de San Luis Potosí.

26 La oposición de habitantes de Guerrero a la construcción de la presa La Parota, la cual prevé inundar 17.000 hectáreas de tierras cultivables de los Bienes Comunes de Cacahuatpec y donde resultarían afectados 25.000 campesinos de unos 30 pueblos de Parota Guerrero. Las demandas de los afectados son el alto al despojo de sus tierras, la defensa del medio ambiente y la ecología contra los depredadores y los líderes corruptos, y contra la privatización del agua, de la tierra, de los servicios y de los energéticos. Después de la larga lucha se ha pospuesto la construcción de la presa, aunque no se ha cancelado.

27 En la comunidad de Zimapán, Hidalgo, por ejemplo, se ha generado el Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán, al que se han sumando otras comunidades aledañas, para oponerse a la construcción de un confinamiento de residuos peligrosos y tóxicos por la empresa española Befesa. En la comunidad de Chilapa, Guerrero, se demanda construir un relleno sanitario y que se recolecte y se trate adecuadamente la basura. En Coatzacoalcos, Veracruz; Zinacantepec, estado de México; en el Bordo Poniente, Distrito Federal; en Lomas de Mejía, en el estado de Morelos, se exige el cierre o la cancelación de rellenos sanitarios.

con el pretexto de que la empresa resultaba un gasto insostenible para los recursos públicos, toda vez que mostraba a través de estadísticas un déficit en las finanzas de la empresa, logró materializar un sueño acariciado por los gobernantes ya desde el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) cuando se pretendió plantear la participación de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica.

Ahora, se usó el argumento de la ineficacia de la empresa y los altos subsidios; desde el primer momento el presidente y los secretarios del Trabajo y de Economía iniciaron una guerra mediática contra los trabajadores del SME y en particular contra su líder, Martín Esparza, aduciendo que recibían altos salarios y prestaciones, señalando que en tiempos de crisis tenía que haber ajustes urgentes y que este recorte iba a ser utilizado para políticas sociales. Nunca se dijo que desde hace años, por ejemplo, la inversión en infraestructura ha sido prácticamente nula y que las transferencias presupuestarias a LFC eran más por el régimen fiscal al que la tenía sometida la Secretaría de Hacienda que por los supuestos privilegios de los trabajadores.

El autoritarismo y la agresividad con los que el gobierno enfrentó al SME se explican en parte porque, en efecto, ese es uno de los pocos sindicatos independientes en México que no responde a filiaciones partidistas, y desde su fundación ha permanecido cercano a las más diversas luchas populares —el *zapatismo* desde 1994, la huelga estudiantil de la UNAM en 1999-2000, y la defensa del petróleo en 2008— por lo que desmantelarlo les resulta necesario para impulsar una contrarreforma laboral y para privatizar el sector de la energía eléctrica nacional. Apenas a unos días de haberse decretado la extinción se dio a conocer, vía los medios de comunicación, la propuesta del negocio millonario que suponía la red de fibra óptica instalada en la infraestructura de LFC y que sirve para transmitir imagen, voz y datos, es decir, transmitir señales de televisión, telefonía e internet, el llamado “*triple play*”. Eso fue denunciado desde el principio por los miembros del SME, además de que hicieron públicas las deudas que el sector privado y varias instituciones del Gobierno Federal tenían con Luz y Fuerza del Centro. “Del total del adeudo de 2000 a 2008, cerca de 60% corresponde a empresas e industrias privadas y el resto a dependencias y organismos del sector público. En este último apartado, señalaron, las secretarías del Gobierno Federal reportan actualmente deudas en el rango de los 5 y 15 millones de pesos, aunque alguna, como la Secretaría de Agricultura, Grupo Pozos, reportaba en el último corte de la empresa (septiembre de 2009) 321 millones 300 mil, y Bombeo Texcoco 45 millones 100 mil pesos”. (La Jornada: 2009).

El SME adujo la inconstitucionalidad del decreto de extinción al tiempo que llamó a la resistencia de los trabajadores para no aceptar

las indemnizaciones y los “bonos extras” ofrecidos por el gobierno, así como a la población en general a sumarse a su lucha. Diversos fueron los sectores populares que se movilaron con los electricistas para frenar la medida que para entonces ya era leída como una acción de autoritarismo. La primera gran marcha convocada por el SME reúne a más de 300 mil personas en una muestra de solidaridad contundente; se suman contingentes del FPDT, de la APPO, de estudiantes, de maestros; López Obrador y el movimiento popular que encabeza, marchan en la retaguardia.

El 11 de noviembre, luego de intensas reuniones con diversos sectores populares, el SME convocó al paro cívico nacional, a realizar manifestaciones en todo el país y empezó a manejar la posibilidad de llevar adelante una huelga nacional.

El discurso sistemático del gobierno fue el desconocimiento a las manifestaciones e insistió en que no “había marcha atrás” en la extinción de LFC. El 11 de diciembre un juez federal negó el amparo solicitado por el SME en el que alegaba la inconstitucionalidad del decreto de extinción. El SME se manifestó entonces convencido de que no basta con la batalla jurídica, ya que si ésta no es acompañada de la movilización popular no existe respuesta favorable; los sindicalistas reiteraron que con la administración de Calderón el diálogo se encuentra ausente siempre y sólo lo aparenta para ganar tiempo, mostrar una apertura o evitar la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. La exigencia de una mesa de diálogo real ha sido una constante. El SME ha optado por diversas formas de lucha desde la huelga de hambre que impulsaron el 23 de noviembre 11 trabajadoras hasta la organización de una comisión de notables, en la que se encontraba el rector de la UNAM, José Narro. Sin embargo, la respuesta por parte de la administración calderonista ha sido negativa al tiempo que en la ciudad aumentan las quejas por la deficiencia en el servicio dado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Trabajadores urbanos se organizan con amparos y se solidarizan con el movimiento.

El golpe al SME, uno de los más combativos y solidarios sindicatos independientes, y el haber dejado intactos a sindicatos ampliamente conocidos por su extrema corrupción como el de los trabajadores petroleros y de educación, muestra que lo que se implementó fue una *política de criminalización de la protesta social* utilizando, de nueva cuenta, todos los recursos estatales y mediáticos para desconocer, desprestigiar, reprimir y perseguir a las organizaciones y líderes políticos de las mismas. Como siempre sucedió durante la larga *dictadura institucional* del PRI, la violación de los derechos humanos ha sido constante bajo las dos administraciones de Acción Nacional, acompa-

ñada ahora de la militarización de la vida civil, la criminalización de la protesta social y la reforma al sistema judicial.

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

En efecto, una estrategia *transexenal* frente al crecimiento de movimientos de protesta ha sido la represión, la violación de derechos humanos y la criminalización²⁸.

La presencia de grupos político-militares en México²⁹, ha sido utilizada como un pretexto para extender y profundizar la represión y la criminalización hacia diversas formas de protesta y de oposición. La reforma al Sistema de Justicia Penal, bajo el manto de impartición de justicia, tiende a facilitar la violación sistemática de las garantías individuales por parte del Estado y del ejército, y pone en riesgo los

28 Ejemplos: Oaxaca, contra la APPO y los municipios autónomos de Reyes Nopala y San Blas Atempa, además de las agresiones contra la región Triqui bajo la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz (2004) del PRI con un total de 521 detenciones; en Cancún, contra una movilización masiva bajo el gobierno de Félix Arturo González Canto, también del PRI, donde hubo 520 detenciones; contra los indígenas nahuas de la organización los Dorados de Villa en Veracruz en junio del 2007 durante el mandato de Fidel Herrera Beltrán del PRI; la ocurrida bajo el gobierno de Patricio José Patrón del PAN-PRD-PT-PVM. A lo largo de la década se realizaron varias detenciones masivas como la del año 2000 con la entrada de la Policía Federal Preventiva a la UNAM con 998 detenciones; la represión contra altermundistas en la ciudad de Guadalajara en 2004, donde hubo denuncias de agresiones sexuales y torturas; la represión masiva en 2006 contra Atenco y en 2007 en el Torito con 232 detenciones; la persecución sistemática contra el pueblo indígena Mepháa, la normal rural de Ayotzinapa, contra los movilizados contra la presa la Parota, en Guerrero con más de 94 detenciones. Los defensores de los derechos humanos también han sido asesinados; Digna Ochoa, un caso emblemático, fue ultimada el 19 de octubre del 2001.

29 A lo largo de la década, según datos públicos, se registra la emergencia de varios grupos armados de diversas características y formas de operación; algunos de ellos sólo han irrumpido esporádicamente y se han conocido más de 20 expresiones distintas. Luego de la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el 28 de junio de 1996, organización que a su vez representaba la unificación de catorce agrupaciones, en los años siguientes a su nacimiento hubo varias escisiones y se conformaron otros grupos armados como el Ejército Popular del Pueblo Insurgente (ERPI). Otro grupo escindido del EPR son las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) que ha realizado acciones de propaganda armada en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos; reivindicaron la colocación de petardos en algunas sucursales de Banamex el 8 agosto de 2001 por lo cual fueron encarcelados injustamente, como se comprobó después, los hermanos Cerezo Contreras y Pablo Alvarado. Además se constituyó el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP) que junto con las FARP, en el 2001, anunció su participación en la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos (CGNJMM), integrada también por el Comando Justiciero-28 de junio (CJ-28). Entre los años 2000-2005 se han conocido manifiestos, proclamas, comunicados, partes de guerra, entre otros, de más de una veintena de expresiones que se reivindican armadas. (Lofredo, 2005)

derechos políticos, jurídicos y humanos de los acusados³⁰. De acuerdo a los datos del censo sobre prisión política en México, durante la presidencia de Vicente Fox Quesada (2000-2006) fueron detenidas 1.576 personas por motivos políticos y, en la administración de Felipe Calderón, hasta 2008, se había detenido a 337 personas. (Arenas y Gutiérrez, 2008: 25)

El caso de Atenco destaca por las flagrantes violaciones cometidas contra los derechos humanos. Sin embargo, la impunidad prevaleció, las acciones represivas policíacas no fueron investigadas y mucho menos sancionadas. Paradójicamente, la ley sancionó con condenas increíbles a los vejados.

La persecución política se ha instrumentado con desapariciones, asesinatos, despidos laborales, intimidación, hostigamiento, amenazas y encarcelamiento. El perímetro de las víctimas de la violencia política se ha extendido, como lo muestra el incremento de homicidios contra comunicadores³¹. En respuesta se han constituido Frentes y Foros Nacionales contra la Represión que muestran, en positivo, la capacidad de respuesta de los movimientos sociales y, al mismo tiempo, dan cuenta de un repliegue defensivo frente a la ofensiva reaccionaria³².

APERTURA

El balance de la década tiene un sabor agridulce. Por una parte, como hemos mostrado, resalta el crecimiento de experiencias de movilización y lucha social, así como destaca la politización de masas que ha acompañado la formación del movimiento obradorista, en torno al cual tienden a confluír importantes contingentes populares y organizaciones sociales. Al mismo tiempo, es innegable que la década está plagada de derrotas que muestran los límites de las fuerzas y las dificultades de producir impactos políticos de fondo. En este sentido, si bien observamos un proceso de acumulación de fuerzas populares, reconocemos que no ha sido suficiente para poner en jaque la estructura oligárquica de poder —expresada en el binomio PRI-PAN— que sigue promoviendo las políticas neolibera-

30 El ejemplo más reciente, es la propuesta de figura del “secuestro extorsivo político”, prevista en el predictamen de la nueva Ley General Antiplagios elaborado en la Cámara de Diputados, en la cual se equipara la retención de funcionarios por demandas sociales con el delito de privación ilegal de la libertad.

31 Un caso emblemático es el de las dos mujeres de la radiodifusora independiente *La voz que rompe el silencio*, otro ejemplo es la cifra de asesinatos contra periodistas de los cuales del año 2000 hasta la fecha se han contado 59 asesinatos y 8 desapariciones según datos de la CNDH.

32 El Frente Nacional contra la Represión (FNCR) se reconstituyó en junio del 2007.

les en México. No deja de ser paradójico que, en medio de la crisis de legitimidad ocasionada por el fraude de 2006 y la consiguiente pérdida de credibilidad del sistema político, no se hayan erigido alternativas a la institucionalidad existente y, tanto los partidos como las instituciones públicas, se mantengan a flote en medio de la descomposición del conjunto del sistema político y la militarización de las políticas de Estado. Finalmente, la deriva conservadora e institucionalista del grupo dirigente del PRD completa el cierre autorreferencial del sistema y de la clase política, eliminando una anomalía que no dejaba de dialogar con los movimientos.

En el fondo, en el México de hoy se compensan las tendencias a la movilización y a la desmovilización, en un juego de fuerzas que tiende a crear *impases* en el escenario político y, en última instancia, favorece el proyecto conservador.

La proliferación de frentes de luchas, sin bien da cuenta de un dinamismo resistencial y de la persistencia de un campo popular de oposición, no parece tener la consistencia suficiente para impedir las iniciativas neoliberales del gobierno panista y la complicidad expectante de un PRI volcado pragmáticamente hacia las elecciones del 2012. Aún cuando el capital moral y político de López Obrador pudiera convertirlo en una alternativa a la hora de los comicios presidenciales, no deja de resultar preocupante que frente a las urgencias del presente, ni su movimiento, ni la suma de las luchas que se desarrollan en el país puedan ejercer, al menos, un poder de veto a las políticas empresariales, neoliberales y represivas. Una vez más, la política mexicana parece inexorablemente atrapada en redes conservadoras de poder y en el ritmo sexenal marcado por las elecciones fraudulentas y la esperanza frustrada del recambio institucional, que fragilizan la energía de la masa popular trabajadora y su acción política autónoma dentro y fuera de las instituciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Almeyra, Guillermo 2006 “EZLN: política y poder desde los movimientos sociales” en *Bajo el Volcán [en línea]* Vol. 6. N° 10. En <<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28661002>>.
- Almeyra, Guillermo y Thibaut, Emiliano 2006 *Zapatistas: un mundo nuevo en construcción* (Buenos Aires: Maipue).
- Arenas, Gloria y Gutiérrez, Eugenia 2008 “La ruta de la represión. Apuntes para una historia de la represión política en México. Primera Parte: La prisión política en México (1990-2008)” en <<http://mujeresylasextaorg.files.wordpress.com/2008/10/la-ruta-de-la-represion-parte-i-prision-politica-2008.pdf>>.

- Bartra, Armando 2003 “Descifrando la treceava estela” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año IV. N° 12, septiembre-diciembre.
- Bartra, Armando 2006a “Amarillos mares. Escaramuza por la presidencia, batalla por la nación” en *Memoria* (México: CEMOS) N° 210, agosto.
- Bartra, Amando 2006b “Las dos vías” en *Memoria* (México: CEMOS) N° 212, octubre.
- Camacho Guzmán, Damián Gustavo 2008 “Atenco arma su historia”, Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, UAM, Xochimilco.
- Castellanos, Laura 2008 *Corte de caja. Entrevista al Subcomandante Marcos* (México: Bunker/Alternó).
- Comandanta Esther 2001 “Mensaje ante el Congreso de la Unión, 28 de marzo” en *La Marcha del color de la tierra. Comunicados, cartas y mensajes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del 2 de diciembre del 2000 al 2 de abril del 2001* (México: Editorial Rizoma).
- Comandante Brus Li 2003 “Mensaje del 1° de enero” en Muñoz Ramírez, Gloria *20 y 10 el fuego y la palabra* (México: La Jornada Ediciones/Rebeldía).
- Comandante Tacho 2003 “Mensaje del 1° de enero” en Muñoz Ramírez, Gloria *20 y 10 el fuego y la palabra* (México: La Jornada Ediciones/Rebeldía).
- Comité de Seguimiento del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana de México. OSAL 2008 “La reforma al sector energético. La resistencia nacional popular a un proyecto privatizador transnacional” en <<http://www.clacso.edu.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/produccion-academica/analisis-de-coyuntura/mexico/2008/informe-de-coyuntura-marzo-abril-2008/view>>.
- Cortés Joel, Vicente 2006 “El movimiento magisterial oaxaqueño. Una aproximación a sus orígenes, periodización, funcionamiento y grupos políticos sindicales” en Vicente Cortés, Joel (coord.) *Educación, Sindicalismo y Gobernabilidad en Oaxaca* (México: SNTE).
- CCRI-CG EZLN 2001 “Comunicado del 3 de diciembre” en *La Marcha del color de la tierra. Comunicados, cartas y mensajes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del 2 de diciembre del 2000 al 2 de abril del 2001* (México: Editorial Rizoma).
- CCRI-CG EZLN 2005 Sexta Declaración de la Selva Lacandona en <<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/especiales/2>> .
- Figueroa Ibarra, Carlos 2007 “Camino distintos, ¿destinos distintos?” en *Bajo el Volcán [en línea]* Vol. 7. N° 11. En <<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28671108>>.

- Gilly, Adolfo 2008 “México: la entrega del petróleo: quiénes, por qué, para qué” en <<http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1962>>.
- González Casanova, Pablo, 2009 (2003) “Los ‘Caracoles’ zapatistas: redes de resistencia y autonomía (ensayo de interpretación)”, en Roitman Rosenmann, Marcos (comp.) *De la sociología del poder a la sociología de la explotación: pensar América Latina en el siglo XXI*. Pablo González Casanova (Bogotá: Siglo del Hombre Editores/CLACSO).
- La Jornada* 2002 (México) 12 de noviembre.
- La Jornada* 2005 (México) 25 de abril.
- La Jornada* 2009 (México) 28 de octubre.
- Leyva, Rubén (ed.) 2008 *Memorial de agravios, Oaxaca, México* (México: Marabú Ediciones).
- Lofredo, Jorge 2005 “Guerrillas: Cuadro de situación” en <<http://www.cedema.org/ver.php?id=506>>.
- López Obrador, Andrés Manuel 2007 *La mafia nos robó la presidencia* (México: Grijalbo).
- López Obrador, Andrés Manuel 2008 *La gran tentación. El petróleo de México* (México: Grijalbo).
- Martínez Vásquez, Víctor Raúl 2007 *Autoritarismo, movimiento popular y crisis política: Oaxaca 2006* (México: UABJO).
- Muñoz Ramírez, Gloria 2003 *20 y 10 el fuego y la palabra* (México: La Jornada Ediciones/Rebeldía).
- Osorno, Diego Enrique 2007 *Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI* (México: Grijalbo).
- Ramírez Cuevas, Jesús 2003 “El campo en el ojo de huracán” en *La Jornada/suplemento Masiosare*. N° 264, 12 de enero.
- Roux, Rhina 2006 “La otra campaña” *Bajo el Volcán [en línea]* Vol. 6. N° 10. En <<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28661014>>.
- Sosa Elízaga, Raquel 2006 “Por el bien de todos...” *Bajo el Volcán [en línea]* Vol. 6. N° 10. En <<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28661020>>.
- Sotelo Marbán, José 2008 *Oaxaca. Insurgencia civil y terrorismo de Estado* (México: Era).
- Subcomandante Insurgente Marcos 2001 “Comunicado del 29 de abril” en *La Marcha del color de la tierra. Comunicados, cartas y mensajes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del 2 de diciembre del 2000 al 2 de abril del 2001* (México: Editorial Rizoma).

SIMONA YAGENOVA*

RODRIGO J. VÉLIZ**

GUATEMALA: UNA DÉCADA DE TRANSICIÓN

EL AGOTAMIENTO DEL TIEMPO DE LA PAZ Y EL NUEVO CICLO DE LUCHAS POPULARES

Con la firma de la paz en diciembre de 1996¹, se abrieron muchas expectativas en la sociedad guatemalteca. Se pensó que los Acuerdos de Paz podrían constituirse en un nuevo pacto social que abriría el camino a la refundación del Estado y sentarían las bases para consolidar el incipiente y débil proceso de democratización iniciado a mediados de la década de los ochenta. El fin de la guerra abrió oportunidades para determinadas demandas y movimientos, pero a su vez sentó fronteras y límites cuando éstos cuestionaron o entraron en contradicción con la nueva estrategia de acumulación de capital que acompañó los Acuerdos.

Cobra particular relevancia la coincidencia en el tiempo y espacio de la aplicación de las políticas neoliberales con los derivados de

* Coordinadora Área de Estudios sobre Movimientos Sociales FLACSO-Guatemala, autora de diversas publicaciones y artículos sobre el tema, integrante del Consejo Académico FLACSO-Guatemala.

** Antropólogo. Parte del Observador de la protesta social, del Área de Movimientos sociales de FLACSO-Guatemala.

1 Guatemala vivió por un período de 36 años una guerra interna que oficialmente concluyó con la Firma de la Paz firme y duradera el 29 de diciembre del 1996.

los compromisos de la Firma de la Paz. Ello, de manera paradójica, estimuló expectativas y múltiples procesos organizacionales en búsqueda de la transformación del Estado-nación que sí tuvieron éxito en ensanchar espacios políticos y fortalecer la participación ciudadana, pero demostraron resultados exiguos en cuanto a propiciar mayores niveles de igualdad y justicia social.

Los rasgos que caracterizan el ciclo de luchas en el *tiempo de la paz* (1997-2003), podrían analizarse a partir de cómo los movimientos sociales: a) concebían el proyecto de transformación; b) su perspectiva y relación con el Estado; c) sus demandas estratégicas y coyunturales; d) su repertorio de acciones colectivas; e) sus alianzas; f) y su capacidad de construir propuestas y acumular fuerza popular crítica en función de un proyecto de Estado-nación alternativo.

Dado lo limitado del espacio, el análisis se enfocará solamente en algunos de estas variables. Durante el período de 1995 a 2003, el accionar de los movimientos sociales estuvo enmarcado en gran medida por la exigencia de que se cumplieran los *Acuerdos de Paz*. Podría decirse, sin lugar a equivocación, que el principal peso del cumplimiento de estos acuerdos fue asumido por ellos, y no por los gobiernos de turno, para lo que diseñaron un amplio repertorio de acciones como propuestas de contenidos sobre las políticas, programas, proyectos y acciones tanto del Estado como de la sociedad civil; anteproyectos de leyes; actividades de cabildeo, de incidencia política y de sensibilización.

Se partió de la premisa de que mediante la negociación y la búsqueda de acuerdos políticos se podría avanzar en la transformación del Estado y el cumplimiento de sus demandas históricas. La aceptación tácita de las reglas del juego de la democracia formal, sumada a la carencia de una visión estratégica a largo plazo, el debilitamiento de las fuerzas de izquierda y de un instrumento político adecuado a las circunstancias, no permitió que durante los años posteriores a la firma de la paz los movimientos logran acumular un poder social contestatario.

Las primeras señales de crisis de la estrategia de lucha en época posguerra por parte de los movimientos sociales se percibió a partir del año 2003, que puede establecerse como el principio del fin del *tiempo de la paz*. Los factores que visibilizaron esta crisis fueron: a) el estancamiento de los acuerdos de paz en sus partes más sustantivas y el que progresivamente dejaran de ser reivindicadas por los diferentes actores sociales como ejes principales de sus demandas; b) un incremento cuantitativo y un cambio cualitativo de la protesta social y el surgimiento de cuestionamientos críticos frente a los espacios de diálogo y negociación con el Estado; c) se retomaron categorías de aná-

lisis crítico frente al capital y el imperialismo que en los años anteriores habían sido sustituido por el lenguaje “neutral” de la cooperación internacional; d) un distanciamiento aún mayor de los movimientos sociales frente a los partidos de izquierda, quienes tuvieron resultados desastrosos en el proceso electoral 2003; y por último, e) la victoria electoral de un gobierno eminentemente empresarial subordinado a los intereses de los EE.UU. que gobernó por cuatro años a partir de enero del 2004.

El año 2003 inició con una huelga magisterial, primera manifestación prolongada de protesta social desde la década del noventa, que duró 53 días. Lo novedoso de esta huelga residió en que los trabajadores de la educación volvieron a tomar las calles e implementaron las más diversas medidas de protesta. Bloqueos de carreteras, concentraciones masivas, toma de edificios públicos, fronteras y aeropuertos, así como la implementación de marchas simbólicas. Constituyó una ruptura con la manera en que los movimientos sociales habían planteado sus demandas después de la firma de la paz.

La importancia de esta prolongada jornada de protesta –cuyas demandas principales giraron alrededor de la defensa de la educación pública, aumentos salariales y un rechazo a las políticas neoliberales– residió en que logró sacar a la luz pública la necesidad de fortalecer las alianzas entre los movimientos sociales, y permitió romper el *mito* de que las luchas *callejeras* ya no tenían cabida en la época de posguerra.

El control de la administración del nuevo gobierno, dentro del marco del proyecto del ALCA² –CAFTA– Plan Puebla Panamá, buscó asegurar una debida repartición de ganancias mediante la apertura incondicional del mercado a las empresas transnacionales, completando el ciclo de privatizaciones iniciado ya en la década del ochenta. Este gobierno no tardó en dar señales de su poca apertura hacia las demandas sociales y populares, y de su desinterés por dar continuidad a los compromisos adquiridos dentro del marco de los Acuerdos de Paz³.

El estancamiento en la resolución de las múltiples reivindicaciones del movimiento campesino, sindical, indígena, de derechos humanos y mujeres, junto con la naturaleza pro-empresarial de las medidas gubernamentales y la intención de elevar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, motivaron a las distintas organizaciones a convo-

2 Área de Libre Comercio de las Américas.

3 A sesenta días de haber asumido el gobierno de la Gran Alianza Nacional, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) denunció desalojos violentos de más de 200 familias en la parte norte del país y la existencia de 50 órdenes de captura contra líderes campesinos e indígenas.

car a una huelga general el 8 de junio de 2004. Esta se constituyó en la primera huelga respaldada intersectorialmente desde principios de la década del noventa. Durante esta jornada de lucha se realizaron manifestaciones, bloqueos de carretera y tomas de edificios públicos con la finalidad de presionar al gobierno a sentarse a la mesa de negociación y acceder a un largo pliego de peticiones que abarcaban demandas vinculadas a la problemática agraria, laboral, salarial y fiscal. De cara a la firma del RD-CAFTA, se exigió al Gobierno de la República llevar a cabo una campaña nacional de divulgación para que la población pudiera tener la posibilidad de conocer el contenido del tratado, institucionalizar las audiencias públicas para que las diferentes organizaciones y sectores sociales se manifestaran al respecto, y crear una comisión con participación de diputados del Congreso de la República y delegados de los movimientos sociales para evaluar su impacto. A pesar del compromiso del gobierno en dar cumplimiento a estas demandas, las únicas resueltas favorablemente fueron el que se frenara el incremento al IVA y gravar los ingresos mayores a Q 36.000, el aguinaldo, indemnización y bonificación anual de los sectores obreros.

El 12 de octubre de 2004, Día Internacional de la Resistencia Indígena, salió a luz pública la conformación de la coordinadora intersectorial del Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP)⁴ que aglutinó en su seno a organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, pobladores, magisteriales y ONG. Esta Coordinadora constituyó el primer intento desde la firma de la paz en construir una amplia unidad de acción entre diferentes movimientos sociales.

Dada la falta de voluntad política del gobierno de turno para abrir el debate y consulta sobre la ratificación del RD-CAFTA, fue esta la reivindicación que permitió importantes niveles de unidad de acción en los meses posteriores para que no se aprobara. El 28 de enero de 2005 ingresó al Legislativo la iniciativa de ley y se esperaba que fuera conocida por el pleno durante la semana del 31 de dicho mes al 4 de febrero. Las organizaciones integrantes del MICSP intensificaron sus esfuerzos por impedirlo, recaudando más de 25.000 firmas pidiendo retirar el RD-CAFTA de la agenda del Legislativo, realizando foros públicos y actividades de cabildeo con los diputados de las distintas bancadas. A partir de febrero, se combinaron estas acciones con distintas actividades de protesta social, la mayoría de las cuales se concentraron en la ciudad

4 El MICSP exigió el cumplimiento de las demandas planteadas el 8 de junio de 2004 e incluyó nuevas demandas, tales como el rechazo a los proyectos de minería a cielo abierto y el cese de la represión al movimiento campesino. Esta coordinadora jugó un papel importante en unidad de acción durante los años 2004-2006, fecha a partir de la cual comenzó a desintegrarse sin que le sustituyera otra instancia similar.

capital, especialmente en los alrededores del Congreso de la República. Durante marzo se ampliaron e intensificaron las luchas populares para impedir la ratificación parlamentaria del acuerdo, así como la represión a los manifestantes. Frente a la sanción parlamentaria, con carácter urgente, del Decreto 31/2005 el 10 de marzo –que ratificaba dicho tratado– surge la convocatoria al paro nacional el 14 de marzo, en el cual participaron decenas de miles de personas en todo el país, la cual fue severamente reprimida por las fuerzas gubernamentales.

Las jornadas de lucha en contra del tratado de libre comercio tuvieron un alto valor simbólico y político. Las demandas del movimiento tuvieron un contenido anti-imperialista y reflejaron fuertes críticas al capitalismo. La respuesta gubernamental a las protestas sociales confirmó lo que ya todos sabían: el tiempo de la paz se había desvanecido. Con este ciclo de protesta, se cerró una coyuntura en que los diferentes movimientos sociales con proyección nacional encontraron ejes articuladores alrededor de los cuales accionar críticamente; los cinco años posteriores estarían marcados por una búsqueda de redefinición estratégica que ha avanzado de manera desigual, imponiéndose de manera más aguda la fragmentación y dispersión de sus luchas frente a los poderes fácticos –Estado y élites del país.

La evidencia empírica apunta a que se asiste a una crisis de aquellos movimientos⁵ que en el pasado reciente actuaron con beligerancia, propiciaron la articulación en el campo popular y nutrieron las perspectivas estratégicas de transformación del modelo político y económico existente. Esta crisis tiene causas múltiples, como dificultades en los mecanismos de representación, actualizar concepciones y formas organizativas; la no apropiación de los pensamientos y prácticas contra-hegemónicas que se construyen desde su base y en las trincheras de lucha; debilidades en los procesos de formación política y estancamientos en los debates estratégicos en torno a alternativas del modelo político y económico existente.

Un factor fundamental que contribuyó a ello, fue el progresivo debilitamiento de las izquierdas partidarias y especialmente de la URNG⁶ cu-

5 Se cuenta con una base de datos de información cualitativa y cuantitativa del accionar de los principales movimientos sociales desde octubre del 2004 hasta la actualidad. El procesamiento de esta información, mediante diversas investigaciones, cuadernos de debate, y un intercambio permanente con estas fuerzas sociales, permite sostener que existe una crisis en aquellas organizaciones que en el pasado constituyeron una referencia nacional, especialmente el movimiento sindical, campesino y espacios de unidad de acción que aglutinaban a la mayoría de las expresiones organizativas populares.

6 Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) constituida en 1982 por las diferentes organizaciones guerrilleras, el Ejército Guerrillero de los Pobres

yos dirigentes no tuvieron la capacidad de implementar reajustes tácticos y estratégicos que permitiesen construir un sujeto político contestatario al sistema en la época posguerra. Su alejamiento de las luchas populares, disputas internas entre sus líderes históricos, e incapacidad de construir un pensamiento crítico que le permitiese situarse como referente alternativo en un contexto de una ofensiva neoliberal; contribuyeron a que se desdibujara la perspectiva estratégica del cambio revolucionario, e influyeron en que las múltiples luchas sociales no lograsen trascender, ni acumular en una direccionalidad más audaz de cambio social.

En este contexto, la enorme riqueza de experiencias organizativas y conocimientos acumulados, en vez de confluir, se cerraron sobre sí mismos, vigorizando las identidades particulares en desmedro de la construcción del sujeto popular colectivo, lo que le otorgó suficiente campo de maniobra política a las élites y gobierno de turno, para dialogar de manera separada con las diferentes fuerzas sociales, fragmentar la demandas, neutralizar potenciales conflictos y, sobre todo, imponer su propia agenda política.

LIBRE COMERCIO Y NUEVA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Cuando el gobierno de la Gran Alianza Nacional (GANAN), una coalición de grupos empresariales y partidos políticos ubicados a la derecha del espectro político guatemalteco, llegó al poder en el 2004, pocos se imaginaban que, paradójicamente, sus nuevas políticas económicas y sociales, significativamente impregnadas del pensamiento neoliberal, irían a revitalizar las luchas sociales del país.

Como se dijo anteriormente, la Firma de los Acuerdos de Paz generó un significativo *impasse* político en donde muchas organizaciones sociales, por un lado, pasaron por un proceso catalogado localmente como de *ongenización*, y se volcaron hacia el Estado para exigir una solución a sus diversas problemáticas. El desgaste de esta forma de hacer política, previamente descrito, estaba tocando ya su límite al momento en que la GANAN tomó las riendas institucionales del Estado.

Guatemala, junto con los cinco principales países centroamericanos, pasó en las décadas de los sesenta y setenta por fallidos procesos de industrialización regional y encuentra en la actualidad, al contrario de muchos países latinoamericanos, un estado precario de su industria interna⁷. El objetivo de la GANAN, primordialmente res-

(EGP), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización de Pueblos en Armas (ORPA) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y fue la parte que suscribió la firma de la paz con el Estado de Guatemala el 29 de diciembre de 1996.

7 Consúltense al respecto Guerra-Borges (1993); Bulmer-Thomas (1988); Dosal (2005).

paldado por modernas facciones de las élites del país que lograron una inserción satisfactoria en el mercado mundial, era atraer fuertes cantidades de inversión extranjera con el fin, entre otros, de aparejar este capital con el local. El gobierno enfatizó en nuevos proyectos, de infraestructura y productivos, que aparecían como favorables para los grupos que estaban ejerciéndole presión. Las líneas de inversión que enfatizó el gobierno eran las de turismo, manufactura –especialmente maquila–, *call centers*, agroindustria, minería y petróleo, y, finalizando, la producción y distribución de la energía eléctrica. Para lograr esto, la GANA buscó crear nuevas instituciones⁸ que ayudaran a buscar y ubicar la inversión necesaria, además de marcos jurídicos que la propiciaran y protegieran. En sintonía con esto, está la aprobación, calificada como de *urgencia nacional* por el Legislativo, del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norteamérica, previamente descrito. Según datos del Banco de Guatemala, después de la llegada de la GANA al Estado y, sobre todo, la implementación del TLC, la inversión extranjera directa aumentó como nunca antes se había visto en el país. En el 2002 apenas rebasaba los US\$ 100 millones; en el primer año de gobierno de la GANA aumentó a US\$ 296 millones y para el primer año del siguiente gobierno ya llegaba a los US\$ 837 millones 800 mil. De esta inversión extranjera, un 54% pertenece a Norteamérica –43,8% para Estados Unidos. La mayor cantidad de inversión se ubica en la manufactura, el comercio y la electricidad.

En respuesta a la política económica del gobierno de Berger, surgieron nuevos escenarios de conflictos, y una reestructuración de los ya existentes. Dado el reducido espacio, pasaremos a describir cómo las tres grandes áreas de inversión –minería, producción y distribución de energía– ocasionaron serios conflictos y vieron resurgir de las cenizas de la guerra, terminada diez años atrás, el sujeto político nucleado en la comunidad campesina e indígena, y otros que vinieron a mostrar el desgaste de las organizaciones campesinas. Comencemos con este último.

FALTA DE TIERRAS Y CRISIS ORGANIZATIVA

El área rural en Guatemala se ha encontrado en crisis desde hace décadas, el modelo organizativo que enfatiza la concentración de la tierra no se ha intentado resolver seriamente desde mediados del siglo pasado con el paso de los gobiernos revolucionarios por el Esta-

8 Entre estas nuevas instituciones gubernamentales están el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) y la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera Directa (Invest in Guatemala).

do⁹. Desde entonces las políticas agrarias de los gobiernos han estado sustentadas en la idea de la colonización de terrenos baldíos y, aún más desde la Firma de la Paz, en la reforma agraria de mercado, anteriormente promocionada por el Banco Mundial¹⁰. El énfasis en la agroindustria exportadora, con especial enfoque en la nueva producción para el mercado de agro-combustibles, ha venido a agudizar la carencia de tierra en el campo, provocando que miles de pequeños productores campesinos se queden sin tierras dados los nuevos procesos de reconcentración de la tierra del gran capital agroindustrial, formando grandes contingentes de población en búsqueda de tierras para la subsistencia (Cfr. Alonso *et. al.*, 2008).

Esta agudización de la crisis en el agro, a la que se suman sectores campesinos que sufren de hambruna crónica¹¹, trágicamente vino a la par de una crisis, de distintas aristas, de las organizaciones campesinas. Las usuales soluciones que se negocian entre las organizaciones campesinas y los gobiernos, al menos en los últimos años, y variando de organización en organización, ha sido presionar al gobierno por cambios estructurales mientras se arrienda la tierra a pequeños productores campesinos, muchas veces sin algún tipo de apoyo técnico. Esto ha provocado que el problema de la tierra se mantenga vigente, ya que pocos son los campesinos que pueden pagar las deudas que contraen, terminando vendiendo su tierra después de algunos años. La última de las propuestas de las organizaciones campesinas, en conjunto con otros miembros de la llamada sociedad civil y el Estado, ha sido la formulación de una propuesta de Ley de Desarrollo Rural

9 La Revolución de Octubre en Guatemala, llamada por el escritor Luis Cardoza y Aragón *los diez años de primavera en el país de la eterna tiranía*, se dio entre octubre de 1944 y junio de 1954, luego de ser derrocada por mercenarios pagados por las élites locales más conservadoras y el gobierno norteamericano. El caso está bastante estudiado, para una consulta pueden buscarse los excelentes estudios de Piero Gleijeses (1992) y el de Tischler (2001).

10 Guerra-Borges (2006: 259-262) afirma que la situación agraria, en cuanto a sus problemas, es la misma que hace 50 años: un número relativamente bajo de empresas agrícolas y una gran cantidad de explotaciones minúsculas que suman una mínima proporción de la propiedad de la tierra. El desaparecimiento de las tierras ociosas de mediados del siglo pasado ha ocasionado que al menos 309 mil personas no posean tierra ni un trabajo estable en el área rural. Guerra-Borges llega incluso a citar al Banco Mundial para concluir que la *reforma agraria de mercado* que trataron de llevar a cabo la forma estatal militar y los siguientes gobiernos civiles fracasó rotundamente, y seguirá empeorando hasta que se reestructure la tenencia de la tierra.

11 El último de los estallidos de muertes por hambruna se desató en agosto y septiembre del 2009, cuando decenas de niños fallecieron por carecer de alimentación. La precaria situación de vastos sectores campesinos se ha visto agudizada por las sequías no previstas de algunas áreas del país, en donde las famélicas cosechas que se realizan fueron perdidas en un porcentaje bastante grande.

Integral, que continúa engavetada en el Congreso y que ha recibido fuertes críticas, pese a lo agudo del conflicto agrario, de parte del sector empresarial¹².

CAPITAL EXTRACTIVO Y RESISTENCIA COMUNITARIA

Desde el inicio de su gestión, la minería de metales y la producción de petróleo fueron una prioridad para la GANA, y el actual gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) (2008-2011) ha continuado con esa línea. Muchos de los beneficios, contratos y licencias mineras se han logrado, en mayor medida, por las relaciones que se han establecido entre el capital local, el transnacional, los representantes legales de ambos, y funcionarios públicos clave (Solano, 2009: 4). En lo que respecta a la minería, la mayoría de las concesiones se han realizado en el occidente del país, donde se encuentran ubicados una gran mayoría de municipios y comunidades maya-hablantes. Si bien las licencias de exploración son muchas, son pocas las que se han llevado a cabo, dada la masiva negativa de la población local¹³.

El primer enfrentamiento entre los pueblos indígenas, el gobierno y la compañía Montana Exploradora a cargo del proyecto Marlin –que implementa proyectos de minería de oro y plata en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos– se produjo en diciembre del 2004. Los habitantes de la aldea Los Encuentros, situados en el departamento de Sololá, en el occidente del país, impidieron el paso de un cilindro de grandes dimensiones destinado a la empresa minera en el departamento de San Marcos. Las autoridades indígenas trataron de negociar con el gobierno de la República el paso del cilindro condicionándolo a que se suspendieran las licencias de exploración y explotación de metales a cielo abierto en el departamento de Sololá pues tenían información –desde el mes de febrero de 2004– de la existencia de licencias para tres proyectos mineros que no habían sido llevados a consulta con las autoridades indígenas del departamento. Uno de estos proyectos mineros se ubica en la cuenca principal del lago con lo que, en opinión del líder indígena integrante del Movimiento So-

12 Puede consultarse Santa Cruz (2007) para una revisión general de la postura de las organizaciones campesinas y la Ley de Desarrollo Rural Integral.

13 Un caso que se ha mostrado bastante conflictivo es el de comunidades del municipio kaqchikel de San Juan Sacatepéquez y el monopolio Cementos Progreso. El caso está detallado en Comité de seguimiento del conflicto social y la coyuntura latinoamericana *Documento de trabajo No. 97*. (CLACSO/FLACSO-Guatemala). Disponible vía electrónica en: <<http://www.clacso.org.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/produccion-academica/analisis-de-coyuntura/guatemala/2008/informe-de-coyuntura-guatemala-julio-agosto-2008/view>>.

lolateco contra la Minería, Carlos Guárquez¹⁴, se contaminarían los nacimientos de agua más importantes de la región.

Este cilindro estuvo varado en la carretera interamericana por más de treinta días, vigilado por los pobladores y las autoridades indígenas del municipio mientras éstas intentaban negociar con el gobierno su pliego de peticiones que finalmente no fue atendido. El 11 de enero de 2005 el gobierno envió miles de efectivos de las fuerzas policíacas y el ejército para garantizar el paso del cilindro por la carretera interamericana. Se desencadenó un enfrentamiento entre pobladores y fuerzas de seguridad que tuvo como saldo un campesino muerto y 16 personas gravemente heridas. Debido a la resistencia que la población indígena sololteca libró en contra de las fuerzas de seguridad, el gobierno inició un proceso judicial contra las autoridades indígenas, a quienes se les acusó de terrorismo y sedición. Los pobladores de Sololá recibieron la solidaridad de las autoridades indígenas de otros departamentos del occidente del país, el Consejo Regional de Pueblos Indígenas de los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá.

Los casos de los municipios de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán, ambos del departamento de San Marcos, al occidente del país, pueden servir como breve ejemplo de la continuación del conflicto. Ambos municipios se encuentran en la cuenca del río Cuilco, y la constituyen poblaciones maya-sipakapense y maya-mam con más de 35 mil habitantes en conjunto.

En el segundo de estos municipios, la empresa que realiza las operaciones mineras lleva el nombre de Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Gold Corp. Esta empresa obtuvo la aprobación del estudio de impacto ambiental en septiembre de 2003, iniciando sus explotaciones del proyecto en el 2005.

Después de mostrar a la población los supuestos beneficios de la minería, comenzaron los problemas para las comunidades, que vieron cómo sus casas comenzaban a rajarse por las explosiones de la mina, sus ríos se secaban y los que quedaban con agua eran contaminados por los residuos de la actividad minera. Las primeras manifestaciones de protesta por parte de la población de Sipakapa ocurrieron en febrero del 2004. Alrededor de estas protestas, con un fuerte apoyo de la Diócesis de San Marcos, se celebraron cabildos abiertos, manifestaciones y bloqueos para impedir el paso de cilindros de la empresa. Estas acciones se sintetizaron, tras varios esfuerzos fallidos en presionar

14 Entrevista realizada con Carlos Guárquez por parte del Observatorio de movimientos, demandas y acción colectiva, del Programa de la Sociedad Civil y Movimientos Sociales, FLACSO-Guatemala, en febrero de 2005.

a través de órdenes judiciales y con la Corte de Constitucionalidad, en la consulta popular llevada a cabo el 18 de junio del 2005 con la participación de vecinos de las 13 aldeas del municipio, bajo el aval jurídico del Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Código Municipal¹⁵. En once de ellas la mayoría se manifestó en contra de la explotación minera.

Esta consulta popular fue la catalizadora de decenas de consultas más que se realizaron por todo el país, pero especialmente en la zona indígena-maya de Occidente. Hasta octubre del 2009 se habían realizado en todo el país casi 40 consultas comunitarias. En todas ellas el rechazo a los grandes proyectos del capital minero fue casi absoluto.

Estos procesos locales de rechazo al capital minero han generado lazos que han ido desde lo local a lo municipal, y así a lo regional. Estas confluencias de comunidades tienen como fin último terminar con los grandes proyectos impulsados por las empresas transnacionales y nacionales. De esta manera han ido surgiendo regiones enteras que se declaran libres de minería. Este es el ejemplo de la declaración del Pueblo Huista como *Libre de Minería* (perteneciente a los municipios de Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana Huista, Nentón y Concepción Huista, todos del departamento nor-occidental de Huehuetenango). La formación de numerosas organizaciones regionales como el Consejo de los Pueblos de San Marcos, la Asamblea por la Defensa de los Recursos Naturales en Huehuetenango, y el Consejo de los Pueblos de Occidente deben verse como formas de lucha que buscan frenar de manera colectiva y regional los avances del capital. Además se constituyen como espacios de discusión en donde otros temas, además del minero, son tratados por los líderes locales y regionales, comenzando a buscar soluciones más amplias y a largo plazo.

LA PRIVATIZACIÓN DE LA ENERGÍA Y PROYECTOS ENERGÉTICOS

La última de las líneas de inversión que se tocará en este espacio es la llamada reconversión energética. El conflicto que se ha desatado entre las comunidades indígenas y el capital transnacional y nacional en estos proyectos ha venido de dos lados. Uno de ellos ha sido con la producción de energía y la construcción de hidroeléctricas; el otro se ha dado con la distribución de energía a cargo de la española Unión Fenosa. Cada uno de estos conflictos ha ido encontrando propuestas

15 Las consultas comunitarias tanto en Sipacapa como en los otros municipios se han sustentado en los siguientes artículos. Código Municipal Artículo 63; Artículo 65, Artículo 66; el Convenio 169 de la OIT Artículo 15; y Constitución de la República de Guatemala, Artículo 66; Comisión pastoral paz y ecología (COPAE, boletín) consultado el 21 de octubre de 2006, 12:30 h.

de solución de parte de las mismas comunidades en las que se integran ambos problemas, según el caso y las comunidades afectadas. Comencemos por situar el problema.

Los cambios en materia energética comenzaron dos gobiernos atrás, al momento de privatizarse el servicio de energía proveído por el Estado guatemalteco. Al aprobarse la Ley General de Electricidad se separaron las funciones de las dos empresas estatales que brindaban el servicio en todo el país¹⁶. Esta separación buscaba que el capital privado invirtiera en cada servicio específico. La empresa de distribución de la energía pasó a manos de Unión Fenosa, de capital primordialmente español, que formó las empresas Distribuidora de Energía de Oriente, SA (DEORSA) y Distribuidora de Energía de Occidente, SA (DEOCSA). Cada una de ellas obtuvo el monopolio de la distribución de la energía en el oriente y occidente del país, respectivamente. Desde hace más de cinco años han surgido conflictos entre estas empresas y las comunidades a las que se les presta el servicio. Se dieron múltiples protestas de los pobladores por cobros arbitrarios, contadores de energía alterados o arruinados, cobro de luz pública sin existir postes de alumbrado, y presiones para proveer mano de obra gratuita para la instalación de éstos. Las diferentes comunidades, por esto y ante la falta de una respuesta contundente de la empresa, han respondido de diferentes maneras. Todas han protestado continuamente y han hecho alianzas entre comunidades; mientras otras comunidades, las más beligerantes, han decidido suspender sus pagos a la empresa desde hace años.

En cuanto a la producción de energía, lo que las políticas en materia energética han buscado es modificar la estructura de generación de electricidad, altamente dependientes de los hidrocarburos, conocidos por sus precios sumamente volátiles (Solano, 2009a). Se pretende ubicar al país como uno de los principales generadores y suministradores de electricidad en el istmo, que igualmente se encuentra necesitado del vital servicio para poder competir con electricidad más barata. A largo plazo, el gobierno actual de la UNE busca que sea a través de la producción hídrica y, en menor medida, carbonera de energía que se realice el cambio de la dependencia de los combustibles fósiles. Por esto se han otorgado numerosas licencias (Cfr. Solano, 2009a) a diferentes empresas, en su mayoría transnacionales, que buscan proveer de energía a la red nacional con el fin de venderla, tanto nacional como internacionalmente.

Esto ha provocado numerosos choques con comunidades indígenas del occidente y nor-occidente del país, en donde la población ar-

16 Se pasó a separar las funciones, según la referida ley, en generación, comercialización, distribución y transmisión.

gumenta, en muchos casos con razón, que los ríos de los que se valen para realizar sus actividades diarias se secarían o se reducirían fuertemente, además de las amenazas de desalojo que han recibido muchas de ellas¹⁷. La respuesta generalizada ha sido la misma que con el capital extractivo mencionado líneas atrás: las consultas comunitarias y un masivo rechazo a cualquier proyecto hidroeléctrico que venga de capital privado, especialmente transnacional, y del Estado.

EL SUJETO COMUNIDAD

El resurgimiento del sujeto comunidad en la escena pública viene a ser un significativo respiro para las luchas sociales del país, que parecían haberse estancado, en otras ramas como la campesina y la sindical, después de la firma de la paz. Las comunidades indígenas, ahora vistas como pueblos indígenas, específicamente de ascendencia maya, pasaron fuera de la luz pública luego de que fueron masacradas o puestas bajo un férreo control militar y paramilitar durante los años más cruentos de las dictaduras militares.

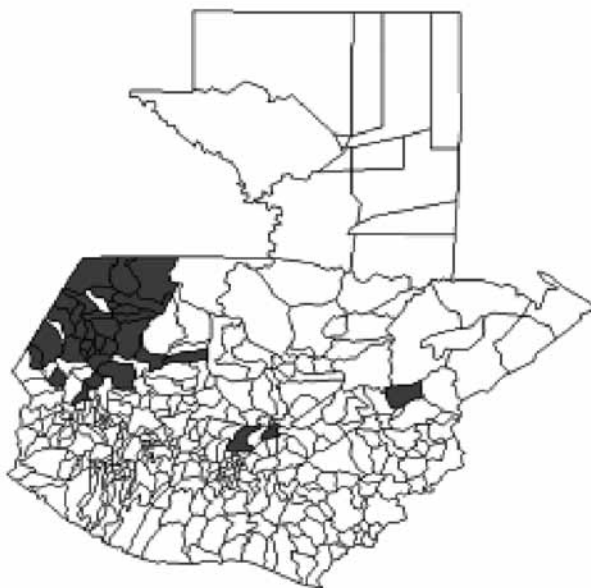
En la presente década, a casi veinte años de lo mencionado, surgen de nuevo en la arena política con la presencia directa del capital transnacional en alianza con el nacional en sus lugares de origen y vivencia. Usualmente el contacto con el capital había sido a través de migraciones temporales a las plantaciones de diferentes productos para exportación. Los cambios en las políticas económicas del Estado, fuertemente condicionado por el ala más globalizada del capital local, han hecho que aparezcan como una de las pocas y significativas luces de transformación en el país, aunque por el momento sea aún un proceso embrionario.

El carácter de este sujeto, así como sus medios de lucha, están fuertemente condicionados por su situación, en este caso por su ascendencia maya y su ocupación principal, pequeños propietarios campesinos o asalariados agrícolas –aunque existen pequeños sectores comerciantes y académicos locales que confluyen en los mismos espacios. Pese a que es difícil hacer una caracterización pormenorizada de este sujeto, dada

17 Un caso que ha generado rechazo generalizado ha sido la construcción de la represa Xalalá, cerca del municipio del Ixcán, al nor-occidente del país. La construcción de la Represa Xalalá piensa realizarse sobre los ríos Copón y Chixoy, al sur de Ixcán y oeste de Alta Verapaz. A inicios de noviembre se realizó la última licitación para ofertantes en la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica, sin embargo se declaró desierta tras no existir ningún ofertante. Las empresas que se habían mostrado interesadas argumentaron que no vieron en la oferta del Estado guatemalteco suficiente énfasis en el tema del control y trabajo previo con las comunidades, importante para la visión de la empresa en vista de los numerosos problemas que han ocurrido con otros *mega-proyectos*. Pese a esta negativa de las empresas y de la población, el gobierno ha declarado su interés en llevar a cabo el proyecto, tal vez estableciendo una alianza público-privada.

su heterogeneidad que varía de comunidad en comunidad y de etnia en etnia¹⁸, sí podemos encontrar algunas constantes en sus luchas. La primera es que todas se sirven de la consulta comunitaria, esto es, del debate en pleno prolongado entre vecinos sobre diferentes tópicos con el fin de votar si se está a favor o en contra del problema planteado. Esto hace que la militancia de los comunitarios adquiera un atributo distinto al que se puede observar en las luchas ciudadanas, ya que se vuelve una cuestión diaria que forma parte de cada una de las vivencias de los vecinos. Las organizaciones regionales que van surgiendo colaboran a expandir estos lazos para que no queden aislados. Otra constante es cómo sus organizaciones están atravesadas por la cosmovisión propia de la comunidad, etnia o municipio, cosa que no ocurre, por ejemplo, en muchas organizaciones de nivel nacional, en donde suelen dirimirse y ocultarse estas particularidades. La organización comunitaria y regional es, de esta manera, *sui generis*.

Mapa 1
Municipios en los que se han realizado consultas populares



Fuente: Área de Movimientos Sociales (Guatemala: FLACSO) Enero 2010.

18 En Guatemala existen 22 etnias de ascendencia maya, además de una de ascendencia africana (garífunas) y la xinca.

Esta resistencia que se articula en torno al lema estratégico de *La defensa del territorio* está dando muestras de importantes niveles de adhesión comunitaria en la parte occidental del país. Abarca ya los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango y Quiché, mayoritariamente indígenas. Lo que hace particularmente interesante este proceso es que cuestiona no solamente el fundamento liberal del ordenamiento territorial (departamental/municipal, y por región), la naturaleza etnocéntrica y racista del Estado y su vínculo con el capital como parte de una larga historia de despojos y ocupación de su territorio; sino que resignifica su territorio como un espacio de lucha frente las amenazas de despojo de las empresas transnacionales.

Estas nuevas luchas regionales, tienen como protagonistas principales a los pueblos indígenas, quienes demandan el respeto a su cultura, instituciones, autoridades, sistema de derecho y su territorio. El contundente NO derivado de las consultas populares en las cuales han participado ya decenas de miles de hombres y mujeres, ha fortalecido lazos, diálogos y alianzas entre quienes, hasta hace poco, estaban separados por fronteras lingüísticas, de identidad localista y geográficas. Lo que comenzó como una lucha todavía aislada en contra de una empresa minera encabezada por el pueblo de Sipacapa en el año 2005, se ha convertido en uno de los procesos organizativos más beligerantes que existen hoy en el país.

Su rol preponderante como protagonista de la protesta social es un indicador de crecientes niveles de inconformidad, de organización social y de la apropiación de derechos por parte de la ciudadanía del área rural. El arraigo territorial a lo local, como eje articulador de su forma organizacional, le imprime a estas protestas una característica particular, porque surgen de demandas y necesidades no satisfechas que emanan de su realidad inmediata, de su vida cotidiana, frente a la cual se posicionan y actúan. No responden, entonces, necesariamente, a estrategias de lucha impulsadas desde lo nacional sino son producto de procesos de análisis y reflexión desde los actores locales, quienes se ven impulsados a visualizar su inconformidad y sus necesidades.

La discusión en comunidad de las problemáticas ha logrado que se comiencen a resolver varios conflictos a través de soluciones integrales, en vez de tomar vías sectoriales de demanda. La cuestión energética, por ejemplo, ha comenzado a ser abordada por las comunidades como un problema en conjunto, pese a que se les presente desde dos frentes, con la distribución de DEOCSA y con la construcción de hidroeléctricas. Las propuestas que hoy se escuchan tratan de construir pequeñas hidroeléctricas que puedan ser administradas comunitaria o municipalmente, en donde la prioridad sea suministrar energía

a los vecinos, quedando como opción, dado un potencial excedente, la venta de energía a la corriente nacional. Otros han comenzado a plantear, también como parte de estas discusiones, el tema del territorio y de la necesidad de formar regiones cada vez más autónomas del Estado de Guatemala.

Un tema que aún no ha sido fuertemente integrado ha sido el de la tierra. Resulta comprensible esto ya que la tenencia de la tierra en el agro, sobre todo en Guatemala, es de vital importancia para la reproducción de las tendencias de acumulación tradicionales. El problema, de esta manera, es medular para resolver la problemática total de muchas de las comunidades. La integración del tema en las discusiones como problema medular, empero, es aún inicial.

LA RESPUESTA ESTATAL Y LA COYUNTURA DE LA SOCIALDEMOCRACIA GUATEMALTECA

Esta proliferación de luchas, como era de esperarse, ha tenido una respuesta de parte del Estado y los capitales que confluyen a su alrededor. Como es tradición desde la cultura política de los gobernantes guatemaltecos, las movilizaciones que realizan las comunidades y organizaciones, así como las ocupaciones de tierra por parte de familias desposeídas de ésta; han tenido como primera y contundente respuesta la represión física. Además de este usual medio para disuadir la lucha, el Estado guatemalteco, sobre todo en los últimos dos gobiernos, ha pasado a valerse de modificaciones tácticas que se hicieron al final de la década pasada al Código Penal –específicamente los Artículos 256 y 257 sobre Usurpación y Usurpación Agravada, respectivamente– con el fin de utilizarlo para criminalizar las protestas y movilizaciones que se realizan de parte de los mencionados actores en resistencia. Lo que es usual es la implementación de estas dos mediaciones autoritarias y, * en el caso de la criminalización, una aplicación arbitraria de la ley para reprimir. Existen decenas de casos en los que las protestas han desembocado en represión, seguida de una fuerte persecución a líderes comunitarios o de organizaciones con el fin de encarcelarlos o intimidarlos, ocasionando con esto el miedo entre la población que protesta y la desintegración de su organización. En los casos en donde el Estado lo ve necesario, después de estas medidas se ha pasado a realizar diálogos con la población, logrando hacer valer los puntos del Estado y los intereses privados que parecen respaldar¹⁹.

19 Sobre procesos de criminalización, puede consultarse el sonado caso del campesino qeqchi' Ramiro Choc, preso político del Estado de Guatemala. El caso está detallado en Comité de seguimiento del conflicto social y la coyuntura latinoamericana. *Documento de trabajo No. 152*. (CLACSO/FLACSO-Guatemala).

La presencia de cuadros socialdemócratas y de la antigua guerrilla guatemalteca en el gobierno de Álvaro Colom no ha restado ímpetu a estas medidas autoritarias, aunque sí ha dado cabida a que algunas de las formas de lucha de las comunidades, con la consulta comunitaria como ejemplo primordial, se busquen institucionalizar. Este es el caso de la iniciativa de ley para las Consultas a los Pueblos Indígenas.

En todo caso, lo que se ve en la actualidad, al igual que en otros países latinoamericanos, es un regreso de los grupos empresariales tradicionales y la derecha política en la búsqueda de un mayor control del Estado²⁰. Las próximas elecciones, calendarizadas para finales del 2011, verán una estrecha carrera entre varios partidos fuertes de derecha compitiendo por derrocar al partido oficial, que se ha encargado en lo que va de su gestión de realizar una amplia serie de programas sociales puntuales, que muchos tachan de asistencialistas, que han buscado generar en la población marginada una simpatía con sus quehaceres. Además, en casos de conflicto político como el ocurrido en mayo de 2009 con los intentos de golpe de Estado²¹, la población beneficiada por los programas sociales puede ser utilizada por el partido oficial para hacer frente a movilizaciones opositoras.

La contienda electoral se perfila como una coyuntura de vital importancia para el futuro de las luchas sociales del país. Si bien el gobierno de la UNE ha continuado muchas de las políticas represivas hacia las comunidades y las organizaciones sociales que salen de las vías de lucha tolerables para las élites, un cambio a un partido netamente de derecha, con el Partido Patriota (PP), perdedor en las pasadas elecciones, como principal opositor político, sobre todo en Guatemala donde estos grupos promulgan una tradición política que tiene a

Disponible vía electrónica en <<http://www.clacso.org.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/produccion-academica/analisis-de-coyuntura/guatemala/2009/informe-de-coyuntura-de-guatemala-enero-a-abril-de-2009/view>> .

20 Parte de esta estrategia es la propuesta de varios grupos ligados al gran capital nacional de hacer significativas reformas a la Constitución de la República. La propuesta es promovida por la Asociación Proreforma. Ésta busca modificar unos pocos y estratégicos artículos para establecer, entre otras cosas, un menor poder del Ejecutivo y uno mayor para una nueva cámara alta, el Senado; subordinando al mismo tiempo al actual Congreso, constantemente tachado de corrupción y negligencia.

21 Puede revisarse un análisis del sonado caso Rosenberg y todas las modificaciones en las élites políticas y económicas que desató en Comité de seguimiento del conflicto social y la coyuntura latinoamericana. *Documento de trabajo No. 171*. (CLACSO/FLACSO-Guatemala). Disponible vía electrónica en <<http://www.clacso.org.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/produccion-academica/analisis-de-coyuntura/guatemala/2009/informe-de-coyuntura-de-guatemala-de-mayo-a-agosto-de-2009/view>>.

la violencia como bastión fundamental, puede perjudicar al desarrollo exponencial que está mostrando la reorganización de la resistencia hacia los grandes proyectos del capital que recién describimos.

Por lo que en este momento puede verse, una alianza entre los partidos más plegados a la izquierda y el oficial, ya con algunos lazos en la actualidad, con estas comunidades y organizaciones sociales está lejos de concretarse. Las constantes movilizaciones campesinas y comunitarias que han ocurrido en los últimos dos años –2008 y 2009– no han podido ser capitalizadas por el gobierno *uneísta*, pese a que se han realizado en momentos en donde el gobierno ha perdido apoyo de amplios sectores de la elite, como en el mencionado caso Rosenberg. Las siguientes elecciones, así, parecen verse como una lucha de poder entre facciones de la elite política del país, los partidos de izquierda incluida, sin una amplia participación más que tangencial de las comunidades y organizaciones que buscan transformaciones más profundas a la forma como se organiza la sociedad guatemalteca. El camino de éstas parece más a mediano y largo plazo, suponiendo que no se dan coyunturas favorables antes. La siguiente década parece comenzar con una sensible urgencia de cambio de parte de varios sectores del país, no importando de su espacio en el espectro político local; el camino que finalmente se tomará dependerá de la fuerza con la que cada uno pujan. Lo que sí parece difícil de ocurrir es que las cosas se mantengan como están en la actualidad.

VALORACIONES FINALES

Esta última década estuvo marcada por el cierre de un ciclo político marcado por el *tiempo de la paz*, cuyos resultados más significativos fueron el desmontaje parcial del Estado contrainsurgente, un ensanchamiento de los espacios políticos y una creciente conciencia colectiva de los derechos y deberes de ciudadanos y funcionarios públicos. El cierre de este ciclo, sin que se lograra transformar significativamente el modelo político-económico existente, constituye a su vez el punto de partida de una nueva etapa de lucha cuyo piso político es cualitativamente distinto al anterior. Las aspiraciones de cambio trascienden hoy las planteadas en los Acuerdos de Paz, motivadas en parte por los procesos políticos del sur del continente, la agudización de los problemas históricos no resueltos y porque se comienza a procesar críticamente la praxis acumulada de las últimas décadas de lucha.

Se constata la existencia de un lento proceso de “acumulación” de las fuerzas sociales críticas frente al sistema que se expresa en el resurgir del debate en torno a los modelos alternativos del Estado-nación. El nacimiento de un nuevo sujeto crítico con profundo arraigo territorial y cultural que se enfrenta a las empresas transnacionales y

sus aliados locales; así como una intensificación de las protestas sociales, cuyos protagonistas, al no encontrar respuestas satisfactorias a sus demandas, se radicalizan y enfrentan el peso de las políticas de criminalización; y en un reconocimiento tácito de que es necesario sumar fuerzas, poderes y saberes populares para romper el cerco que impide transformaciones más audaces de cambio social.

A pesar de que se continúa imponiendo el modelo político y económico de las élites nacionales y transnacionales, los movimientos realizan importantes esfuerzos para propiciar transformaciones encaminadas a construir sociedades más justas e igualitarias.

Reivindican el derecho a la rebeldía, ejerciendo el derecho a decir NO frente a derechos agravados y no respetados. Es una rebeldía que cuestiona el silencio y la aceptación de las cosas tal como son, desnudando la visión y prácticas políticas de las élites. Esencialmente cuestiona la naturaleza, valores y principios de un sistema excluyente y marginador frente al cual actúan críticamente, motivada por la esperanza de un porvenir distinto. La negación entonces de la injusticia, contraponiéndole un horizonte más justo e igualitario como objetivo de sus luchas, debería valorarse enormemente, sobre todo en un país con terribles indicadores de desigualdad, pobreza, violencia estructural y una de las élites oligárquicas más conservadoras del continente.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, Alberto; Alonzo, Fernando; Dürr, Jochen 2008 *Caña de azúcar y palma africana* (Guatemala: Instituto de Estudios Agrarios y Rurales).
- Bulmer-Thomas, Víctor 1988 *The political economy of Central America since 1920* (Nueva York: Cambridge University Press).
- Dosal, Paul 2005 *El ascenso de las Élites industriales en Guatemala, 1871-1994*. (Guatemala: Piedra Santa) [Traducción de Ronald Flores].
- Glejises, Piero 1992 *Shattered hope: the Guatemalan revolution and the United States, 1944-1954* (New Jersey: Princeton University Press).
- Guerra-Borges, Alfredo 1993 “El desarrollo económico” en Torres Rivas, Edelberto (ed.) *Historia General de Centroamérica* (Madrid: Sociedad estatal Quinto Centenario) Tomo V.
- Guerra-Borges, Alfredo 2006 *Guatemala: 60 años de historia económica*. (Guatemala: PNUD/USAC).
- Goldín, Liliana 2003 *Procesos globales en el campo de Guatemala. Opciones económicas y transformaciones ideológicas* (Guatemala: FLACSO).
- Santa Cruz, Wendy. 2007 “Avances y limitaciones de la lucha campesina de cara al desarrollo rural y al tema agrario”

- en Yagenova, Simona (comp.) *Guatemala: aproximación a los movimientos y luchas sociales del año 2005* (Guatemala: FLACSO).
- Solano, Luís 2009 “La transnacionalización de la industria extractiva: La captura de los recursos minerales e hidrocarburos” en *El Observador* (Guatemala) N° 19.
- Solano, Luís 2009a “El negocio de la electricidad: transformación de la matriz energética y sus impactos” en *El Observador* (Guatemala) N° 16.
- Tischler, Sergio 2001 *Guatemala 1944: Crisis y Revolución. Ocaso y quiebre de una forma estatal* (Guatemala: F&G editores).
- Yagenova, Simona y Santa Cruz, Wendy 2007 “La movilización social frente a la ratificación del CAFTA” en Yagenova, Simona (comp.) *Guatemala: aproximación a los movimientos y luchas sociales del año 2005* (Guatemala: FLACSO).

SINDY MORA SOLANO*

LAS DISPUTAS POR LOS SENTIDOS DE LO POLÍTICO EN COSTA RICA: HACIA UN BALANCE DE LAS LUCHAS POPULARES DE LA PRESENTE DÉCADA

“La lucha por la democracia implica, para una parte significativa de la sociedad civil, la creación de espacios de debate, negociación y deliberación, que no sean monopolizados y controlados por el Estado, espacios propiamente públicos que representen medios de expresión política de diferentes intereses presentes en la sociedad civil” (Chaves, Dagnino y Almeida, 2002: 26).

I. INTRODUCCIÓN

REALIZAR UN BALANCE POLÍTICO de las luchas populares de la Costa Rica de la última década no es una tarea sencilla. Las transformaciones en los patrones de participación electoral, la reconfiguración y la irrupción de nuevos actores políticos, los cuestionamientos a la institucionalidad pública, y la diversidad y complejidad de los conflictos que atraviesan a la sociedad costarricense, son sólo algunos aspectos que han modificado, significativamente, el escenario político nacional.

Si bien este trabajo analiza las luchas populares de la presente década, 1995 constituye en la historia reciente de Costa Rica, un año que abre una etapa para las transformaciones de la política, tanto como para el movimiento popular costarricense. Durante ese año, fue firmado un pacto entre las cúpulas de los principales partidos políticos del

* Socióloga. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR). Coordinadora del Comité de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura del Observatorio Social de América Latina (OSAL)-Costa Rica. Agradezco la colaboración de Andrea Villalobos, así como los comentarios de Alejandro Alvarado.

país, arreglo conocido como el Pacto Figueres-Calderón¹, mediante el cual los partidos políticos de oposición histórica se acercaron para constituir arreglos respecto al ajuste estructural, lo que no fue más que la continuación de un proceso en marcha desde los años ochenta.

En ese mismo año, se realizó una importante huelga, protagonizada por las y los educadores del Magisterio Nacional, huelga que hasta el día de hoy se mantiene en el imaginario de muchos actores, como la antesala de la quiebra en las formas de participación, tanto electoral como no electoral. El motivo de esta huelga fue la reforma al régimen de pensiones magisteriales, reforma que finalmente fue aprobada por una Asamblea Legislativa controlada por el PLN y el PUSC, en concordancia con el Pacto Figueres-Calderón. La forma en la que se atendió el conflicto magisterial, el autoritarismo con que Figueres Olsen, entonces presidente, atendió las demandas, la represión policial del movimiento, la presencia significativa de partidos de oposición en la Asamblea Legislativa y lo que ha sido señalado por las bases de educadores como la *traición* de las dirigencias sindicales, son algunas de las razones por las cuales el conflicto dejó una profunda huella en el imaginario político costarricense (Cfr. Almeida et al. 2007: 69 y Mora, 2008a).

Tanto la huelga del Magisterio Nacional como el Pacto Figueres-Calderón tuvieron su expresión en las elecciones nacionales de 1998. Por primera vez, desde las elecciones nacionales de 1962, la abstención se generalizó a todos los niveles socioeconómicos, educativos y grupos étnicos (Cfr. Raventós et al, 2005: 149). El abstencionismo, calificado como abstencionismo político², fue la muestra de un cambio en los patrones de identificación partidaria y participación electoral, considerando que la abstención en el país entre 1962 y 1994 se mantuvo en un promedio del 18%. Desde entonces, la abstención ha alcanzado cifras de 30%, 31,2%, 34,5% y 30,5% para las elecciones de 1998, 2002, 2006 y 2010, respectivamente. De la misma forma, en el referéndum del 7 de octubre de 2007, para definir la aprobación o el rechazo del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA por sus siglas en inglés

1 Rafael Ángel Calderón Fournier, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue presidente de la República en el periodo 1990-1994 y José María Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional (PLN), ejerció la presidencia entre 1994 y 1998. Cuarenta años antes, sus padres, Rafael Ángel Calderón Guardia y José María Figueres Ferrer, protagonizaron y representaron a las fuerzas opositoras de la Guerra Civil de 1948.

2 Dos de cada tres consultados en la Encuesta Nacional de Abstencionismo del 2003 dijeron no haber votado en las elecciones de 1998 y el 2002 por razones políticas (Raventós *et al.*, 2005: 154-155).

o TLC, como popularmente fue conocido), la abstención alcanzó el 40,7% (Cfr. Rojas, 2009: 38).

Ante estas transformaciones, merece ser destacado el cuestionamiento a importantes figuras de la política nacional y a la institucionalidad pública. Escándalos de corrupción se han publicitado en medios de comunicación, implicando a tres ex presidentes de la República: Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), José María Figueres Olsen (1994-1998) y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002). De estos tres ex presidentes, el primero fue condenado a inicios de octubre del 2009, a 5 años de cárcel por el delito de peculado en perjuicio del Estado (Cfr. Gudiño 2009). El juicio contra Figueres Olsen fue desestimado por falta de pruebas (Cfr. Segnini, 2007) y el juicio de Rodríguez Echeverría se encuentra aún pendiente. Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha sido cuestionado como entidad reguladora del juego electoral. Si bien esta institución, heredada de la Guerra Civil de 1948, en décadas anteriores no había sido cuestionada, en el marco de las elecciones nacionales del 2006 distintos actores políticos denunciaron la existencia de fraude electoral, así como la incapacidad del Tribunal para regular la participación de los medios de comunicación, anticipando la posibilidad de “fraudes mediáticos” (Mora, 2009: 103). Dicho cuestionamiento se profundizó en el 2007, cuando el mandatario Óscar Arias Sánchez (2006-2010) y su gabinete realizaron proselitismo político a favor de la tendencia del SI al TLC, sin que el TSE se pronunciara al respecto. Sin la asignación de recursos estatales para financiar las posiciones a favor y en contra del Tratado, el TSE no reguló el financiamiento desigual de ambas tendencias (Cfr. Raventós, 2008a: 6-18)³.

Mientras estas transformaciones se daban en el ámbito de lo electoral, ¿qué sucedía con otras formas de participación? Si bien no existen investigaciones que permitan constatar las relaciones entre formas de participación electoral y no electoral, a finales de la presente década se pueden evidenciar una serie de rupturas en las formas de entender la política y lo político en el país. Estas rupturas van desde las formas tradicionales de constituir arreglos y consensos políticos y las formas de entender los espacios de participación y sus implicaciones para la toma de decisiones. De esta forma, en la Costa Rica de la última década se han agudizado dichas disputas, lo que se expresa en el enfrentamiento entre visiones de la participación que la circunscri-

3 Diversos estudios muestran la poca receptividad que ha tenido el TSE para atender las demandas planteadas, ya sea por la limitada efectividad de la vías formales (Elizondo, 2009), ya sea por el desconocimiento de las acciones de protesta como formas de proceder político (Mora, 2009).

ben a la participación institucionalizada o que superan dicho ámbito. Estas disputas tienen una particular importancia en un país que se considera una excepcionalidad de virtudes democráticas, a pesar de lo arraigados que se encuentran los discursos autoritarios que apelan a la necesidad de un *hombre fuerte* que concrete la agenda neoliberal en el país (Cfr. Solís, 2009: 40). Frente a este proyecto neoliberal, una diversidad de actores, organizados formal e informalmente, entre los que se incluyen sindicatos, grupos ambientalistas, de mujeres, de vecinos, indígenas, estudiantes, universidades públicas e intelectuales, y también algunos sectores empresariales locales, han defendido sus posiciones. Esta disputa ha llegado a las formas de entender la representación, y por ende, ha potenciado la construcción de nuevas formas de sociabilidad política, como lo muestra el surgimiento de los Comités Patrióticos, en el contexto del referéndum por el TLC. Seguidamente, expongo las principales tendencias de este proceso político de transformación.

II. LAS TENDENCIAS EN LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA PRESENTE DÉCADA

Entre 1948 y la década de los ochenta, surgió en Costa Rica un Estado desarrollista que creó una serie de instituciones públicas, ampliando significativamente la cobertura de los servicios y permitiendo el desenvolvimiento de las capas medias. La conflictividad social de este periodo estuvo contenida en el desarrollo de un *proyecto de país*, que se expresó en dicha institucionalidad y que permitió dar una salida institucionalizada a los conflictos del periodo (Cfr. Cortés *et al*, 2009: 6)⁴. Esta etapa de la conflictividad social, conocida como una etapa de “confiscación estatal” del conflicto social (Cfr. Sojo, 1986: 40), tuvo profundas huellas en el desarrollo del movimiento popular costarricense. Defensa de intereses inmediatos y coyunturales, luchas puntuales y efímeras, y salidas institucionalizadas y clientelistas a los conflictos son algunos de los rasgos de la protesta social de esos años, que de alguna manera persisten en las formas de organización y actuación política actuales.

A partir de la década de los años ochenta y hasta la actualidad, Costa Rica ha experimentado una serie de políticas de ajuste estructural, con las cuales se inicia un nuevo periodo para el movimiento po-

4 Valga señalar que en 1949 se crea el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y en 1963 se crea la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAP-DEVA), dos de las principales instituciones objeto de disputa en la presente década. En 1923 y en 1941 se crea el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), alrededor de las cuales se han dado importantes luchas.

pular costarricense. Este ha sido un periodo de resistencia social ante la retirada del Estado desarrollista (Cfr. Cortés *et al.*, 2009: 23), donde el proceso de ajuste estructural ha sido implementado mediante una estrategia tecnocrática, que ha mantenido a los grupos de ciudadanos y actores políticos excluidos de la toma de decisiones (Cfr. Raventós, 1997: 117-118). Ante esta exclusión, *la política de la calle*, si bien no ha detenido el proceso, ha logrado retrasarlo de manera significativa. Adicionalmente, nuevos actores y nuevas luchas indican que éste no ha sido el único foco de la conflictividad social del país, aunque los principales ciclos de acción colectiva del periodo son significativos de esta disputa por la retirada o el acotamiento del Estado social. Algunas de las tendencias que caracterizan las luchas populares de la década en estudio son las que enuncio seguidamente.

1. UNA MANIFESTACIÓN COTIDIANA DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.

Una característica de esta década ha sido la expresión cotidiana del conflicto social mediante acciones colectivas de protesta. Dicho conflicto se ha hecho manifiesto en ámbitos sumamente diversos, como lo son el ámbito laboral, el de los servicios públicos, del área educativa, de la salud, por la mejora de la infraestructura pública y por el reconocimiento y ampliación de derechos de determinados actores. También las disputas por la toma de decisiones y por la participación política han sido fundamentales en la articulación de dicha conflictividad.

Como lo muestra el Cuadro 1, entre 1995 y el 2008 se han desarrollado en el país 5.225 acciones de protesta. El cuadro permite ver la disminución significativa de la protesta en los años preelectorales, es decir, 1997, 2001 y 2005. A pesar de los sesgos que las fuentes periodísticas introducen en el análisis, el cuadro evidencia el carácter cotidiano de la conflictividad social de estos años, siendo 1995, 2000, 2004 y 2007 los años en los que se registraron los ciclos de intensificación de la protesta más significativos. Estos ciclos son:

Cuadro 1
Total de acciones colectivas en Costa Rica, 1995-2008

AÑO	Casos	%
Total	5.225	100.00
1995	450	8.61
1996	283	5.41
1997	169	3.23
1998	342	6.54
1999	351	6.71
2000	613	11.73

AÑO	Casos	%
2001	328	6.27
2002	303	5.79
2003	417	7.98
2004	648	12.40
2005	371	7.10
2006	312	5.97
2007	331	6.33
2008	307	5.87

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado et al., 2009; Mora, 2008b y Solano, 2007.

La huelga del Magisterio Nacional de 1995

Por la reforma al régimen de pensiones de las y los educadores. Esta reforma, aprobada por la Asamblea Legislativa de la Administración Figueres Olsen (1994-1998), mantuvo al gremio en huelga desde mediados de julio hasta el 15 de agosto de 1995, sin que se respondiera satisfactoriamente a su demanda.

Las protestas contra el “Combo ICE” del año 2000

Por la aprobación en primer debate de un paquete de tres leyes, denominadas “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado”. Estas leyes, conocidas como “Combo ICE”, buscaban la apertura del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La aprobación de las mismas llevó a una serie de actores a protagonizar 191 bloqueos alrededor de todo el país, durante 15 días (Cfr. Mora, 2008b: 142). La realización de estos bloqueos junto con otras acciones de protesta obligaron al presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) a retirar el proyecto de ley de la corriente legislativa.

Las protestas del 2004 contra el monopolio de Riteve

Empresa española que desde el 2002 realiza la revisión técnica vehicular, anteriormente en manos del Estado. En este ciclo de protesta se realizaron 97 bloqueos y 16 acciones de *tortuguismo* realizadas por grupos de agricultores, estudiantes, trabajadores del sector público, el apoyo de grupos empresariales como la Asociación de Talleres Integrales Costarricenses (ATICOS) y la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU) (Cfr. Mora, 2008b: 142). En este ciclo diversos actores plantearon por primera vez, en manifestaciones públicas, su oposición al TLC.

La movilización ciudadana contra el TLC

Se dio entre el 2003 y el 2007, pero se intensificó en el 2007. De este ciclo de protesta se constituyó el Movimiento del NO al TLC, un movimiento sumamente diverso, compuesto por una pluralidad de actores que se involucraron en diversas acciones de oposición al Tratado. Entre estos destacan organizaciones indígenas, de mujeres, ambientalistas, de estudiantes, universidades públicas y los Comités Patrióticos. Se estima que durante la coyuntura del TLC se constituyeron entre 150 y 180 Comités alrededor de todo el país (Cfr. Raventós, 2008a: 22). Los Comités, sin filiación partidaria alguna, organizaron la campaña de oposición al TLC a nivel local, distribuyendo materiales de información mediante *trabajo de hormiga* (Cfr. Vargas, 2006: 37). De la misma forma, un sin número de sitios y espacios virtuales potenciaron la comunicación e intercambio de materiales mediante la red (Entrevista a los realizadores de los sitios web <www.elecciones2006.com> y <www.ConCostaRica.com> en 2008). Datos provenientes de una encuesta de Comités Patrióticos realizada por Raventós evidencian el predominio de sectores medios, con niveles altos de educación, en la conformación de estas organizaciones (Cfr. Raventós, 2008b: 13-14).

Como lo han señalado algunos entrevistados para este estudio, el año 2000 es fundamental en la historia reciente de Costa Rica, ya que con el “Combo ICE” se abre un ciclo de movilización ciudadana que se cierra en el 2007, con la realización del referéndum por el TLC (Entrevista a dirigente estudiantil, 2009). En ese sentido, el 2000 constituye un punto de partida sumamente valioso para el movimiento social, que valora la lucha del *Combo ICE* como un triunfo, al haber logrado detener la apertura de la energía y las telecomunicaciones, hasta entonces monopolizadas por el Estado. A pesar de que existen distintas interpretaciones de lo que el referéndum significa, ya que el Movimiento del NO perdió el referéndum con el 48,3% de los votos, frente al 51,7% que obtuvo el SI, el 2007 “cierra”, al menos momentáneamente, una serie de disputas en los distintos ámbitos que se verán regulados por el TLC, como el laboral, el ambiental y el de las telecomunicaciones y la energía, por mencionar algunos temas conflictivos de la década.

2. UNA CONFLICTIVIDAD PROTAGONIZADA POR UNA DIVERSIDAD DE ACTORES

El desarrollo de la protesta en el país ha dado lugar a la participación de una diversidad de actores políticos, con una capacidad también diversa para constituir alianzas e incidir políticamente.

En el ámbito laboral, las y los trabajadores del sector público han protagonizado una serie de conflictos, destacándose la participación

de algunos sindicatos⁵, lo que ha sucedido en medio de un fuerte proceso de estigmatización y persecución sindical. Por su parte, los trabajadores informales, como los taxistas, conocidos como *taxistas piratas* y los vendedores ambulantes de San José, también han mantenido una constante lucha por el reconocimiento de su trabajo, que los ha llevado a enfrentarse con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Municipalidad de San José. Las reducidas posibilidades de sindicalización del sector privado han incidido en la poca participación de estos trabajadores en acciones de protesta, a pesar de que la ANEP cuenta con iniciativas de protección de los derechos de estos trabajadores (Cfr. Alvarado *et al.*, 2009; Mora, 2008b; Sánchez, 2007).

En el caso de los conflictos por la defensa de la institucionalidad pública, han sido también los sindicatos quienes han protagonizado una serie de luchas en contra de la apertura de las instituciones públicas, como el ICE, JAPDEVA y el INS, o por el mejoramiento de los servicios, como es el caso de las luchas al interior de la CCSS. Otros trabajadores, como médicos y educadores han mantenido una lucha permanente por la mejora de los servicios que brindan, por la solicitud de presupuesto y/o la creación de plazas para los funcionarios, sin que se hayan constituido alianzas perdurables en estos ámbitos de lucha.

En el ámbito local, los grupos de vecinos, los grupos pro-vivienda y los grupos de campesinos han sido protagonistas de una serie de demandas como la mejora de la infraestructura física, la mejora de los servicios públicos y la solución a los problemas de vivienda y de acceso a tierras. Destaca en esta década la participación de los campesinos de Bambuzal, quienes durante el 2001 protagonizaron un conflicto por el derecho a la tierra. Por su parte, los conflictos por el acceso a determinados recursos, como el agua, han dado pie a la constitución de alianzas entre organizaciones ambientalistas y grupos comunales. Por ejemplo, los comités comunales y las asociaciones de desarrollo integral, así como las organizaciones ambientalistas locales y las Asociaciones Administradoras de Acueductos (ASADA) han configurado alianzas significativas para enfrentar los conflictos por el agua en la provincia de Guanacaste, producto del desarrollo inmobiliario en la región (Cfr. Ramírez, 2008: 20). También destacan las luchas contra

5 Como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), las diversas organizaciones sindicales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Unión de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (UNDECA).

la minería a cielo abierto, tanto en el Caribe costarricense, como en el Pacífico y la zona norte del país, donde se ha configurado una serie de alianzas para detener la actividad minera. Una de las más significativas ha sido la constitución de la Coordinadora Antipetrolera de Talamanca (ADELA), compuesta por 37 organizaciones vecinales e indígenas, agrupaciones religiosas, asociaciones de productores, comerciantes y empresarios de turismo locales del caribe, entre otros (Cfr. Cordero, 2007: 235). Por su parte, el Frente de Oposición a la Minería a Cielo Abierto en Costa Rica y la Unión Norte por la vida, compuesto por una diversidad de actores de la zona norte del país, ha realizado una serie de acciones en contra de la explotación minera en Crucitas, en el cantón de San Carlos, manteniendo una constante lucha contra la empresa canadiense Industrias Infinito S.A., el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) (Cfr. Rodríguez, 2009: 20).

Todas estas luchas de carácter local evidencian una articulación de redes sociales entre muy diversos actores comunales, que han protagonizado una serie de disputas en el ámbito local, y que con certeza continuarán luchando ante los nuevos desafíos que se presenten en dichos ámbitos (Entrevista a dirigente de Asambleas del Pueblo, 2008; Entrevista a fundadora de Mujeres en Salud y Desarrollo, 2010).

En cuanto a los principales ciclos de acción colectiva, a excepción de la huelga del Magisterio Nacional de 1995, movimiento fundamentalmente gremial, estos evidencian una articulación diversa de actores, con distintas capacidades organizativas y cuyas posibilidades de incidir políticamente se han visto limitadas en los espacios de intercambio con los representantes estatales. Esto puede deberse a que las alianzas constituidas entre actores se afianzan al calor de la protesta, sin que después de la movilización se trascienda su carácter esporádico, a lo que se une su reducida capacidad de dar seguimiento a los acuerdos constituidos. Probablemente, la lucha contra el TLC sea el proceso político más claro de aglutinamiento e intento de coordinación entre actores⁶, proceso que fue sostenido mediante un amplio movimiento de base a nivel local. No obstante, a pesar de la unión bajo la consigna de la oposición al Tratado, la heterogeneidad del movimiento terminó incidiendo en la indefinición de estrategias para pensar el movimiento después de los resultados del 7 de octubre de 2007, lo cual ha sido particularmente evidente en la imposibilidad

6 Al respecto, en el 2003 se creó la Comisión Nacional de Enlace, en el 2005 la Coordinadora Sindical de lucha contra el TLC, en el 2006 el Frente de Apoyo de Lucha contra el TLC y en el 2007 la Comisión Operativa Político Funcional (Raventós, 2008b: 5).

del Movimiento del NO de articular una alianza electoral para el 2010 que represente la oposición al modelo aperturista neoliberal (Cfr. Chacón *et al.*, 2009). Lo anterior, sin lugar a dudas, pesó en los resultados electorales del 7 de febrero de 2010, las que fueron ganadas por la candidata del PLN, Laura Chinchilla.

3. DISPUTA ENTRE LAS DIVERSAS VISIONES CIUDADANAS SOBRE EL ESTADO

La conflictividad cotidiana de la década se encuentra protagonizada por una diversidad de actores, que la mayor parte de las veces sitúa al presidente de la República, al gobierno central y a los ministerios como las entidades que pueden y deben atender las demandas planteadas. Dada la preeminencia del Estado como interlocutor de los actores colectivos, existirían distintas visiones ciudadanas del Estado (Cfr. Martínez, 2007: 65), de acuerdo a las demandas planteadas por los actores colectivos⁷. Esto no significa que en un conflicto estas distintas visiones del Estado no se superpongan, sin embargo, dichas concepciones predominarían en las demandas presentadas en la década.

El Estado paternalista

Quienes sostienen esta visión son los actores que reclaman la permanencia o una mayor presencia del Estado, y quienes luchan contra su retirada de ciertas áreas, como el área de la educación, la salud, la infraestructura pública, o que exigen una mayor presencia del mismo. Para este tipo de actores, el Estado es la entidad que puede y debe satisfacer necesidades materiales, puede continuar brindando un servicio o mejorar la calidad del mismo. Dentro de esta categoría se encuentran los trabajadores organizados informal o formalmente, y entre los últimos destacan los sindicatos de la salud, las asociaciones de educadores, los sindicatos portuarios, entre otros. A nivel local, destacan los grupos de vecinos que plantean demandas como el mejoramiento o desarrollo de infraestructura en sus comunidades. Destaca también a este nivel la participación de madres y padres por conflictos educativos, así como estudiantes de secundaria, y las y los educadores que denuncian la ausencia de condiciones mínimas para impartir lecciones.

7 Martínez propone la existencia de distintas visiones del Estado, entre las que destacan la visión elitista, la visión ciudadana, la visión de los funcionarios públicos y la de los tecnócratas (Martínez, 2007: 64-68). La que presento seguidamente sería una propuesta de profundización de la visión ciudadana, sujeta a mayor investigación. Incluyo en esta propuesta, la visión de los grupos empresariales, dado que estos constituyen importantes actores en la década, en constante diálogo con las visiones ciudadanas que propongo.

El Estado como garante de derechos

Los actores que promueven esta visión son grupos que reclaman del Estado un reconocimiento de sus derechos tradicionales, como lo son los derechos laborales, frente a aquellos actores cuyos derechos históricamente les han sido negados. En el primer caso se encuentran los trabajadores que solicitan el pago de salarios, aumento salarial y pago de prestaciones, entre otras peticiones de corte laboral. En el segundo tipo de actores, se encuentran grupos con reducidos recursos políticos, por lo cual su lucha pasa por una disputa de auto-reconocimiento y reconocimiento como actores políticos. Entre estos se encuentran los grupos indígenas que buscan el reconocimiento de su autonomía, los grupos de mujeres, en particular las trabajadoras domésticas remuneradas por la búsqueda del reconocimiento de su trabajo como un trabajo, así como los grupos de mujeres organizadas contra la violencia doméstica y los grupos por la defensa de la diversidad sexual⁸.

El Estado como regulador-propiciador de conflictos

En las zonas periféricas del país, se han constituido focos de conflictividad sumamente importantes, como lo son los relacionados con la conflictividad socio-ambiental en las provincias de Guanacaste y Limón, por mencionar dos casos. En Guanacaste, la conflictividad se encuentra asociada a las actividades turísticas e inmobiliarias, que han enfrentado a vecinos, consorcios turísticos e instituciones estatales por recursos como la tierra y el agua (Cfr. Ramírez, 2008: 12). En provincias como Limón, organizaciones sociales, grupos comunales y de trabajadores se han enfrentado a las empresas productoras de piña por la defensa del ambiente ante el uso de *bromacil*, lugares donde anteriormente el uso del DBCP, más conocido como *nemagón*, dejó un impacto social y en la salud de los pobladores sumamente amplio (Cfr. Arguedas *et al.*, 2009). Para esta visión ciudadana, el Estado es un propiciador-regulador de los conflictos ambientales, dada la tenue línea que separa al Estado regulador de los conflictos socio-ambientales, del Estado en alianza con las empresas transnacionales. El ejemplo más evidente de esta contradicción ha sido el Decreto N° 34.801 del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Óscar Arias, que avala la minería a cielo abierto, como una actividad de “interés público” (Cfr. Villalobos *et al.*, 2008). Así, al Estado se le demandan funciones de

8 En el 2007 fue aprobada la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, luego de una gran lucha de distintas organizaciones de mujeres. En el 2009 se aprobó en primer debate una modificación al Código Laboral, que regula el trabajo doméstico remunerado. A pesar de años de debate, se mantiene sin aprobar la Ley de Autonomía Indígena, lo mismo que las iniciativas para el reconocimiento de las uniones de hecho de las personas del mismo sexo.

regulación en conflictos en los que se presume que sus funcionarios están directamente involucrados en su promoción.

El Estado como lugar de apertura política

En esta visión, el Estado es un espacio para el diálogo y la negociación respecto a las distintas visiones de lo que debería ser el futuro del país. De allí surge la necesidad que los representantes públicos consulten, construyan consensos y tomen decisiones considerando las visiones de grupos organizados. En esta visión, el Estado es un lugar de apertura para la discusión política, sin que exista un tipo de actor predominante en las discusiones sobre el país y sus proyectos políticos. Todos los ciclos de intensificación de la protesta señalados anteriormente, más allá del contenido de sus demandas, han partido de una visión de Estado como lugar de apertura política. Un ejemplo claro de esta visión fue la propuesta de sindicatos en coordinación con otras organizaciones sociales por la atención de medidas concretas para atender los efectos de la crisis económica mundial, durante el año 2009 (Cfr. Varias organizaciones sociales, 2009). Los Comités Patrióticos, por su parte, son grupos que entre otros, han cuestionado al Estado como “lugar de apertura política”, y han llevado la discusión a espacios de acción local.

El Estado mínimo

Finalmente, se encuentran los actores que apoyan la visión estatal de las élites, que si bien no son grupos de ciudadanos organizados, sino grupos empresariales, representan la visión mínima del Estado, de acuerdo a la cual el Estado debe ser acotado frente a las demandas ciudadanas, pero a la vez, debe ser un Estado que interviene en la gestión de las condiciones para el funcionamiento de la empresa privada. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) ha sido una de las principales organizaciones portadora de esta visión del Estado.

4. UNA FUERTE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR COSTARRICENSE

Un análisis de los ciclos de intensificación de la protesta muestra los procesos de institucionalización del movimiento costarricense, que distintos gobiernos han llevado adelante como estrategia para enfrentar el conflicto social.

La Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) fue la administración pionera en imaginar un proceso de consulta ciudadana sobre las reformas políticas y económicas al modelo de desarrollo nacional. El proceso de Concertación Nacional, realizado durante el

primer año de la gestión de Rodríguez, fue promovido por el mandatario, dado el estrecho margen con que ganó las elecciones y el alto nivel de abstencionismo de la elección (Cfr. Barahona *et. al.*, 1998: 14-15), lo que le llevó a construir legitimidades para la implementación de su agenda neoliberal.

En dicha Concertación se consultó a distintas organizaciones del Valle Central, siendo el gobierno quien definió la agenda a discutir, y los procedimientos que normarían la discusión. Los conflictos surgidos del proceso fueron: primero, la falta de claridad política respecto a los propósitos de la Concertación. Segundo, los mecanismos de toma de decisiones, ya que originalmente éstas se tomarían mediante el *consenso*, pero posteriormente la coordinación definió el alto *grado de acuerdo* como la forma de consenso, lo que implicaba el acuerdo del 75% de los miembros de las mesas de trabajo. Tercero, no se definieron las formas en que los acuerdos se traducirían en acatamientos para los Poderes Ejecutivo o Legislativo, o en insumo de trabajo para los partidos políticos (Cfr. Barahona *et. al.*, 1998: 27). De esta forma, la Concertación se constituyó en una fuente de legitimidad para la Administración Rodríguez Echeverría, y en particular, para el proyecto de apertura del ICE, proceso que empezó a gestionarse legislativamente y que tuvo como resultado la ya mencionada movilización contra el *Combo ICE*.

Posteriormente a las protestas del *Combo ICE*, se instauró en la Asamblea Legislativa la Comisión Mixta del ICE, una entidad legislativa en la que representantes de la movilización social participaron junto con las y los diputados, para pensar en el desarrollo del ICE. La principal dificultad que se presentó en ese momento fue que los representantes del movimiento social tenían voz, pero no voto, tal y como lo define el Reglamento de la Asamblea Legislativa (Cfr. Asamblea Legislativa, 2001: 64). Adicionalmente, los sectores tenían limitados recursos para promover o dar a conocer sus posiciones, así como no contaban con la representación partidaria en el Parlamento que les posibilitara constituir las alianzas políticas necesarias para respaldar su posición (Cfr. Mora, 2008a: 12-13). La Comisión Mixta del ICE finalizó con cuatro informes legislativos, de los distintos partidos y fuerzas sociales representadas en el parlamento, sin que las distintas visiones sobre el ICE pudieran encontrarse.

En el caso del referéndum por el TLC, primer referéndum celebrado en la historia de Costa Rica, se dieron varias dificultades para garantizar la equidad en la participación del Movimiento del NO al TLC y los sectores a favor del Tratado. La principal dificultad de este proceso electoral fue que el TSE no destinó fondos públicos para la realización del referéndum, con lo que las campañas del SI y del NO

fueron financiadas totalmente con recursos privados. Entre ambas tendencias, las diferencias en el financiamiento de las campañas fueron abismales. De acuerdo a Cortés, la pauta total en televisión fue de 1.444 anuncios, de los cuales 1.319 fueron del SI, frente a 125 que logró pautar el NO (Cfr. Cortés, 2008: 39). Adicionalmente, la Administración Arias Sánchez, y en particular, el presidente Óscar Arias (2006-2010), utilizó todos los recursos a su haber para promover la posición del SI, como una posición gubernamental (Cfr. Raventós, 2008b: 18).

El proceso de Concertación Nacional, la Comisión Mixta del ICE y el referéndum por el TLC evidencian la fuerte institucionalización de la movilización ciudadana, así como las dificultades de transitar de las calles a los espacios institucionalizados, sin que medien estrategias claras de participación en los mismos, o de las implicaciones de dichos procesos. Estas tres experiencias, novedosas y cargadas de potencialidades democráticas, permitieron la participación de actores en espacios no conocidos hasta entonces. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos políticos estuvo organizado equitativamente, encontrándose los actores en desventaja para dar a conocer o defender sus posiciones. Los actores políticos no tuvieron posibilidades de incidir en las formas de organización de los espacios, aunque el referéndum por el TLC fue un mecanismo que posibilitó la organización de una serie de actores, tanto como la constitución de los Comités Patrióticos. A pesar de lo anterior, “el proceso de aprobación del TLC, antes y durante el referendo, mostró las profundas limitaciones del actual régimen de democracia representativa en Costa Rica: partidos débiles, incapacidad de negociación, de construir acuerdos políticos y de articular las relaciones con la ciudadanía” (Raventós, 2008a: 27), críticas que han sido enunciadas por distintos actores contra el Partido Acción Ciudadana (PAC)⁹.

Valga señalar que para algunos actores, el proceso de institucionalización es un momento necesario en el proceder político de los actores, mientras que para sectores más críticos de estos espacios, los representantes del movimiento popular deben prescindir de participar de la dinámica electoral. Al respecto, los principales puntos de desencuentros se encuentran en torno a la posibilidad de organizar los intereses del movimiento popular en una agrupación política capaz de competir electoralmente (Cfr. Mora, 2008a: 17). No obstante, sea

9 El PAC surgió en el 2001 como parte de las transformaciones en el ámbito electoral, con un gran apoyo de sectores medios opuestos al TLC. No obstante, sus limitaciones para hacer oposición en la Asamblea Legislativa y acercarse al movimiento social han incidido en las posibilidades de que este se convierta en un partido que asuma la oposición al proyecto neoliberal (Vargas, 2007: 105).

desde la perspectiva electoral o no, las iniciativas existentes no han logrado aglutinar una oposición al proyecto neoliberal, que claramente ha sabido sacar provecho de las divisiones internas del movimiento social costarricense (Cfr. Rojas, 2010).

5. LA TENSION ENTRE DISTINTAS FORMAS DE CONCEBIR

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En esta década se ha dado un amplio enfrentamiento entre distintas formas de concebir la participación política. Gubernamentalmente, se ha defendido la participación electoral frente a la participación mediante formas de acción colectiva. Esta primera tensión ha llegado a su extremo con la criminalización de las acciones de protesta, en particular, del bloqueo de calles, mediante una reforma al Código Penal aprobada en el 2001, que la castiga con pena de cárcel. Esta reforma ha sido la más clara venganza de las élites políticas por el “entrabamiento” de la legislación para la apertura del ICE (Cfr. Solís, 2006: 37), ya que fue aprobada después de las protestas del *Combo*¹⁰. Por otra parte, la constitución de espacios intermedios, como el proceso de Concertación Nacional, la Comisión Mixta del ICE y el referéndum por el TLC, han evidenciado los límites de la participación institucional, así como retos para el movimiento popular costarricense, al involucrarse en dichos procesos.

Una de las principales ideas que se han acentuado en el imaginario de los actores políticos es la oposición existente entre “la lucha en la calle” y “la participación en los espacios institucionalizados” (Entrevista a educadora de secundaria, 2009). Si bien existen matices en las valoraciones que se hacen de un espacio u otro, en términos generales diferentes actores han sobrevalorado la participación mediante acciones de protesta, frente a los encuentros y espacios de negociación con representantes gubernamentales y partidarios.

Como he señalado, las protestas contra el *Combo ICE*, tanto como el movimiento del NO al TLC se desarrollaron en el ámbito de la calle, haciendo uso de bloqueos, marchas, concentraciones y del trabajo cara a cara. No obstante, ambos procesos políticos terminaron en dos formas de institucionalización de la protesta, con el ya citado problema de que el sistema político costarricense no promueve dichos espacios para explotar las potencialidades ciudadanas (Cfr. Solís, 2006: XII).

10 Recientemente, José Merino del Río, diputado del Partido de Izquierda Frente Amplio, presentó un proyecto de ley denominado “Ley para frenar la criminalización de la protesta social derogatoria del Artículo 256 Bis y la adición de un Artículo 390 Bis al Código Penal, Ley N° 4.573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas” (Asamblea Legislativa, 2009). Sin embargo, la viabilidad política de dicho proyecto es limitada.

En las entrevistas realizadas para este estudio, muchos actores han señalado la importancia del triunfo del *Combo ICE*, pero a su vez las dificultades de que posteriormente al triunfo en la calle, se instalara la Comisión Mixta del ICE. El triunfo del movimiento social se entiende como un *triunfo callejero*, que logró detener la aprobación en primer debate de los proyectos del Combo. Sin embargo, no se piensa como un *triunfo* la participación en espacios institucionales. Una desconfianza similar se ha gestado respecto al referéndum por el TLC. Muchos han señalado que el TLC pudo ser *derrotado* por el Movimiento del NO, mediante la participación política en las calles. Insertos en los escenarios anteriormente descritos, los distintos actores consultados señalaron la dificultad de participar en espacios institucionales que son desiguales.

III. CONCLUSIONES: HACIA UN BALANCE EN TORNO A LAS DISPUTAS POR EL SENTIDO DE LO POLÍTICO

Siguiendo la definición de Cohen y Arato, la sociedad civil es el lugar de la legitimidad democrática y de los derechos, en la cual “los individuos hablan, se reúnen, se asocian, y razonan juntos asuntos de interés público” (Cohen *et. al.*, 2006: 636). En ese sentido, la década estudiada ha evidenciado la capacidad del movimiento popular costarricense de auto-organización, habiendo protagonizado una serie de luchas a nivel local y nacional, que han retrasado, considerablemente, el ritmo del proyecto neoliberal de las élites políticas y económicas del país.

No obstante, esta capacidad se ha visto significativamente limitada ante la articulación de un poder político, económico y mediático que ha constituido escenarios de disputa desiguales, en los cuales, los recursos disponibles para el movimiento popular han sido insuficientes. La participación en estos escenarios se dado bajo falta de claridad sobre los mecanismos y las implicaciones de la participación en procesos de diálogo, comisiones mixtas, audiencias o el referéndum. La institucionalidad ha hecho suya esa falta de definición para posicionarse políticamente frente al movimiento popular, argumentando haber escuchado sus posiciones en los procesos de participación, sin que necesariamente éstas estuvieran consideradas en la toma de decisiones.

A la limitación de recursos se unen las dificultades para que las posiciones del movimiento popular cuenten con representación en los espacios de toma de decisiones. A pesar del amplio desarrollo en la constitución de alianzas entre los diversos actores, estas alianzas han tenido severas limitaciones para la constitución de un proyecto político de sociedad civil, que tenga una expresión partidaria electoral. Val-

ga señalar que una serie de disputas se han generado en ese sentido, dado que una alianza de carácter electoral no es deseada por todos los actores del movimiento social costarricense. Adicionalmente, como lo muestra la experiencia del PAC, su posicionamiento ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades del movimiento popular.

La presente década ha estado atravesada por una fuerte disputa entre las visiones ampliadas y restringidas de la democracia, en las que se enfrentan distintas interpretaciones respecto a los lugares a los que debería circunscribirse la participación ciudadana. El ejemplo más claro de esta disputa refiere al límite impuesto a la participación ciudadana, con la penalización de los bloqueos, que ha dado pie a una concepción criminalizada de la participación. Con las calles *cerradas*, la apertura de espacios intermedios, como la Concertación Nacional, la Comisión Mixta del ICE y el referéndum por el TLC, tampoco ha implicado una apertura real de las instancias públicas para la discusión de los distintos proyectos de sociedad. Al constituirse como espacios de participación inequitativos y desiguales, éstos no han sido instrumentos efectivos para la construcción democrática, paradójicamente, en una Costa Rica enorgullecida de las virtudes de su sistema político.

Los procesos señalados son muestra de la poca apertura de las élites a las consideraciones del movimiento popular. Esta forma de atender el conflicto se ha recrudecido considerablemente después del referéndum, dada la polarización en la que ha quedado el país. Incluso, a finales de esta década nos encontramos ante los intentos de olvidar dicha polarización, siendo significativo el silencio que el TSE ha guardado ante los cuestionamientos que se han hecho respecto a sus funciones, lo que se evidencia en el llamado a favor del voto en las elecciones del 7 de febrero de 2010, porque “votar es pura vida”¹¹.

En una cultura política tan institucionalizada, la sociedad civil constituida ha sido una sociedad civil regulada, y en algunas ocasiones, bastante confiada en dicha institucionalidad. A pesar de lo anterior, el país ha experimentado una serie de innovaciones en el ámbito de la participación, que se no se agotan en el tipo de relaciones que los actores han establecido con las distintas administraciones o entidades gubernamentales, sino que se mantienen vivas en distintas formas de protesta y nuevas formas de sociabilidad política. Sin lugar a dudas, el desafío para los diversos actores políticos es cómo pensar la participación, sin que la institucionalidad se convierta en una trampa para el movimiento social costarricense.

11 “Pura vida” es una frase idiomática de uso popular utilizada en el país para indicar que todo se encuentra bien (Hernández, 2010).

Ante las potencialidades del movimiento popular costarricense, la frustración y el dolor que han dejado distintas luchas, en particular la del referéndum por el TLC, podría alimentar una visión de la institucionalidad y de la política basada en una desconfianza mínima, como algunas iniciativas populares parecen indicar. En este sentido, la constitución de espacios auto-organizados, con autonomía e independencia de las instituciones públicas y de las figuras políticas que buscan lucrar de la organización de dichos actores, puede ser una posibilidad, entre muchas otras.

BIBLIOGRAFÍA

En publicaciones

- Almeida, Paul; Walker, Erika 2007 “El avance de la globalización neoliberal: una comparación de tres campañas de movimientos populares en Centroamérica” en *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales* (Costa Rica: FLACSO). Vol. IV. N° 1.
- Alvarado, Alejandro; García, Anthony 2009 “Acciones colectivas y actores político-sociales en el año 2008” Ponencia preparada para el Decimoquinto informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica: Estado de la Nación).
- Asamblea Legislativa 2001 *Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica* (Costa Rica: Asamblea Legislativa).
- Asamblea Legislativa de Costa Rica 2009 “Ley para frenar la criminalización de la protesta social derogatoria del Artículo 256 Bis y la adición de un Artículo 390 Bis al Código Penal” en *Ley N° 4.573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas*. (Costa Rica: Asamblea Legislativa).
- Barahona, Manuel; Gallardo, Roberto; Sojo, Carlos 1998 *Concertación Nacional en Costa Rica. 1998: Balance y propuestas* (Costa Rica: Consejo Nacional de Rectores CONARE/PNUD).
- Chacón, Carmen; Quesada, José Rafael; Fonseca, Elizabeth 2009 “*El movimiento del No y la coyuntura preelectoral*”. Mesa redonda organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales, 16 de abril de 2009.
- Chaves, Ana Claudia; Dagnino, Evelina; Almeida, Carla 2002 “La constitución de la sociedad civil en Brasil” en Dagnino, Evelina (coordinadora) en *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil* (Brasil: Fondo de Cultura Económica/Universidad Estadual de Campinas).
- Cohen, Jean; Arato, Andrew 2006 “Desobediencia civil y sociedad civil” en *Sociedad civil y teoría política* (México: Fondo de Cultura Económica).

- Cordero, Allen 2007 “Bosque, agua y lucha. Movimientos ambientalistas en Costa Rica” en Hurtado, Margarita y Lugo, Irene (comps.) *Aproximaciones al movimiento ambiental en Centroamérica* (Guatemala: FLACSO).
- Cortés, Alberto 2009 “Los límites del referendo por el TLC como instrumento de participación política en Costa Rica” en *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica: Universidad de Costa Rica) Vol. III. N° 121.
- Cortés, Alberto; León, Andrés 2008 “Costa Rica: conflictividad social y distribución, 1950-2005”, mimeo.
- Elizondo, Gonzalo 2008 “Análisis de las impugnaciones presentadas al Tribunal Supremo de Elecciones” en Rojas, Manuel; Castro, Mariela (comps.). *Elecciones 2006 y referéndum. Perspectivas diversas* (Costa Rica: FLACSO).
- Martínez, Juliana 2007 “El reto de construir una interpretación común acerca del Estado deseable” en Rovira, Jorge (ed.) *Desafíos políticos de la Costa Rica actual* (Costa Rica: Universidad de Costa Rica).
- Mora, Sindy 2008a “De las calles a la negociación. Limitaciones y posibilidades desde el “movimiento social”. Ponencia presentada en las V Jornadas de Investigación del Instituto de Investigaciones Sociales, 3 de octubre de 2008.
- Mora, Sindy 2008b “Diez años de acciones colectivas en Costa Rica” en *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales* (Costa Rica: FLACSO) Vol. V. N° 8.
- Mora, Sindy 2009 “Elecciones, sociedad civil, acciones colectivas y movimiento social” en Rojas, Manuel; Castro, Mariela (comps.) *Elecciones 2006 y referéndum. Perspectivas diversas.* (Costa Rica: FLACSO).
- Ramírez, Alonso 2008 “Turismo como nueva forma de acumulación y conflictividad socio-ambiental relacionada a los recursos hídricos: perspectivas para Guanacaste” Ponencia presentada en las V Jornadas de Investigación del Instituto de Investigaciones Sociales, 12 de setiembre de 2008.
- Raventós, Ciska 1997 “De la imposición de los organismos internacionales al ‘ajuste a la tica’. Nacionalización de las políticas de ajuste en Costa Rica en la década de los años ochenta” en *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica: Universidad de Costa Rica) N° 76.
- Raventós, Ciska 2008a “Balance del referendo del TLC en Costa Rica a la luz de la teoría de la democracia” en: *Revista de Ciencias Sociales.* (Costa Rica: Universidad de Costa Rica). Vol. III. N° 121.

- Raventós, Ciska 2008b “Mi corazón dice NO”: lucha contra el TLC, confianza y legitimidad en Costa Rica”, mimeo.
- Raventós, Ciska; Fournier, Marco; Ramírez, Oلمان; Gutiérrez, Ana Lucía; García, Raúl 2005 *Abstencionistas en Costa Rica ¿Quiénes son y por qué no votan?* (Costa Rica: Instituto de Investigaciones Sociales. Tribunal Supremo de Elecciones).
- Rodríguez, Tania 2009 “Conflictos socio-ambientales en zonas de frontera, los casos de Osa y Crucitas durante el año 2008” Ponencia preparada para el Decimoquinto informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica: Estado de la Nación).
- Rojas, Manuel 2009 “Elecciones y Referéndum: Un balance general” en Rojas, Manuel;
- Castro, Mariela (comps.) *Elecciones 2006 y referéndum. Perspectivas diversas*. (Costa Rica: FLACSO).
- Sánchez, Esteban 2007 “Las acciones colectivas en Costa Rica en el año 2006”. Ponencia preparada para el Decimotercer informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica: Estado de la Nación).
- Sojo, Ana 1986 “La democracia política y la democracia social: una visión desde Costa Rica” en *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica: Universidad de Costa Rica) N° 31.
- Solís, Manuel 2006 *La institucionalidad ajena. Los años 40 y el fin de siglo* (Costa Rica: Universidad de Costa Rica).
- Vargas, Luís 2006 *Soñar con los pies en la tierra. Pensando y creyendo que otra Costa Rica distinta y mejor: sí sea posible* (San José: Fundación PROCAL).
- Varias organizaciones sociales 2009 *10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva* en <[http://www.anep.or.cr/media_files/download/DocumentoOficialFinal_www.anep.or.cr\).pdf](http://www.anep.or.cr/media_files/download/DocumentoOficialFinal_www.anep.or.cr).pdf)>.

En artículos periodísticos

- Gudiño, Arturo 2009 “Histórico fallo contra ex presidente” en <<http://www.informa-tico.com/index.php?sc=articulo&edicion=20091006&ref=06-10-090003>>.
- Hernández, Gerardo 2010 “Votar: ¿Es ‘Pura vida’?” en *Semanario Universidad*. En <<http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/mainmenu-cultura/1827-votar-ies-pura-vida.html>>.
- Rojas, Nathia 2010 “Desunión pasó factura a partidos progresistas” en *Semanario Universidad*. En <<http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/mainmenu-pais/1909-choque-de-intereses-perjudico-movimiento-desunion-paso-factura-a-partidos-progresistas.html>>.

Segnini, Gianina 2007 “Fiscalía pide desestimar causa contra ex presidente Figueres” en *La Nación*. En <http://www.nacion.com/ln_ee/2007/octubre/03/pais1262954.html>.

Villalobos, Carlos; Mata, Esteban 2008 “Fiscalía investigará a Arias por avalar mina Las Crucitas” en *La Nación*. En <http://www.nacion.com/ln_ee/2008/octubre/22/pais1746475.html>.

En entrevistas

Entrevista a un dirigente de Asambleas del Pueblo. Realizada en San José, el 15 de octubre de 2008.

Entrevista a un dirigente estudiantil durante el año 2000. Realizada en San José, el 2 de junio de 2009.

Entrevista a una educadora de secundaria durante 1995. Realizada en Heredia, el 16 de junio de 2009.

Entrevista a la fundadora de Mujeres en Salud y Desarrollo (MUSADE). Realizada en Alajuela, el 8 de febrero de 2010.

Entrevistas a los realizadores de los sitios *web* <www.elecciones2006.com> y <www.ConCostaRica.com> Realizadas en San José, el 2 de julio de 2008.

ROBINSON SALAZAR PÉREZ*
RUDIS YILMAR FLORES HERNÁNDEZ**

**EL SALVADOR EN SU LUCHA
POR RECONSTRUIR LA ORGANICIDAD
POLÍTICA POPULAR (1999-2009).**

A MODO DE INTRODUCCIÓN

El Salvador, país centroamericano con casi 6 millones de habitantes –2 millones 100 mil de ellos concentrados en la capital y municipios conurbanos–, posee una extensión territorial de 21.041 km² configurados en 14 departamentos.

Los acuerdos de Paz de enero de 1992 firmados por los actores políticos en conflicto (Gobierno de la república y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) dieron apertura al gran reto que debían asumir las fuerzas insurgentes como organización política. Fue un capítulo inédito de la historia salvadoreña el convocar a elecciones abiertas para que ex guerrilleros participaran en la disputa electoral, con muchas trabas, limitantes y sin andamiaje institucional. Sin embargo, un par de años después, en 1994, ingresaban a la contienda en el campo político para competir con el candidato más fuerte de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Armando Calderón Sol.

* Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Director de la red <www.insumisos.com>.

** Profesor investigador de la Universidad de El Salvador, Centroamérica, Núcleo San Miguel, Área Sociología.

Antes y durante los Acuerdos de Paz, de 1989 a 1994, y hasta el 2009, cuatro miembros de dicho partido presidieron el poder ejecutivo nacional (Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Elías Antonio Saca González), sumando veinte años de libre mercado, neoliberalismo, achatamiento del Estado, casi nula política social dirigida a los desprotegidos, reorganización del ejército y la policía, firma de acuerdos e instauración de la academia de la Interpol para capacitar a las fuerzas locales del orden y monitorear el país, en especial los movimientos sociales; firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ingreso del país a la figura orgánica del Triángulo del Norte a fin de obtener apoyo logístico en la política de seguridad que el gobierno norteamericano ha instaurado con el Plan Puebla-Panamá, ahora conocido como Iniciativa Mérida, cuyo propósito es criminalizar las protestas populares, desestructurar a los gremios sindicales, organizaciones campesinas y movimientos populares que obstaculizan la vía para continuar la aplicación del modelo económico depredador de la economía nacional.

Los movimientos sociales que apoyaron la lucha insurgente en el país –caracterizadas por su organicidad masiva, su articulación de redes fluidas de colaboración con la guerrilla y su papel de gestores de acciones colectivas en zonas urbanas, que atendían a un frente de lucha contra medidas focales y represivas– se vieron forzados a reestructurar su organicidad, redireccionar su lucha a ámbitos más específicos y ordenar los frentes dirigenciales a fin de ser más efectivos en sus demandas. Ahora debían coordinar sus esfuerzos en un ambiente reductor de la confrontación armada y la acción directa; viéndose obligados a elaborar el cuadro de demandas de acuerdo a la capacidad reactiva y organizacional de cada frente y a rediseñar las herramientas de divulgación, comunicación, movilidad y desplazamiento en un “orden” jurídico ampliamente desfavorable, donde tenían en contra a los medios de información y a todo el cuadro de leyes coactivas que cegaban las intenciones reivindicativas, facilitando la estigmatización de los guerrilleros urbanos y el desconocimiento de los Acuerdos de Paz recién institucionalizados, Acuerdos de los que quedaron muchos asuntos pendientes.

DESAFÍOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

El escenario político de El Salvador en la posguerra carecía de claridad para muchos actores vinculados a los conflictos, debido, entre otros factores, a que las negociaciones por la paz no transitaron por un proceso largo y mucha información de las mismas no se hizo pública. Además, durante el proceso, algunos dirigentes anunciaron la firma previa del acuerdo sin explicar extensa y articuladamente sus

motivos, y los ingredientes básicos del conflicto y la guerra denotaban un perfil desgastado en el discurso y poco optimismo en el éxito en caso de prolongarse las hostilidades.

Llegada la hora del desarme, y ante la inminente recomposición de la policía y el ejército; el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en una lucha contra el tiempo debió transitar de estructura beligerante con capacidad de fuego a una organización civil con el discurso correspondiente; enfrentando además el desplazamiento en zonas urbanas y el abandono de la clandestinidad. Todo ello provocó una estrategia de re-organización en relación a logística, discurso, recursos políticos, estrategias de alianzas, mapeo de rutas para atraer electores, manejo de una cultura de la legalidad, afianzamiento de liderazgos públicos, abandono del perfil militar traído desde el trayecto de la guerrilla para empotrar un comportamiento hacia el diálogo que se proyectara como constructor de consensos, interlocutor de sectores invisibilizados por el conflicto y la marginalidad, vocero de los pobres y excluidos y dotador de sentido partidario a muchas organizaciones y bases militantes que aun persistían en el trabajo clandestino de avituallamiento para la lucha armada.

El otro asunto que trajo un desajuste orgánico fue la traición de liderazgos tradicionales como los de Joaquín Villalobos y la estructura del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quienes rompen filas y se marginan del FMLN, incorporando entonces una gran cantidad de cuadros a la inteligencia policial del Estado.

Al inaugurarse la realidad naciente de posguerra, los movimientos en las áreas de salud y educación, así como organizaciones campesinas, universitarias y populares, tomaron conciencia de varios aspectos desconocidos o novedosos, pero el tiempo les exigía actuar pragmáticamente.

El asunto toral era que al iniciar su vida política en la posguerra no contaban con un radio de acción propia, sino que muchas veces habían actuado ligados a otras estructuras de organización o apoyados por redes instituidas por el FMLN para las tareas puntuales. Al convertirse sus demandas en el motor de la acción colectiva, pero sin que poseyeran una vida orgánica genuina, estos movimientos veían recortados los espacios de maniobra, pues para ellos el vehículo de movilidad y traslado de la demanda hacia la acción colectiva eran el conflicto, la guerra y las muertes.

En medio del aprendizaje y re-significando las nuevas formas de lucha, el FMLN logró dotar de sentido cívico algunos trabajos organizacionales, aun cuando los medios de comunicación, la opinión pública, las tramas institucionales y el discurso de gobierno iban con la orientación de discriminar la lucha armada, olvidar la guerra que ha-

bía dejado más de 80 mil muertos, descalificar las marchas, protestas y herramientas de lucha de uso en época de la insurrección; provocando un vaciamiento del arsenal logístico. De ahí la necesidad de reinventar nuevas prácticas políticas y re-posicionar a los movimientos en una realidad ajena a la cual habían trabajado.

Las primeras elecciones no fueron acorde a las expectativas, obteniendo ARENA el 45% en las legislativas contra el 24% del FMLN. En las presidenciales, 68,35% votaron por ARENA y 31,6% por el FMLN, que no tuvo candidato genuino. Las primeras contradicciones por conflicto habían aflorado con consecuencias impactantes.

A partir de esa época los movimientos entran en etapa de reestructuración, de constituir una dinámica y radio de acción propias, de aprender a edificar la demanda en trabajos focales, puntuales y asesorados jurídicamente para ver las consecuencias de los actos públicos, porque se actuaba en el marco de nuevas leyes y bajo un régimen en apariencia democrático.

INICIO DE SIGLO Y RECOMPOSICIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO

Bajo la administración del ex presidente Francisco Flores (1999-2004), y con el respaldo del Congreso dominado por la derecha, El Salvador dolarizó su economía el 1° de enero de 2001, al entrar en vigencia la llamada Ley de Integración Monetaria (LIM), que fijó el tipo de cambio en 8,75 colones por un dólar. Esta decisión cambió el rostro del país en pocos meses, pues perdió su identidad monetaria, quedando la economía fuertemente vinculada con el mercado norteamericano. El campo se pauperizó y la economía campesina quedó en bancarota: se prefirió importar alimentos a producirlos. Los flujos hacia el exterior de la mano de obra crecían, dependiendo el país de las remesas que los migrantes enviaban a sus familiares. Dichas remesas son uno de los recursos más importantes que han dinamizado el país; hasta llegar a topes de 3.787 millones de dólares en 2008, aproximadamente el 17,1 % del PIB.

La economía se terciarizó en gran parte, las inversiones son orientadas al sector servicios. El desempleo y subempleo llegaron casi al 50% en 2009 y el crecimiento económico no ha vuelto a tener los indicadores de la década del setenta.

Las remesas y las inversiones en el sector servicios generan empleos, en buena medida temporales, en áreas como el desarrollo inmobiliario, comercio, tiendas de autoservicios y abarrotes. El gobierno aprovechó el quiebre manifiesto en el país para introducir cambios en la legislación, entre ellos, reformas en la ley del trabajo que despojaron a los trabajadores de recursos jurídicos para demandar sus derechos en los juicios laborales. Por otro lado, la universidad per-

dió paulatinamente capacidad de atracción de recursos públicos. La presencia cada día mayor de mujeres estudiantes le dio un sentido distinto a las luchas gremiales: no sólo al interior de la universidad, sino en el espectro social, el sujeto mujer aparecía presente en frentes de lucha, demandas de derechos y asumiéndose como actor en el reclamo de justicia.

Hubo una desvinculación entre los movimientos sociales y el FMLN por varios factores, enumeremos algunos: al pasar al campo de la lucha civil, las rupturas y descalificaciones internas del FMLN –que en el escenario de guerra debían dejarse de lado frente a un enemigo común que los unía y planteaba la unidad como cuestión de vida o muerte–, quedaron al descubierto. Los liderazgos militares se opacaron, las responsabilidades dentro de la organización surgieron en función de habilidades en campo abierto y capacidad de seducción discursiva que, al tratar de construir un discurso renovado acorde a la nueva realidad, muchas veces lo envolvieron en frases y argumentos que el neoliberalismo y la globalización indolente imponían.

Democratización gradual, gobernabilidad, ciudadanía activa, voto, procesos electorales confiables, correlación de fuerzas ciudadanas, organismos no gubernamentales y empoderamiento, democracia ciudadana, capital social, autoempleo, microcrédito, equidad, recursos humanos, coparticipación social, etc., es un conjunto de palabreños escondidos en la estrategia de dominación e invisibilización del sujeto insumiso.

Todo el argumento utilizado como discurso político y vínculo con la sociedad, forjado en el Banco Mundial y las instituciones satélites como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tenía como objetivo desideologizar el discurso, desimbolizando al sujeto con un lenguaje vacío, sin referente empírico y alejado de toda realidad salvadoreña. Además, la intencionalidad era y continúa siendo obligar a los habitantes empobrecidos del país a asumir como responsabilidad propia sus situaciones laboral, de salud y educación, porque el Estado se desresponsabilizaba de toda atención social, asumía el rol de administrador y gobernaba con el mercado.

Al darse cuenta el gobierno de Francisco Flores y la oligarquía restauradora del sistema político de que el neoliberalismo resultaba económicamente disfuncional, excluyente a profundidad en términos sociales, e insostenible en la política porque genera fuerzas desestabilizadoras de resistencia en forma de movimientos sociales; buscó triangular los recursos económicos provenientes de la cooperación internacional, principalmente de los Estados Unidos y Europa (que

donaban mediante fundaciones), de los Organismos No Gubernamentales y de la gestoría estatal; a fin de que las ONG coadyuvaran en política pública, proporcionando a los campesinos pobres (y a los sectores urbanos marginales) una alternativa distinta a los movimientos sociales y sus políticas radicales, principalmente en aquellas zonas marginadas que eran potencial caldo de cultivo de la insubordinación (Petras, 2005: 26-27).

PRIMEROS MOVIMIENTOS Y RESISTENCIAS

La huelga que dio la bienvenida al gobierno en la era pos-conflicto y en la administración de Francisco Flores fue la del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la cual tuvo dos fases de mayor auge (noviembre de 1999 a enero de 2000 y septiembre de 2002 a junio de 2003). El movimiento inició con una reivindicación de aumento salarial para posteriormente convertirse en un fuerte movimiento en contra de la privatización del ISSS y del Sistema Nacional de Salud en El Salvador (Juárez, 2007).

El movimiento de los trabajadores de la salud crece y se posiciona en el ambiente de las políticas privatizadoras impulsadas entre 1999 y 2003, avasalladoras en los sectores estratégicos de telefonía, energía, banca de desarrollo, electricidad; así como de grandes extensiones de tierra cerca de ríos y minas, quedando solamente por entregar al capital privatizador el agua potable y la salud.

Se encontraban registradas casi 200 organizaciones sindicales en 1998, distribuidas entre Industria Manufacturera (54); Servicios (29); Comercio, Restaurantes y Hoteles (26); Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (19) y Construcción (10). Para 2001, muchas se habían debilitado y otras habían conformado el Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI), que agrupó a los gremios de trabajadores de educación, salud, obras públicas, juzgados y aduanas, entre otros. El MOLI le permitió a la lucha sindical llenar dos de sus más grandes oquedades: por un lado, la falta de una instancia que dirigiera y coordinara a los sindicatos del área pública y, por el otro, la ausencia de solidaridad intergremial. Con la creación del MOLI, los sindicatos de trabajadores gubernamentales, hasta entonces fáciles de silenciar en su aislamiento, unieron plataformas reivindicativas y se apoyaron entre sí (Juárez, 2007).

El MOLI, el sindicato del seguro social y el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRIS) tuvieron un trabajo coordinado para detener el acento privatizador y salieron a protestar en innumerable ocasiones. Estrecharon lazos con otras organizaciones, como los vendedores ambulantes nucleados en la Coordinadora Nacional de Vendedores (CNV), comu-

nidades campesinas de Ahuachapán, la Asociación Comunal Campesina Democrática Salvadoreña (ACCDS) y la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria, entre otras, para detener la embestida privatizadora y exigir entrega de tierras ante la descampesinización del agro.

Estas fueron las luchas más relevantes, no obstante, la administración de Flores estuvo preñada de conflictos debido a que su política, ceñida a preceptos impuestos por el poder de facto de los organismos internacionales, y el énfasis en la individuación, competitividad y calidad total, rompían los hilos asociativos y la urdimbre social construidas por diversas tramas desde años atrás.

Trabajadores, desempleados y luchadores sociales se integraron y apoyaron en el período de mayo-agosto de 2001 la protesta en las calles, con la consabida respuesta represiva del gobierno. En el período se vivió el cierre de fábricas de textiles, de herramientas y maquinaria. También se sumaron ex-patrulleros, trabajadores de las telecomunicaciones y del aeropuerto, quienes, con el propósito de denunciar la política del despojo y arbitrariedad jurídica instrumentada por el gobierno, crearon el Movimiento Nacional Pro Defensa del Pueblo bajo el lema “Basta ya a la injusticia en El Salvador”, en el cual participan más de 20 sindicatos, entre ellos el MOLI, el SIMETRISSE, la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) y el STISSS. El movimiento denunciaba el modelo neoliberal y exigía al gobierno que se combatiera la crisis económica (OSAL, 2001).

Para 2002 el movimiento de la salud mostraba otros signos. Por un lado, tenía una carga politizada en sus demandas, había calado en la subjetividad de la población y contaba con la opinión favorable y de apoyo ciudadano en un 39 por ciento, según la encuesta levantada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA). Asimismo, eran pocas las opiniones que veían intransigencia en la parte sindical pero otras no percibían la ola privatizadora.

Quizá la politización se percibió por la cercanía del dirigente político Shafick Handall, miembro connotado del Partido Comunista y del FMLN. El Dr. Guillermo Mata Benett, quien más tarde se integró como militante al FMLN, contribuyó a construir la bisagra entre movimiento sindical y partido político.

Existen otras voces críticas que avistaron un perfil bajo en el apoyo del FMLN a la huelga y al movimiento de la salud, dado que percibían una concentración de su trabajo político en los municipios que administraba, esencialmente para profundizar la relación del partido con esas zonas y mostrarlo como una organización no belicosa.

En noviembre de 2002, con el décimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, se detuvo la privatización: más de 18 cortes de ruta en carreteras arteriales, 100 mil personas movilizadas en el territorio nacional y una huelga de cinco meses, pararon el intento del gobierno de aplicar las recetas del Banco Interamericano de Desarrollo para despojar del servicio de salud a la población. La clase política optó por un tiempo una estrategia más cautelosa, consistente en “concesionar” algunos servicios auxiliares y médicos a privados y cambiar las direcciones médicas de los hospitales del Seguro por gerencias. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud promovió el terreno para la futura privatización mediante la estrategia de no surtir los medicamentos a los centros de salud para sugerir la ineficiencia estatal y necesidad de reestructurar la institución.

En los primeros siete meses de este año, el Ministerio de Salud solo usó la vigésima parte del monto del presupuesto anual dedicado a este servicio para declarar la quiebra del sistema de salud.

Los dos últimos meses de 2002 fueron agitados. Los bloqueos no habían aminorado, principalmente en los municipios gobernados por el Frente Farabundo Martí, donde bloquearon la construcción de un anillo periférico que iba a atravesar el cinturón de pobreza alrededor de la capital, potencialmente causando desplazamientos de pobladores y daños a los mantos acuíferos. Ante ese hecho significativo el gobierno tuvo que anunciar la postergación de las obras. La autopista era parte del Plan Puebla Panamá (PPP), un programa de mega infraestructura transnacional para abrir el istmo al comercio internacional desde México hacia el sur, donde se complementa con componentes del contrainsurgente Plan Colombia. El 12 de octubre, cerca de 20 mil campesinas y campesinos ocuparon varios puestos fronterizos y carreteras nacionales en el marco de la resistencia continental contra la nueva colonización a través de planes como el PPP o el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (Drüssel, 2002).

Las movilizaciones del sector de la salud no concluyeron durante toda la administración de Francisco Flores y continuaron durante gran parte de la asumida por Antonio Saca. Las luchas persistieron en la férrea oposición a la privatización y en sus demandas por dotación de recursos, medicinas, uniformes, alteración de turnos, cambios de jornada. Ha sido un plan de lucha sin decaer hasta la fecha.

Otro actor de las luchas en el pueblo salvadoreño es el Bloque Popular Social (BPS), que nace el 20 de septiembre de 2003, y cuyo eje movilizador es de franco apoyo a los movimientos sociales y al FMLN, incluso insertándose en la campaña de Shafick Handall como candidato a la presidencia por parte de la formula opositora.

El BPS confrontó en las calles la Ley Antidisturbios o Antiterrorista, fue fuerte opositor de la administración de Antonio Saca, sembró la protesta contra la firma del tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Plan Puebla Panamá, y denunció la instauración de la academia de policía de Interpol en suelo salvadoreño.

Desde el fin de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, en mayo de 2004, pasando por su aprobación por el Congreso de ese país, el 27 de julio de 2005, y hasta su ratificación legislativa en 2006, el movimiento social salvadoreño se situó críticamente ante los promotores del ensamblaje de economías asimétricas y como pronosticador de algunos efectos en los campesinos, en el comercio y fundamentalmente en la producción de alimentos.

El año 2005 amanece con desplazamiento en zonas céntricas y comerciales del país, pero la mayor fuerza residió en San Salvador y municipios conurbanos, por los anuncios de la presidencia de Antonio Saca en el sentido de aplicar las reformas que prohíben la venta de productos “piratas” o ilícitos –entre los cuales destacan la distribución de CD y DVD en el mercado informal–, porque atentaba contra los derechos de autor y dañaba la economía de grandes empresas disqueras y de entretenimiento.

Las reformas a las cuales hacía alusión el presidente eran parte de las exigencias, aprobadas en diciembre por los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, que los negociadores de parte de los Estados Unidos ponían sobre la mesa como condicionante para la entrada en vigencia del TLC. Entre los aspectos relevantes de la Ley de Defensa a Derechos de Autor aprobada por Saca, está el artículo que permitía a la policía decomisar todo tipo de material que no sea de marca y encarcelar a sus vendedores.

El Bloque Popular Social y los manifestantes organizados en la Coordinadora Nacional de Vendedores, representantes de 70 mil personas en todo el país, dieron a conocer una serie de movilizaciones y protestas como parte de un plan para detener la legislación represiva. Carlos Vásquez, del Bloque Popular Social, indicó “venderemos discos hoy y mañana y todos los días, porque con eso mantenemos a nuestras familias y no vamos a permitir que nos cierren esta fuente de trabajo, vamos a defenderla con toda nuestra fuerza organizada.” “Es con nosotros que han empezado, pero este TLC y esta puñetera Ley de Derechos de Autor también va a afectar a los que venden ropa, zapatos, lociones, celulares, cinchos, gorras. E incluso a lecheros y henequeneros. El TLC nos va a golpear a todos”. (Siep, 2006). A la lucha se sumaron sectores eclesiales de la Iglesia Luterana Popular y colectivos de trabajadores del mercado popular y vendedores ambulantes.

El 2 de julio de 2007 fue la inauguración y puesta en práctica de la Ley antiterrorista que promulgó Antonio Saca para criminalizar las protestas populares. El escenario elegido para esgrimir esta nueva arma de represión fue Suchitoto, departamento de Cuscatlán, donde tenía lugar una manifestación contra el anuncio de la política de descentralización del agua que el Ejecutivo anunciaría en ese lugar. Hubo trece personas detenidas y el enañamiento contra la periodista María Haydee Chicas, comunicadora institucional de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, capturada mientras cubría la protesta social. La noticia trascendió por los medios virtuales y abrió un zaguán de solidaridad de diversos organismos, nodos de contra-información, congresistas, intelectuales, iglesias y organizaciones civiles en repudio de la política antidemocrática de Saca, quien el 23 de julio debió acceder a liberarla, bajo libertad condicionada, del centro penitenciario Cárcel de Mujeres, ubicado en Ilopango.

Este evento abrió una brecha a la política policial que se instrumentaba en el Salvador, dado que el presidente Antonio Saca fue uno de los gestores de programas de cooperación entre Estados Unidos y México para armar una iniciativa contrainsurgente para Centroamérica, inicialmente conocida Plan Puebla-Panamá, con prótesis coadyuvantes como el Triángulo del Norte y más tarde los Planes Cazador (2008), Plan Caminante, Plan Antimaras, Plan 500, Plan Mano Dura; entre otros que funcionan como dispositivos de poder coactivo y coercitivo (Plan de Seguridad, s/f).

Para cerrar la trayectoria movimientista en El Salvador, en el mismo año fueron revelándose otros actores que cambiaron el mapa político del país y, por supuesto, llenaron los escaques vacíos que no se articulaban en torno a la confrontación de clase; tales como los movimientos contra la contaminación, contra el despojo y apropiación de recursos de las mineras trasnacionales y la desaparición de comunidades y pueblos por las represas de los ríos. Estos son nuevos campos de movilización que en años anteriores no jugaban un papel en la arena de la disputa política, y que se articulan en torno al arraigo a la tierra cuando los campesinos se enfrentan a la contaminación de sus espacios, cuando son víctimas del despojo de sus recursos, de la drástica transformación de los lugares donde vivían; incluso encontrándose con nulas posibilidades para sembrar los alimentos y nutrientes que conforman la economía de subsistencia.

A mediados de junio de 2007 salieron a la luz pública los conflictos en ebullición en torno a la firma Pacific Rim SA, que explotaba la mina del cantón San Francisco, El Dorado, jurisdicción de San Isidro, departamento de Cabañas; donde se manifestaron distintas actividades organizadas por el Comité Medio Ambiental de Cabañas, integra-

do por líderes comunales de San Isidro, Sensuntepeque, Guacotecti y Ciudad Victoria, municipios de la zona de influencia del proyecto extractivo de metales, principalmente de oro.

El movimiento tuvo eco, y comunidades vecinas y de otros lugares que también detectaron movimientos de minería se unieron a las demandas de Cabañas y así las comunidades de Chalatenango exigieron a la Ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, negar la autorización a la industria minera en ese departamento.

Tras caminatas por varios días en un trayecto de 51 kilómetros, miles de manifestantes llegaron hasta el centro de esta capital, con la demanda esclarecida del rechazo a los proyectos mineros y a la presencia militar en las comunidades. Asimismo, exigían la desocupación de los batallones militares ubicados en Chalatenango, en San José las Flores y otras localidades.

Los actores colectivos constituidos en el Bloque Popular Social y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional asumieron compromisos de solidaridad con las comunidades del departamento norteño de Chalatenango por las amenazas de la industria minera, la represa El Cimarrón y la construcción de la carretera Longitudinal del Norte que destruiría la biodiversidad de esta región, además de denunciar los 31 permisos otorgados por el gobierno a la explotación minera en suelo salvadoreño.

El movimiento vivió seis meses de bloqueos, movilizaciones, denuncias y confrontaciones con elementos de las fuerzas públicas. El cuerpo de sicarios, previamente conformados y contratados por los representantes de las mineras a fin de hostigar a los líderes campesinos y comunitarios, incorporó un nuevo elemento de tensión, teniendo en su haber la primera muerte el 20 de diciembre de 2007, cuando fue asesinado Ramiro Rivera Gómez, un miembro del Comité Ambiental de Cabañas. Seis días después, una mujer embarazada fue eliminada en Trinidad de Sensuntepeque, a 85 km al noreste de San Salvador. Estos hechos generaron un ambiente de hostilidades, miedo, terror y elevación de los niveles de confrontación.

Paralelamente a estos acontecimientos, en La Unión, al sur del país, la organización local "Proyecto por la Vida" y la Asociación Unionense para la Defensa del Medio Ambiente (ASUMA) se manifestaron en contra del proyecto de la transnacional AES, que pretende instalar dos plantas para generar energía con gas y carbón. La lucha contó también con la participación de la organización mundial Amigos de la Tierra, de las y los trabajadores de la empresa CALVO, organizados en el Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas (SGTIPAC); de la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restau-

rantes, Agroindustrias (FESTSSABHRA) –ambos afiliados a la UITA–, así como del secretario general de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura (Rel-UITA)

La compañía en cuestión tenía antecedentes de insatisfactoria confianza entre los pobladores de La Unión, dado que en 1978 se vio involucrada en la explosión de un tanque en Nueva York y provocó la muerte de 40 personas; asimismo en 1989 estalló una tubería de gas en Moscú donde fallecieron 575 personas y, en 1994, la falla en un tanque de almacenamiento causó la muerte de 130 personas. En años anteriores la corporación AES adquirió la propiedad de las principales generadoras de energía del país y ahora quiere desarrollar este nuevo proyecto extremadamente peligroso y contaminante. Hay que recordar también que la corporación mencionada fue multada por el gobierno de California con 17 millones de dólares por los daños provocados, siendo obligada a invertir 34 millones de dólares para descontaminar el ambiente. Y lo más reciente fue el intento por desarrollar en Puerto Cortés (Honduras) el mismo proyecto que quieren implementar en La Unión, pero el pueblo organizado logró impedirlo y ahora pretenden dañar los recursos naturales del país con el apoyo de las instituciones oficiales salvadoreñas (UITA, 2007).

Las confrontaciones y movilizaciones han avanzado en lo local e incluso han arribado a consensos para posponer proyectos de inversión de carácter depredador y atentatorio contra los recursos naturales del país. Esto indica que la ecología y sustentabilidad, así como la defensa de los recursos naturales estratégicos, se han convertido en los nuevos espacios politizados donde se escenifican brotes de lucha de clase y de carácter *antineocolonial*.

Hacia noviembre del año 2007, la lucha contra los proyectos de una termoeléctrica en Punta Gorda fue emprendida por Proyecto por la Vida, ASUMA y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (CODES), las cuales firmaron la “Declaración de La Unión”, un documento en el cual se establece el compromiso firme de continuar la lucha para que las empresas Cutuco Energy y Fonseca Energy, ambas controladas por la transnacional AES de capital mixto con mayoría estadounidense, no desarrollen sus proyectos de construcción de las plantas generadoras de energía (Rel-UITA 2008).

El gobierno –fiel aliado de las empresas transnacionales ligadas a inversionistas interesados en minería, generación de energía, control del agua y el proyecto de puerto seco–, ha tratado de sensibilizar a la sociedad mediante discursos y programas de televisión sobre las ventajas de estos “mega-proyectos” que beneficiarían a las comunidades donde se establecen. Pero el mensaje no ha permeado la confianza de

los salvadoreños, de ahí los focos de resistencia y movilización cada que aparecen los gestores. Mediante la represión se han impuesto las maquinas de saqueo de los minerales, aunque se les ha impedido la oportunidad de entrar en función, lo que demuestra una victoria parcial. En los asuntos relacionados con las represas, en el norte del departamento de San Miguel los municipios de San Antonio del Mosco, Carolina, San Luis de la Reina, Nuevo Edén de San Juan y San Gerardo, se mantienen en lucha contra el proyecto de la represa de El Chaparral, siguiendo el ejemplo de lo realizado en el caso de la minería.

La lucha contra la minería ha contado con mayor fuerza por la información vertida y el manejo de evidencias con historias parlantes de las secuelas y herencias de los proyectos mineros desarrollados en los años setenta, que ocasionaron la destrucción irreversible de ríos en los departamentos de Morazán y La Unión. Se tiene la conciencia de que si permitieran de nuevo la extracción de oro y plata, se presentarían más casos de cáncer, malformaciones genéticas y muerte.

La construcción y operación de la represa El Chaparral fue publicitada como la mayor necesidad del país para generar energía y evitar los cortes que las compañías actuales provocan para evidenciar las carencias, pero la intención es provocar una crisis y vender los recursos a los inversores norteamericanos y españoles.

“El Salvador no necesita de más represas, pues las ya existentes generan energía eléctrica suficiente para la población. Actualmente se planea construir dieciocho represas; El Chaparral, Cimarrón, y El Tigre serían las más grandes. Éstas las construiría el Estado con dinero prestado (que pagará con altos intereses) para después otorgarlas en concesión a empresas privadas y que ellas vendan el excedente de energía en la región Mesoamericana” (Coto, 2009).

La vida orgánica de los movimientos locales ha crecido por la tradicional forma de trabajo intergremial que ha predominado en el país desde la época de la guerra, donde los acuerdos perentorios, las alianzas, convergencias y domos comunes permitieron acoplar la lucha, evitar la fragmentación, ligar demandas y unificar criterios a propósito de contener la fuerza represiva del Estado. Esto ha sido fundamental en los dos últimos años de la década, donde su estructuración como Estado Policial lo ha hecho mas aguerrido, feroz y represivo, invasor del espacio íntimo y privado; y dotado con los elementos jurídicos necesarios para criminalizar todo acto de protesta o demanda de derechos.

Un producto de las alianzas y la articulación de acciones colectivas es el Frente Social para un Nuevo País (FSNP), integrado por organizaciones de base y agrupamientos del movimiento social.

El FSNP surgió después de 3 años de coordinación y de acciones encadenadas de lo que hasta la fecha era conocido como “G 7” (Grupo

de los 7). Une a 21 organizaciones sindicales, cooperativas, campesinas, comunitarias urbanas y rurales, del sector informal, de profesionales, de personas lisiadas y pensionadas; y a los agrupamientos Bloque Popular Social para la Democracia Real (BPS-DR) y Movimiento Popular de Resistencia-12 de Octubre (MPR-12).

En su plataforma de lucha, el FSNP demanda solucionar 29 importantes problemas que afectan a la población salvadoreña. Entre dichas demandas, las más significativas son:

1. Reducir el alto costo de la vida, quitando el IVA y regulando los precios de los alimentos, las medicinas y los servicios básicos (luz, agua, transporte).
2. Subir los salarios a las personas que trabajan en la empresa privada y los sueldos a las y los empleados públicos, de acuerdo al costo de la vida.
3. Garantizar el respeto a los derechos de las mujeres, con acciones que combatan las desigualdades con respecto a los hombres, la opresión y la violencia, que son resultado de las relaciones capitalistas y patriarcales.
4. No privatizar el agua y garantizarle salud y educación pública gratuita al pueblo, especialmente a la niñez y a la juventud.
5. Aumentar las pensiones y crear programas de protección social para personas lisiadas, jubiladas y de la tercera edad.
6. Aprobar la propuesta de “Ley de Reactivación de la Producción Agropecuaria”, presentada por las organizaciones campesinas y cooperativas; y rechazar la “Ley de Arrendamiento de Tierras”, de los terratenientes y el gobierno.
7. Legalizar los solares de vivienda de las comunidades marginales, amenazadas de desalojo en las líneas férreas, calles en desuso y terrenos privados y estatales.
8. Suspender la actividad minera, la construcción de represas y la carretera longitudinal del norte.

Fuente: <www.ecumenico.org> 2008.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y PROCESO ELECTORAL 2009

El amanecer del año 2009 estuvo cargado de opiniones ciudadanas promotoras del debate público sobre el tema electoral. El posible triunfo del candidato Mauricio Funes por la fórmula del FMLN, desató una campaña de miedo y desinformación angustiante liderada por los partidos tradicionales y el mismo gobierno de ARENA, que se diseminaba sobre varios rincones del país, fundamentalmente allí donde el alarmismo tuviese como caja de resonancia el rumor de grandes segmentos sociales.

La tendencia, consolidada meses atrás, era que el FMLN encabezaba las preferencias electorales y este pronóstico incomodaba a muchos actores políticos, principalmente a los ligados a intereses de obras con el gobierno y a políticos que habían caído en el círculo de la corrupción y tráfico de influencias en las esferas gubernamentales.

Encuestas de todo tipo y sin excepción arrojaban como resultado el espaldarazo ciudadano a Mauricio Funes, no obstante, el llamado del candidato del FMLN reiteraba la necesidad de cuidar las urnas, ligar más votos, ampliar las redes ciudadanas y no dejar decaer el ánimo porque sólo una victoria contundente garantizaba que cristalizaran las esperanzas después de veinte años de gobierno neoliberal.

Segmentos sociales de diferente índole se movilizaron para manifestar su apoyo. No obstante, existía mucha incertidumbre en el ambiente, la crisis económica y financiera internacional había minado considerablemente los pilares endeble de la economía nacional, los precios de los productos básicos de consumo se elevaron en 20%, el precio de la canasta básica fluctuaba en los 180 dólares mensuales y a ello se sumó la inestabilidad del petróleo que impactaba el diesel y gasolina, lesionando con severidad la economía porque El Salvador es importador de hidrocarburos y sus derivados. Por otro lado, los productos del campo son escasos, limitados y la gran mayoría importados de Honduras y Nicaragua, dado que la estructura agraria salvadoreña está severamente dañada por el abandono a que ha sido sometida en los últimos 20 años de administración arenista.

Los sectores ligados a los negocios y macro proyectos de ingeniería y de minas se preocuparon por la tendencia favorable al FMLN y comenzaron a presionar para que las licitaciones a medias se abrieran totalmente, se cumplieran *fast track* los procedimientos de concesión, se quitaran los puntos de control y se liberaran los recursos. Esa desesperación desató polémica y puso sobre la mesa de discusión los distintos y diversos intereses privados que estaban tras de esos negocios.

También abrieron las compuertas para que días más tarde Ricardo Navarro, presidente de Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), denunciara al gobierno central por permitir la operación de transnacionales fomentadoras del deterioro del medio ambiente nacional, sin ningún control del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El ecólogo señaló que en el departamento de La Unión, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, estaba presionando para que se emitieran todos los permisos a Cutuco Energy y se iniciara de inmediato la construcción de las plantas generadoras de electricidad a base de carbón y gas natural.

Observaciones similares se puntualizaron en la denuncia que hizo Carlos Mejía, perteneciente al Movimiento sin Plomo en el San

Salvador, exponiendo que se alteró el informe de impacto ambiental de la planta hidroeléctrica denominada Sociedad Eléctrica del Cerén SA de CV, que funciona con combustible búnker y cuya construcción se proyecta a escasos 600 metros de la actual planta de Baterías de El Salvador. Asimismo señaló su oposición al proyecto ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por considerarlo altamente riesgoso para el medio ambiente

Otros organismos como el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señalaron que la concesión otorgada por el Estado a la empresa de capital mixto LaGeo para explotar energía eléctrica a base de recursos geotérmicos, podría ser inconstitucional, ya que viola los Artículos 103, 110 y 131 de la Carta Magna. Por otro lado, la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de ese tipo, interpuesta por organismos de la sociedad civil.

Colateralmente los empresarios desataron una campaña de hostigamiento contra los trabajadores de sus empresas para inducir el voto, surgieron denuncias y reclamos de empleados que laboran en Almacenes SIMAN, Kia Motors, Didea Repuestos, Construmarket, Grupo Q, Banco Agrícola, Central Izalco y Asesuisa. Según los trabajadores, los jefes de estas y otras empresas los instan a votar por el partido del Gobierno, bajo la amenaza de despido laboral.

Si bien es cierto que sectores cautivos (trabajadores de empresas y empleados) desempeñaban sus labores bajo presión política, otros segmentos mas abiertos y con capacidad movilizadora contaban con mayor cobertura política en la campaña electoral como fue el caso de miembros del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), quienes expresaron que los comicios municipales y legislativos pasados cambiaron el rumbo de al menos 8 poblaciones donde residen pueblos indígenas, y que por muchos años han sido excluidos de las políticas de desarrollo. Los resultados a favor del principal partido de oposición, el FMLN, en municipios como Santo Domingo de Guzmán, Guatajiagua, Panchimalco, Cacaopera, Santo Tomás, Tecoluca, Izalco y Nahuizalco, son signos del renacer de la identidad de los pueblos.

Un hecho relevante fue la participación de segmentos jóvenes de la sociedad salvadoreña en el proceso político, que va más allá de lo electoral, porque es una apuesta a un reacomodo de fuerzas políticas, una mayor inserción de nuevos problemas en la agenda nacional y el vínculo de comunidades marginadas en acciones políticas trascendentales para el desarrollo el país. Un ejemplo de participación de los jóvenes fue la toma, por parte de los gremios estudiantiles, del edificio donde se encuentran las oficinas centrales de la Universidad de El Salvador (UES) para exigir a las autoridades ampliar el cupo de aspirantes de nuevo ingreso.

Las luchas ambientales también continuaron. En Cojutepeque, se realizaron cierres de calles como medida de protesta por la instalación de una antena telefónica de la compañía Telecom, la cual está colocada a menos de cien metros de las viviendas, y que puede ocasionar problemas en la salud de las personas debido a la radiación. La Red Ciudadana Frente a los Transgénicos denuncia el peligro que representan para los cultivos nacionales los experimentos con semilla transgénica realizados por el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria Forestal (CENTA) y algunas empresas privadas.

Según los miembros de la Red, desde que el MARN otorgó permisos al CENTA para sembrar semillas de maíz transgénico en el país, pone en riesgo la seguridad alimentaria de los salvadoreños. El conjunto de problemas va dando forma a un bloque de demandas con coincidencias identitarias que encausan varios problemas y dan cuerpo a convergencias sociales o articulaciones de movimientos antes fragmentados en su lucha local o focal.

También, la Asociación de Comunidades Unidas para el Desarrollo de San Julián y otras redes de ambientalistas realizaron protestas a través de cierres de calles en comunidades del departamento de Sonsonate ante el MARN, para detener la tala de árboles en zonas circundantes a la Cordillera del Bálsamo. Esta acción fue por la vida, por el agua, por la defensa del medio ambiente. Más de 200 personas se hicieron presentes para solicitar que se detuviera la deforestación en las zonas.

La estrategia de las agrupaciones políticas ha dado frutos en el Movimiento Nacional de las Comunidades Rurales afectadas por las Inundaciones¹, que pidió frenar la construcción de más hidroeléctricas que vulneran la precaria vida de los habitantes de la zona rural. señalaron: “Ya no queremos esperar el invierno para ser noticia al arrasarlos el río; ya no queremos que la ayuda sea sólo para las personas

1 Integrado por las Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCO) de la zona Sur de Ahuachapán, entre estas, Jujutla, San Francisco Menéndez, Guaymango, y Tacuba; el Colectivo Isletas de San Pedro Masahuat; la Coordinadora de Puerto Parada, Cáritas Santiago de María Usulután; Comité Cristiano Pro-Desplazados de El Salvador (CRIPDES), Fundación Sustentabilidad Educación y Solidaridad (SES), Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal en El Salvador (CORDES), Asociación de Mujeres Rurales “Olga Estela Moreno” (ASMUR), Centro para el Desarrollo del Maestrazgo de Teruel (CDMT) de Tecoluca, San Vicente; Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa (ACUDESBAL), Asociación de Desarrollo Integral del Bajo Lempa (ADIBAL) de Jiquilisco, Usulután; Equipo Pastoral, la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), Asociación Cooperativa de Aprovechamiento, Ahorro, Crédito y Consumo de Mujeres del bajo Lempa ‘Marta González’ (ACAMG), Movimiento Estudiantil Bajo Lempa (MEBLE), Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) y Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).

afines al partido oficial Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), para salir en la foto con la Primera Dama (Secretaria de la Familia), queremos una respuesta humana” (Salazar, 2009).

Estos hechos, entre muchos más, son una muestra contundente de cómo se han insertado los movimientos sociales en la faena electoral, no con un perfil de caza de votos, sino con la intención de construir el debate público, hacer visibles los graves y añejos problemas que padece el país, señalar los actores involucrados en las redes de complicidades y corrupción; politizando así nuevos espacios públicos como la ecología, el campo, las calles, los foros, las esquinas, con el claro perfil de una política más cercana a las comunidades, con menos retórica y mayor carga de participación ciudadana.

Lo digno de destacar en este pequeño país es el rumbo que tomó la política. Mientras en otros países del área las elecciones son el ámbito donde las protestas se subliman y canalizan hacia el polo institucional, en El Salvador la polarización electoral abrió las compuertas para desatar los conflictos, visibilizar a los actores, rebasar los diques de contención de la ciudadanía y perder el miedo justamente en la calle. El espacio público transitable se convirtió en el espacio idóneo para retar la angustia mediática, el miedo sembrado por el gobierno y el terror de un Estado Policial vigente desde que el gobierno arenista acordó el funcionamiento de la base policial de Interpol como elemento coadyuvante en la lucha contra el narcotráfico, actividad ilícita con fuertes vínculos con agentes de gobierno.

Las actividades estudiantiles reeditaron y abrieron canales de expresión en Ciencias Sociales y Humanidades, donde grupos antiguos y otros renovados asumieron la lucha por ampliar la base estudiantil y abrir la enseñanza superior a la creciente demanda de cupos; logrando pactar con Funes una acción futura de gobierno en caso de que arribara a la presidencia. De la misma manera y recorriendo el camino de pactos y acuerdos para entregar apoyo a la causa del FMLN, los pequeños y medianos empresarios, ahogados en la crisis y sin un plan gubernamental apropiado para contener el deterioro de la pequeña industria, terminaron yendo a los campos de Funes para reivindicar un plan de contingencia y un plan futuro de empleo; dado que ellos proporcionan más del 60% del empleo a la población.

En conclusión parcial, destacamos que –a pesar de la campaña del miedo, el terror, la desinformación, las presiones ejercidas sobre empleados y trabajadores–, el FMLN, con la mancuerna Funes-Cerén ganó con el 51,27% –1.231.755 votos–, frente al 48,7% –1.170.780 votos–, obtenido por la derecha, representada por el candidato presidencial Rodrigo Ávila, del partido gobernante, ARENA.

A partir del triunfo electoral, los movimientos sociales han mostrado una cara distinta en El Salvador. Protestan y vindican alguna demanda pospuesta, han esgrimido una capacidad dialogante, organizada para cooperar con el gobierno, exigir espacios de participación, ser coadyuvantes en los estudios técnicos sobre minas, tierras afectadas, aguas contaminadas, prohibiciones ilegales, tala de árboles, cuidado del medio ambiente, privatizaciones arbitrarias, etc., con el fin de canalizar en una convivencia nacional el proyecto alternativo de país aplazado por muchos años.

BIBLIOGRAFÍA

- Coto, Ricardo 2009 “El Salvador: Los Proyectos de Muerte son Lecciones de Una Lucha” en <<http://www.kaosenlared.net/noticia/salvador-proyectos-muerte-son-lecciones-lucha>>.
- Drüssel, Dieter 2002 en <<http://www.lafogata.org/02latino/11latinoamerica/logran.htm>>.
- Ecuménico 2008 “Otro motor que se enciende: nace el Frente Social para un Nuevo País” en <<http://www.ecumenico.org/leer.php/1630>>.
- Juárez, Jorge 2007 “Movimientos sociales y neoliberalismo en El Salvador: huelga de médicos y trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social” en <<http://www.vinv.ucr.ac.cr/latindex/dialogos001/dialogos-8-1-07.pdf>>.
- OSAL 2001 (Buenos Aires) N° 5.
- Petras, James y Veltmeyer, Henry 2005 *Movimientos sociales y poder estatal* (México DF: Lumen).
- Rel-UITA 2008 “Movimiento contra plantas termoeléctricas: La Unión defiende su calidad de vida” en <http://www.rel-uita.org/agricultura/ambiente/contra_planta_termoelectrica.htm>.
- Salazar Robinson 2009 “Informe de Coyuntura de El Salvador - enero a abril de 2009” en <<http://www.clacso.edu.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/produccion-academica/analisis-de-coyuntura/el-salvador/2009>>.
- SIEP 2006 “Vendedores de CDs realizan marcha contra medidas por TLC” en <<http://www.ecumenico.org/leer.php/650>>.
- SIEP 2008 “Otro motor que se enciende: nace el Frente Social para un Nuevo País” en <<http://www.ecumenico.org/leer.php/1630>>.
- UITA 2007 “Marcha por la Vida y la Dignidad: la sociedad civil movilizada” en <http://www.rel-uita.org/sociedad/marcha_por_la_vida.htm>.
- Unesco 2008 “Reporte a mediano plazo sobre la década internacional para una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo 2001-2010” en <www.unesco.org/iycp/Report/Salvador.pdf>.

SÍNTESIS CURRICULARES DE LOS COMPILADORES

MASSIMO MODONESI

Nació en Roma en 1971. Es Doctor y Maestro en Estudios Latinoamericanos (UNAM, México) y Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad de Roma). Actualmente dirige la revista OSAL de CLACSO y es co-coordinador del Comité de Seguimiento del Conflicto en México. Es Profesor en la Licenciatura de Sociología y del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, así como Profesor investigador de tiempo completo de la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la UACM. Desde 1999 es miembro del comité editorial de la revista mensual *Memoria*. Entre otros trabajos ha publicado los siguientes libros: *La crisis histórica de la izquierda socialista mexicana* (Juan Pablos, 2003), *El Partido de la Revolución Democrática* (Nostra, 2009), *Subalternidad, antagonismo, autonomía: marxismos y subjetivación política* (Prometeo/CLACSO, 2010) y, como coordinador, *El comunismo en América Latina* (UNAM, 2007) y *La autonomía posible: reinención de la política y emancipación* (UACM, 2009).

JULIÁN REBÓN

Nació en Buenos Aires en 1973. Es Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Maestro en Población (FLACSO, México), Sociólogo (UBA). Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Fa-

cultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es Profesor de la Carrera de Sociología y de la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, así como Investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET). Entre otros trabajos, ha escrito *Conflicto Armado y Desplazamiento de Población. Chiapas 1994-1998* (FLACSO-Prorrúa, 2001), *Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las Empresas Recuperadas* (PICASO-La Rosa Blindada, 2004), *La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción* (PICASO- Colectivo ediciones, 2007), en coautoría con Ignacio Saavedra, *Empresas Recuperadas. La autogestión de los trabajadores* (CI, 2006) y ha coordinado junto a Carolina Mera Gino Germani. *La sociedad en cuestión* (CLACSO-IIGG, 2010). Integra los comité de redacción de la Revista OSAL de CLACSO, del Observatorio Social de Fábricas Recuperadas y Autogestionadas (IIGG-UBA) y dirige *Argumentos. Revista de Crítica Social* (IIGG-UBA).

